



94-
Lej
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ECONOMÍA

**“LA POLÍTICA LABORAL EN EL MODELO NEOLIBERAL
EN LA DÉCADA DE LOS 80'S: UN CASO PARA MÉXICO”**



T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ECONOMÍA
P R E S E N T A :
RUBÉN ALBINO MIRANDA TORRES

MÉXICO, D. F.

NOVIEMBRE, 1996



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A MIS PADRES:

**A SERGIO POR LA ILUSION.
A ELDA POR SIGNIFICAR TODO.**

INDICE

"LA POLITICA LABORAL Y EL MODELO NEOLIBERAL EN LA DECADA DE LOS 80'S. UN CASO PARA MEXICO"

PROLOGO

CAPITULO PRIMERO

LA POLITICA LABORAL Y EL MODELO NEOLIBERAL.

INTRODUCCION (LOS RASGOS DEL NEOLIBERALISMO)

1.1 IDEOLOGIA, ERRORES DEL MODELO NEOLIBERAL

1.2 EL INTERNACIONALISMO LIBERAL.

1.2.1 La defensa del libremercado.

1.3 LA MOVILIDAD DE CAPITALES Y DESREGULACION DE LOS MERCADOS.

1.4 LA CRISIS INTERNACIONAL Y LA DESOLACION DEL TERCER MUNDO

CAPITULO SEGUNDO

LA POLITICA NEOLIBERAL Y EL EMPLEO EN MEXICO EN LA DECADA DE LOS 80'S.

2.1 LOS AJUSTES DE LOS 80'S.

2.1.1 La pendiente de la crisis y el fin de sexenio, los reacomodos y la concentración de capital financiero interno 1982-1983.

2.1.2 El inicio de sexenio y la dura marcha de la crisis económica a la crisis de la deuda, 1983-1985.

2.1.3 La lucha contra la inflación, recesión económica y repercusiones sociopolíticas, 1983.

2.1.4 La etapa de reordenamiento económico, éxitos y fracaso del ajuste ortodoxo, 1984-1985.

2.1.5 La etapa de los nuevos desequilibrios, el repunte de la crisis económica 1985-1986.

2.1.6 La crisis de la deuda y la nueva ortodoxia, 1986-1987.

2.2 POLITICA LABORAL Y SINDICALISMO EN EL SEXENIO DE MIGUEL DE LA MADRID, 1982-1988.

2.2.1 Búsqueda de un "cambio cualitativo" en las relaciones obrero-patronales.

2.2.2 Responsabilidad sindical reconocida, pero con aniquilación de un sindicato nacionalista.

2.2.3 Alianza histórica, invariable en el discurso, mellada por la crisis.

2.2.4 Preservación, aunque con cierres y quiebras de fuentes de empleo.

2.2.5 Aumentos de urgencia y dos huelgas contra la política económica.

2.2.6 Prudencia y crisis, prólogo del 4 de julio y de la protesta magisterial.

2.3 LA POLITICA Y EL SINDICALISMO EN UNA DECADA DE TRANSFORMACIONES.

2.4 LA POLITICA LABORAL Y LA DISTRIBUCION DEL INGRESO.

2.4.1 Ajuste, niveles de vida y distribución del ingreso.

2.4.2 Las condiciones de vida antes de la crisis.

2.4.3 Evolución de los ingresos desde 1982.

CAPITULO TERCERO

EL MODELO SALINISTA Y LA ORTODOXIA NEOLIBERAL.

3.1 LOS AJUSTES HETERODOXOS Y EL SALINISMO.

3.1.1 Los ajustes salinistas y el modelo neoliberal.

3.2 LA POLITICA DE CRECIMIENTO SIN INFLACION Y LA POLITICA LABORAL.

3.3 LA EVOLUCION LABORAL Y LA POLITICA ECONOMICA.

CONCLUSIONES.

UNA EVALUACION DE LA APLICACION DEL MODELO NEOLIBERAL EN LOS SEXENIOS DE MIGUEL DE LA MADRID Y CARLOS SALINAS DE GORTARI.

BIBLIOGRAFIA.

PROLOGO

Esta tesis es un trabajo que analiza la implantación de un modelo económico llamado neoliberal en la economía mexicana. En el trabajo se vislumbra como el neoliberalismo disfrazado con un nombre menos agresivo "liberalismo social" causó gran desigualdad social y sumió en profunda pobreza a más de 40 millones de mexicanos; además, el impacto que dicho modelo tuvo en términos de política laboral sindical.

Antes de referirme al contenido de esta tesis mencionaré algunos rasgos históricos del liberalismo.

A) EL LIBERALISMO

El liberalismo es una doctrina económica y una filosofía política. Como doctrina económica, el liberalismo considera al mercado como fundamento del sistema económico, y a la iniciativa privada y la libre competencia como los generadores de la actividad económica.

El liberalismo económico surge como una reacción contra un Estado que asumía la regulación -el principio fundamental del mercantilismo- como medio para conseguir el objetivo público deseado.

Los comerciantes ingleses, que pronto encontraron esta regulación contraria a sus intereses, se opusieron a esta regulación. La reglamentación minuciosa de todas las actividades económicas, incluyendo la imposición de los precios, si bien jugó en un primer momento en favor del crecimiento, con el paso de los años fue denunciada como el origen de intervenciones cada vez más restrictivas, que se constituían en obstáculo a la iniciativa individual¹.

Fue por ello que, en el terreno económico, el liberalismo nació como expresión de la voluntad de luchar en contra de las leyes restrictivas impuestas por el Estado.

Fueron los fisiócratas² quienes, en la segunda mitad del siglo XVIII, comenzaron a desarrollar las ideas del liberalismo económico.

Ellos defendieron la abolición inmediata y total de los monopolios, de toda legislación restrictiva y la inauguración de una era de individualismo regida por la consigna del "dejar hacer, dejar pasar"³.

¹ Este fue el caso de la Compañía de las Indias Orientales inglesa, uno de los centros comerciales más poderosos. El tráfico que realizaba con Oriente estaba constituido, en gran parte, por remesas de plata para pagar las mercancías de lujo procedentes de dicha región. El negocio llevado a cabo por dicha compañía tuvo por consecuencia, como es natural, una balanza comercial desfavorable y una salida de metales preciosos de Inglaterra. Debido a esto se dirigieron grandes censuras a la compañía, y los abogados de la misma se vieron obligados, por su propio interés a poner en duda las doctrinas fundamentales del mercantilismo.

Esto fue lo que ocurrió exactamente con Cromwell, el representante más destacado de la clase mercantil inglesa, quien al principio creyó firmemente en el mercantilismo, pero poco tiempo después llegó a darse cuenta de las relaciones de dicho sistema con el absolutismo real y los impuestos. Ver Harry Elmer Barnes, Historia de la economía del mundo occidental, México, UTEHA, 1970.

² Según la tesis desarrollada por Francois Quesnay en el Tableau économique de 1758, toda la riqueza proviene de la tierra; es ésta la que da vida a la economía al circular entre los grupos sociales: los agricultores inyectan esta riqueza en el circuito económico al comprar bienes manufacturados, riqueza que regresa a ellos por la compra de productos agrícolas; así es como se cierra el círculo. Esta interpretación delimita con precisión el terreno de intervención de la sociedad política, el cual debe limitarse a favorecer el circuito económico natural. La libertad de comercio, de trabajo, de la producción y de la competencia internacional deben ser las preocupaciones constantes y primordiales de los gobiernos.

³ Para el economista Jean Claude Marie Vincent, señor de Gournay (1712-1759), autor de la célebre fórmula "laissez-faire, laissez-passer", que propuso en su libro Considerations, el laissez-faire no significaba otra cosa que la demanda de supresión de las corporaciones, de los privilegios injustos, que provocaban el encarecimiento de los productos. Mientras que con el "laissez-passer" el autor expresaba su convicción acerca de la necesidad de derribar sus alcabalas (las barreras aduanales interiores), que constituían el principal obstáculo al comercio y a la libre competencia.

Con su *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*⁴ (1776), Adam Smith completa y afina la conceptualización de la doctrina económica del liberalismo. Para Adam Smith toda la riqueza proviene del trabajo del hombre. Y es la percepción que el individuo tiene acerca de su interés personal, lo que empuja a trabajar y ahorrar. Es decir, que para Adam Smith el interés privado es el motor de la economía. De esta manera el economista inglés deja claramente establecido uno de los pilares del pensamiento liberal: la importancia de dejar en libertad a la iniciativa privada.

El Estado, tal y como había sido propuesto por los fisiócratas, debería abandonar su intervención directa en la economía; ya que -siguiendo con el razonamiento del autor- existe una armonía entre el interés privado y el interés general. Así la función del Estado debe ser la de garantizar la libre competencia de los intereses privados que se da en el marco del mercado, el cual es capaz, por sí solo, de asegurar la adecuación -automática- de la oferta y la demanda

Ardiente defensor del comercio y la manufactura, Adam Smith revivió la doctrina platónica de la importancia de la división del trabajo y de la especialización para incrementar y mejorar la productividad; e hizo una defensa del libre cambio sobre la base de las ventajas ofrecidas por la división internacional del trabajo, cuya vigencia se mantiene hasta nuestros días.

De esta manera el fundador de la Economía Política deja asentados los principios fundamentales de la doctrina económica del liberalismo: el interés privado como motor de la economía; el mercado como regulador del proceso económico; y la libre competencia como garantía del interés colectivo.

En síntesis, si aceptamos que el liberalismo se nutre de estas dos fuentes originales, el pensamiento de los fisiócratas y de Adam Smith, nos damos cuenta de la importancia que adquiere para la acción política asegurar la "no interferencia" del Estado en la regulación económica.

La limitación del Estado no significaba, sin embargo, la búsqueda de su aniquilación. Para el liberalismo económico, el Estado debería cumplir con la tarea de asegurar el respeto por todos los participantes de los mecanismos económicos que se derivaran de la ley natural.

De allí que el liberalismo, como filosofía política, se orientara precisamente a limitar el poder del Estado.

En el plano político, el liberalismo aparece, históricamente, como el primer sistema de ideas que inspira la creación de instituciones políticas.

B) EL LIBERALISMO SOCIAL VERSUS EL LIBERALISMO CLASICO

En el caso de México -a fines del siglo pasado- el liberalismo se apartó de los postulados del liberalismo clásico en los aspectos económico, político y social. Como ha demostrado Reyes Heróles, la heterodoxia en materia económica será una constante en la práctica de los liberales.

Para los liberales mexicanos, conocedores del pensamiento de los fisiócratas, de Adam Smith y sus seguidores, resultaba inaceptable el argumento de los proteccionistas que pugnaban por el fomento a la industria nacional.

Los librecambistas mexicanos, convencidos de las ventajas derivadas de la división internacional del trabajo, afirmaban que México debería dedicarse a aprovechar las riquezas con que la naturaleza lo dotó: la agricultura y la minería deberían convertirse en la base de crecimiento económico del país. Sin embargo, se acepta que la industrialización del país será una consecuencia de la bonanza económica derivada de la exportación de los productos agrícolas y mineros.

⁴ México, FCE, 1981.

La defensa apasionada e inteligente que realizaron los economistas liberales acerca de la importancia de derribar las viejas prácticas proteccionistas que ahogaban a la economía mexicana, concluía con la necesidad de que el comercio libre fuera defendido.

La constatación de que las naciones que carecen de industria son las últimas en la escala de la civilización, condujo a los liberales mexicanos por el camino de la heterodoxia.

Habría pues que tener cuidado de seguir principios teóricos que ignoraban las diferencias entre las naciones y, más aún, entre las diferentes regiones de una misma nación.

El librecambio se convirtió en el foco de atención de quienes pugnaban por adecuar el liberalismo a las condiciones específicas del país. El fomento de las actividades agrícolas e industriales para formar la riqueza nacional ganó la partida a la libertad comercial.

En el terreno político, las ideas del liberalismo también sufrieron una adecuación a las condiciones imperantes en la realidad nacional. La inestabilidad política que caracterizó las cinco primeras décadas del México independiente fue la razón invocada para apartarse de los planteamientos fundamentales del liberalismo.⁵

La limitación del poder político, el principal objetivo del liberalismo, fue completamente abandonada por una nación exangüe. Los liberales de la República restaurada comenzaron la expansión del Estado para llenar el vacío de poder dejado por las corporaciones dominantes en el orden destruido por la Guerra de Reforma y la victoria sobre la Intervención.

Las ideas también jugaron un papel importante en el distanciamiento del modelo liberal. Gabino Barreda fue convincente en su planteamiento de que el orden social reinante sólo podría terminar si se lograba el ordenamiento de la conciencia de los individuos por medio de la educación. Las generaciones formadas en la Escuela Nacional Preparatoria bajo el programa educativo de Barreda pronto ocuparon los principales puestos en la administración pública, la política, la educación y los negocios.

C) EL CAPITALISMO Y EL LIBERALISMO SOCIAL

En el contexto de los acelerados cambios que vive el mundo en las últimas décadas del siglo XX, cuando la economía mundial se encuentra en un proceso de restructuración, las ideas liberales han vuelto a esgrimirse en contra de los arsenales de medidas proteccionistas engrosados durante los años de recesión, inflación, desempleo, desorden monetario, especulación, déficit públicos y sobreendeudamiento que se iniciaron a principios de la década de los setenta.

La caída de los regímenes socialistas en Europa, en medio del repudio generalizado de los ciudadanos, ha contribuido a hacer que el capitalismo aparezca hoy más fuerte que nunca; fuerte a un grado tal, que elimina la posibilidad de definición de un proyecto político que no sea la simple adaptación a las exigencias de la economía de mercado.

Ante esta realidad, Carlos Salinas propuso volver los ojos a nuestra herencia liberal, y generar un proyecto original que fuera de carácter popular y agrario desde sus raíces.

⁵ De hecho, los problemas políticos eran tan graves, que aun los liberales de la primera generación propusieron soluciones que los acercaban a los pensadores conservadores. Mora por ejemplo, dedicó especial atención el problema electoral. Su principal propuesta fue la de eliminar el sufragio universal, con el fin de evitar dos problemas que él identificaba en el origen de la inestabilidad política: la venta de votos por parte de los sectores más pobres del electorado o la elección de personas que no aseguraban el respeto al orden existente. Ver Robert F. Florstent, "Mora y la génesis del liberalismo burgués", en Historia Mexicana, vol. 11,

El 14 de marzo de 1992, durante la celebración del LXIII aniversario de la fundación del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del Partido Revolucionario Institucional, el presidente Salinas de Gortari, en su calidad de jefe del instituto político, definió al liberalismo social como guía de las acciones del partido y del gobierno.

La propuesta -relativamente tardía si consideramos que la idea de legitimar las acciones del salinismo en los planteamientos del liberalismo social fue expresada desde antes de la toma de posesión del presidente Salinas-, se presentó como guía explícita de la acción del partido y del gobierno encaminada a la transformación de las condiciones socioeconómicas del país.

La modernización, sobre la base de "la reforma de la Revolución" y para el cumplimiento de los propósitos de "nuestro liberalismo social", es la propuesta del gobierno salinista para juzgar el pasado inmediato y dar un sentido a los cambios emprendidos por su administración.

La reforma de la Revolución se ubica entonces como un rechazo a los medios que ésta utilizó para el cumplimiento de sus fines. Como aclara más adelante, esos medios pueden resumirse en el "estatismo absorbente", como lo calificó.

En el discurso presidencial antes mencionado se hizo referencia a diez puntos en los cuales se explica la orientación que el liberalismo social mexicano imprimiría a la práctica del gobierno salinista. Estos puntos fueron: la soberanía, el Estado, la justicia social, las libertades, la democracia, la educación, el campo, los indígenas, la alimentación, vivienda, salud y calidad de vida, y, por último, la ideología del partido en el poder.

Las respuestas que se ofrecen a estas cuestiones a partir del liberalismo social se definen en contraposición a dos ideologías ubicadas en los extremos políticos, a las que se denominan "neoliberalismo" y "estatismo", términos acompañados de diversos calificativos a lo largo del discurso, principalmente Salinista.

Tales formalidades son explicadas en este trabajo de tesis que expone el desarrollo de un modelo económico, implantado en la economía mexicana durante más de 12 años. En esta investigación planteo las consecuencias económicas, sociales y en particular su incidencia en la política laboral mexicana. Para este estudio dividí mi trabajo en tres apartados que son:

- a) La política laboral y el modelo neoliberal (desde el punto de vista ortodoxo).
- b) La política neoliberal y el empleo en México, en la década de los 80's.
- c) El modelo Salinista y la ortodoxia neoliberal.

En el primer capítulo titulado "La política laboral y el modelo neoliberal" se analiza a grosso-modo los rasgos teóricos del neoliberalismo, que desde mi punto de vista, son muy importantes para definir y entender la aplicación de este modelo económico. Dentro de estos rasgos teóricos afirmo que el modelo buscó un control monetario para controlar la inflación, cosa que se convirtió en obsesión durante más de 12 años en la economía mexicana. Analizo a su vez las condiciones de reparto y distribución del ingreso, donde se muestra que el modelo neoliberal ha generado una desigualdad y una polarización de las clases sociales. Dentro de esta misma crítica se expone como el neoliberalismo utiliza un discurso de desacreditación de todo lo que implique empresas públicas en favor del libre mercado, argumentando ineficacia y por lo tanto constituyendo una carga excesiva para la sociedad.

El segundo capítulo llamado "La política neoliberal y el empleo en México en la década de los 80's" es una reseña de como la crisis económica mexicana que se presentó en 1982, tuvo que ser enfrentada con un

⁴ Discurso pronunciado en el saludo de las organizaciones liberales de México, 6 de octubre de 1988, en *El apego a la Constitución guiará el ejercicio de mi gobierno. Discursos como presidente electo*, México: Presidencia de la República, 1988, p. 61.

tipo de medidas económicas más conservadoras. Para esto se hace una descripción de la evolución de la política económica De la Madridista. Así como un análisis de la aplicación de programas de estabilización (como el PIRE, PECE, etc.) y su incidencia sobre las variables económicas. Cabe mencionar que es el inicio de concertaciones y alianzas entre todos los sectores económicos, algo nunca hecho formalmente en nuestro país.

En términos de política laboral cabe citar, que durante los primeros ocho años de la aplicación del modelo neoliberal, éste logró detener la caída del empleo, dando la impresión de que se había mejorado. Que el problema del desempleo sería un problema manejable, pero, desafortunadamente en el transcurso de 12 años de neoliberalismo en nuestro país éste degeneró en una gran crisis, con un desempleo abierto (de más de 4 millones de desempleados para 1995 según INEGI), del cual va a ser muy difícil salir, por lo menos en lo que resta del sexenio del Presidente Ernesto Zedillo.

En el tercer capítulo llamado "El modelo Salinista y la ortodoxia neoliberal", muestro como el modelo neoliberal, iniciado en el sexenio de Miguel de la Madrid, por fin se consolida, aunque con un alto costo social. Es con Carlos Salinas de Gortari, donde los resultados de políticas de estabilización dan pauta a que las variables macroeconómicas muestren signos de mejoría; por ejemplo, se logra estabilizar el nivel de precios, existe un control sobre la paridad cambiaria y las tasas de interés, etc. En conclusión, se dan las condiciones necesarias que reactivarían la economía. Dicho de otra manera, la política neoliberal, disfrazada de política social (ver Programa Nacional de Solidaridad) lograba un triunfo en las tendencias estabilizadoras; los resultados obtenidos en política económica hasta finales de 1991, nos hicieron creer que las desgracias de nuestra economía habían llegado a su fin. Pero, tuvieron que pasar tres años más, para que, del dulce sueño, despertáramos a una amarga realidad.

CAPITULO PRIMERO

LA POLÍTICA LABORAL Y EL MODELO NEOLIBERAL

INTRODUCCIÓN

Cuando el triunfo del candidato B. Clinton puso fin a la era reaganista y, con ella, a la inexpugnable hegemonía que durante más de una década había ejercido el denominado neoliberalismo, este ya había hecho trizas las economías de América Latina.

El propósito de este capítulo es el de realizar un balance de la aplicación de esa doctrina que ha dominado las políticas de la práctica totalidad de los gobiernos occidentales. Un balance y un análisis, desde una perspectiva cercana a la de las organizaciones sindicales, que nos permita sacar las lecciones oportunas de un paradigma que, sin duda, ha fracasado, pero que sigue todavía dominando el discurso económico y político. Balance que, al mismo tiempo, sirviera para ajustar cuentas con una ideología que más que ninguna otra después de la Segunda Guerra Mundial ha ido dirigida a atacar las conquistas sociales del movimiento obrero.

LOS RASGOS DEL NEOLIBERALISMO

Tras algo más de una década de neoliberalismo, y con la mayor parte del mundo industrializado sumido en el estancamiento, podemos hoy recordar cuáles han sido sus postulados esenciales.

Resumidamente, podemos sintetizarlos en cuatro. Por una parte, situar la lucha contra la inflación en el centro de la política económica oponiéndola al crecimiento y a la creación de empleo. En segundo lugar, invertir el sentido de la distribución para favorecer el incremento de los beneficios en detrimento de los salarios y estrechar y hacer más regresiva la distribución que se realiza mediante los impuestos y el gasto público. Desacreditar todo lo público y ampliar el ámbito del beneficio privado a través de la consecución de un cambio cultural que llevara a percibir negativamente las prestaciones y servicios públicos, la regulación estatal y la participación del sector público en la economía, identificando, sin embargo, las privatizaciones y la extensión del mercado como elementos progresistas. Cuarto, forzar un cambio en el equilibrio de poderes dentro de la sociedad, debilitando a los sindicatos en particular y, en general, a las organizaciones sociales cuya existencia contrapesa el funcionamiento del mercado y el poder de los grupos que lo controlan.

Estos cuatro ejes son fácilmente reconocibles porque figuran en la mayor parte de los discursos económicos desde hace algo más de una década. Son, asimismo, constatables sus resultados al analizar, como se hace en el primer capítulo de este trabajo.

A) OBSESIÓN MONETARIA EN LA POLÍTICA ECONÓMICA

En primer lugar, el control de la inflación se ha convertido en el objetivo central de la política económica de la última década. Nadie, obviamente, ignora los aspectos negativos de una inflación elevada, pero el protagonismo otorgado le ha hecho aparecer como el peor y más grave de los desequilibrios económicos.

Esta cuestión puede percibirse con mayor claridad si se piensa en la consideración tan diferente con la que se observa la persistencia durante un larguísimo período de tiempo de otro desequilibrio muy grave de la economía: el desempleo.

Es evidente que la inflación ha tomado la prioridad al desempleo. Ocurre esto desde que los planteamientos neoliberales comenzaron, a finales de los setenta, a situarse en una posición dominante en los discursos de política

económica. No es preciso más que comprobar que la inflación se ha reducido en la práctica totalidad de los países, en tanto el desempleo alcanza en la mayoría de ellos niveles históricamente elevados.

Por otro lado, es significativo observar que se consideraba a la estabilidad de los precios el principal objetivo económico, tanto a finales de los setenta y comienzo de los ochenta, cuando la inflación se situaba por encima de los dos dígitos, como en este momento en el que se registran las tasas más bajas de las dos últimas décadas.

En el ámbito mexicano basta con examinar los niveles actuales de la inflación -24,5% aproximadamente- y del desempleo -más del 31 %¹ - para constatar con claridad la enorme desigualdad en las prioridades que se ha concedido a un desequilibrio y a otro.

La preferencia por el control de la inflación ha convertido a la política monetaria en la protagonista destacada de la política económica. Como consecuencia de ello, las economías han debido padecer un prolongado periodo de tipos de interés muy elevados con negativas consecuencias para el desarrollo productivo especialmente en el terreno industrial.

Este hecho, junto con la enorme expansión de los mercados monetarios internacionales ha generado una creciente inestabilidad económica mundial que se refleja, entre otras muchas cosas, en las amenazas cada vez más frecuentes de «cracks» financieros y en la incapacidad de los Estados para controlar los movimientos especulativos internacionales.

Indudablemente, el protagonismo en la política económica del control de la inflación y, correlativamente, de las políticas monetarias restrictivas ha tenido también unas consecuencias negativas sobre el crecimiento y el empleo. Este tipo de política, que se ha llamado alguna vez de «ajuste permanente», ha limitado el crecimiento económico, reducido la capacidad de creación de empleo e introducido fuertes distorsiones en la asignación de recursos en la economía productiva.

La eficacia misma en el control de la inflación no ha sido excesiva, dado que la confianza en la política monetaria era tal que, voluntariamente, se ignoraban sus propias limitaciones, lo que ha conllevado el alargamiento y endurecimiento de los periodos de contracción económica.

B) INVERTIR LAS CONDICIONES DEL REPARTO Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

En cuanto al segundo aspecto mencionado, el interés neoliberal por modificar el estado de la distribución y redistribución del ingreso, es una cuestión igualmente constatable con carácter internacional. Hay que decir, sin embargo, que en este aspecto los resultados cosechados en nuestro país desde comienzos de la pasada década son comparativamente más intensos y drásticos.

En el ámbito de la distribución, es decir, el reparto del ingreso entre factores -capital y trabajo- en el mismo proceso productivo, la intención perseguida era aminorar lo más posible el crecimiento de los salarios.

Las tesis, repetidas hasta la saciedad, han asegurado que la reducción de los costos laborales era esencial para que aumenten los beneficios empresariales, las inversiones y el empleo.

Teoría económica y experiencia han venido demostrando que ésta es, en el mejor de los casos, una condición necesaria pero no suficiente. En los últimos diez años, los costos laborales unitarios han sufrido, en términos reales, un importante recorte en el conjunto de los países latinoamericanos.

¹ Ver, "Exámen de la situación económica de México", Banamex, México, enero de 1995.

Las inversiones, sin embargo, han crecido o no, según los periodos, ajenas en último término a la moderación salarial permanente. Un buen flujo de recursos, además, ha escapado del ámbito productivo, atraído por las altas rentabilidades financieras: el sistema neoliberal generaba sus propias fugas.

Otra parte del ahorro salarial se ha convertido en inversión substitutiva de trabajo. Pero, mientras sucedía esto, se repetía insistentemente que la insuficiente moderación salarial impedía una reducción mayor del desempleo.

El discurso neoliberal ha responsabilizado continuamente a los salarios de la inflación y el desempleo, exigiendo una moderación que, aún produciéndose, siempre consideraba insuficiente.

Como resultado de ello, la participación de los salarios en el ingreso se ha reducido prácticamente en la totalidad de los países, incrementándose la parte que corresponde a los beneficios empresariales: el primer objetivo de las políticas neoliberales -invertir la distribución del ingreso en contra de los asalariados- se ha cumplido.

En nuestro país, como decíamos, este proceso ha sido más intenso. Tanto durante el periodo de crisis económica y destrucción de empleo de comienzos de los ochenta, como en la etapa posterior de expansión y creación de empleos, la distribución funcional de la renta ha empeorado sistemáticamente para los asalariados.

La obstinación en la culpabilización salarial y la flexibilidad laboral es en nuestro país tan fuerte que se han empleado muy variados sistemas para justificar estos argumentos. El uso de fuentes estadísticas que sobrevaloraban los crecimientos salariales; la utilización oportunista de argumentos empleados a favor de la moderación salarial y abandonados cuando no eran convenientes para dicha argumentación: son fenómenos que, entre otros muchos, han hecho su aparición durante estos años para defender o forzar crecimientos salariales no sólo menores, sino injustificadamente inferiores a los de la productividad del trabajo.

Pero, las políticas neoliberales no sólo pretendían conseguir un cambio regresivo en el ámbito de la distribución funcional del ingreso. Igualmente, buscaban un cambio en el signo de la redistribución, es decir, en la labor que realiza el Estado y los poderes públicos, en general, mediante los impuestos y el gasto público, y muy en particular a través del gasto social.

Lo que se conoce como Estado del Bienestar siempre se ha situado en el punto de mira de los planteamientos neoliberales. Consideran, por un lado, que las prestaciones sociales generan incentivos negativos que reducen la eficiencia del sistema económico y, por otro, que el costo del sistema de bienestar social es muy elevado. Las razones de justicia social, distribución, cohesión y estabilidad son eludidas por este discurso.

En muchos países, se han intentado reformas fiscales que aliviaran los impuestos de las rentas más altas y de capital. Paralelamente, se defendía la necesidad de recortar los servicios públicos y el gasto social para corregir el déficit público generado, a veces, por esas mismas rebajas fiscales o por la negativa a gravar adecuadamente a los grupos de mayores ingresos.

Aunque en el terreno de la redistribución se han producido retrocesos en un buen número de países durante estos años, los recortes en el Estado del bienestar han tenido un efecto limitado incluso en lugares, como el Reino Unido, donde las políticas neoliberales se han puesto en práctica con mayor dureza.

Esto se debe a que una gran parte de las ventajas sociales son percibidas por la sociedad como avances irrenunciables y se consideran ligadas indisolublemente a los derechos que corresponden a todos los miembros integrantes de la comunidad.

No obstante, los ataques al papel redistribuidor del sector público y al Estado de Bienestar han conllevado un incremento de la desigualdad en muchos países. Los planteamientos neoliberales han dejado una marca muy clara en la construcción del Estado de Bienestar Mexicano.

Durante la pasada década y hasta la actualidad dos fenómenos han marcado la construcción de un sistema moderno de protección social: la extensión de las principales figuras protectoras y prestaciones y la reducción progresiva de la intensidad en las mismas.

Las principales prestaciones sociales muestran claramente este esfuerzo de extensión hasta el reconocimiento de derechos universales en algunas de ellas. Sin embargo, el proceso ha sido desigual y ha encontrado significativas resistencias en su camino. Muy especialmente hay que destacar las pensiones no contributivas y el establecimiento del salario social o ingreso mínimo.

Las primeras han sido retardadas durante años y puestas finalmente en marcha tras una fuerte exigencia sindical. El segundo se ha establecido por parte de los gobiernos latinoamericanos de manera no homogénea y siempre con la posición frontal del gobierno de la nación.

En cuanto al segundo aspecto, la sistemática reducción de la intensidad protectora es constatable en todas las prestaciones sociales fundamentales. Jubilación, invalidez, salud y familia reflejan, todas ellas, una fuerte caída en su intensidad, al menos desde 1982, en relación a los ingresos que deben suplir y a la evolución de la renta por habitante.

Esta cuestión tiene dos implicaciones de gran trascendencia. En primer lugar, el aumento de las desigualdades, fruto del menor ingreso relativo que perciben los beneficiarios de dichas prestaciones y, en consecuencia, el mayor riesgo de engrosar las franjas de pobreza y marginalidad. En segundo término, el reflejo de la concepción restrictiva con la que se está construyendo el Estado de Bienestar Mexicano. Una concepción limitativa, de mínimos, que es la que siempre se ha defendido desde las posiciones neoliberales, y que es por supuesto, completamente ajeno al principio de sobrevivencia, pero asimismo mucho más restrictiva que la que ha inspirado el Estado de Bienestar levantado por muchos gobiernos conservadores, entre ellos los europeos y el norteamericano.

Sin ninguna duda, si no se cambia esa concepción, ello implicará en el futuro una sociedad menos cohesionada, dotada de un sistema de solidaridad intracase y, consiguientemente, un abandamiento de las desigualdades; y, en el plano económico, una disminución de la eficiencia que para las economías de mercado han supuesto los sistemas públicos de bienestar.

C) DESACREDITAR LO PÚBLICO Y EXTENDER EL MERCADO

Un tercer rasgo característico, según lo señalado al comienzo, del discurso neoliberal ha consistido en generar un clima de opinión contrario a lo público en cualquiera de sus acepciones.

De tal forma que la regulación, aunque proceda de decisiones o instancias democráticas, parezca rechazable y, alternativamente, preferible el libre funcionamiento del mercado. Libertad de mercado que no es, en cada vez más casos, otra cosa que la discrecionalidad de aquellos grupos de poder que lo controlan, ya que hoy el (o los) mercado tiene muy poco parecido con los de competencia perfecta que sirven como modelo justificativo y argumental a los que defienden la desregulación indiscriminada.

Precisamente esa enorme diferencia entre teoría económica neoliberal y realidad es uno de los aspectos estudiados por la mayoría de los opositores del neoliberalismo y podría resumirse en la siguiente aseveración: «los argumentos de las políticas neoliberales carecen de fundamento, dado que los resultados del modelo teórico de competencia pura no son trasladables a los sistemas económicos reales»

Por otro lado, la defensa del papel protagonista que debe tener toda sociedad democrática articulada y su capacidad, siempre que ello sea posible, para autorregularse, no pertenece a los planteamientos neoliberales, aún cuando de manera oportunista así se haya pretendido a veces. Esta capacidad de la sociedad civil para organizarse no puede estar fundamentada en la suma de individualidades, porque requiere la existencia de organizaciones que

vertebren la sociedad y que, finalmente, vienen a contrapesar y limitar el poder del mercado y de los intereses económicos que se encuentren tras él.

Pero, no sólo el neoliberalismo es opuesto a la regulación pública y sociedad civil organizada. Durante estos años se ha difundido con profusión la idea de que la gestión de una empresa o de un servicio público es siempre mejor si detrás de ella hay accionistas privados, que si se realiza por, o en nombre, de un organismo público.

Tan ridículo argumento no se sustenta más que en la mala organización, frecuente por otra parte, de servicios y empresas públicas, en la confusión entre objetivos sociales y rendimientos empresariales y en una amplia reiteración propagandística de esta idea.

Una de las cumbres de la paradoja se está produciendo a menudo con la privatización (venta a particulares de bienes que pertenecen al conjunto de la Comunidad) de empresas públicas bien organizadas y que obtienen excelentes rentabilidades compitiendo con empresas privadas. Si la deficiente gestión pública es la razón esencial de las privatizaciones no se comprende que se vendan las empresas públicas bien gestionadas.

En el fondo, lo que se pretende es la extensión del mercado en base al pretendido antagonismo entre rentabilidad económica y propiedad pública. Al igual que se pretende extender la lógica del beneficio privado frente a la de servicio público con la privatización de empresas importantes en la prestación de bienes colectivos.

Seguramente hay muchos aspectos de la prestación de servicios públicos donde la iniciativa privada puede realizar una buena labor, pero no es eso lo que se pretende desde los planteamientos privatizadores y liberalizadores neoliberales.

El interés reside en aquellas cuestiones en las que aparece la rentabilidad económica cuando desaparece el sector público. En la sustitución de monopolios públicos por otros privados, sin mejora de la competencia y, por lo tanto, del servicio. En disponer de un Estado que soporte las prestaciones costosas o antieconómicas para crecer parasitariamente a su sombra, recogiendo los frutos de las empresas rentables, una vez efectuada la externalización de costos y la segregación de actividades. En la realización de la actividad «de manera desregulada», es decir, sin las garantías y condiciones que se le exigían al sector público cuando prestaba el servicio. Etcétera.

En definitiva, no son razones relacionadas con la eficiencia económica, ni mucho menos con la mejora de las prestaciones sociales, las que se encuentran detrás de los discursos que piden la liberalización y privatización de la economía. Son, dicho llanamente, intereses económicos; y también con ellos, la intención de restringir el ámbito de lo colectivo, de limitar el peso de las instancias públicas, detrás de las cuales siempre está, mejor o peor, el control democrático de la comunidad, de cambiar la distribución del poder en la sociedad.

D) EL CONSENSO CONTRA LOS SINDICATOS

Un rasgo típico, finalmente, de las políticas neoliberales ha sido su confrontación con los sindicatos y el intrínseco antagonismo con la concertación y el consenso social.

A diferencia de las políticas llamadas "populistas" que se han caracterizado durante décadas por el consenso con los sindicatos, el neoliberalismo implica el consenso contra los sindicatos.

Esa lógica se ha desarrollado de manera explícita y descarnada en algunos países, como Gran Bretaña y Estados Unidos, y en otros, de forma más atenuada y enmascarada. Es lo que, muy especialmente, ha sucedido en México por razones obvias: quien aplicaba la orientación neoliberal era un gobierno de "liberalismo social" que necesitaba camuflar con palabras de gran aceptación, como concertación o pacto social, mercancías menos nobles. Detrás de la apropiación indebida de esos conceptos de inspiración de bienestar social no suele estar, en efecto, la intención de realizar un pacto de progreso, sino la de pillar a los sindicatos en propuestas que, debajo del envoltorio, siempre han tenido como denominador común lo que constituye el meollo de las políticas neoliberales: reducir los salarios, eliminar reglas y derechos sociales, recortar el peso de los trabajadores y de los sindicatos.

Para este fin, la corrupción del significado de las palabras y los conceptos tradicionales de la cultura PRIISTA resulta esencial. Sobre todo cuando se tratan de realizar esos propósitos neoliberales desde posiciones nominalmente revolucionarias o de principios nacionalistas revolucionarios. En ese caso, es especialmente necesario presentar las posiciones sindicales como arcaicas, retardatarias e insolidarias. Es imprescindible darle la vuelta a lo que se ha venido entendiendo por consenso social, progreso o solidaridad.

Así, por ejemplo, en los últimos tiempos se utiliza con gran profusión desde áreas oficiales el concepto solidaridad. Pero, en realidad, bajo tan noble enunciado no se está prometiendo más justicia, ni tan siquiera una política de mayor redistribución de los que más tienen hacia los más necesitados. Se está reclamando una redistribución interna entre los asalariados y mayores sacrificios a los trabajadores.

De igual manera, cuando se apela al pacto social no se está proponiendo lo que en algún tiempo se denominó «una salida progresista de la crisis», sino la legitimación y el espaldarazo sindical a las políticas neoliberales que siempre, además, se presentan como las únicas posibles. Significativamente, todas las ofertas de pacto vienen invariablemente precedidas de una premisa incuestionable: la política económica no se toca. Habría que añadir que la política social tampoco, pues ha sido un corolario de aquélla. Con lo que, en la práctica, la propuesta de pacto se reduce a tener que aceptar o rechazar lo que quiere llevar a efecto el gobierno. Con premios o castigos, según cuál sea la respuesta.

Estos intentos para comprometer a las organizaciones sindicales en las políticas neoliberales, que, sobre todo, se han ensayado en nuestro país por un gobierno entregado con convicción al credo neoliberal y el movimiento sindical al que, (en el caso de la C.T.M) históricamente ha estado tan unido, no son contradictorios con el principio que enunciaba al comienzo de este apartado. En efecto, siempre es mejor conquistar la fortaleza con el apoyo de los de dentro. Sólo si esta vía falla, si la relación de fuerzas lo impide o si se considera que ello es políticamente rentable, como lo proclamaba en Inglaterra la Sra. Thatcher, se recurre directamente al consenso contra los sindicatos.

En realidad en nuestro país hemos conocido numerosos ejemplos de este consenso antisindical. Probablemente, el de mayor calado se produjo tras el golpe que Carlos Salinas de Gortari dió al Sindicato Petrolero y al SNTE, cuando el gobierno y los distintos partidos oficialistas corrieron a formar un frente para rechazar el giro social que demandaban las organizaciones sindicales.

Clarificadora es, asimismo, la coincidencia con la que editorialistas de distintos medios, líderes empresariales portavoces de las diversas derechas (en especial el PAN) y Secretarías de Estado mantienen el mismo discurso de fondo sobre la inmoderación salarial, la rigidez del mercado de trabajo o la falta de modernización sindical. Enfrentados en otras cuestiones, se unen a la hora de defender las líneas esenciales de la política económica y de intentar cercar a los sindicatos para que pongan su firma debajo de las aspiraciones empresariales.

Durante los últimos años ese discurso se ha acentuado y perfeccionado, repitiéndose dos tesis con nada casual coincidencia. La primera consiste en achacar a la presión sindical y a los acuerdos posteriores al desmembramiento sindical el desorden económico actual. La segunda tesis asegura que, si la política gubernamental no ha dado resultados plenamente, ha sido por los obstáculos provenientes del movimiento sindical.

Pero, la cuestión de fondo es que el neoliberalismo es en sí mismo la negación del consenso social tal y como se ha conocido durante la segunda mitad de este siglo en el mundo. En efecto, a partir del inicio de los años 70, un término entra a formar parte del debate social y político: la desregulación. Es uno de los principios esenciales, si no la esencia misma del neoliberalismo. Y, en todo caso, el que nos interesa para la cuestión que estamos comentando.

Esta noción se podría resumir en las siguientes tesis:

- i) La debilidad del crecimiento económico y el aumento del desempleo son la consecuencia inevitable de un proceso de modernización productiva que ha sido retrasado o completamente bloqueado.

- ii) Los obstáculos esenciales a esa modernización residen en la insuficiente capacidad de innovación y de adaptación de la estructura productiva y del empleo tanto en el nivel nacional como en el de las empresas.
- iii) El origen principal de esos obstáculos radica en el conjunto de reglas y de normas que se inspiran exclusivamente en los intereses inmediatos y particulares de los trabajadores ocupados.

Las consecuencias a sacar de semejantes tesis, que no se pretende entrar a rebatir en esta introducción, son evidentes y se pueden resumir en una ecuación bien simple:

Menos reglamentación = más modernización = más crecimiento y empleo.

Estas tesis desreguladoras, que han dominado durante el último decenio, casi sin excepción, la acción de los gobiernos de los grandes países industrializados de occidente, implican una concepción de la modernización de las empresas y de las economías nacionales en las que el principal factor de adaptación es la mano de obra, y en la que los costos de esa modernización recaen, en su mayor parte, sobre los trabajadores y los poderes públicos.

Resulta bastante evidente que tal estrategia de modernización industrial no otorga una plaza excesivamente relevante al consenso social ni a la consideración de los intereses de los trabajadores. Por el contrario, una estrategia de esa naturaleza lo que persigue -como ha sucedido, al menos en parte, en Estados Unidos y en Gran Bretaña- es lograr el consenso más amplio posible contra los sindicatos y contra las limitaciones de tipo legal o convencional en la utilización de los trabajadores.

Exagerando un poco las cosas, se podría decir que esta concepción de la modernización productiva -que desde el punto de vista de las empresas pasa por externalizar al máximo las tareas, dejando sólo un núcleo central de trabajadores en la empresa- sugiere incluso la idea de un antagonismo frontal entre la rentabilidad económica y los elementales intereses de los asalariados, que consisten en disponer de oportunidades seguras de empleo y de perspectivas estables de promoción y valoración de sus capacidades profesionales.

Ciertamente, no está demostrado que ese esquema sea el más eficaz, además de que es muy costoso en términos sociales. Más bien al contrario, los países más competitivos han sido durante décadas aquellos que han sabido crear mercados internos de trabajo, estabilidad en el empleo, formación y cualificación profesional, vinculación a largo plazo de los trabajadores en las estrategias de la empresa. Lo que implica sindicatos fuertes y participación real de los trabajadores en las decisiones de las empresas.

Profundizar en un posible modelo alternativo a la concepción neoliberal de la adaptación productiva requeriría, naturalmente, un estudio específico que no tiene cabida en esta introducción.

Si cabe señalar, no obstante, para concluir, que bajo conceptos aparentemente fundamentales como concertación o consenso social se encierran planteamientos netamente contrapuestos. Y que, frente a la manipulación neoliberal de esas palabras, hay otra interpretación gubernamental del diálogo y del pacto social, que, en lugar, por ejemplo, de culpabilizar a los salarios tiene que basarse en un proyecto de sociedad aceptable, en la credibilidad de la política económica, en la participación sindical efectiva en la empresa y en las instituciones sociales. En un concepto, en definitiva, más estructural que coyuntural del consenso social.

1.1 IDEOLOGÍA Y ERRORES DEL MODELO NEOLIBERAL

Desde que Reagan ganó las elecciones en 1980, el mundo ha vivido una etapa a la que los historiadores del futuro se referirán como «el período neoliberal», en el que se impuso el conservadurismo más extremo y retrocedieron la cultura, la creación artística e incluso las libertades políticas. La actual recesión y la administración de Clinton parecen indicar que este período ha terminado, aunque la vuelta a políticas de corte keynesiano sigue encontrando dificultades.

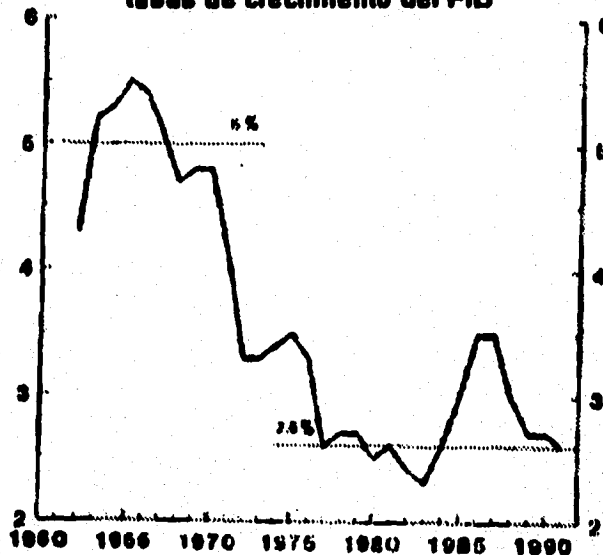
En lo que sigue se intentará exponer las razones y características de la ofensiva ideológica neoliberal que se ha desarrollado durante la última década. Se mostrará que el discurso actual no es sustancialmente diferente al que se deduce de la «mano invisible» de Adam Smith o de los escritos de los primeros economistas neoclásicos -en este sentido, es una ideología del siglo XIX- pero que la ofensiva ideológica tiene unas características adicionales muy importantes: trata de combatir al socialismo aprovechándose de las repercusiones de la crisis del llamado «socialismo real», e intenta que retrocedan las ideas keynesianas que han dominado la política económica de los gobiernos occidentales durante décadas, porque esto se considera imprescindible para que el capitalismo remonte la crisis. La respuesta de la izquierda a esta ofensiva ideológica debe hacerse también en este terreno. Frente a la imagen idílica de la economía de mercado que trata de extender el neoliberalismo y el ataque que realiza al socialismo como forma alternativa de organización de la sociedad, hay que dejar bien claro que el capitalismo es el reino de la injusticia y el despilfarro. Pero la crítica debe extenderse a la política económica neoliberal, una hábil combinación de errores y malas intenciones. Dicha política económica ha fracasado porque no ha sido capaz de sacar al capitalismo de la crisis en que se encontraba y, por el contrario, ha contribuido a agravarla creando problemas nuevos. Sin embargo no puede esperarse una vuelta a las políticas keynesianas, del tipo de las que determinaron el «estado del bienestar» durante la fase de expansión posterior a la segunda guerra mundial, porque tales políticas serían contradictorias con la salida de la crisis que propugna el capital. En este sentido, en el contexto de la crisis económica actual, cualquier política económica que quiera ser realmente de izquierda chocará con la oposición cerrada del capital y, por lo tanto, exigirá un cambio en la correlación de fuerzas para imponerla.

Desde el principio de la década de los setenta, la economía capitalista se encuentra sumida en una crisis de larga duración (véase Gráfica 1) caracterizada por la reducción acusada de los ritmos de crecimiento del PIB y de la acumulación y el paralelo aumento de los niveles de desempleo. Algunas cifras relativas al conjunto de los países industriales agrupados en la OCDE pueden servir para ilustrar el cambio de tendencia que se ha producido respecto a lo que ocurrió en la etapa de expansión posterior a la segunda guerra mundial. Mientras que el PIB creció a una tasa media del 5% durante el periodo 1960 a 1973, desde 1974 hasta 1992 sólo lo ha hecho a una media del 2,6%. El cambio de tendencia registrado en la acumulación ha sido aún más acusado: 6,2% de media anual antes de la crisis, 2,3% después de ella. Y como consecuencia, el desempleo no ha cesado de aumentar, hasta el punto de que, a finales de 1992, afectaba ya al 7,5% de la población activa de la OCDE, lo que significa que, según los datos oficiales de este organismo, se eleva a más de 32 millones de personas.

Los factores que han determinado este cambio de tendencia son múltiples, pero el más importante de todos ellos y el que los resume es el descenso de la tasa de beneficio que se produjo en los primeros años de la década de los setenta. Se trata, pues, de lo que la economía académica denomina crisis de oferta, o, como Marx hubiera dicho, una crisis determinada por el hecho de que la burguesía es demasiado débil. Para el capital, la superación de la crisis exigía una estrategia cuyo objetivo fundamental debería ser el de restaurar el nivel de la tasa de beneficio que existía antes de la misma. En consecuencia, en la mayoría de los países industriales se puso en marcha lo que conocemos como políticas de austeridad y ajuste: reducción de los salarios reales, precarización del empleo, retroceso del estado del bienestar, aumento de la productividad con cargo al empleo, políticas monetarias y financieras restrictivas, reestructuración del aparato productivo para eliminar la capacidad ociosa, etc.

GRAFICA 1

EL CAMBIO DE TENDENCIA EN LA OCDE
Medias móviles de 3 años de las
tasas de crecimiento del PIB



Pero la crisis económica afectaba al conjunto del capitalismo, por lo que no era suficiente que la recuperación de la tasa de beneficio se produjera en un solo país. Además, éste no era el único problema que debería superar el capital, sino que había otros también muy importantes: crisis del sistema monetario internacional, pérdida de la hegemonía americana, agudización de la competencia fundamentalmente entre los tres grandes bloques -TLC, CEE y los tigres asiáticos-. Todo ello hace que al conflicto capital-trabajo se le superpongan otros, que políticamente pueden tener mucha importancia, pero que no eliminan el carácter de clase que tiene la salida de la crisis económica.

En consecuencia, para que fuera efectiva, la política de austeridad y ajuste debería ser adoptada por los gobiernos de todos los países industriales e impuesta en los países dependientes, lo que, dada la situación del movimiento obrero en los primeros y de los movimientos nacionalistas en el tercer mundo, no era fácil ni se podía conseguir en poco tiempo. Y el liberalismo económico fue ganando terreno porque aparecía a los ojos de la clase dirigente como la mejor forma de hacer efectivos los objetivos de la política de austeridad.

A) LA OFENSIVA NEOLIBERAL

Para imponer la política de austeridad, el capital necesitaba hacer retroceder las ideas fundamentales que se habían instalado sólidamente en el movimiento obrero durante los años de expansión económica. Por un lado, la idea del socialismo, como forma de organización social alternativa al mercado, debería perder terreno en la conciencia de los trabajadores, porque sólo se podía conseguir que éstos aceptaran medidas lesivas a sus intereses si aceptaban que la economía de mercado es el único sistema posible y la crisis un problema que exige sacrificios de todos. Por otro, también deberían retroceder las ideas keynesianas que habían animado la política económica durante el periodo de expansión posterior a la segunda guerra mundial, porque la recuperación de la tasa de beneficio exigía un retroceso serio del estado del bienestar. Como se ha dicho, la ideología liberal podía servir para conseguir estos objetivos.

El neoliberalismo trata de presentar a la economía de mercado como el único sistema eficiente de organización social y a la crisis económica como resultado de que no se ha dejado jugar libremente al mercado. Trata de

conseguir la aceptación de la austeridad presentándola como la única política económica posible porque, como dicen a menudo sus mentores, ya sean liberales o antiguos priistas reconvertidos al liberalismo, «la política económica no es de derechas ni de izquierdas». Pero antes de entrar en el tema es preciso hacer una consideración previa.

El neoliberalismo trata de confundir mercado y economía de mercado cuando no son sinónimos.² El mercado es una institución que ha existido antes del capitalismo y probablemente sobrevivirá mucho tiempo después de que éste haya desaparecido, pues será imposible su erradicación completa mientras exista escasez. Por el contrario, la economía de mercado es una forma particular de organización social cuyo objetivo fundamental no es directamente la satisfacción de las necesidades, sino la producción de mercancías para la venta con el propósito de obtener un beneficio. El mercado ocupa un papel central en la economía de mercado, pero no menos importante es la propiedad privada de los medios de producción, el carácter mercantil de la fuerza de trabajo, que no es la sociedad la que decide conscientemente qué, cómo y para quién producir, sino sólo los que poseen capital, etc.

El objetivo de la ofensiva neoliberal no es, por tanto, el mercado, sino la economía de mercado, esto es el capitalismo. Se puede defender la supervivencia de ciertas formas mercantiles en la transición al socialismo y no necesariamente se está defendiendo una ideología capitalista, porque el capitalismo es mucho más que el mercado. Pero en la actualidad, desde el punto de vista ideológico, cuando se habla del mercado se está hablando también de propiedad privada, de mercado de trabajo, etc., es decir, en general se está haciendo ideología capitalista. De hecho, uno de los mensajes del neoliberalismo es que un verdadero mercado libre no puede funcionar sin la existencia de empresarios privados, esto es, que mercado y economía de mercado son lo mismo. El neoliberalismo parte de la idea motriz de que la economía de mercado tiene unas virtudes intrínsecas que la hacen superior a cualquier otro modo de organizar la vida económica. La idea motriz no es sustancialmente diferente a la que se deduce de la «mano invisible» de Adam Smith -los individuos, al actuar únicamente en beneficio propio se ven llevados como por una mano invisible a promover el interés común- o de los escritos de Walras, Pareto o Marshall.³ Sus ejes fundamentales son los siguientes.

El mercado es un mecanismo que permite asignar los recursos productivos escasos de forma que la producción sea la máxima posible y la más adecuada a las necesidades de la sociedad. La demanda de los bienes expresa las necesidades y orienta las decisiones de los empresarios, que contratan factores productivos en el mercado libre y con ellos producen los bienes necesarios para hacer frente a dicha demanda. Oferta y demanda generan unos precios de equilibrio, que son indicadores de la escasez de cada uno de los bienes. Con los ingresos que obtiene de la venta de sus productos, el empresario retribuye a todos los factores que han intervenido en la producción, esto es, se distribuye entre salarios, rentas e intereses y si es eficiente, todavía quedará un excedente que es su beneficio.

Para el conjunto de la sociedad, la producción generará unos ingresos totales, que es la renta nacional, que se distribuye entre todos lo que han participado en la misma. Una parte se gastará en bienes de consumo y el resto se ahorrará. Dicho ahorro lo pueden efectuar los asalariados o los capitalistas, pero esto no es lo importante. Cualquiera de ellos buscará prestarlos para obtener un interés que recompense el hecho de que se han abstenido de consumir toda su renta. Este ahorro será utilizado por los empresarios para invertirlo y expandir la producción. El aumento de la producción permitirá pagar más a los factores que han intervenido en la misma: a los que con su ahorro hicieron posible tal aumento, a los asalariados, etc. Es decir, habrá aumentado la renta nacional, cerrándose así el circuito.

Si el mercado funciona libremente, cualquier perturbación que se produzca tenderá a ser corregida. Si un empresario se equivoca en sus decisiones de producción, ofreciendo un producto para el que no existe una demanda

² Esta confusión no se produce solamente en la vida cotidiana, sino que es consustancial en los manuales de introducción a la economía más utilizados en las universidades occidentales. Véanse si no, por ejemplo, el primer capítulo de los manuales de Samuelson y Nordhaus (*Economía*, McGraw-Hill), Dorbusch, Fischer y Schmalensee (con el mismo título y la misma editorial) e incluso en el de Phelps (*Economía Política*, Antoni Bosch, Madrid, 1986).

³ Para comprobar que no hay nada nuevo bajo el sol, basta releer a Adam Smith, John Stuart Mill, los primeros marginalistas o Marshall. Pero todos estos autores tienen un regusto del siglo XIX. Ver cualquier libro de Historia del pensamiento económico.

suficiente en el mercado, obtendrá una pérdida y, o corrige su actuación, o desaparecerá: si existe desempleo, sólo se debe a que los trabajadores se empeñan en demandar un salario superior al que determina el pleno empleo, etc. Además, el Estado debe intervenir en la economía para garantizar que el sistema funciona correctamente. La economía de mercado es, pues, un mecanismo casi perfecto que permite combinar la máxima eficiencia en la satisfacción de las necesidades con la máxima libertad de los individuos⁴.

El neoliberalismo trata de presentar a la crisis como resultado de que no se ha dejado jugar libremente al mercado. La causa de la misma no hay que buscarla en ningún pretendido debilitamiento de la demanda o en el descenso de la tasa de beneficio, sino en un «shock de oferta» que ha afectado negativamente a las condiciones que determinan la producción: las sucesivas elevaciones del precio del petróleo. La crisis habría tenido una corta duración si los trabajadores hubieran aceptado unos salarios más bajos, la pérdida coyuntural de sus empleos, el cambio en las condiciones laborales y, en general, las medidas estabilizadoras. Es decir, si se hubiera permitido jugar libremente al mercado, se habría salido ya de la crisis. La política económica y social de los gobiernos de los países industriales debe inspirarse en el hecho de que el mercado es lo único que puede contribuir a salir de la crisis y, por tanto, se debe avanzar en la desregulación de la economía. Se trata pues, de dejar actuar a la crisis para permitir la reestructuración de la producción y conseguir una recuperación de la tasa de beneficio por la vía de desvalorizar la fuerza de trabajo.

El neoliberalismo no sólo utiliza argumentos tradicionales para defender la economía de mercado, sino que también se aprovecha de un cambio material, la crisis del llamado «socialismo real», para combatir al socialismo.

En primer lugar, se apoya en que lo que existe tiene más fuerza en la conciencia que lo que no existe. Hasta ahora, una parte de la humanidad vivía en Estados en los que la asignación de los recursos no se efectuaba por el mercado, sino por la planificación. El debate sobre su viabilidad quedaba saldado por la práctica de más de 70 años de existencia, por más que quedaran muchos problemas por resolver, entre los que la falta de democracia no era el menor. El «socialismo real» tenía repercusiones negativas sobre la conciencia de la clase obrera de los países occidentales, que no podían ver la degeneración burocrática como un sistema al que aspirar, pero demostraba en la práctica que había formas de organizar la vida económica alternativas al mercado. Pero se ha hundido, no tiene sentido luchar por algo que ni existe «ni puede existir» y mucho menos diseñar una política para cambiar progresivamente algo que ya no existe en la práctica. La economía de mercado existe y ésta es su gran fuerza ideológica. El socialismo no existe y ésta es su gran debilidad.

En segundo lugar, la ofensiva tiene un componente ético con el que se pretende estructurar y normalizar los deseos de los trabajadores. El mercado es bueno porque permite canalizar los intereses individuales para conseguir el bienestar común. Tiene defectos y provoca desigualdades, pero pueden y deben ser corregidos sin alterar sus principios fundamentales. No se trata de capitalismo salvaje, con altos porcentajes de tuberculosis en los barrios obreros, sino del que tenemos en la actualidad, basado en la democracia, con el que se ha conseguido un grado de bienestar apreciable. Es verdad que hay hambre en el mundo, pero esto sólo es producto de que la economía de mercado no ha avanzado suficientemente. También lo es que hay dictaduras en sistemas capitalistas, pero esto no se debe a que sean economías de mercado, sino a otros factores. Después de todo, puede haber mercado con dictaduras políticas, pero ¿se conoce algún sistema democrático que no esté basado en el mercado?

Por el contrario, el socialismo es malo. Por un lado, las ideas de sus fundadores eran erróneas. La teoría del valor trabajo es falsa, las mercancías no se intercambian según el trabajo que llevan incorporado, no hay ninguna contradicción entre capital y trabajo sino simplemente un problema de distribución de la renta, no existe una clase obrera que tenga unos intereses específicos, etc. Todas estas ideas han dado lugar a agudizar un conflicto que podría ser resuelto normalmente en el marco del capitalismo, con beneficios para todos, sin necesidad de la lucha de clases, porque competencia y solidaridad no son antitéticos, sino complementarios. Por otro lado, el socialismo lleva en su germen la falta de libertad. Se deriva de que al eliminar el mercado se suprime un mecanismo fundamental mediante el que el conjunto de la sociedad puede decidir democráticamente qué, cómo y para quién producir. En este sentido, mercado es igual a democracia y socialismo es idéntico a falta de libertad. Es decir, se establece una confusión entre libertad económica (libertad de explotar) y libertades políticas (de expresión, de

⁴Microeconomía intermedia, Call y Hollahan, Editorial Iberoamericana, 1985.

conciencia, de pensamiento, etc.), se supedita todo a la economía y se sacraliza el mercado como fuente de todas las libertades.

Finalmente, la ofensiva se apoya en lo que es posible, y merece la pena luchar por ello, y lo que es imposible. Fue posible la revolución de octubre, en el contexto histórico que se dio en esa época, pero ahora, en los albores del siglo XXI, con el bienestar que ha logrado la clase obrera de los países occidentales, es imposible. Fue posible el socialismo real burocrático y degenerado que hemos conocido, pero un socialismo en libertad, que no ha existido nunca ni puede existir, es imposible.

Algunos de los argumentos anteriores no son nuevos. La existencia de una clase obrera con intereses históricos o la posibilidad de la revolución en los países industriales son debates que se han producido durante décadas. Pero la crisis del «socialismo real» y el oportuno aprovechamiento de la misma por parte del liberalismo han hecho que ganen fuerza. Y hay que reconocer que, en este terreno, el socialismo tiene una gran debilidad. La clase obrera no dará un salto en el vacío hacia algo que no sabe ni siquiera si es posible y, si lo es, si no es peor y más injusto que lo que existe. ¿Cuál es la estructura democrática de una sociedad socialista?, ¿cómo es la planificación socialista?, ¿qué papel juega en ella el mercado?, etc. Será posible convencer de que la economía de mercado es mala, pero mientras no se avance en la respuesta a estas preguntas, el capitalismo seguirá teniendo una posición ideológica más favorable que el socialismo. El discurso neoliberal no se dirige sólo a combatir el socialismo, sino que también pretende imponerse sobre el keynesianismo que ha dominado la política económica y social de los países industriales durante la fase de prosperidad del capitalismo tardío. En este sentido, el liberalismo económico ha renacido de sus cenizas como el ave Fénix.

Hasta la crisis de los años treinta, la economía neoclásica, fundamento último de la ideología liberal, había sido hegemónica en el seno de la burguesía. El mercado era la institución perfecta por excelencia, pues garantizaba que cualquier aumento de la producción se tradujera en un aumento equivalente de la demanda que haría frente a la misma. Como dijeron von Mises y von Hayek en 1929, no podía haber depresión si la competencia perfecta funcionaba sin trabas. La estructura neoclásica había sido montada sobre el supuesto de que el pleno empleo era el nivel al que trabajaba la economía, que todo alejamiento de él sería coyuntural y que la propia economía generaría los remedios necesarios para volver a la normalidad. Se producían crisis periódicas, pero cumplían un papel objetivo de adaptar la capacidad productiva al poder adquisitivo existente. Hacían desaparecer a las empresas menos productivas o más anticuadas, provocaban con ello un aumento de la productividad del trabajo y, en consecuencia, creaban las condiciones de una nueva recuperación. Sólo bastaba con dejar que actuaran las libres fuerzas del mercado para conseguir que la economía se saneara a largo plazo.

Pero esto no tenía nada que ver con la realidad de los años treinta: el desempleo alcanzaba proporciones inusitadas, la capacidad productiva ociosa era la norma y nada indicaba que esta situación se fuera a corregir por sí sola. Y los peligros para el capitalismo de tal situación se empezaron a considerar superiores al no sancionamiento del aparato productivo y la estabilidad monetaria. Los grupos más importantes del capital y los gobiernos de los principales países optaron por un cambio en la política económica como medio de mitigar los efectos de la crisis. La llamada «revolución keynesiana» y el cambio del papel del Estado en la gestión de la economía que supuso, no fueron sino la expresión ideológica consciente de este cambio de prioridades por parte de la clase dirigente⁵. Desde entonces, el Estado ha jugado un papel prominente en el funcionamiento de la economía capitalista, la ideología keynesiana ha sido dominante y los gobiernos han utilizado sus recetas con el doble propósito de mantener la demanda efectiva y evitar las crisis, y extender el gasto público de carácter social para integrar las reivindicaciones de la clase obrera. Fue lo que se conoce como «Estado del Bienestar». Pero la situación actual fuerza a un cambio

⁵ En las páginas finales de la «Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero», el libro que se considera la formalización teórica más acabada del cambio que se debería producir en la política económica de los gobiernos para remontar la crisis, Keynes insistió en el papel teórico que tenía esta revolución. Para él la nueva teoría se terminaría imponiendo, porque el factor determinante eran las ideas y no los intereses materiales. Aquellas tardarían más o menos tiempo en imponerse, pero terminarían haciéndolo. Pero se equivocaba: eran los intereses materiales del capitalismo, agobiado por el desempleo masivo, una gran conflictividad social y una crisis profunda, los que permitieron el triunfo de las ideas keynesianas. Estas solamente fueron el vehículo ideológico de un cambio consciente en las prioridades de la burguesía.

en la política económica y el liberalismo es el que puede animar a lo que la burguesía considera más idóneo para salir de la crisis económica⁶.

El crecimiento de la tasa de beneficio que se produjo durante los primeros momentos de la fase de expansión del capitalismo tardío, permitió que hubiera recursos suficientes para que los gastos del Estado crecieran y se extendiera el estado del bienestar, y para que una parte sustancial de los mismos se financiara con cargo a impuestos. Pero con la crisis económica se ha producido un descenso de la tasa de beneficio y para que se recupere es necesario que aumente la explotación de los trabajadores. Esto se puede conseguir reduciendo los salarios reales, pero también actuando sobre los llamados salarios indirectos (salud, educación, etc.) y diferidos (pensiones), esto es, haciendo retroceder al estado del bienestar.

Al liberalismo siempre le ha gustado que el mercado rija la vida económica en todos sus componentes menos en uno: la cotización de las monedas. Prefieren que exista una única moneda para todo el mundo que, como el oro, se emita por criterios «automáticos», nunca por decisiones de los gobiernos. Sólo se sienten cómodos cuando la actividad económica se desenvuelve dentro del rígido corsé del «patrón oro», pero, como los tiempos ya no están para esto, buscan denodadamente un sistema de tipos de cambio fijos. Esto viene a cuento porque la crisis del sistema monetario internacional reforzó el proyecto neoliberal.

El funcionamiento de la economía capitalista depende de la solidez de dicho sistema, que está ligada a la existencia de una potencia hegemónica cuya moneda sea aceptada como unidad de cuenta, medio de cambio y depósito de valor. Estos papeles los desempeñaron los Estados Unidos y el dólar durante el largo período de expansión posterior a la segunda guerra mundial, pero a principio de los años setenta, la tendencia a la depreciación a largo plazo del dólar, debida fundamentalmente a los problemas estructurales de la economía americana, puso fin al patrón dólar y al sistema de tipos de cambio fijos que había funcionado hasta entonces, si bien debe resaltarse que, dado el predominio de las concepciones keynesianas y el alto valor que el pleno empleo tenía como objetivo de la política económica, los cambios fijos se consideraban ajustables cuando las economías arrastrasen un déficit estructural de sus balanzas de pagos.

Así pues, el neoliberalismo económico, para distinguirlo del liberalismo a secas que inspiró a la burguesía revolucionaria del siglo XIX ha sido la ideología adoptada por el capital para remontar la crisis económica a su favor.

B) EL REINO DE LA INJUSTICIA Y EL DERROCHE

La ofensiva neoliberal se sitúa en el terreno ideológico general, como se ha dicho, trata de erradicar la idea del socialismo de la mente los trabajadores, dando una imagen idílica de la economía de mercado y pretende combatir las ideas keynesianas que dominaron el panorama mundial durante décadas, porque un amplio sector de la clase dirigente considera que para salir de la crisis el «estado del bienestar» debe retroceder. La izquierda no puede sustraerse del combate en este terreno ideológico⁷.

⁶ La ofensiva ideológica no se refiere sólo a las virtudes del mercado, sino también a la política necesaria para salir de la crisis y, en este sentido, el retroceso de las ideas keynesianas y el avance de las liberales puede constatarse prácticamente desde el inicio de la crisis. Basta leer cualquier informe del FMI, la OCDE o la CEE de la década de los setenta para comprobar hasta que punto casaron ya entonces las explicaciones y las recomendaciones de los «supply-siders» o los monetaristas. Pero después se produjo de un salto cualitativo de la ideología liberal.

⁷ Se ha convertido en un tópico que el marxismo es una ideología del siglo XIX, pero esto nos es cierto porque el capitalismo que analizó Marx no era tanto el que tenía delante como el de ahora. En la segunda mitad del siglo XIX, la economía capitalista se reducía a Europa occidental hasta el Danubio, América del norte, y algunas ciudades o Estados del sur de África u Oceanía. La mayoría del mundo conocido no era capitalista y en los países industriales la inmensa mayoría se dedicaba a la agricultura, de forma que la clase obrera era muy minoritaria. Las diferencias de riqueza entre los países capitalistas y no capitalistas no eran muy grandes, y, por ejemplo, ningún observador inteligente habría considerado a China como una economía y cultura inferiores a la europea. El sistema que se analiza en el *Capital* es más parecido al capitalismo de la actualidad que al del siglo XIX. Véase a este respecto E.J. Hobsbawm, *La era del imperio*, Madrid, 1989.

El capitalismo, lejos de la imagen idílica con la que le presentan los neoliberales, es el reino de la injusticia - porque la desigualdad es consustancial a él- y el derroche- porque su funcionamiento lleva aparejado la existencia de crisis periódicas, de desempleo, de dilapidación de recursos productivos, etc.-

El mercado no asigna los recursos productivos de la forma más adecuada para satisfacer las necesidades sociales. La ideología neoliberal mitifica la economía de mercado, pues su objetivo no es la satisfacción de las necesidades humanas, sino la producción de mercancías para obtener un beneficio mediante su venta. Esto significa que el mercado no asigna los recursos disponibles para satisfacer todas las necesidades sino sólo las que se pueden expresar porque alguien paga por ellas. Por un lado, el mercado lleva implícita la desigualdad social: entre capitalistas y trabajadores, entre trabajadores intelectuales y manuales, técnicos y obreros, fijos y temporales, etc. Esta desigualdad social se traduce en una distribución de las rentas que no es equitativa, por lo que los precios de demanda no reflejarán las necesidades de los individuos, sino de los ingresos de la mayoría de la población, cuya baja renta les obliga a prescindir de algunos bienes necesarios, y de los de una minoría que demanda mercancías de lujo. Por otro, las necesidades que no se pueden pagar no existen para el mercado, por muy importantes para la humanidad que sean. En la economía de mercado actual, se busca la eficiencia y el equilibrio económicos, pero no importan los costos sociales. La situación de Somalia, la hambruna de un continente entero como el africano, o la pobreza a la que se ha empujado a América Latina, por ejemplo, se consideran consecuencias inevitables que se resuelven muy insuficientemente, no por el mercado, sino con caridad, asistencia social, etc.

No se puede hablar de factores productivos cada uno de los cuales recibe la retribución que le corresponde según su aportación a la producción, sino de apropiación del producto excedente por parte de una minoría. En la sociedad capitalista, existen dos clases sociales fundamentales: los capitalistas poseedores de los medios de producción, que deciden a que dedicar los recursos productivos, y los trabajadores, personas que libremente se ven obligadas, por razones económicas, a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario como medio de subsistencia. Ambas clases ocupan un lugar muy distinto en la producción y en la vida social: los primeros son los que explotan y se apropian del producto excedente, los segundos son los explotados. Los propietarios de los medios de producción no lo son porque se hubieran abstenido antes de consumir su renta, sino porque han invertido la plusvalía que obtuvieron en el pasado. El mercado es, pues, un mecanismo que permite perpetuar la apropiación del producto excedente por parte de una minoría y las rentas del capital no son ninguna retribución a la espera sino pura y simple explotación.

El mercado no es el mecanismo perfecto en el que cualquier perturbación que se produzca tiende a ser corregida. Esto es así porque las necesidades no preceden a las decisiones de producción, sino al contrario, primero se realiza la producción y después se comprueba si es coherente con las necesidades que expresa el mercado. Es decir, el mercado funciona indicando a los capitalistas que se han equivocado cuando ya es demasiado tarde y la consecuencia es una inevitable dilapidación de recursos (mercancías que no se venden mientras que faltan otras, reconversiones para la destrucción de sectores enteros, supervivencia del desempleo mientras que existen necesidades sin satisfacer a las que se podría dedicar esta fuerza de trabajo, etc.), y la aparición de crisis industriales periódicas derivadas de una tendencia objetiva a la sobreproducción, que frenan el desarrollo de las fuerzas productivas. Además, la búsqueda del máximo beneficio obstaculiza el desarrollo de nuevos productos y nuevas tecnologías cuando éstas no son rentables (como ocurre con la energía solar), impide el aprovechamiento racional de los recursos tecnológicos existentes y tiene efectos destructivos (progresiva destrucción del medio ambiente, desarrollo de industrias de armamentos y de tecnologías peligrosas, como la nuclear, etc.).

El mercado tampoco es el mecanismo casi perfecto que permite combinar la máxima eficiencia con la máxima libertad. La única libertad que la economía de mercado no puede eliminar sin perder su naturaleza es la libertad de explotar. El mercado no puede desligarse del contexto político e histórico en que se da. No es un mecanismo abstracto, sino un hecho real. Puede ser de libre competencia, de monopolios, de multinacionales, etc., y en todos ellos la asignación de recursos se hace ex post, pero no con la misma eficiencia capitalista. La inflación galopante en América latina, por ejemplo, se produce en una economía de mercado pero, ¿alguien estaría dispuesto a hablar de la eficiencia del mercado en este caso?. Puede coexistir con autocracias o con formas avanzadas de democracia parlamentaria y su funcionamiento no es el mismo. En Chile, por ejemplo, ¿el saneamiento relativo que se ha producido en su economía se debe a las virtudes del mercado o a la forma represiva con la que la dictadura de

Pinochet forzó la extracción del excedente? Puede agravar la miseria de amplias masas (como ocurrió en los siglos XVIII y XIX y ocurre en el tercer mundo hoy) o permitir aumentos sensibles del nivel de vida medio (como sucedió en los países occidentales en los 30 años previos a la primera guerra mundial y en los 25 años posteriores a la segunda). Situaciones tan diferentes no pueden explicarse solamente por el mercado.

El capital recurre cada vez más a mecanismos que no son los del mercado para su funcionamiento. Se ha producido una reducción drástica del trabajo asignado en el mercado respecto al trabajo asignado directamente, como consecuencia de que las empresas cada vez más acuden a la planificación. En la época de las multinacionales, el plan se hace internacional y afecta a múltiples empresas. Como es lógico, no son los precios de mercado los que rigen las transacciones entre todas las factorías de Ford esparcidas por el mundo, sino una planificación cuidadosamente realizada.

Finalmente, el capitalismo actual es un producto de la complejidad que ha adquirido el sistema económico pero, en mucha más medida, es una consecuencia de la lucha histórica de la clase obrera por mejorar sus condiciones de vida y laborales. No es el capitalismo de libre competencia del siglo XIX, sino lo que se conoce como capitalismo mixto, o capitalismo del «estado del bienestar». Nació a raíz de la crisis de los años treinta, con la llamada «revolución keynesiana». En aquellos años, la intervención del Estado en la economía fue diseñada para combatir la crisis, pero es evidente que, de forma secundaria, el gasto público se podía utilizar para paliar la conflictividad social que estaba determinando el desempleo masivo y el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. Pero después de la segunda guerra mundial, la fuerte expansión económica que experimentaron los países industriales permitió un cambio cualitativo en el papel del Estado en la economía y, por tanto, un cambio en el capitalismo. Dicho cambio en la intervención del Estado en la economía ha permitido corregir en parte la inestabilidad intrínseca del sistema capitalista -durante todo el periodo de expansión posterior a la segunda guerra mundial sólo se produjo una recesión generalizada en 1958- y paliar la injusticia que es inherente al funcionamiento del mercado con la extensión del «estado del bienestar». Los neoliberales pretenden dar marcha atrás en la moviola de la historia volviendo al capitalismo de la libre competencia, en el que el mercado era el rey absoluto de la economía. Pero el capitalismo salvaje que propugnan los neoliberales -reino absoluto del mercado, mínima intervención del Estado, mercado de trabajo regido por la ley de la selva, etc.- desapareció a principios de este siglo y no lo hizo por casualidad, sino porque, de no hacerlo, no hubiera sobrevivido.

1.2 EL INTERNACIONALISMO NEOLIBERAL

El avance del neoliberalismo y la internacionalización de la economía en los últimos tiempos son dos fenómenos que han discurrido paralelos y que se han potenciado mutuamente.

Los principios teóricos y prácticos de la doctrina neoliberal tienen su vertiente internacional: supresión de obstáculos al comercio internacional y defensa del librecambio, liberalización de los movimientos de capital, ajustes internos tan drásticos como sea necesario para restablecer el equilibrio de la balanza de pagos (según la ortodoxia del FMI) y estabilidad de los tipos de cambio. Su aplicación en la década pasada ha estimulado el crecimiento del comercio mundial, ha originado la concentración del capital y el dominio de los mercados mundiales por las multinacionales, propiciando, en general, una internacionalización de la economía, como sinónimo del incremento de las relaciones económicas entre los países y de mayor interdependencia entre ellos. Las consecuencias más destacadas de este proceso han sido una ampliación acusada de la brecha de los niveles de renta y crecimiento entre los países industrializados y los del Tercer Mundo y una reducción sensible de los márgenes de maniobra de que disponen los gobiernos para resolver los problemas internos que afrontan las sociedades.

Al mismo tiempo, la internacionalización de las economías, concretada para los distintos países en la apertura de fronteras, eliminación de las barreras proteccionistas, agudización de la competencia, desregulación de los mercados financieros, ha proporcionado una coartada permanente a los gobiernos para aplicar políticas de marcado carácter antisocial, reforzando la naturaleza neoliberal de las políticas que vienen aplicando para superar la crisis económica que se desencadenó a partir de 1974 con la primera crisis energética.

Además podría afirmarse que si en el interior de los países las clases dominantes encontraron en el neoliberalismo la mejor ideología para la defensa de sus intereses y para combatir a los trabajadores, en el plano internacional el imperialismo encontró en la doctrina neoliberal el mejor instrumento para seguir explotando a los países del Tercer Mundo.

Aunque las posiciones del neoliberalismo en su vertiente internacional no están codificadas -se trata de una doctrina oportunista que adecua sus análisis y proposiciones a los intereses que defiende- de su vinculación histórica con el liberalismo, de su literatura, de su práctica y de las respuestas que ha ido dando a los problemas aparecidos en las últimas décadas es posible perfilar algunos de sus rasgos más destacados.

1.2.1 LA DEFENSA DEL LIBRECAMBIO

El elemento esencial del neoliberalismo a escala internacional es la defensa del librecambio, reproduciendo en este punto lo que eran las posiciones del liberalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, que tan provechoso resultaba a Gran Bretaña como primera potencia industrial en aquellos tiempos y en general a los países que fueron adquiriendo un ventajoso grado de industrialización. Los países imperialistas, sobre el papel, han sido siempre defensores del librecambio. La relación de intercambio entre los países industriales y los países productores de materias primas o productos agrícolas ha sido favorable a los primeros y, por otra parte, un régimen de librecambio entre países de desigual estadio económico, llevado a sus últimas consecuencias, impide el desarrollo de competidores por la dificultad que tienen los países atrasados para crear una industria competitiva.

La teoría del comercio internacional ha sido uno de los campos más desarrollados y sofisticados de la teoría económica desde sus orígenes, y no por casualidad, ya que, los intereses puestos en juego eran enormes. La teoría clásica de la «ventaja comparativa», formulada por primera vez por David Ricardo apoyándose en una teoría del valor-trabajo, ha perdurado sin grandes alteraciones en sus proposiciones fundamentales. Según esta teoría, dos (o más países) derivan ventajas mutuas a través de comercio exterior, incluso si uno de ellos es más eficiente en la producción de todos los bienes. Cada país exportará el producto en el que tiene más ventaja o menos desventaja comparativa. El hecho de que un país tuviera una ventaja absoluta en la producción de todos los bienes no impediría que se alcanzase un equilibrio de los intercambios teniendo en cuenta la teoría cuantitativa del dinero y la existencia de un sistema de patrón oro. Si un país por ser más productivo tuviera un superávit, el excedente se traduciría en una entrada de oro que aumentaría la cantidad de dinero y los precios, en tanto que ocurría lo contrario con el país deficitario, por lo que se alteraría la relación de precios entre ellos y acabaría operando la ley de la ventaja comparativa, tendiéndose al equilibrio.

La formulación más reciente de la teoría de las ventajas comparativas, en particular su versión neoclásica -la ley de las proporciones de los factores de Heckscher-Ohlin-Samuelson- deja intacto el principio básico, pero sostiene que los países tenderán a especializarse según la intensidad relativa de los factores productivos, de modo que los países industriales, con más capital, producirán los bienes intensivos en capital, mientras que los países atrasados, con abundancia relativa de mano de obra, se especializarán en productos intensivos en trabajo. Para el mundo en su conjunto, esa especialización sería eficiente, de modo que si Ricardo se atrevió a afirmar que el comercio libre era bueno, la teoría neoclásica llegó a asegurar que la desigualdad internacional es lo mejor⁴.

Las teorías a favor del libre cambio han sufrido duras críticas y sobre todo han sido refutadas por la evolución y los resultados del comercio entre los países avanzados y atrasados. El mecanismo reequilibrador no ha funcionado.

⁴ La teoría del comercio internacional encuentra cierto paralelismo con la defensa que en los últimos años se ha hecho de las ventajas del Mercado Único. Se han resaltado con poco hincapié en la asimetría de las ventajas e inconvenientes que para cada país tiene y los efectos destructivos de la competencia sin límites cuando se enfrentan economías muy dispares en cuanto a capacidad para competir. Por otro lado, la teoría del comercio internacional y la defensa del Mercado Único llegaron a distinguir entre naciones, pero nunca los análisis incluyeron a las bases sociales. Los beneficios que el conjunto de los países comunitarios obtendrían suprimiendo todas las barreras que compartimentan los mercados y limitan la competencia, pero se ha hecho poco hincapié en la asimetría de las ventajas e inconvenientes que para cada país tiene y los efectos destructivos de la competencia sin límites cuando se enfrentan economías muy dispares en cuanto a capacidad para competir.

entre otros motivos porque la teoría cuantitativa del dinero, según la cual el nivel de precios viene determinado por la cantidad de dinero en circulación, no es correcta. Lo que ha sucedido es que los países con desventajas absolutas han incurrido en déficits crónicos de la balanza comercial y en un endeudamiento creciente. El comercio libre ha resultado ser un mecanismo para la concentración del capital internacional eliminando a los países más débiles, como el intercambio libre dentro de un país capitalista lo es para la concentración del capital interior eliminando a las empresas menos productivas.

La posición a favor del libre cambio de los países avanzados, tan elegantemente arropada con las teorías puras sobre el comercio internacional, buscando sacar provecho tanto de las relaciones comerciales con las colonias como con el intercambio desigual que se establecía entre los países industrializados. No obstante, estos últimos comprendieron en todo momento el valor de un cierto grado de protección, y lo aplicaron para fomentar las industrias incipientes y para defender los sectores ya instalados, contando con que se dan diferentes grados de desarrollo entre los países y entre los sectores, entre otros motivos por la distinta dotación de recursos naturales, fundamental en los orígenes de la revolución industrial. Por otro lado la defensa del libre cambio nunca ha impedido a estos países adoptar posiciones proteccionistas duras cuando la ventaja de los países del tercer mundo era manifiesta, como ocurre en muchos productos agrícolas.

La invasión del neoliberalismo ha degenerado las posiciones liberales sobre el libre cambio en un doble sentido. En primer lugar, las teorías que demostraban las ventajas del comercio internacional se sentían obligadas a explicar los mecanismos por los cuales, a pesar de las diferencias entre países, se lograría un punto en el que todos participarían del comercio internacional y de sus beneficios. Se partía de que los países debían intercambiar pero respetando el equilibrio entre lo que cada uno vendía y compraba, de modo que, aunque hubiese una especialización, ésta tenía los límites de la capacidad de compra del país con menos posibilidades. El intercambio favorecía la producción global, repartiéndose los beneficios entre los países participantes, ya que después del intercambio ninguno veía disminuir su producción, igualándose el valor de los flujos intercambiados.

En la actualidad, la defensa a ultranza del librecambio parte de que los mercados deben estar abiertos sin restricciones, pero nadie se atreve a explicar, demostrado el fracaso histórico de las teorías clásica y neoclásica, como se logra el equilibrio de los intercambios. Los países atrasados, con desventajas absolutas, pueden encontrarse en la situación en que no pueden producir ningún producto en condiciones competitivas y, por consiguiente, sus mercados interiores quedan invadidos por las mercancías extranjeras. Pero una vez que no hay nada que producir, tampoco se genera renta ni hay nada que comprar. Por esta vía del librecambio sin límite, de la competencia como única norma de funcionamiento de la economía, muchos países van quedando marginados de la economía internacional y entran en un proceso de aislamiento y declive sin que exista mecanismo alguno para rescatarlos y reintegrarlos en el mercado mundial. Esta evolución no es una hipótesis sino que refleja la amarga realidad, no ya de países aislados, sino de zonas enteras del Globo y hasta de continentes. La competitividad, como vía de regulación de la actividad económica entre países con diferencias abismales, es aberrante, porque lleva a la destrucción irremediable de los países más débiles.

La segunda diferencia fundamental se refiere a la actitud dominante en los países del Tercer Mundo. Los países industrializados ya se ha dicho que siempre han sido favorables al librecambio hasta donde no perjudicaba sus intereses. En los países en desarrollo, antes de la invasión neoliberal, frente a los argumentos librecambistas, se oponía una batería de argumentos bastante sólidos en defensa de la protección, que no difería de los utilizados por los propios países capitalistas avanzados para defenderse los unos de los otros⁹. En los últimos años, sin

⁹ Las teorías sobre el desarrollo económico tuvieron un gran auge en los años cincuenta y sesenta, cuando el subdesarrollo era una preocupación política internacional, no exenta de interés, desde el punto de vista capitalista, por las luchas coloniales y los movimientos radicales que tenían lugar en los países del Tercer Mundo. En todas las teorías sobre el desarrollo era un eje fundamental el proteccionismo, demostrado como estaba hasta la saciedad que los países no podían escapar del atraso más que con cierto grado de protección. Los argumentos proteccionistas eran múltiples -aumento del ahorro y la inversión interior, atracción de la inversión extranjera garantizando el mercado interior, industrias incipientes, adecuación de la demanda a las posibilidades de la oferta nacional, economías externas del desarrollo industrial, economías de escala- pero todos giraban en torno al hecho básico de que no es posible para una economía débil iniciar un proceso de industrialización si esta abierta sin restricciones a la competencia exterior. La literatura económica sobre el desarrollo y la protección es rica y abundante y, comparada con muchos de los libros actuales, sorprende porque hablaba de problemas económicos y sociales que tenían que ver con los problemas que padecían una parte considerable de la población mundial

embargo, los gobiernos y las capas sociales dominantes de los países atrasados ha abrazado con fervor las nuevas doctrinas y han tratado de preparar a sus economías para desenvolverse en un mundo de competencia exacerbada, dispuestos a jugar según las reglas de los países potentes.

La consecuencia inevitable de esta perversa respuesta ha sido que se ha generado un proceso de dualización de las economías y de las sociedades hasta límites absurdos. Una parte, la más pequeña, se esfuerza por sobrevivir en el mercado internacional, mientras que la mayor parte queda marginada, ajena al proceso económico y desterrada a vivir en actividades infraeconómicas. Como se reconoce abiertamente en Brasil o en México, o como ocurre en Nicaragua y en otros muchos países latinoamericanos, los planes económicos que han elaborado los gobiernos con los criterios neoliberales parten de que sólo pueden incorporar a una pequeña parte de la población del país, quedando la existencia del resto poco menos que al albur de la naturaleza¹⁰.

Las secuelas sociales de esta alternativa saltan a la vista y los resultados esperados son más que discutibles. A mediano plazo, los países atrasados, por múltiples razones, acaban perdiendo competitividad con respecto a los desarrollados, por muchas ventajas que tengan en salarios, lo que hace inevitable emprender sucesivos ajustes económicos para recuperar el terreno perdido, que reducen a escala las economías y provocan que el sector competitivo represente cada vez una porción más pequeña de la economía. El ejemplo de los NIC (los nuevos países industrializados del sudeste asiático) siempre está presente en la mente de los diseñadores, como si fuese posible que todo el Tercer Mundo se acabe convirtiendo en países exportadores. Lo que puede ser para unos pocos no lo puede ser para todos y, por lo demás, el surgimiento de los NIC no es producto del neoliberalismo sino el fruto de una intervención decisiva de los Estados en la economía de dichos países.

1.3 MOVILIDAD DE CAPITALES Y DESREGULACIÓN DE LOS MERCADOS

La movilidad del capital, las facilidades para las salidas y entradas de capitales que operan en mercados cada vez menos regulados, ha sido otro de los rasgos del neoliberalismo dominante, con graves consecuencias para la estabilidad del capitalismo en general y para la evolución de los países del Tercer Mundo .

Por lo que respecta al primer aspecto, la esfera financiera ha cobrado una hipertrofia tal que los flujos financieros centuplican los flujos reales. El extraordinario desarrollo de la actividad financiera que ha tenido lugar en la última fase de expansión capitalista a lo largo de la década de los ochenta y las alzas especulativas en los mercados de valores y el sector inmobiliario, que todavía no se han desinflado suficientemente, constituyen una bomba de relojería adosada al sistema, que puede estallar en cualquier momento y provocar una crisis de alcance imprevisible.

Multitud de instrumentos financieros, de nuevos mercados, de nuevas instituciones y de nuevas operaciones han convertido al capitalismo en un enorme casino, donde masas astronómicas de capitales errantes, sin apenas relación con los flujos reales, buscan rentabilidades a través de apuestas especulativas que se suceden las veinticuatro horas del día. La inestabilidad intrínseca de todo ese montaje es indiscutible y es así como en los últimos tiempos se han vivido algunas conmociones financieras -el «crack» de los mercados de valores en 1987, la repetición en 1989, el pánico desatado en algunos otros momentos como al estallar el conflicto del Próximo

¹⁰ En efecto, esos planes responden a la más estricta ortodoxia neoliberal. Desde las medidas coyunturales dirigidas a reducir los salarios reales, cortar los gastos públicos y aumentar las tarifas públicas, hasta las reformas estructurales, cuyos objetivos son, por un lado quebrar las conquistas y orientaciones anteriores -privatizaciones masivas, liquidación de sectores productivos enteros, desregulación general, contrarreformas agrarias, liquidación o privatización de los sectores públicos, etc.- y, por otro, integrar la economía en el mercado mundial, a través de eliminar las barreras comerciales, permitir la invasión del capital extranjero y firmar proyectos de integración. Lo paradójico del caso, prueba del avance ideológico del neoliberalismo, es que estas políticas reaccionarias las han implantado gobiernos democráticos surgidos en la segunda parte de la década de los ochenta (Brasil, Argentina, Uruguay, Perú), que han tratado de reeditar la brutal política que ejecutaron previamente gobiernos dictatoriales como el de Chile.

Oriente, la caída en más de un 500% de la Bolsa de Tokio desde 1990 - que deben interpretarse como preavisos de algo que parece inevitable que ocurra: la desactivación de la burbuja financiera que se ha creado.

Esta hipertrofia financiera es sintomática de una fase de estancamiento prolongada, donde los capitales no encuentran posibilidades de rentabilizarse productivamente y buscan toda suerte de vías para obtener réditos, aunque en esta ocasión la magnitud que ha cobrado la esfera financiera supera cualquier otra etapa histórica, incluida los años que precedieron a la Gran Depresión del año 1929. Los niveles de las cotizaciones de las principales Bolsas, a excepción de la de Tokio, están todavía más altos que antes del crack de 1987, después de haberse recuperado de aquellas jornadas y otras de cariz parecido. En dichos niveles, las acciones arrojarán una rentabilidad muy por debajo de los tipos de interés en los mercados financieros, sin que existan expectativas de plusvalías como en el pasado, por lo que no pueden descartarse nuevas convulsiones financieras, contando también con el carácter especulativo de los niveles alcanzados por las Bolsas y la volatilidad que han adquirido las operaciones y los movimientos de capital. Antes de que se inicie otro ciclo expansivo como el de los años ochenta y, sobre todo, antes de que se emprenda una onda larga expansiva, parece imprescindible un saneamiento del sistema que destruya parte del capital financiero. Ninguna recuperación firme puede desarrollarse con la rémora de la hipertrofia y la degeneración financiera que han tenido lugar.

La «financiación» de la economía ha podido desempeñar en los últimos años un cierto papel regulador de la economía, en la medida que ha generado un consumo de las clases acomodadas que ha compensado el estrangulamiento del consumo de los asalariados, contribuyendo a cerrar la brecha entre la producción y la demanda, pero este efecto positivo (que puede revertirse en una crisis), no puede contraponerse a los riesgos de la dimensión desquiciada que ha adquirido la esfera financiera. El desarrollo de ésta como un mecanismo de sostener la expansión económica repite otras etapas históricas del capitalismo, pero su magnitud y características reflejan condiciones específicas de su actual estadio de evolución. La internacionalización del capital, la descomposición del sistema monetario internacional, la desregulación de los mercados hacen más inestable y peligroso un entramado construido sobre una expansión financiera y crediticia exagerada. Esta evolución, fruto de las concepciones neoliberales en el campo internacional y financiero, constituye una rémora para el crecimiento económico, ya que, como se ha indicado, no parece posible una nueva onda larga expansiva sin un previo saneamiento y, probablemente ni siquiera una recuperación de cierta envergadura. El fuerte endeudamiento de todos los sectores económicos que subyace en esta montaña financiera limita los márgenes de los gobiernos para adoptar políticas expansivas y reduce las posibilidades del crecimiento de la inversión y el consumo privados.

Las repercusiones de la liberalización y la hiperactividad financiera sobre los países del Tercer Mundo han sido nuevamente bastante perjudiciales. En primer lugar, cabe señalar que en una primera etapa les permitió incurrir en fuertes endeudamientos que no se vincularon al desarrollo de actividades productivas susceptibles de generar en el futuro rendimientos para pagar la carga de intereses y amortizaciones. La crisis de la deuda que estalló al principio de los años ochenta está relacionada con estos hechos. En segundo lugar, las facilidades que existían para financiar los déficits exteriores ocultaron por algún tiempo los estragos que el librecurso provocaba en las economías débiles. Cualquier déficit de balanza de pagos parecía financiable, cuando en realidad las economías estaban acumulando un pesado fardo del que no podrían liberarse en mucho tiempo. En tercer lugar, la apertura exterior incontrolada a la entrada de capitales ha dejado en una indefensión casi absoluta a los sectores productivos de muchos países, que han quedado en manos del capital extranjero y de las multinacionales, lo que deja un mínimo margen de maniobra para llevar políticas autónomas que respondan a los intereses y necesidades de la población. En sentido contrario, la liberalización del capital ha propiciado las salidas de capital de los países del Tercer Mundo a los países capitalistas desarrollados, más seguros y con menores riesgos de sufrir las depreciaciones abismales a las que a veces se ven arrastradas las monedas de los países atrasados¹¹.

¹¹ Del mismo modo que se argumentaba contra el librecurso comercial y se encontraban razones para el proteccionismo, en los manuales sobre la teoría del desarrollo se encontraban sólidos argumentos para que los países subdesarrollados mantuvieran el control de los movimientos de capital. Por ejemplo, para evitar las crisis de la balanza de pagos y la inestabilidad del tipo de cambio generadas por flujos especulativos; para garantizar que el ahorro interno se destinase a financiar inversiones internas; para ampliar las bases impositivas con los rendimientos del capital y el patrimonio para poder disertar políticas estructurales a mediano plazo cuya aplicación no estuviese en manos de los especuladores, etc.

La conservación del orden en un mundo financiero profundamente inestable ha constituido otro de los objetivos del neoliberalismo. Como no podía menos de suceder, muchos países entraron a lo largo de los años ochenta en bancarrota exterior (de la interior, algunos nunca han salido), incapaces de afrontar las cargas de la deuda o simplemente de hacer frente a los pagos de las importaciones más imprescindibles. El FMI, como policía del sistema financiero internacional, ha impuesto en muchos países planes económicos implacables, de consecuencias pavorosas, que han llegado a provocar en ocasiones cruentas revueltas sociales.

El orden internacional del capitalismo descansa en el cumplimiento de los compromisos de pago. Cuando un país alborota el entramado financiero internacional, acaba sometido a la camisa de fuerza del FMI, cuyas recetas son siempre las mismas cualesquiera que hayan sido las causas que lo motivaran y la situación interna de los países. Las balanzas de pagos de los países del Tercer Mundo siempre han tenido una posición precaria y siempre han estado sometidas a la observación y la disciplina del FMI. No obstante, en la última década, por los déficit previamente acumulados, por la gravedad de los desequilibrios internacionales de los países industriales entre sí y de éstos con los países en desarrollo, los programas de austeridad y ajuste impuestos a algunas economías para recuperar cierto equilibrio exterior, una vez desencadenada la crisis de la deuda externa, han revestido una dureza extrema y unas consecuencias desastrosas.

i) Excepción al mercado: los tipos de cambio

Por último, entre los postulados y objetivos del neoliberalismo hay que destacar la persecución de una estabilidad de los tipos de cambio tan alta como sea posible. Desde que al principio de los años setenta (en 1971 el presidente Nixon decretó la inconvertibilidad del dólar en oro) se produjo el hundimiento del sistema monetario internacional de Bretton Woods, instaurado después de la segunda Guerra Mundial, se ha perseguido restablecer un sistema lo más estable posible de la cotización de las monedas. Los resultados han sido escuálidos por las grandes diferencias entre las economías, que acaban traducándose en la apreciación de las monedas de los países más fuertes y en la devaluación de las de los más débiles, y porque la liberalización de los mercados financieros y de cambios activa masas enormes de capitales que hacen insostenible el valor de una moneda cuando el mercado decide que tiene una cotización ficticia. Pero dichos resultados no ocultan que los gobiernos de toda condición se han propuesto como objetivo fundamental garantizar la estabilidad del tipo de cambio en un intento baldío de recuperar la estabilidad del patrón-oro o siquiera la estabilidad relativa procurado por el sistema del patrón-dólar de Bretton Woods. Tal objetivo responde de un modo genérico a los intereses del capitalismo y la burguesía: el mundo de los negocios, y en particular las empresas que concentran gran parte de su actividad en las exportaciones, como es el caso de las multinacionales, la estabilidad de los tipos de cambio proporciona datos fundamentales para la toma de decisiones que se convierten en incógnitas en una situación de tipos de cambio flexibles.

La fe ciega que los neoliberales tienen en el mercado como regulador del sistema y para recuperar los equilibrios perdidos tiene una excepción: el mercado de cambios. Mientras se trata de desregular todos los demás mercados y se intenta que la intervención del Estado sea mínima para no perturbar el libre juego de la oferta y la demanda (o el dominio del mercado por quienes pueden ejercerlo), en lo que atañe a los mercados de cambios, no sólo los gobiernos intervienen de forma continua para mantener la cotización de la moneda que consideran adecuada frente a las señales del mercado sino que son numerosos los acuerdos de Coordinación y cooperación para impedir que el mercado imponga su ley.

ii) Internacionalización y política neoliberal

Los rasgos del neoliberalismo en lo que atañe a la economía internacional no han sido neutros, sino que han reforzado la orientación regresiva de las políticas económicas que han venido imponiéndose desde que se inició la actual onda larga depresiva del capitalismo y que cobraron carta de naturaleza en el mundo occidental a partir de la elección de Reagan en 1980 y la llegada al poder de Thatcher en Gran Bretaña. Ello, sin perjuicio de la ambigüedad que han revestido las políticas en todos los países, como resultado del enfrentamiento de las nuevas doctrinas con una realidad económica que no discurría por los cauces previstos, por la resistencia de capas sociales afectadas, por la lucha de los trabajadores y porque se trataba de hacer retroceder las concepciones dominantes

anteriores, que habían llevado a la implantación de un «Estado del Bienestar» en los países desarrollados pero que no podía desmontarse a toque de corneta.

Con independencia de la marginación ominosa de una parte importante de los países del Tercer Mundo y de una parte considerable de la población de muchos de estos países, la doctrina neoliberal en el campo internacional ha proporcionado a todos los gobiernos una batería de argumentos para actuar en el sentido antisocial y reaccionario de la ideología que encubre. A todos los gobiernos, incluidos los de tendencias socialdemócratas y a los de los países industrializados, aunque no puedan equipararse los efectos sociales del capitalismo y de su versión neoliberal en los países desarrollados y en el Tercer Mundo.

El libre comercio como objetivo y la competencia como regulador del sistema sustentan una ofensiva permanente contra los derechos y condiciones de vida de los trabajadores. Bajo la amenaza de que la pérdida de competitividad conduce a la destrucción de empleo en las economías abiertas, los salarios se convierten en el eje fundamental de toda política tendente a mejorarla. La competitividad depende de múltiples factores, muchos de ellos imposibles de modificar a corto plazo -podría decirse que la competitividad de una economía es un compendio de su desarrollo histórico-, pero ello no es impedimento para que los gobiernos hayan encontrado en los salarios la mejor solución a problemas que solo reflejan el atraso de los países.

Las diferencias de competitividad entre algunas economías debidas al nivel de capitalización, desarrollo tecnológico, dominio de los mercados, etc., no son superables rebajando los salarios, por ínfimos que sean los niveles a los que desciendan, como de hecho lo son en algunas partes del mundo. Sin embargo, la competitividad utilizada como objetivo social y como argumento económico proporciona a los gobiernos y a la clases dominantes un instrumento convincente para azuzar a los trabajadores de unos países contra los de otros y para aumentar la explotación. Porque la relación de la competitividad con los salarios no se detiene en los salarios directos sino que se amplía a los salarios diferidos, indirectos (forman parte de los costos de producción) y a los derechos laborales que pueden tener alguna incidencia en ellos. La flexibilidad del mercado de trabajo como necesaria para crear empleo es una falacia, pero se sostiene con firmeza por los beneficios salariales que rinde: los trabajadores en precario tienen unos salarios sensiblemente más bajos que los trabajadores fijos y la capacidad negociadora de todos se ve disminuida por la existencia de una alta proporción de los primeros.

La libertad de los movimientos de capital consagrada por el neoliberalismo presta el mismo servicio a las políticas de austeridad que el libre comercio y la competitividad. Como repiten los gobiernos, a igualdad de otras condiciones, las inversiones directas se dirigen a los países que tengan los salarios más bajos. Y cabe añadir, a los que tengan el movimiento obrero más destruido o controlado, lo que aporta una razón económica para recortar los derechos laborales y reprimir a los trabajadores. Las inversiones financieras serán tanto más atractivas cuanto mayor sea la estabilidad del tipo de cambio y cuanto mejor trato fiscal reciban los rendimientos, lo que propicia políticas de ajuste y un sistema fiscal regresivo en el que los impuestos indirectos priman sobre los directos y dentro de estos los que gravan los salarios priman sobre los que gravan las rentas del capital.

Y otro tanto puede decirse de la búsqueda del equilibrio exterior y la estabilidad del tipo de cambio. El intento de restaurar un equilibrio que se tiende a perder por causas profundas origina recurrentes planes de ajuste que acaban socavando la posición global de los trabajadores. Las carencias económicas que determinan los déficits de la balanza de pagos, a falta de poder superarse modificando los factores decisivos -productividad, inversión, tecnología, formación, etc.- se convierten en un problema de salarios, cuando además se intenta evitar (otra cosa es que se consiga) el recurrir a la devaluación de la moneda para recuperar la pérdida de competitividad. La defensa de la estabilidad de los cambios no sólo responde a un mejor funcionamiento de la economía de mercado. Dicha estabilidad es también un medio en manos de los gobiernos para forzar políticas restrictivas y de austeridad, contando con que el nivel de actividad es un dato fundamental en la determinación del tipo de cambio y lo mismo la evolución interior de los precios¹². Y ya se sabe que decir los precios equivale a decir los salarios, considerando

¹² La condición de Maastricht de pertenecer al SME durante dos años dentro de la banda estrecha de fluctuación para formar parte del núcleo de países que inicien la tercera fase de la unión monetaria es un buen ejemplo por lo compulsivo y lo aberrante que puede ser el objetivo de la estabilidad del tipo de cambio. El cumplimiento de esa condición, que obligará inexorablemente a muchos países a imponer una política restrictiva en extremo, hay que darlo por garantizado en la medida en

la relación estrecha y rígida que desde las instancias de los poderes económicos y políticos se ha establecido entre unos y otros.

Por lo demás, la apertura de todas las economías y la necesidad de mantener los equilibrios económicos en condiciones tan poco propicias han reducido la capacidad de maniobra de todos los gobiernos para responder a los problemas económicos y sociales de sus respectivos países. La implantación de una política económica distinta a la línea dominante con la intención de forzar el crecimiento tiene el costo de agravar la inflación interior, perjudicando la competitividad del país, como la perjudica toda política social avanzada que implique la expansión de los gastos y los ingresos públicos. De ese modo, la política de austeridad, que con mayor o menor intensidad se ha aplicado en todas las economías para remontar la crisis, ha encontrado en la internacionalización un nuevo punto de apoyo.

En suma, las vertientes interna e internacional del neoliberalismo se complementan y potencian. Acaban dando una aparente coherencia global a la doctrina, cuya misión es envolver a la disidencia con un manto inexpugnable. No hay escape, no hay políticas económicas alternativas, no hay forma de sortear las leyes económicas. Toda medida heterodoxa de carácter progresista choca con un armazón teórico blindado y provoca en el caso de adoptarse unas consecuencias tan contraproducentes que, los depositarios de la ortodoxia, como déspotas ilustrados, por el bien de todos, incluido el de los trabajadores, no pueden permitir.

iii) El fracaso del neoliberalismo

La historia con el neoliberalismo habría llegado a su fin, pero nada más lejos de la realidad. Su incapacidad para resolver los problemas económicos de los países y sus nefastos efectos sociales en el interior de los mismos no son nada comparados con su destructivo impacto a escala internacional. La situación económica se ha agravado y las desigualdades llegan a extremos inalicificables.

1.4. LA CRISIS INTERNACIONAL Y LA DESOLACIÓN DEL TERCER MUNDO

En los momentos actuales se reconoce que el neoliberalismo ha fracasado en dar respuesta a los problemas económicos y sociales de los países imperialistas. Incluso en las filas de la propia burguesía empieza a cundir preocupación por la inestabilidad social que suscita la falta de soluciones que proporciona la teoría neoliberal. La crisis iniciada al principio de los años setenta no está superada, después de veinte años desde que la onda larga expansiva dio paso a un período prolongado de bajo crecimiento. En la actualidad, la mayoría de los países se han visto arrastrados a una nueva recesión, más aguda que la de 1980-82 y con los países punteros -Japón y Alemania- seriamente afectados. El desempleo se acumula de ciclo en ciclo y supera los 32 millones en los países de la OCDE y los 15 millones en los países de la CE, existiendo unas perspectivas inquietantes. Cada nuevo auge se alcanza con un nivel de desempleo más alto porque durante las recuperaciones no se crea el empleo suficiente para absorber el desempleo y el crecimiento de la población activa.

Existe una gran inestabilidad financiera internacional que ha producido ya varios episodios de pánico en los mercados de valores. Los mercados de cambios entran cada vez con más frecuencia en vorágines especulativas, que acaban inapelablemente con la pretensión de los gobiernos de mantener la estabilidad de los tipos de cambio.

que lo que formula es un requisito imprescindible: que las monedas que vayan a integrarse en la unidad monetaria tienen que estar en disposición de fijar un tipo de cambio irrevocable llegado el momento de la creación de la moneda única. No obstante, el camino hasta llegar a esa situación previa estará lleno de obstáculos y puede acabar siendo intransitable para bastantes países. Si el objetivo prioritario de la política económica de los países hasta la integración monetaria tiene que ser la estabilidad del tipo de cambio dentro del SME, significa que han de subordinarse al mismo el resto de los problemas económicos y sociales. Ahora bien, como ha puesto de manifiesto la accidentada historia del SME, recorrida de numerosas tensiones y momentos de crisis, resulta extremadamente difícil para algunos países asegurar la estabilidad del tipo de cambio, no sólo porque requiere estrangular el desarrollo económico, sino también porque a veces con el tipo de cambio existente, la política restrictiva no basta para corregir el déficit exterior. No es por casualidad que Gran Bretaña e Italia, aprovechando la crisis de septiembre de 1992 abandonaron transitoriamente el SME.

la relación estrecha y rígida que desde las instancias de los poderes económicos y políticos se ha establecido entre unos y otros.

Por lo demás, la apertura de todas las economías y la necesidad de mantener los equilibrios económicos en condiciones tan poco propicias han reducido la capacidad de maniobra de todos los gobiernos para responder a los problemas económicos y sociales de sus respectivos países. La implantación de una política económica distinta a la línea dominante con la intención de forzar el crecimiento tiene el costo de agravar la inflación interior, perjudicando la competitividad del país, como la perjudica toda política social avanzada que implique la expansión de los gastos y los ingresos públicos. De ese modo, la política de austeridad, que con mayor o menor intensidad se ha aplicado en todas las economías para remontar la crisis, ha encontrado en la internacionalización un nuevo punto de apoyo.

En suma, las vertientes interna e internacional del neoliberalismo se complementan y potencian. Acaban dando una aparente coherencia global a la doctrina, cuya misión es envolver a la disidencia con un manto inexpugnable. No hay escape, no hay políticas económicas alternativas, no hay forma de sortear las leyes económicas. Toda medida heterodoxa de carácter progresista choca con un armazón teórico blindado y provoca en el caso de adoptarse unas consecuencias tan contraproducentes que, los depositarios de la ortodoxia, como déspotas ilustrados, por el bien de todos, incluido el de los trabajadores, no pueden permitir.

III) El fracaso del neoliberalismo

La historia con el neoliberalismo habría llegado a su fin, pero nada más lejos de la realidad. Su incapacidad para resolver los problemas económicos de los países y sus nefastos efectos sociales en el interior de los mismos no son nada comparados con su destructivo impacto a escala internacional. La situación económica se ha agravado y las desigualdades llegan a extremos incalificables.

1.4. LA CRISIS INTERNACIONAL Y LA DESOLACIÓN DEL TERCER MUNDO

En los momentos actuales se reconoce que el neoliberalismo ha fracasado en dar respuesta a los problemas económicos y sociales de los países imperialistas. Incluso en las filas de la propia burguesía empieza a cundir preocupación por la inestabilidad social que suscita la falta de soluciones que proporciona la teoría neoliberal. La crisis iniciada al principio de los años setenta no está superada, después de veinte años desde que la onda larga expansiva dio paso a un período prolongado de bajo crecimiento. En la actualidad, la mayoría de los países se han visto arrastrados a una nueva recesión, más aguda que la de 1980-82 y con los países punteros -Japón y Alemania- seriamente afectados. El desempleo se acumula de ciclo en ciclo y supera los 32 millones en los países de la OCDE y los 15 millones en los países de la CE, existiendo unas perspectivas inquietantes. Cada nuevo auge se alcanza con un nivel de desempleo más alto porque durante las recuperaciones no se crea el empleo suficiente para absorber el desempleo y el crecimiento de la población activa.

Existe una gran inestabilidad financiera internacional que ha producido ya varios episodios de pánico en las mercados de valores. Los mercados de cambios entran cada vez con más frecuencia en vorágines especulativas, que acaban inapelablemente con la pretensión de los gobiernos de mantener la estabilidad de los tipos de cambio.

que lo que formula es un requisito imprescindible: que las monedas que vayan a integrarse en la unidad monetaria tienen que estar en disposición de fijar un tipo de cambio irrevocable llegado el momento de la creación de la moneda única. No obstante, el camino hasta llegar a esa situación previa estará lleno de obstáculos y puede acabar siendo intransitable para bastantes países. Si el objetivo prioritario de la política económica de los países hasta la integración monetaria tiene que ser la estabilidad del tipo de cambio dentro del SME, significa que han de subordinarse al mismo el resto de los problemas económicos y sociales. Ahora bien, como ha puesto de manifiesto la accidentada historia del SME, recorrida de numerosas tensiones y momentos de crisis, resulta extremadamente difícil para algunos países asegurar la estabilidad del tipo de cambio, no sólo porque requiere estrangular el desarrollo económico, sino también porque a veces con el tipo de cambio existente, la política restrictiva no basta para corregir el déficit exterior. No es por casualidad que Gran Bretaña e Italia, aprovechando la crisis de septiembre de 1992 abandonaron transitoriamente el SME.

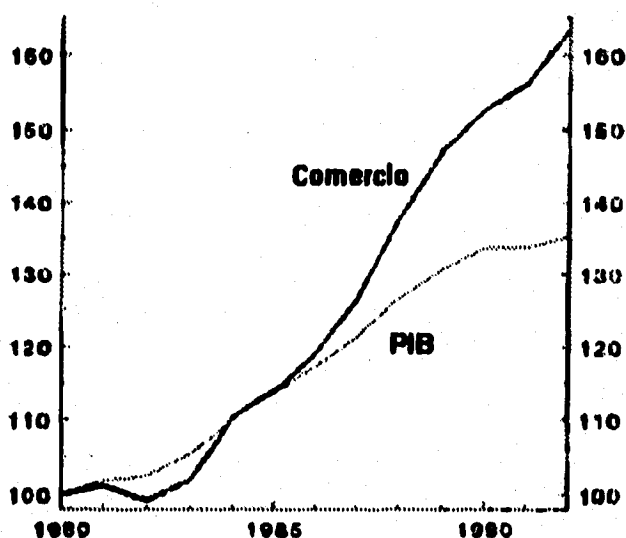
El endeudamiento de todos los agentes económicos -los Estados, las empresas, las familias- ha crecido intensamente, reduciendo los márgenes para las políticas expansivas y limitando las posibilidades de crecimiento de la demanda. A lo largo de la década se acumularon y persisten importantes desequilibrios exteriores entre los países, que no está resultando fácil reducirlos, por lo que están cobrando vigor las medidas proteccionistas. Cada uno de estos aspectos es bastante grave considerado aisladamente, pero tomados en conjunto describen una situación potencialmente muy inestable que hace que no pueda descartarse ninguna alternativa política y económica como desenlace.

Por ello, ante la acumulación de problemas y la falta de soluciones, se aprecia un declive del neoliberalismo. En los medios académicos e intelectuales se empiezan a buscar nuevas explicaciones y alternativas, volviendo la vista atrás al keynesianismo, y en el ámbito político existen ya países en los que se han abandonado las recetas neoliberales y se intenta superar la recesión en que están sumidos recurriendo a políticas de demanda, vista la incapacidad de la política monetaria y las contradicciones de las «políticas de oferta». Tal es el caso destacado de los Estados Unidos, después de la elección de Clinton en una campaña en la que las cuestiones económicas fueron decisivas, o el caso más ambiguo de Gran Bretaña, que está intentando impulsar una reactivación de la economía, después de abandonar el SME y quedar liberada del yugo de una política monetaria restrictiva cuyo principal objetivo era la defensa de la cotización de la libra.

Para los países del Tercer Mundo tampoco el avance del neoliberalismo y en particular su sólida implantación en la última década han aliviado ninguno de sus problemas ancestrales. No obstante, el desastre en que están sumidos grandes zonas del Globo no es motivo suficiente para replantearse en los centros del poder del imperialismo un cambio de la política y de las concepciones económicas que tienda a mitigar -no ya a solucionar- situaciones dramáticas que por sí solas restan toda legitimidad al orden imperante.

Estas situaciones no son nuevas y responden en gran medida al componente depredador del capitalismo, pero en los últimos tiempos, con el neoliberalismo campando ideológicamente hasta los confines del mundo, se han agravado sobremanera. Las rendijas por las que se colaba algún rayo de esperanza para la inmensa mayoría de los habitantes de los países del Tercer Mundo se han cerrado y cada vez son más los países, sobre todo tras la caída de los regímenes del Este, que se ven arrastrados al círculo vicioso de querer alcanzar el bienestar de los países desarrollados con políticas que justamente están concebidas para profundizar las desigualdades, destruir las industrias locales e impedir que surjan núcleos competidores. La exaltación de la competitividad desempeña ese papel: es un señuelo para los países atrasados -asemejarse a las economías industrializadas- cuando no existe posibilidad alguna de alcanzar un cierto desarrollo industrial mientras se está aplastado por la competencia. Los países más débiles están destinados a desaparecer de los circuitos comerciales y condenados a destruir sus tejidos productivos, incapaces de producir ningún bien en condiciones competitivas, pues siempre hay un competidor que los fabrica más baratos y de mejor calidad.

GRAFICA 2
EL PIB Y EL COMERCIO MUNDIALES
Indices de volúmen 1980= 100



El neoliberalismo ha acentuado las desigualdades sociales en el interior de los países y sus recetas a escala internacional han agudizado las diferencias económicas entre los países imperialistas y los del Tercer Mundo. Sin embargo, así como a pesar de esos resultados internos la doctrina neoliberal dominante acabó invadiendo las posiciones ideológicas de los partidos socialdemócratas, que han tirado por la borda los principios y objetivos que defendían en otros tiempos, el neoliberalismo ha sido aceptado como régimen regulador de las relaciones económicas internacionales por las clases dominantes de muchos países del Tercer Mundo, a pesar de los graves perjuicios que para las sociedades de dichos países entraña.

a) Expansión desigual del comercio

La consecuencia del impulso del librecambio ha sido una fuerte expansión del comercio mundial, más intensa que la del PIB, pero los resultados son distintos en el caso de los países desarrollados y en el caso del Tercer Mundo. Las exportaciones mundiales, en términos de dólares, se incrementaron en la década 1980-90 a una tasa anual del 6,6%, pero mientras las exportaciones de los países industrializados crecieron al 7,7% anual, las de los países en desarrollo crecieron al 2,2% anual, si bien con grandes diferencias entre ellos. Cayeron intensamente las de los países exportadores de petróleo (70%) y aumentaron sensiblemente las de los NIC (9,5%). Fuera de estos grupos excepcionales, las exportaciones de los países no exportadores de petróleo latinoamericanos sólo aumentaron el 0,30% anual y las de los países de África el 1,5%¹³. En la década, los países capitalistas avanzados aumentaron su participación en las exportaciones totales desde el 62,6% al 71,4%, mientras los países en desarrollo no exportadores de petróleo de América vieron descender la suya del 2,4% al 1,5% y los de África del 1,4% al 0,9%.

¹³ En el decenio 1970-80, al margen de los países exportadores de petróleo que vieron incrementarse en un 32% anual sus exportaciones medidas en dólares, la expansión del comercio mundial fue mucho más homogénea. Las exportaciones en dólares crecieron a una tasa anual del 20,3%, con aumentos del 18,8% para los países industriales y del 20,9% para los países en desarrollo no productores de petróleo. Dentro de éstos, las exportaciones de los países latinoamericanos se incrementaron en un 19,30% y en un 13,8% las de los países de África.

b) Una brecha abismal

Los datos sobre la ampliación de la brecha entre los países industriales y el Tercer Mundo son abrumadores. El crecimiento del PIB «per cápita» de los países capitalistas desarrollados en la década 1972-81 fue del 2,40%, cayendo al 2,0% en la década 1982-91. Para los países en desarrollo, dentro de grandes diferencias entre ellos (según fuesen o no países exportadores de petróleo, pertenecieran o no a áreas económicas emergentes, fuese alto o inexistente su endeudamiento exterior, etc.) el crecimiento de la renta «per cápita» en la década 1972-81 fue del 2,7%, más alto que en el primer mundo, en tanto que en la década siguiente fue sólo del 1,5%, por debajo de los países desarrollados. En la década 1972-82, salvo zonas excepcionales, se produjo un aumento generalizado del PIB «per cápita», pero en la década 1982-91, en la década neoliberal por excelencia (habría que decir ominosa), el PIB «per cápita» descendió anualmente en un 0,6% en América Latina, en un 0,7% en África y en un 3,3% en Asia Occidental.

En el África subsahariana, la más pobre del mundo, el descenso fue de 1,6%. En 1981, el PIB per-cápita de esta zona-367 dólares, si es que tiene sentido el concepto- representaba el 2,5% del PIB «per cápita» de los países desarrollados, es decir, el abanico era de 1 a 40 (de 1 a 47 en el caso de Estados Unidos o de 1 a 50 en el caso de Japón). En 1991, el PIB «per cápita» de la zona había caído a 313 dólares, que representaban el 1,7 del PIB «per cápita» de los países desarrollados. La relación con éstos había pasado de 1 a 58, en el caso de Estados Unidos de 1 a 63 y en el caso de Japón de 1 a 86.

c) Los pobres financian a los ricos

Las condiciones están creadas para que sigan ampliándose las desigualdades, teniendo en cuenta que en los países desarrollados el porcentaje del PIB dedicado a la inversión ha sido más alto durante la década pasada que en los países del Tercer Mundo, con el agravante que la tasa de ahorro en estos países ha sido más alta que la tasa de inversión, lo que significa que se han producido unas transferencias netas de recursos reales desde el Tercer Mundo a los países desarrollados. La magnitud del fenómeno dista de ser insignificante: por ejemplo, en el caso de América Latina, las transferencias de recursos representaron en 1985 el 4,80% del PIB, en 1989 el 3,2% y en 1990 el 2,3%.

Y si de los recursos reales se pasa a los recursos financieros el balance es asimismo un escarnio. A partir de 1983, se ha producido una transferencia neta de recursos financieros desde los países en desarrollo importadores de capital al resto de los países, principalmente hacia los desarrollados.

Las corrientes de inversión directa neta ascendieron en la década 1982-91 a 110.000 millones de dólares, pero los pagos por dividendos se elevaron hasta 91.000 millones, reduciendo el flujo neto, por tanto, sólo a 19.000 millones. Los préstamos exteriores netos privados, a medio y largo plazo, experimentaron una caída brusca a partir de 1982 tras desencadenarse la crisis de la deuda, elevándose para el conjunto de la década 1982-91 a 141.000 millones de dólares. Sin embargo, los intereses pagados por dichos préstamos ascendieron a 357.000 millones de dólares, por lo que resultó una transferencia neta contra los países en desarrollo de 216.000 millones. Las transferencias de recursos mediante préstamos a corto plazo se saldaron también negativamente (las burguesías locales hicieron patria colocando sus capitales en el extranjero) por un importe de 106.000 millones de dólares.

Las donaciones privadas netas ascendieron a 33.000 millones durante la década, en tanto que las donaciones de gobiernos y organismos oficiales se elevaron a 153.000 millones de dólares. Por otro lado, los créditos oficiales netos representaron en los diez años aludidos unos recursos financieros de 224.000 millones de dólares, pero los pagos por intereses, por 156.000 millones, los dejaron reducidos a una aportación neta de 69.000 millones.

El conjunto de las operaciones reseñadas arroja un saldo de transferencias de recursos financieros en contra de los países en desarrollo de 49.000 millones de dólares. Pero teniendo en cuenta que las reservas de divisas de esos países aumentaron en la década en 116.000 millones de dólares, y que ese aumento tiene el significado de un préstamo a favor de los países que emiten las reservas, el balance total en la década 1982-91 de las transferencias de recursos financieros es negativo para los países en desarrollo por 165.000 millones de dólares.

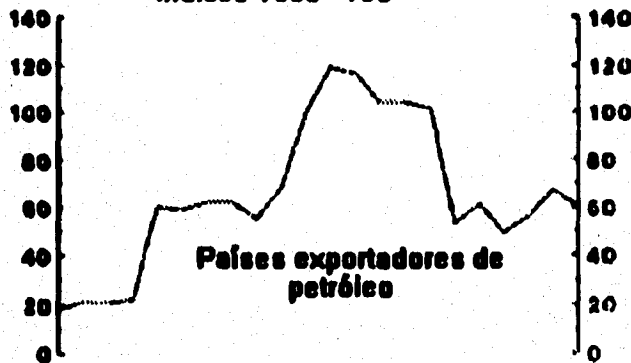
d) El intercambio desigual

Los resultados no pueden ser más desoladores para los países atrasados por cuanto después de ese enorme esfuerzo en términos de recursos reales y financieros su precaria situación no se ha modificado, permaneciendo el problema de la deuda externa para ellos en los mismos términos que hace una década (otra cuestión es que se han desactivado los riesgos de un «crack» financiero en los países acreedores como consecuencia del impago). La deuda externa es un dogal impuesto a los países del Tercer Mundo del que no tienen forma de desprenderse fuera de no pagarla, pero entonces son perseguidos por romper el orden financiero hasta quedar estrangulados definitivamente, como ocurrió con el caso del Perú cuando el presidente Alan García se atrevió a declarar una moratoria unilateral.

Para poder pagar la deuda, para disminuir su montante, estos países tendrían que lograr un superávit en la balanza comercial para dedicar el excedente a cancelarlas (la balanza de servicios está condenada por el pago de los intereses de la deuda, que se elevaron para los países en desarrollo en el quinquenio 1988-92 a una media anual de 87.000 millones de dólares). Pero ello resulta poco menos que imposible. La mayoría de los países del Tercer Mundo sólo pueden obtener divisas exportando productos agrarios, pero en muchos de estos bienes los países desarrollados tienen posiciones excedentarias, ante lo cual, levantan barreras proteccionistas difíciles de superar y subvencionan sus exportaciones, practicando el dumping, con lo que en los mercados mundiales, con unos precios distorsionados, quedan expulsadas las mercancías del Tercer Mundo. Detrás de esa política están potentes sectores sociales con grandes intereses. La interminable Ronda Uruguay, empantanada por las discrepancias sobre el comercio de los productos agrícolas entre la CE y los Estados Unidos, es un reflejo del cerco al que están sometidos los países del Tercer Mundo y las nulas posibilidades que tienen de romperlo. Durante la década neoliberal se fue cerrando el superávit comercial que registraban los países en desarrollo, apareciendo un déficit de 8.000 millones de dólares en 1992.

GRAFICA 3

RELACIÓN REAL DE INTERCAMBIO Índices 1980= 100





En esa evolución ha intervenido el deterioro de la relación de intercambio entre los países industriales y los del Tercer Mundo, que para estos países significa que deben exportar cada vez más productos para pagar los mismos bienes importados. La caída del precio del petróleo en 1986 fue un dato importante en ese resultado, aunque el retroceso se extendió al conjunto de los bienes y países en desarrollo. Así, el índice del precio de las exportaciones, para un valor 100 en 1980, aumentó hasta 125 en 1991 en el caso de los países industriales, mientras se redujo a 82 en el caso de los países del Tercer Mundo, con una caída hasta 71 para los países exportadores de petróleo y hasta 90 para el resto de los países.

El índice de la relación real de intercambio, es decir la relación entre los precios de los productos exportados e importados, entre 1980 y 1991, mejoró para los países desarrollados desde 100 a 113, en tanto que empeoró desde 100 a 73 en el caso de los países en desarrollo.

e) La trampa de la deuda sigue activada

El problema de la deuda para los países del Tercer Mundo, como se decía, persiste en los mismos términos desde hace más de una década, cuando estalló como crisis internacional, e incluso podría afirmarse que se ha agravado. En 1981, la deuda de los países en desarrollo ascendía a 752.000 millones de dólares. En 1992, la deuda alcanzó los 1.427.000 millones. Como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios de esos países, la deuda ha pasado de representar el 96% en 1981 al 123% en 1992 (en 1986 fue del 178%, debiéndose la reducción en los últimos años a un crecimiento moderado de la deuda y a una sensible expansión de las exportaciones valoradas en dólares, tras la depreciación de esta moneda). En términos del PIB de esos países, la deuda ha pasado del 28% en 1981 al 29% en 1992. La carga de la deuda (intereses más amortizaciones) representó en 1981 el 16% de las exportaciones de bienes y servicios y el 14,5% en 1992 (los intereses fueron respectivamente el 8,7% y el 6,5%). Como fácilmente se colige de estas cifras, la deuda sigue siendo un pesado fardo para la mayoría de los países en desarrollo, que puede cobrar caracteres aún más dramáticos en la década de los noventa si como es previsible el crecimiento de la economía mundial es menos intenso que el de la década pasada y si las exportaciones de los países en desarrollo se frenan por una menor expansión del comercio mundial y por el reforzamiento de las tendencias proteccionistas.

f) Perspectivas

A escala internacional, el predominio del neoliberalismo ha tenido efectos más devastadores que los estragos que ha provocado en el interior de los países. Las secuelas del largo período neoliberal en los países industrializados -la dualización social, la marginación de capas amplias de la población, el desempleo, la precarización del empleo, el retroceso de las condiciones laborales, la ofensiva contra el "Estado del Bienestar" cobran una cierta relatividad cuando se comparan con la desolación que ha causado en los países del Tercer Mundo y, sobre todo, con la brecha insuperable que ha abierto entre unos y otros. El capitalismo, en su cenit tecnológico, se muestra como un sistema regresivo y como un obstáculo infranqueable para satisfacer las necesidades y

aspiraciones de los pueblos. Con su faz neoliberal, se ha manifestado con toda su capacidad destructiva, presentando crudamente las miserias que puede originar.

Lo mas grave de la pavorosa situación que vive una parte importante de la humanidad y de las diferencias abismales que existen entre los países desarrollados y el resto del mundo es que no constituyen en los momentos actuales un motor para el cambio y la lucha política. En el interior de los países capitalistas industrializados, el fracaso del neoliberalismo esta provocando una reacción a favor de otro tipo de políticas, entre otros motivos porque las clases dominantes empiezan a comprender que el sistema no puede instalarse en una crisis permanente, cuyas consecuencias llevarían irremediabilmente a cuestionar su existencia o muchos de los elementos en que se sustenta.

Pero nada de esto ocurre en estos momentos en los países del Tercer Mundo y si se quiere en los países del Este europeo, aunque por razones históricas diferentes. Los poderes económicos y políticos de la mayor parte de los países del Tercer Mundo -como un aspecto mas de la internacionalización de las economías- comparten los principios del neoliberalismo y creen encontrar en ellos la solución a los problemas económicos y sociales que padecen. Reconocen que los beneficios solo pueden extenderse a una parte limitada de las sociedades, condenando al resto de la población a la marginación y la miseria, pero no encuentran en ello una grave objeción, porque muchas de esas sociedades nunca fueron diferentes y porque no ven amenazados por el momento el sistema ni sus privilegios. Y, por supuesto, no serán los sufrimientos de la población del Tercer Mundo los que promuevan en los países imperialistas un cambio de política económica a nivel internacional.

Existen, por tanto, menos probabilidades de que el neoliberalismo como ideología dominante se desvanezca a escala internacional con la misma rapidez con que puede hacerlo en el interior de los principales países imperialistas. Sin embargo, significaría renunciar al optimismo de la razón pensar que el capitalismo con su máscara neoliberal ha alcanzado un grado de estabilidad suficiente para perdurar, cuando tras ella se esconde un mundo lleno de frustración, contradicciones, conflictos y horror que tiene que aflorar.

CAPITULO SEGUNDO.

LA POLITICA NEOLIBERAL Y EL EMPLEO EN MEXICO EN LA DECADA DE LOS 80'S.

2.1 LOS AJUSTES DE LOS OCHENTAS.

El periodo que analizaré es conocido como el de la crisis de la economía mexicana, que se presentó en 1982 como una bancarrota financiera sin precedentes; lo que obligó al gobierno del presidente Lopez Portillo a tomar en septiembre de 1982 medidas casi desesperadas tales como la nacionalización bancaria y al control estricto de cambios. Estas, momentaneamente permitieron recuperar parte del consenso político entre los sectores populares y alentar la ilusión de que el proyecto acariciado por los sectores burgueses nacionalistas podía todavía sostenerse pero, muy pronto, tanto por las dificultades de implementar las medidas de política económica en un entorno internacional adverso como por la debilidad política del gobierno saliente contribuyeron más bien al aceleramiento de los mecanismos inflacionarios y a la huida masiva de capitales en busca de refugios más seguros. Ello, sin lugar a dudas, acentuó la recesión de la economía y mostró las profundas grietas y desequilibrios a los que había conducido el modelo de desarrollo que se intentó apuntalar. Así, los ciclos consecutivos de inflación, recesión y devaluación que se sucedieron desde 1976 no hicieron más que profundizar los desequilibrios ya existentes en la agricultura, en la industria y en las finanzas. Cabe, por ello, precisar que la crisis del 82 no fue una coyuntura o momento pasajero sino la manifestación estructural de desequilibrios y resquebrajaduras anteriores que dentro del contexto más amplio de la crisis generalizada del capitalismo a nivel mundial nos manifiesta el colapso definitivo del proyecto nacional de modernización basado en la industrialización sustitutiva.

El caso de México luego del auge petrolero de 1979 fue paradigmático. El crecimiento extraordinario de su economía no correspondió con el de su planta productiva. La demanda creciente del mercado interno cebado con el incremento de dinero tuvo que ser atendida mediante la ampliación sin precedentes del volumen de las importaciones (ver cuadro 2.1), ello calmó momentaneamente la inflación pero a costa de un creciente déficit en la balanza comercial la cual era financiada con mayor crédito externo. Lo anterior desarrolló el círculo vicioso de la deuda y en definitiva causó la insolvencia financiera del país, pues los acreedores no estaban dispuestos a seguir arriesgando sus capitales sin antes recuperar parte de ellos a través de un drástico programa de ajustes que ellos mismos se encargarían de diseñar y monitorear a través del FMI.

Cuadro 2.1

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (millones de dólares) Y DE LA TASA DE INFLACIÓN, 1977-1982

Años	Exportaciones	Importaciones	Déficit	Inflación %
1977	4.650.0	5.570.0	-920.0	32.6
1978	6.063.0	7.713.0	-1.650.0	18.2
1979	8.913.0	11.497.0	-2.584.0	22.9
1980	15.307.0	18.486.0	-3.179.0	16.3
1981	19.420.0	25.054.0	-5.064.0	28.0
1982	21.006.0	15.041.0	-5.965.0	100.0

Fuentes: Balanza Comercial, elaboración con datos del Banco de México y de la tasa anual de inflación: García Alba, P. y Serra Puche, J.; "Causas y efectos de la crisis económica en México", de El Colegio de México, México 1984, p. 38

En estas circunstancias la velocidad de las transformaciones internacionales para poder organizar el sistema económico y financiero mundiales en franca recesión inhabilitó definitivamente la estrategia gradual seguida en México. De modo que las reformas económicas internas llevarían el sello de las exigencias del sistema mundial y así, el proceso de reajustes internos que intentarían las administraciones posteriores a la crisis de 1982 (la generación de consensos mediante cambios estratégicos en el bloque de poder entre las fracciones burguesas industriales nacionales en proceso de franca descomposición y las nuevas fracciones industriales y financieras monopolíticas ligadas al capital financiero internacional que se constituiría en el impulsor de los nuevos cambios estructurales) tendrían que acelerarse con el peligro siempre latente de provocar tensiones en el campo político y social que podrían, en cualquier momento, poner en entredicho el tránsito a una nueva era de modernización que requería la nueva hegemonía interna que ya se estaba forjando. Esta se iría consolidando en la medida en que la economía nacional en crisis se reajustara internamente, para adecuarse con celeridad a las exigencias de la nueva fase de expansión mundial del capitalismo. Ahora bien, como el reajuste no estaba diseñado para sacar verdaderamente de la crisis a las economías nacionales endeudadas -este era el caso de México- sino para recuperar los préstamos realizados por los acreedores internacionales, el remedio luego de una leve mejoría de la enfermedad aceleró la crisis; hecho que provocó la crisis de la deuda; esto es la amenaza de que México se declarase insolvente y con el resto de las economías latinoamericanas o sólo proclamara la necesidad de negociar un nuevo ajuste con una renegociación menos lesiva para el país de la abultada deuda externa. Así, mientras el gobierno de López Portillo llegaba a su fin sin poder detener el desmoronamiento del antiguo bloque, el nuevo se preparaba para establecer las bases sobre las cuales se apuntalaría los nuevos grupos que conducirían la nueva estrategia.

2.1.1.-LA PENDIENTE DE LA CRISIS Y EL FIN DE SEXENIO, LOS REAJUSTES Y LA CONCENTRACION DEL CAPITAL FINANCIERO INTERNO, 1982-1983

Lo anteriormente dicho podría dar lugar a argumentar que los indicios del momento más profundo de la crisis que sufrió el país en 1982 se dieron a causa de las presiones internacionales causadas por la lucha que desde 1980 vinieron sosteniendo las fracciones burguesas financieras internacionales y particularmente la hegemónica, por los incrementos significativos en las tasas de interés¹ en vista de recuperar por esa vía la lenta pero dura caída de sus cuotas de ganancia. En verdad, el impacto se dejó sentir fuertemente en la economía mexicana, pero ésta ya se encontraba "sobrecalentada". La inflación que desde ese momento se desarrolló a ritmos cada vez más vertiginosos ya era alta (22% en 1979) pero su causa no fue tanto el alza de las tasas de interés internacionales que presionaron al alza, sino las internas, el incremento de los márgenes de ganancia de los empresarios mexicanos impulsado por el auge petrolero. No obstante, la inflación internacional -acelerada por el alza de las tasas de interés, dada la elevación de los costos financieros de las empresas transnacionales- tuvo un impacto significativo en las tasas de interés internas, que subieron del 17.73% en 1979 al 34.30% en 1981; un incremento del 90% en dos años; lo que encareció el crédito y condujo a una mayor alza de los ya elevados precios de los productos nacionales. Las materias primas y los insumos importados² con los que trabajan las empresas monopolíticas mexicanas (la gran mayoría de ellas filiales de las transnacionales norteamericanas) y el resto de la planta industrial subieron considerablemente, lo que encareció aún más el costo financiero de las empresas nacionales. Estas para no modificar sus altas ganancias las transmitieron a los precios de sus manufacturas. Ahora bien si a esto le agregamos el impacto inflacionario del Impuesto al Valor Agregado que se implantó para incrementar los ingresos destinados al gasto público y los aumentos mensuales de más o menos un punto en promedio a las tasas internas de interés desde 1980, para controlar indirectamente la fuga de divisas, alentada por la libertad cambiaria, podemos afirmar que el incremento de los costos financieros de las empresas sobre todo de las medianas y pequeñas, mayoritarias en el país no fueron sensiblemente afectados por la coyuntura internacional; en todo caso, moderaron su expansión y trasladaron estos costos a los precios de los productos para no bajar sus ganancias; con lo que la inflación se tornó el mal endémico de México.

¹ En los Estados Unidos la tasa prima era en 1979 del 12.6%, sobre al 15.27% en 1980 y de allí se pasó al 18.87% en 1981; o sea, un incremento del 49% en dos años.

² Para no parar la producción el gobierno se vió obligado a importarlos, lo que tornó más vulnerable a nuestra planta productiva e incidió en el déficit de la balanza comercial pues, la compra de bienes en el extranjero que en 1979 representaba el 87% del total de la estructura de las importaciones, se incrementó aún más.

Lo anterior se corrobora porque en pleno auge petrolero (1979-1981) el sector manufacturero modera su tasa de expansión por debajo del crecimiento del PIB y decae la productividad de las mismas (ver cuadro 2.1) y solo la industria automotriz y la de aparatos eléctricos, entre estos refrigeradores y televisores, en su gran mayoría filiales de las transnacionales repuntan en 1981³. Por su lado, las altas tasas de interés que se pagaban para atraer a los inversores extranjeros (en enero de 1982 éstas ya habían alcanzado 48.7% y en agosto del mismo año, cuando la crisis inflacionaria se tornaba imparable, se llegaba al 61.76%) encarecían el costo del dinero; éste tornaba a su vez más altos los costos financieros y los precios tendían rápidamente al alza en un círculo vicioso cada vez más amplio y dinámico. En estas circunstancias las fracciones financieras y comerciales monopolísticas del país disfrutaban de las más altas tasas de ganancias mientras los grandes y medianos industriales comenzaban a experimentar los primeros estragos de la recesión económica mexicana. Cuando el gobierno avizó la pendiente de la crisis trató de implantar una política antiinflacionaria para curar el mal pero el remedio aplicado empeoró el cuadro clínico.

La contención salarial con la que se quiso frenar la escala inflacionaria, de acuerdo a los dictados de la ortodoxia monetaria, de los técnicos de Palacio, y los subsidios a las empresas a través de bajos costos en los bienes y servicios no dieron resultado. La presión sobre los salarios tendía a deprimir las industrias de productos básicos y las manufacturas de consumo masivo; lo que aceleraba la producción de bienes suntuarios, la mayoría de los cuales se realizaba con materia prima e insumos importados consumidos por los trabajadores de los servicios privados, de la burocracia, de la Banca y los profesionales; éstos, al disfrutar aún de los coletazos de auge petrolero, presionaban fuertemente sobre la oferta y aceleraban la inflación. Por su parte, el subsidio generoso a las empresas no contribuyó a que estas, como simplistamente se arguía incrementarían sus inversiones y bajarían los precios incrementando la oferta; al contrario, especularon no solo con sus ganancias en la Banca sino también con el dinero de las inversiones subsidiadas. Más aún, alentados por la fácil ganancia sin riesgos de ninguna especie, empezaron a sacar sus dividendos al extranjero, pues sentían que la crisis aceleraba su ritmo y trataban de proteger sus capitales de futuras devaluaciones.

El resultado de estas maniobras no hizo más que transferir al propio gobierno (por la vía del déficit presupuestal financiado con empréstitos financieros a altas tasas de interés) el valor de los bienes y servicios subsidiados. Así pues, cuando la deuda externa empezó a crecer en forma peligrosa⁴ no le quedó al gobierno más alternativas que disminuir el gasto de inversiones productivas incidiendo negativamente en los balances de las empresas paraestatales o en los de las privadas dependientes del mismo, con riesgos de insolvencia económica y bancarrota de las mismas; hecho que no solo aceleró la depresión de la economía sino que creó sozobra social en los trabajadores de las empresas y en la nación en general que veía como la economía se iba a la deriva sin timonel que la condujera en esos momentos.

Sin frenos posibles, los precios internos siguieron creciendo a tasas considerablemente más elevadas que los precios internacionales lo que trajo como consecuencia, para comienzos de 1981, fuertes presiones devaluatorias. Para no hacer más duros los efectos inmediatos de una fuerte devaluación, se optó por minidevaluaciones llamadas deslizamientos, que llevaron a nuestra moneda a 26.2 pesos por dólar. Con esta medida se evitó, al menos en ese año una fuerte devaluación que hubiera acentuado aún más la inflación persistente, con peligros sociales y políticos no descados a escasos meses de la elección presidencial y a menos de un año del cambio de gobierno.

Por otra parte, la captación de dólares por parte de la banca privada y mixta, que a fines de 1981 representaba el 31.5% creció más aún y, con ello, las utilidades de las fracciones financieras y bancarias monopolísticas⁵ con lo que estas se fortalecieron en la hegemonía económica sobre las fracciones industriales y comerciales exportadoras e importadoras. Con la dolarización estimulada por las medidas gubernamentales también se impulsó un mayor endeudamiento externo de los bancos en dólares porque los costos financieros en esta moneda resultaban más

³ Soria V., "Caracterización de la crisis en 1976 y 1982 en México", en Economía, Teoría y Práctica, no. 1, UAM, México, invierno de 1983.

⁴ En 1982 el monto de la deuda externa representó el 50.70% del PIB y sus servicios alcanzaron el 38% de los ingresos provenientes de las exportaciones. Ramírez, R.; Estado y acumulación de capital en México, 1923-1983, UNAM, 1984, p. 196.

⁵ Según esta institución la Banca ganó hasta el momento de la nacionalización 17,496'200,000 pesos de los cuales 8,622'090,000 pesos correspondieron a la "utilidad por cambios".

baratos por el simple diferencial entre las tasas de interés externas y las que se tenía al contratar préstamos en pesos. Según datos del Banco de México la proporción del financiamiento bancario en moneda extranjera crece de un 34% en 1981 a un 46% en 1982⁶, obviamente como resultado de las minidevaluaciones o deslizamientos del peso que técnicamente significaron el abandono del control de cambios y de las tasas de interés fijas para poder integrar el circuito financiero local al internacional. Al aceptar el gobierno la dolarización que la banca nacional e internacional impulsaban en el país, corría el riesgo de fomentar la especulación financiera -pues ingresar o comprar dólares baratos (por la sobrevaluación de nuestra moneda) cambiarlos a pesos para aprovechar las altas tasas de interés que la banca ofrecía y luego de un tiempo volverlos a cambiar a dólares resultaba un excelente negocio particular, pero conducía a la descapitalización del país - siempre que el control de cambios se mantuviera fijo. Pero el mecanismo adoptado o sea, devaluar poco a poco la moneda para mantener una diferencia que estimulara la captación de dólares y su conversión en pesos para aprovechar las altas tasas que daba la banca, impulsaban a una mayor devaluación del peso dado que en el mercado internacional las tasas de interés subían y ello implicaba que para que funcionara la estrategia se tendría que subir aún más las tasas de interés internas. Cubrir constantemente la brecha entre las tasas internas y externas a la alza, mediante el deslizamiento, resultó ser altamente costoso pues, no se podía evitar la especulación ni parar la inflación y por otro lado, se desalentaba el endeudamiento interno porque los créditos resultaban muy altos y se continuaba fomentando el endeudamiento externo y su revalorización en términos de pesos devaluados.

En este sentido, el manejo de las divisas se volvió una actividad importantísima para la banca y su concentración en los poderosos sectores financieros no solo era fuente de fabulosas ganancias sino de posiciones de poner claves en las decisiones que afectaban a la economía en su conjunto; con lo que el poder político de estos grupos concentraba aún más su ya monopolística posición. La ganancia financiera producto de la especulación atraía a los sectores productivos hacia ella y la integración de capitales industriales, comerciales y financieras que aceleró en desmedro de la expansión de la productividad de las empresas medianas y pequeñas, incapaces de protegerse de la especulación crediticia. Por su lado, las grandes empresas nacionales y extranjeras se capitalizaron aceleradamente y conformaron grupos que acapararon las actividades industriales, comerciales y de servicios que no pudieron resistir a tan violenta concentración y acumulación de capitales. Dos grandes flujos de dinero explican esta violenta concentración: la abundancia de divisas que significó el boom petrolero y los grandes montos de dinero líquido internacional que se convirtieron en deuda externa para el fomento de la producción monopolística del país y la especulación financiera que conjuntamente se reforzaron.

De allí que, cuando sobrevino la crisis petrolera internacional y al carecer México del aval del oro negro, los dos flujos disminuyeron enormemente y así el alud de la abundancia empezó rápidamente a desmoronarse y más tarde explotó como crisis financiera en agosto de 1982; lo que significaba arcas vacías e insolvencia para pagar los costos de su fabulosa deuda, aunque el gobierno aún trataba de negarlo⁷. Pero, mientras el creciente desequilibrio monetario y financiero del país llegaba a su punto más crítico, la posición ya fuerte del capital financiero interno e internacional, particularmente el norteamericano, se había fortificado de modo extraordinario y se imponía avasalladoramente en la economía del país y decidía suspender toda ayuda financiera si este no se sometía a los dictámenes del FMI.

En el Estado la pugna de las fuerzas del bloque en el poder se intensificaba; las medidas monetarias y financieras de emergencia exigidas por los banqueros internacionales se cumplieron; el 6 de agosto se instalan dos tipos de cambio, uno preferencial para las importaciones y los pagos del gobierno que se establecía en 49.13 pesos por dólar y otro libre que oscilaría entre 77 y 84 pesos por dólar. Se intensificaron además las ventas adicionales de petróleo a los Estados Unidos⁸ y otras medidas⁹, entre ellas la suspensión de compra venta de

⁶ Ver informe anual, 1982, p. 46.

⁷ Un mes antes de la devaluación tanto el presidente como su vocero en la Secretaría de Hacienda declaraban que: "la recesión sería mínima" y que sus efectos, o sea, "la crisis económica y financiera (ya) había sido controlada" y que el monto de reservas del Banco de México ascendía a 3.920 mills. de dolls.. Ver, Excelsior, México, 2 de junio de 1982, p. 1, y El Sol de México, 8 de junio de 1982, p. 1.

⁸ Estas se dieron para cumplir el anticipo de mil mills. de dolls. que el Departamento de Energía del Gobierno de los Estados Unidos había hecho al Banco de México para cubrir su insuficiencia de divisas.

divisas, que posteriormente siguieron. Ello volvió a acelerar la especulación y la fuga de capitales¹⁰ con lo que el gobierno no tuvo más que implementar la inesperada nacionalización bancaria. Ahora bien, los esfuerzos desesperados por detener el avance de los nuevos grupos sociales que, ya crecidos en la economía desde fechas tempranas y dominándola en el momento crítico, pugnaban por el poder político, permitieron que las fuerzas burguesas nacionalistas negociaran posiciones de poder para adecuarse al proceso inexorable de acoplamiento vinculado al desarrollo de las fuerzas mercantiles y financieras del capitalismo internacional.

Sin duda que, después de la espectacular fuga de capitales, de la enfurecida especulación financiera, de la inflación galopante que aceleraron la recesión de la planta productiva, el drástico remedio, la nacionalización bancaria y el estricto control de cambios fueron medidas económico-políticas que dieron un respiro al gobierno en los últimos meses de su mandato. Pero fueron algo más importante -vale recalcarlo- significaron para las fuerzas burguesas industriales nacionales, creadas, sustentadas y apoyadas por el Estado, la recuperación de las bases políticas momentáneamente perdidas para continuar detentando aún por un tiempo la hegemonía social. Esta, profundamente arraigada en una revolución nacionalista, impregnada de valores populares y democráticos, todavía permitía, en ese momento a un gran número de sectores sociales dominados a luchar por la sustentación de un proyecto nacional de acumulación interna de capitales, alternativo al que se estaba consolidando, y por ello, capaz de asegurar la existencia de un país políticamente independiente y soberano mediante el apoyo solidario de los sectores campesinos, obreros y populares, pequeña burguesía y burocracia. Estos grupos fueron los que, con la nacionalización bancaria, vieron renacer, con ilusión sus esperanzas y, al menos, por poco tiempo, se sintieron respaldados por un gobierno que parecía esta vez, velar por sus intereses, ya desde hace décadas sacrificados en aras de un supuesto interés nacional y popular.

En efecto, la nacionalización bancaria, el inesperado golpe de timón del primero de septiembre de 1982, medida de extrema emergencia, en el momento final del gobierno de José López Portillo, sirvió para frenar el desgobierno y el desorden social instaurado en una economía que se desmoronaba. Aún más, técnicamente, en el campo económico, con las desesperadas medidas, aunque apenas se pudo controlar parte de la fuga de divisas se respaldaba el incremento de la captación bancaria y con ello se disponía de financiamiento interno para finalizar el periodo; sin embargo, en el campo de las políticas económicas, para poder garantizar tasas de interés autónomas a las industrias para los financieros internacionales y con ello abaratar los créditos para las empresas nacionales y los préstamos bancarios para democratizarlos y orientarlos hacia proyectos de interés social tales como vivienda, salud, infraestructura, servicios y alimentación -objetivos que fijó el gobierno para justificar la nacionalización- solo podrían haberse cumplido en un mediano plazo, con un fuerte apoyo popular, siempre y cuando al desacelerarse la inflación se impulsara la economía en beneficio de las grandes mayorías. Este era el proyecto implícito en la acción nacionalista y popular más significativa de los últimos años¹¹ que, desde las alturas del poder, generaron los "intelectuales orgánicos" de la fracción burguesa industrial nacional para salvarla de su descenso económico y preservar su hegemonía en franca crisis. Era preciso, entonces, para poder emprender cualquier medida de política económica un ajuste en el proyecto de desarrollo; lo que en términos políticos significaba, por un lado, consolidar un nuevo pacto o alianza entre los sectores obreros, campesinos medios, militares y populares con el Estado y por otro con los empresarios privados. Pero, ni el gobierno ni las fuerzas sociales que la izquierda conducía estaban en capacidad de lograr una movilización y menos un apoyo social de tal envergadura que pudiera haber cambiado la correlación de fuerzas en el interior del bloque en el poder. Por su parte, la coyuntura de fin de sexenio no era propicia para llevarlo adelante y los problemas estructurales de la economía dificultaban más aún las salidas fáciles a corto plazo.

⁹ Ver, *Prensa Nacional* del 13 al 15 de agosto de 1982 y "principales medidas económicas adoptadas en agosto de 1982", *Comercio Exterior*, vol. 32, no. 9, México, sept. de 1982.

¹⁰ Según cálculos hechos por el Presidente José López Portillo en su sexto informe estos eran alrededor de 42 mil millones de dólares; ver, *Comercio Exterior*, vol. 23, no. 9, p. 934

¹¹ Se le comparo con la nacionalización de petróleo y tanto el PRI como la izquierda la respaldaron; el primero porque "el camino de la Revolución no se había agotado" y la segunda porque, como bien lo había entendido la iniciativa privada y se expresaba: "estas eran algunas de las metas de su propio programa (el de la izquierda) impuesta por el gobierno en menos de tres meses contra la voluntad popular". Ver, para el esclarecimiento de estos dos momentos divergentes, Paz, M.E.: "Crisis y expropiación, un análisis comparativo: 1938-1982", en *Revista Mexicana de Sociología*, IISUNAM, México, abril-junio de 1983, pp. 441-450.

Así, el gobierno saliente a poco tiempo de haber tomado las anteriores medidas empezó a sentir con fuerza los problemas económicos y políticos derivados de las mismas. Los dólares que se necesitaban con ansia no pudieron ser captados a pesar de que se intentó recogerlos instaurando casas de cambio gubernamentales a lo largo de las amplias zonas fronterizas con las que cuenta el país. La fuga de capitales continuó, una pequeña parte en dólares pero el grueso de la misma se realizó en pesos mexicanos, los que fueron captados en los bancos fronterizos norteamericanos o por especuladores de ambos países para facilitar las necesarias transacciones comerciales que se habían desquiciado repentinamente entre una frontera y otra. En suma, la vida económica y social de los mexicanos sufría serios revces, los que dieron lugar a protestas y a conatos de levantamiento que la administración tuvo que contener con medidas paliativas.

En la imposibilidad real de captar divisas a través de la banca nacionalizada y con un control de cambios burlado, en la práctica, por el gran comercio y por los especuladores financieros no le quedaba más alternativa al gobierno que solicitar al FMI su aval para volver a demandar préstamos a la banca privada extranjera y con ellos aplacar la furia de la crisis inflacionaria y recesiva.

Una vez más, en el interior del gobierno se expresaba la contradicción fundamental del momento político que vivía el país el cual no era producto de un enfrentamiento pasajero entre las fracciones industriales y financieras nacionales, y las industriales y financieras monopólicas, aliadas o subordinadas al capital extranjero que se habían fortalecido con la gradual apertura a la economía mundial. El peso de este último sector sería decisivo en el futuro en la medida en que con más fuerza se vinculaba a la composición hegemónica del poder interno y por esta vía podría controlar la esfera monetaria y financiera locales y así, vincularse de manera más eficaz a los flujos internacionales y a sus exigencias. Para la urgencia del momento que vivía el país, y para que este no se declarase en moratoria de pagos -aunque técnicamente vivía esa situación- y no cundiera el mal ejemplo internacional, peligroso para los detentores de las finanzas mundiales, desde comienzos de septiembre se entablaron negociaciones de alto nivel con los centros financieros internacionales los que estaban en las mejores disposiciones de ayudar al país siempre que éste garantizara convenientemente sus pagos. La carta de intención que el gobierno firmó con el FMI en los primeros días de noviembre de 1982 hacía explícitas las garantías¹². No obstante, el dinero de los préstamos no se haría efectivo sino a partir de nuevas y largas negociaciones, en las cuales la posición política de México respecto de los problemas de América Latina y de Centroamérica, en particular, así como su larga estabilidad política, que debía ser refrendada con un cambio pacífico de gobierno, y su dinámica integración al comercio y a las finanzas de Estados Unidos y el resto del mundo, le sirvieran de asideros positivos.

2.1.2.- EL INICIO DE SEXENIO Y LA DURA MARCHA DE LA CRISIS ECONÓMICA A LA CRISIS DE LA DEUDA, 1983-1985.

La salida de la bancarrota del país se le veía muy lejos en el horizonte de los finales del sexenio, pero los costos sociales de la misma se palpaban más cercanos. Esta vez, parecía poco probable que un nuevo auge petrolero¹³ resultase la tabla de salvación oportuna para salir del túnel en el que el país se encontraba; más aún, cuando la crisis estructural de la economía mundial volvía a presentarse con todas sus secuelas y así la expansión de la demanda mediante el incremento del gasto gubernamental -en ausencia de innovaciones- ya no impulsaba el crecimiento, sino que profundizaba la etapa depresiva del ciclo económico y avivaba la inflación, el desempleo y el estancamiento productivo en las economías desarrolladas por lo que estas y en especial la de los Estados Unidos ya no servirían de motor para impulsar a la economía mexicana en crisis¹⁴. Era el tiempo -según los teóricos del

¹² Pueden resumirse en lograr el equilibrio de la economía mediante la disminución del gasto gubernamental, la elevación del ahorro interno, el saneamiento de las finanzas públicas por la vía de una mayor tributación y alzas en los precios de los bienes básicos y servicios públicos. Ver "Carta de Intención" Comercio Exterior, vol. 32, no. 11, México, noviembre de 1982.

¹³ Según un estudio de la Texaco, el ritmo de crecimiento de los precios reales del petróleo se situaría entre el 1% y 2% en promedio de 1980 a 1987. No obstante, si se toma en cuenta la demanda creciente a partir de 1987 y la capacidad limitada de producción se puede prever que éstos se incrementarán aceleradamente a partir de 1987 a 1994. Ver a este respecto Casas, A.; y Herrera, R.: "Situación y perspectivas petroleras mundiales", Comercio Exterior, vol. 34, México, febrero de 1984, pp. 142-150.

¹⁴ Ver Dávila, F.: "México en el mundo de hoy y de mañana" en Relaciones Internacionales, no. 40, FCP y S, UNAM, México, septiembre-diciembre, 1987, p. 28.

neoliberalismo- de volver a ensayar una política económica más austera, liberar a la economía de la tutela del Estado y dar impulso a las fuerzas del capital financiero que habían crecido y proliferado mundialmente, gracias al gran negocio especulativo desplegado a partir de la década de los setenta. Así que, también las economías en desarrollo que habían disfrutado de dinero barato para crecer desmedida y desproporcionadamente tenían que ajustarse y pagar sus deudas, a como diera lugar. Si se quería llegar a una mayor liberación del comercio mundial y en una globalización de la actividad productiva beneficiosa para todos -y en especial para los intereses de las grandes economías o sea, aprovechar los recursos y la mano de obra baratas de las economías en desarrollo e incrementar sus tasas de ganancia- había que ahorrar más y ser más eficientes. Ello, fue entendido por el nuevo gobierno de Miguel de la Madrid y su gabinete - entre los que había algunos miembros formados en la nueva escuela- que a partir del 1º de diciembre entraron en la administración del poder estatal.

Las medidas desesperadas con las que se pretendió frenar el estallido de la crisis, en el anterior gobierno, mostraron al nuevo de modo gráfico que ésta revestía una gravedad y profundidad nunca antes alcanzada y que la salida de la misma sería una larga y dura marcha en la que los efectos devastadores que se habían presentado en el campo social podrían alcanzar el ámbito político y llevar al país por el camino de las tensiones desestabilizadoras. En efecto, a menos de seis meses con las diferentes modalidades de control cambiario que se ensayaron, el peso mexicano -en los momentos de mayor especulación- había pasado de 27 por dólar a los 200 pesos; esto es, una devaluación del 640% para luego ser fijada a fines de diciembre en 150 pesos por dólar. En los meses de enero y febrero de 1983 alcanzó el 110% en relación al mes de agosto de 1982. En lo relativo a los precios, éstos no dejaban de aumentar: algunos de los productos desde agosto de 1982 habían triplicado, otros cuadruplicado y hasta quintuplicado su precio. El convenio del gobierno con el FMI funcionaba de maravilla y junto con sus exigencias de reducir el gasto público se aumentaron los impuestos y se elevaron, una vez más, los precios de los bienes y servicios públicos; hecho que también fue aprovechado para atizar el fuego inflacionario que devoraba rápidamente los recursos de los sectores populares y medios. Para amagar el costo social del duro ajuste que pesaba sobre las espaldas de las grandes mayorías trabajadoras y que podía afectar la sucesión presidencial fundamental para el sostenimiento del sistema de dominación imperante -preocupación constante y primordial de todos los gobiernos posteriores de la revolución- era preciso realizar un control selectivo de algunos precios de los alimentos de consumo masivo y de los productos de primera necesidad; también se siguió subsidiando en transporte colectivo y se multiplicaron las tiendas sindicales con el fin de proteger la economía de los sectores más vulnerables a la crisis y con ello preservar la paz social, fuertemente amenazada por el colapso económico.

Así, los inicios de la recesión económica al clarear el año de 1983 fueron difíciles; no obstante, los gastos y diversiones de navidad y año nuevo, así como las esperanzas depositadas en el gobierno en el cambio ritual de cada sexenio crearon un compás de espera en la vida política del país. El nuevo gobierno manejaría la salida de la crisis en el fuego cruzado de la doble exigencia ortodoxa del FMI (manejado por la ideología de los grupos conservadores en el campo cultural y liberales en el campo económico, representados por Margaret Thatcher en Inglaterra y por Ronald Reagan en Estados Unidos) que la tecnocracia gubernamental asimilaba como cosa propia. La nueva política económica tendría como objetivo prioritario disminuir la inflación mediante el control de la oferta monetaria e impulsar luego el ahorro interno. En la interpretación de la nueva ortodoxia, la crisis que experimentaban sus economías - las desarrolladas- y que repercutía en el resto del mundo, era por falta de ahorro para destinarlo a la inversión productiva y la causa de este mal obedecía al gasto público exagerado que el gobierno efectuaba con la riqueza absorbida a las empresas privadas mediante las altas tasas impositivas. Por ello, su objetivo al nivel de la economía global era disminuir el papel económico del Estado y los costos aparejados a esta función. Esta receta era preciso aplicarla a todos los países en desarrollo que estaban en crisis y México había consentido en llevarla a cabo para recibir los apoyos financieros internacionales que estuvieron momentáneamente suspendidos. Se trataba de realizar una clásica política de ajuste consistente en sanear el déficit interno mediante la contracción del gasto público "que, desde tiempo atrás, se había constituido en impulsor de las inversiones de mayor dinamismo; con ello -arguyen los expertos la inflación cedería, el país incrementaría sus ahorros, pagaría sus préstamos, negociaría el pago de la abultada deuda externa, volvería a ser sujeto de crédito de los financieros internacionales y entraría en una nueva etapa de desarrollo dentro de la nueva dinámica de globalización comercial, cuyas tendencias dinámicas apenas se percibían, dada la fase recesiva del ciclo económico que la economía internacional afrontaba. La lección aprendida era preciso instrumentarla en México de modo creativo y a ello dedicaría el gobierno su actividad prioritaria.

2.1.3.-LA LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN, RECESIÓN ECONÓMICA Y REPERCUSIONES SOCIO-POLÍTICAS (1983)

Desde el discurso de la toma presidencial el nuevo mandatario recordaba que el nuevo sexenio tendría lugar en circunstancias críticas, y en tono austero y mesurado¹⁵, palpo la crisis en sus grandes dimensiones e inmediatamente anuncio la puesta en marcha de un programa de "Reordenamiento Económico Emergente" en el cual fijaba las grandes líneas de orientación del gobierno a largo plazo y los álgidos problemas de corto plazo que era preciso resolver. En resumen, se trataría de corregir la inflación, la inestabilidad cambiaria y la escasez de divisas, así como proteger la planta productiva y el empleo para prevenir tensiones sociales¹⁶. Seguidamente, se impulsaron una serie de iniciativas jurídico-administrativas tanto para agilizar las medidas gubernamentales de manejo de la crisis, como para consolidar a las nuevas fracciones en el bloque de poder. Así, las nuevas disposiciones cambiarias y financieras que prácticamente daban marcha atrás con las medidas más drásticas implementadas a fines del sexenio anterior: la nacionalización bancaria y el estricto control de cambios¹⁷. Estas se complementaron con la firma de un acuerdo que autoriza la venta del 34% de las acciones de la Banca Nacionalizada al público. Ahora bien, según el especial reglamento para el caso, ningún individuo ni institución podría obtener más del 1% de las mismas; lo que según el gobierno era para democratizar el acceso al poder financiero pero según los estudiosos de la economía se trataba de una forma solapada de otorgar a los antiguos banqueros parte significativa de su influencia y control sobre el sistema financiero¹⁸. Además, la celeridad con que fueron aprobadas tales medidas, a más de reiterar el peso absoluto que el Ejecutivo tenía en las Cámaras a través del PRI revelaba no sólo la gravedad del momento que se vivía, sino del futuro y el temor bien fundado de posibles desórdenes sociales y desequilibrios políticos que podrían sucederse por la severidad de la crisis y por lo drástico de las medidas adoptadas para frenar la inflación ya enraizada en la economía mexicana. Efectivamente, ésta última, calculada en los meses de Enero y Febrero de 1983 en 110% en relación al mes de Agosto de 1982, continuaba carcomiendo los exiguos recursos de las grandes mayorías y enriqueciendo a los comerciantes e industriales monopólicos. La disminución del gasto gubernamental presuntamente hecha para desalentar la inflación se revelaba errática pues solo conseguía incrementar la recesión de la planta productiva. Ello, afectó de modo significativo a los pequeños y medianos productores, así como a la mano de obra de sus empresas sin lograr descensos significativos en el nivel de precios. Además, la recesión económica anunciada oficialmente alcanzaba tasa negativas de menos de 2 en el PIB, aunque fue aún más severa, ya que entre enero y abril de 1983 alcanzó un promedio de menos de 9.6% por lo que sus impactos fueron más significativos que los calculados en los niveles de salario y en la estructura del empleo. En lo relativo a los precios, estos no dejaron de aumentar; algunos de los productos desde agosto de 1982 habían alcanzado niveles 5 veces más altos¹⁹.

Abocado el gobierno durante los primeros meses a solucionar los problemas respectivos a la Deuda Externa y a controlar la inflación parecía olvidarse de que las medidas adoptadas volvían más difícil la marcha de la economía. Así, la disminución drástica del gasto público incidió de modo notable en la industria de la construcción la cual medida en términos de su aporte al PIB decreció en un 16% a partir de 1981. Del mismo modo la carestía de divisas para la importación de insumos afectó a las industrias de bienes intermedios y de capital cuyos niveles de actividad descendieron bruscamente hasta niveles comparables a los del principio de la década de los 80. La recesión más alta que experimentaba la economía mexicana desde los años 30 no tardó en repercutir

¹⁵ Ver Lerner, B.: "1983: La ruptura frente al populismo, el compromiso con la austeridad y la renovación moral". Revista Mexicana de Sociología, abril-junio de 1983.

¹⁶ Ver, "mensaje a la Nación del Presidente Miguel de la Madrid" Comercio Exterior, vol. 32, num. 12, Diciembre de 1982, pp. 1278-1285.

¹⁷ Con la vuelta al Banco de México de Miguel Mancera desplazado por Carlos Tello, el implementador de la nacionalización y del estricto control de cambios, se reimplanta el doble control de cambios; así, desde fines de Diciembre de 1982 el tipo de cambio fue fijado en 150 pesos; con esta paridad tope llamada "libre" que fluctuaría según las fuerzas del mercado y a la irían acoplándose "la controlada" y "la especial", que luego fue suprimida, nuestra moneda se mantendría con ligeras fluctuaciones hasta el 23 de Septiembre de 1983 y desde esa fecha sufriría una devaluación diaria controlada de 13 centavos que la condujo a tener una equivalencia de 200 pesos por dólar a fines del mismo año.

¹⁸ Ver a este respecto Méndez, S.: "la crisis económica: orígenes y consecuencias" en Méndez, S.; México: Crisis Económica y Desarrollo, Ed. Sociedad Cooperativa de Publicaciones Mexicanas, México D.F., 1983, p. 138.

¹⁹ Ver a este respecto: Examen de la situación económica de México, Banco Nacional de México, vol. 49, Junio de 1983.

significativamente en los salarios y en el empleo de los trabajadores. Con la inflación del 100% en los primeros 5 meses del 83 y el miserable incremento del 15% al 20% en los salarios, la represión económica emprendida realizaba en los salarios un verdadero desfase de su fuerza de trabajo. Por otro lado, el incremento del desempleo abierto estimado en un 13% para 1983 y la amenaza de cierres y despidos de trabajadores incrementaron la oferta en el mercado de trabajo; hecho que permitió a los empresarios maniobrar hábilmente para intensificar el trabajo sin la correspondiente respuesta combativa de los asalariados. Ya se notaba en los inicios del programa de ajuste que el peso del mismo lo detentarian los trabajadores y las mayorías asalariadas del país; tendencia que se acentuaría a lo largo de los duros años de la justa.

Así, el gobierno en su afán de captar dólares para sanear sus finanzas, de disminuir el gasto para frenar la inflación seguía debilitando a las fuerzas sociales mayoritarias mientras estimulaba a los empresarios y al capital extranjero para animarlos a invertir. La lógica del planteamiento estribaba en que era necesario en un plazo inmediato obtener divisas a cualquier precio para defender la planta productiva y el empleo, lo que a mediano plazo aumentaría las inversiones, incrementaría las exportaciones, contribuiría a una mayor generación de ahorros; los que, a su vez, incidiría en la productividad de las empresas y en el empleo. En realidad, lo que se estaba haciendo era fortalecer a los sectores comerciales y financieros monopólicos internos para anudar con el capital extranjero una alianza más estrecha que conjugaría la crisis productiva mexicana liquidando a las empresas ineficientes en su lucha por los mercados. Este era el verdadero sentido de la oposición al "populismo financiero" que el gobierno proclamaba, pero los resultados reales de esta política no hacían más que intensificar el costo financiero de la planta productiva que, por otra parte, dadas las altas tasas de interés mantenidas y el alto costo de las divisas, no tenía más alternativa que aumentar sus costos productivos y repercutirlos a los precios de los productos; lo que volvía a generar en la economía presiones inflacionarias que junto con los incrementos causados por la elevación de precios de los bienes y servicios públicos endurecían la recesión y la inflación de la economía mexicana en 1983.

Así pues, mientras en el segundo trimestre de 1983 los impactos retardados de las medidas de política económica vigentes venían carcomiendo los ahorros de los sectores medios y los salarios de los trabajadores, las ganancias de las empresas crecían gracias a la generosa política de liberación de precios, de contención salarial y de renegociación de la deuda privada por parte del gobierno²⁰.

En el ámbito sociopolítico, el gobierno, con suma habilidad había maniobrado para no permitir que la crisis desbordara los límites usuales de contención; trataba por la vía del consenso de lidiar los difíciles momentos por los que atravesaba la sociedad mexicana y el bloque en el poder. Apelando no sólo a la renovación moral, al nacionalismo revolucionario, al sacrificio en aras de la crisis, sino a la profundización de la democracia y a la mayor participación de todos los mexicanos en los esfuerzos por salir del impasse. Así, la burocracia política y, su caja de resonancia, el PRI pudieron jactarse de que la crisis sólo era económica y que se habían evitado las explosiones sociales de descontento popular. No obstante, aunque la sociedad civil asimiló el impacto de la crisis económica y ésta no tuvo expresión directa en una crisis social o política inmediata se dieron ciertos indicios de descomposición social y de resquebrajamiento político. Las esperanzas puestas en el nuevo gobierno duraron escasos meses, justo el tiempo necesario para que el sagrado ritual sexenal mostrara su verdadera fase, la de la dura crisis que el país tendría que cargar a costas. Los milagros se habían acabado y empezaron los problemas de desabastecimiento de productos básicos y olas de continua carestía provocadas por el ocultamiento de los alimentos, perpetrados por los comerciantes para especular con los precios y obtener ganancias elevadas. Desafiando las amenazas del gobierno se jugaba con las necesidades populares a sabiendas de que, en una economía de libre mercado, los controles de precios son una quimera. Todo ello iba fermentando tensiones sociales reprimidas que en cualquier momento podrían desbordarse.

²⁰ En el estudio "Dos años de recesión, sus consecuencias y perspectivas" taller de coyuntura de la Facultad de Economía de la UNAM, Marzo de 1984, p 9, se habla de que el mecanismo fundamental para incrementar las ganancias de las empresas fue la renegociación de la deuda privada a través de FIBORCA, lo que le permitió al gobierno triplicar su flujo de efectivos entre 1982-1983; al cual hay que adicionarle la traslación de costos a los precios, junto con la permanencia de costos fijos o decrecientes del trabajo. Según el poder de negociación de los sindicatos de cada empresa.

En las urbes, el clima instaurado por la recesión económica y la inflación erosionaron la moral social y las ansias de sacar ventaja de los más incautos, propiciaba un verdadero ambiente de psicosis y de tensión social que llenaba de inseguridad a los sectores altos y medios de la población; los que percibían la rápida descomposición social de los sectores marginales y lumpen proletarios.

En el campo, la recesión tuvo menor impacto y la producción agropecuaria hasta se recuperó de su caída en 1982; no obstante, en las regiones de economía campesina los productores siguieron empeorando sus condiciones ya precarias por lo que el gobierno para no perder su base de sustentación política más sólida pensó en reestructurar sobre otras bases el malhadado Sistema Alimentario Mexicano (SAM) e incrementó moderadamente los precios de garantía de los productos agrícolas. La inflación persistente (80.6%), por su lado, aunque menor que la 1982 (98.8%), y el desempleo creciente causaron mayores estragos en el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Villahermosa, Mexicali y Tijuana lugares de concentración industrial y del comercio en tiempos del auge petrolero. En estos sitios el costo de la alimentación, de la vivienda y del vestido se incrementó en más del 300% mientras los sueldos y salarios tanto de los obreros, como de los profesionales y burócratas permanecieron prácticamente estancados o disminuyeron sensiblemente; en el caso de los salarios mínimos reales éstos de -9.6% en 1982 descendieron a -18%; la caída más drástica desde la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte los estados fronterizos del norte que poco antes habían venido disfrutando de condiciones económicas de excepción con la recesión inflacionaria y las medidas para contrarrestarla sufrieron severas mermas en sus transacciones comerciales con los Estados Unidos; hecho que no sólo repercutió en los niveles de vida y empleo de sus habitantes sino que contribuyó a profundizar las desigualdades sociales ya existentes y a generar descontento social y desconfianza en el nuevo gobierno. Las primeras elecciones de junio de 1983 fueron un buen barómetro que indicó al PRI y, por ende, al gobierno que la crisis económica podía causar muy pronto estragos políticos de gran magnitud de no actuarse de manera inmediata con programas especiales de repercusión económica; esto es, ayuda en abastecimiento de productos básicos para los sectores más desprotegidos y obras de infraestructura de beneficio social. Así que, los funcionarios y priistas pusieron manos a la obra y emprendieron diligentemente las anteriores tareas, además de la reestructuración interna de las instituciones promotoras del voto por donde el gobierno conquista el apoyo político a su gestión.

Pero la crisis iba más a fondo; ya en los meses de mayo y junio, dadas las crecientes dificultades para el despegue de la economía los estragos fueron sentidos por las clases sociales más dinámicas del país los obreros industriales, los asalariados y profesionales de la empresa privada y por las burocracias asentadas en los sectores modernos del país. Las tensiones sociales fueron creciendo y las demandas por mejoras en las condiciones de vida fueron haciéndose opinión pública. Aún más, los sectores medios y urbanos y los obreros -que conforman los respectivos sindicatos independientes y de gobierno- empezaron a manifestar su descontento en contra de la política gubernamental por la vía institucional mediante paros y huelgas²¹ que intentaban forzar al gobierno a levantar los topes a los aumentos salariales pactados por el FMI y base de la estrategia de recuperación de corto plazo diseñado por el poder establecido. La respuesta gubernamental fue dilatoria pues replicó con el Plan Nacional de Desarrollo que en lugar de ser una realidad inmediata de contención de la crudeza de las condiciones precarias en las que se encontraban los trabajadores y las grandes mayorías del país era una esperanza atejada de un futuro mejor que alentaba "al fortalecimiento de las instituciones democráticas, al vencimiento de la crisis y a la recuperación de la capacidad de crecimiento del país, para luego iniciar los cambios cualitativos que el país requiere en sus estructuras económicas, políticas y sociales"²². Los intelectuales y políticos de oposición criticaron duramente al Plan mientras los obreros tuvieron que contentarse, en los casos más afortunados, con un aumento

²¹ En el mes de mayo se iniciaron una serie de paros y huelgas en todo el país para protestar contra la política económica del gobierno y por aumentos salariales entre el 50% y 100%. Los resultados de la mayoría de estos esfuerzos fueron mayores frustraciones, dadas las características de represión económica e indirectamente políticas que tomaron las negociaciones; sólo unos cuantos consiguieron incrementos del 15% en promedio que fueron inmediatamente absorbidos por la inflación que en el mes de mayo alcanzaba el 100%.

²² Ver "Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988" Suplemento de Comercio Exterior, vol. 32, no. 6, México, julio de 1983.

salarial mínimo inmediatamente absorbido por la inflación de 100% que no parecía ceder y por la recesión que continuaba aniquilando a la planta productiva²³.

En efecto, si en el mes de mayo las presiones inflacionarias amainaron por un momento, en los meses de julio y agosto volvieron a recrudecer. La fuerza del capital financiero internacional y sus aliados internos -los comerciantes y los sectores monopólicos de la industria- volvieron a insistir por nuevas alzas en los precios y por una devaluación²⁴ que incrementaría los dividendos de los sectores exportadores al incrementar las ventas. El gobierno atrapado entre dos fuegos intentó mediar, reiterando por medio de sus funcionarios que la crisis estaba controlada y que ya se había tocado fondo²⁵. No obstante, los grupos monopólicos seguían por la vía inflacionaria y la especulación de los precios, acumulando poderío económico y la hegemonía social a la fracción burguesa industrial nacional que los iba perdiendo. En estas circunstancias, se dió el primer informe del nuevo gobierno en el que se marcaba una tregua para los sectores populares que habían venido absorbiendo todo el peso de la crisis. Esto dió al núcleo industrial nacionalista mayor capacidad para recuperar la fuerza política que había perdido de tal modo que ciertos sectores obreros asidos al yugo de la subordinación gubernamental -sin sacudir el peso de la dominación política en la que se sustenta su explotación- intentaron buscar en la unidad con los movimientos sindicales independientes, nuevas alternativas para recuperarse políticamente, consolidar su capacidad de movilización y renovar sus luchas para enfrentar, con autonomía de acción, la escala de las fracciones financieras monopólicas.

Efectivamente, el informe fue conciliador -había tregua en la lucha- en él se reconoció que la crisis aún no había sido superada pero que se le mantenía bajo control, gracias a la política de negociación legal y pacífica de los conflictos que rechaza todo tipo de autoritarismo o dictadura. Se justificaban las drásticas medidas para frenar la inflación y el costo social de la misma, porque "de no responder al desafío de la crisis, análogo en lo económico a los tiempos de guerra", se hubiera incurrido en el caos y el retroceso. Se llamaba a la unión para vencer la crisis y se convocaba, una vez más, a la consolidación de la democracia mediante el respeto a las libertades individuales, al derecho social, al pluralismo ideológico y pluripartidismo.

Más allá de las palabras, la intervención presidencial justificó la estrategia contenida en el Programa Inmediato de Recuperación Económica, conocido como PIRE y la que se detalló en el Plan Nacional de Desarrollo; mostró también sus logros en materia de descenso inflacionario, consolidación financiera, e indemnización bancaria. En el interior del discurso, la crisis estructural del Estado, entendido como el campo de equilibrio dinámico de fuerzas políticas contrapuestas y antagónicas y como el rector del nuevo proyecto nacional que se impulsaba, era asimilada desde el interior del bloque en el poder bajo una lucha por ganar nuevos espacios económicos y políticos, dentro del juego político de las fuerzas sociales que respaldaban a las fracciones burguesas nacionales decadentes y a los sectores financieros en ascenso; las desigualdades y los desplazamientos estaban presentes en toda su agudeza pero no habían provocado el colapso político. Se trataba de una crisis estatal, cuyas salidas aún no se visualizaban claramente; por momentos el núcleo burgués industrial nacional parecía recomponer sus alianzas en la cumbre adjudicando al capital y al comercio monopólico interno, así como a los núcleos financieros internacionales un papel más destacado en el aspecto de las alianzas del bloque. La insistencia en la estrategia así lo sugería, sólo faltaba que las condiciones reales de la economía y de la lucha política concreta, de corto y mediano plazo, las viabilizaran o contradijeran. En todo caso, tampoco se olvidaba que en este trance una alianza más estrecha con la burocracia política tendría que ser escrupulosamente cuidada y era preciso seguir manteniendo a todo precio el

²³ Un estudio de Banamex comentado en Uno Más Uno, 14 de junio de 1983, p. 7, afirmaba que la disminución de la demanda interna, la escasez de materias primas, el alto costo de los financiamientos y el control de precios colocaron al sector industrial mexicano en una grave crisis y que, sólo trabajaba el 65% de la capacidad instalada, y aún cuando se espera un descenso del índice de desempleo no había perspectivas favorables para mantener la ocupación en los renglones de construcción, automotriz y cervecera". Por su parte, Bancomer en su publicación Panorama Económico, afirmaba que "la producción automotriz había caído en un 43% en los tres primeros meses del año y la rama de los tractocamiones lo hizo en un 88%; por lo que las perspectivas no eran favorables para el resto del año"

²⁴ En los primeros días de agosto para frenar las presiones devaluatorias el Secretario de Hacienda y Crédito Público aducía variadas razones para descartar una devaluación del peso mexicano. Ver, Uno Más Uno, 7 de agosto de 1983, p. 8

²⁵ En realidad, la política nacional había sido exitosa para la banca internacional, ya que para pagar la deuda, a toda costa, se obligaba al país a mantener un crecimiento negativo de un 4% en la producción lo que indicaba a las claras que el programa de ajuste estaba diseñado para satisfacer sus intereses.

apoyo de los sectores obreros, campesinos, medios y populares a partir de aumentos salariales, reformas administrativas y de justicia, proyectos y programas de apoyo al agro, al empleo, a la vivienda, a la educación e insistiendo en la renovación moral y en el nacionalismo revolucionario que eran el bálsamo maravilloso para que los grandes sectores mayoritarios de la nación aceptaran la crisis y el doloroso ajuste; que abriera las puertas del país a la dinámica de la economía mundial -a la esperanza o a la ilusión- en ese momento en profunda recesión.

En el lado del momento coyuntural, esto era, en los inicios del último trimestre de 1983, se percibía claramente que el aspecto principal de la contradicción de la formación social mexicana en crisis estaba en la economía. El núcleo burgués industrial apoyado en algunas trincheras de la administración del Estado y en su eficiente burocracia apostada aún en algunos puntos claves del mando, calculaba las posibilidades de éxito con mucha proligidad. Se aferraba a la terapia de cura intensiva mediante la estrategia del shock en la economía y la participación amplia en la política. Una vez más, el consenso social, la legitimidad institucionalizada y las demás mediaciones sociales manejadas por el régimen político para negociar espacios eran puestas en acción para ser probadas en su fortaleza. El reto era perseverar para detener la inflación y la recesión de la economía; cuidando de no profundizar en los aspectos ya salientes de la crisis social y política que se venían expresando como conflictos secundarios en el ámbito de la sociedad civil. Por ello, las luchas en la economía y en el interior del bloque continuaban entre las distintas fracciones de la clase dominante. En efecto, ya antes del Informe Presidencial las presiones de los comerciantes, exportadores, especuladores, y financieros, se hicieron presentes y luego arremetieron hasta obligar al Gobierno a una nueva devaluación. Esta se materializó el 23 de septiembre con un deslizamiento diario de 13 centavos del peso frente al dólar. A menos de un año del nuevo Gobierno, era la segunda y con ella el "realismo económico" caía sobre las espaldas de las masa trabajadoras dispuestas a perder poco a poco el valor de sus salarios reales a cambio de la seguridad en sus fuentes de trabajo en peligro, dada la fuerte recesión de la planta productiva. La medida devaluatoria o deslizamiento controlado, no tardó en generar un nuevo incremento de los precios de los productos que, para agosto solo habían subido en un 3.9% según el Banco de México. La inflación volvió a repuntar contradiciendo las cifras oficiales que la estimaban para fines de 1983 entre un 75% y 80%²⁶, hecho que puso en peligro la leve recuperación de la recesión que tanto los organismos internacionales como el Gobierno ya habían anunciado para fines del año. Los altos costos sociales anunciados por el Gobierno en el frío y mesurado informe de septiembre volvían a presentarse incidiendo en las condiciones de vida de los trabajadores y de los sectores medios, en la que en los momentos de auge petrolero habían tenido acceso a muchos de los satisfactores propios del nivel de vida del vecino país del norte y que a fines de 1983 tenían que contentarse con las aspiraciones limitadas a los niveles de vida de los países sudamericanos de menor desarrollo económico (ver cuadro 2.2).

En Octubre las cosas no mejoraron, los industriales exigieron la liberación de los precios la reducción de las tasas de interés y apoyos financieros para evitar el colapso de la planta productiva. La industria ineficiente, protegida por el Gobierno, sin gastos gubernamentales que fomentaran las inversiones, estaba paralizada y la estrategia de fomento de la inversión privada era casi nula, a excepción de la inversión extranjera directa que por los 48 millones colocados en el primer trimestre de 1983 había expatriado en utilidades y regalías, 220.5 millones; lo que significaba que por cada dólar ingresado al país salieron 4.5 en el mismo lapso. Pero, no le quedaba al Gobierno más alternativa de acuerdo a sus planes, que continuar fomentando la inversión extranjera. La reunión en Cancún de 100 Presidentes de empresas transnacionales donde se anunció la creación de una Subsecretaría de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología y la discusión de los "lineamientos sobre inversiones extranjeras" que aparecieron a mediados de 1984 nos dan la razón de esta preferencias. Mientras, los sectores asalariados y campesinos reciben las promesas de un nuevo Programa Alimentario y de alzas salariales para finales de año que sonaban como burla sarcástica cuando a fines de Octubre se dieron nuevos incrementos al precio de la gasolina y el diesel, los que dispararon los precios de los demás artículos, en especial los de consumo diario. El Gobierno en la estrategia ya consabida anunciaba multas y castigos pero otorgaba los permisos de alzas a lo largo de Noviembre y Diciembre. Por su parte, los sindicatos independientes y el liderazgo sindical gobernista

²⁶ Por su parte la CEPAL calculó un 91.9% de inflación para México en 1983, o sea, un 7% menos que la del 82, calculada en 98.8%.

protestaban por las medidas exigiendo aumentos inmediatos en los salarios de más de un 60%, hecho que sirvió de pretexto para que se especulara con los precios y para activar aún más el círculo inflacionario y recesivo²⁷.

Cuadro 2.2

SALARIO PROMEDIO EN EL SECTOR MANUFACTURERO 1979-1983 (en dólares americanos)

Años	México	Estados Unidos	Diferencia 2/1
1979	330.3	1.075.8	745.5
1980	398.9	1.163.2	764.3
1981	489.9	1.278.4	788.5
1982	335.0	1.360.0	1.025.0
1983	354.2	1.416.5	1.632.3

Fuente: Calculado por la Secretaría de Programación y Presupuesto, Estadística Industrial Anual 1984, México, D.F.

Así a un año de Gobierno, el Presidente y los Secretarios de Hacienda y Programación, para confortar a las grandes mayorías sobre las cuales seguiría cayendo el peso de los ajustes, anunciaron reiteradamente que la crisis ya había sido controlada pero que la etapa más dura del reordenamiento económico vendría; sin embargo, se apresuraron en explicar que en 1984 el crecimiento económico se reanudaría.

2.1.4-LA ETAPA DE REORDENAMIENTO ECONOMICO, ÉXITOS Y FRACASO DEL AJUSTE ORTODOXO, 1984-1985

La experiencia de un año de gobierno tuvo un gran significado económico pero sobre todo político porque permitió percibir más de cerca el juego de fuerzas sociales que la crisis desató y que el régimen afrontó con habilidad. Pero, según el mismo declaraba en sus intervenciones, el juego de las contradicciones seguiría siendo duro e intrincado en 1984, año de la segunda etapa del ajuste. En efecto, la crisis de la economía internacional y del capitalismo en su sector hegemónico, los Estados Unidos, estaba lejos de resolverse; aunque se habían evidenciado signos de recuperación tales como: una tasa inflacionaria inferior al 4% -la menor de los últimos 11 años-; una tasa real de crecimiento de la economía de 4.5% y un nivel de desempleo del 8%, luego del tope del 10.3% alcanzado en 1982. Todo ello, logrado a partir de un altísimo déficit presupuestal mantenido en equilibrio a través del incremento constante de las tasas de interés²⁸. Lo que no era precisamente un augurio para una recuperación de la economía mundial ni menos aún para la economía mexicana, pues esta se veía constantemente

²⁷ Según un extenso análisis de la CTM y el CT se previó que la inflación llegaría a 130% a fin de año. Ver, Uno Mas Uno, 14 de diciembre de 1983; según datos de la CEPAL efectivamente llegó a 91.9% y según el gobierno fue de 80.8%.

²⁸ Triffin, R.: "Rectificar el escándalo monetario mundial", Comercio Exterior, México, marzo de 1987, p. 176. Rangel, J.: "Estados Unidos, fuerza o debilidad. El fin de la transnacionalización", Momento Económico, UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, México, febrero de 1987; del mismo autor "Estados Unidos, el dólar y el desequilibrio externo", Comercio Exterior, México, marzo de 1987, p.227.

sometida a mayores presiones en el cumplimiento de la segunda etapa de reordenamiento económico dado el constante crecimiento del servicio de la deuda externa y las crecientes dificultades para su renegociación.

En el plano nacional la crisis estructural de la economía no había sido superada; así que, en 1984 se trataba de profundizar en las medidas de ajuste, aunque con ligeras modificaciones en el gasto público que se incrementaba en relación a 1983 para fomentar la inversión, proteger la planta productiva y el empleo pues ya en el interior de algunos círculos gubernamentales y entre los líderes obreros y políticos se percibían los altos costos sociales de las políticas de ajuste que no se habían compensado con los modestos logros alcanzados y expuestos en tono mesurado aunque excesivamente técnico en los Informes Presidenciales. Por desgracia, éstos, magnificados por el optimismo triunfalista de los funcionarios, se constituían en la justificación política de las nuevas políticas a ponerse en marcha y de los futuros éxitos de éstas. En realidad las drásticas medidas de austeridad impuestas dentro del Programa Inmediato de Recuperación Económica (PIRE) redujeron el gasto no financiero del gobierno, como proporción del PIB del 28.9% en 1983 al 26.8% en 1984 y 25.8% en 1985; o sea, más del 3%; por el lado del ingreso, con el alza de los precios de los bienes y servicios proporcionados por el gobierno éste creció como proporción del PIB del 29.9% en 1982 al 33.2% en 1984 y al 31.7% en el siguiente año²⁹; lo que a su vez se manifestó en una alta reducción del déficit público del 17.6% del PIB en 1982 al 8.7% en 1984. (Ver cuadro 2.3).

Poco a poco la actividad económica interna se fue recuperando; las empresas con mayor solidez financiera entre ellas la petrolera, la petroquímica, la siderúrgica así como la industria eléctrica y las filiales de las transnacionales continuaron creciendo; las demás, apoyadas por el Programa de apoyo al pago de la deuda privada (FICORCA), se reanimaron entre 1983-1984. Esto se debió en gran medida a la recuperación de las exportaciones las que se orientaban, en un 75% del total, al mercado de los Estados Unidos, cuya repentina reanimación económica daba un respiro a la economía mundial y en particular a su vecino geográfico que así estrechaba aún más sus tradicionales vínculos.

En lo que respecta a la inflación, considerada como el primer enemigo a vencer, según las cifras oficiales del Banco de México, esta descendió hasta el 59.2% en 1983, casi un 40%, puesto que en 1982 fue de 98.8%. El éxito no fue desdenable al juzgar por lo que sucedía en Bolivia, Brasil y Argentina en esos mismos años. No obstante, el logro fue poco significativo si consideramos la restricción escalonada del circulante que se efectuó, la drástica reducción de la demanda y la fuerte depresión del crecimiento de la economía hasta -5% que se dio en 1983. Todo ello, sin tomar en cuenta la fuerte reducción salarial de 4.7% en relación con la de 1982 que fue de 53%. Dicho en otros términos, si extrapolamos el monto de la masa salarial contra el índice de precios tenemos que la tendencia de su crecimiento anual está por debajo del alza en los artículos de primera necesidad para 1982, en -2.6% y para 1983 menos 33%, tomando 1971 (5%) como año base. Por otro lado y abundando en el desfaldo de la fuerza de trabajo que ha significado la inflación hasta 1983, si dividimos el monto de la tasa salarial por el número de habitantes del país tendríamos que a cada mexicano que recibía \$ 3,100.00 en 1971 le correspondía en 1982, \$ 4,600.00 y en 1983 sólo \$ 2,900.00. Por su lado el crecimiento anual de los salarios mínimos siguió siendo negativo en 7.4% en 1984, en 1985 y en los años siguientes la situación se agravó (ver cuadro 2.3); por lo que la política económica aplicada -al menos hasta fines de 1985 con liberación constante de precios y restricciones salariales e incentivos a los empresarios nacionales y extranjeros para invertir, dió lugar al incremento de las tasas de ganancia y a la consolidación a un más alto nivel de los sectores industriales comerciales y financieros monopólicos que pudieron resistir la depresión del aparato productivo y pelear en el mercado contra los más débiles que sucumbieron; pues, los anteriores virtualmente impusieron sus condiciones a partir de diferentes estrategias manejadas en la coyuntura.

Otro de los logros en el corto plazo de la política de austeridad fue el superávit de \$5.3 bills. de dls. en la balanza de cuenta corriente en 1983, de \$4.2 en el siguiente año y de sólo \$1.2 en 1985 (ver cuadro 2.4) que no pudo ser sostenido por más tiempo pues el colapso económico de los siguientes años hubiese sido aún más drástico de lo que fue en realidad; ya que este aparente éxito no fue más que el resultado de la tremenda depresión que experimentó la planta productiva del país.

²⁹ Ver Secretaría de Hacienda y Crédito Público, La Reforma Fiscal para 1987, SHCP, México, 1987, p. 9.

CUADRO 2.3

INDICADORES ECONÓMICOS, 1982-1983 (Tasas anuales de crecimiento en porcentajes)

Conceptos	1982	1983	1984	1985	1986
PIB	-0.5	-5.3	3.7	2.8	-3.8
Población	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7
Producto per-cápita	-3.3	-8.1	0.9	0.0	-6.5
Sector agrícola	-2.9	2.9	2.5	3.8	-2.1
Sector minero (petróleo incluido)	-9.2	-2.7	1.8	-0.7	-5.8
Sector manufacturero	-2.9	-7.3	4.8	5.8	-5.6
Sector construcción	-5.0	-18.0	3.4	3.0	-9.1
Inversión fija bruta	-17.0	-24.7	7.9	8.5	-10.0
Déficit del sector público (% del PIB)	17.6	9.0	8.7	10.0	16.3
Déficit operacional (% del PIB)*	7.3	-2.4	-0.3	0.6	ND
Oferta monetaria (M1)	62.1	41.2	63.0	54.8	64.4
Tasa de inflación**	98.8	80.8	59.2	63.7	105.7
Desempleo urbano abierto	4.2	6.9	6.3	5.0	5.0
Salario mínimo real	-9.6	-18.0	7.4	-1.3	-8.5

*Definido como el déficit del sector público menos el total de los pagos por concepto de intereses adeudados.

**Porcentaje de variación calculado de diciembre a diciembre.

Fuente: Macroasesoría Económica, S.C., "Realidad Económica de México". Compendio Estadístico, 1992, Grupo Editorial Iberoamérica, México, 1991, pps. 191, 195, 197.

CUADRO 2.4
INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR EXTERNO, 1982-1986
(en billones de dólares)

Conceptos	1982	1983	1984	1985	1986
Exportaciones	20.0	22.3	24.2	21.7	16.0
Importaciones	13.5	8.4	11.3	13.2	11.4
Balanza comercial	6.5	13.7	12.9	8.5	4.6
Servicios netos	-12.2	-8.4	-9.1	-8.2	-6.4
Balanza de cuenta corriente	-5.7	5.3	4.2	1.2	-1.3
Balanza de capitales	7.5	-2.4	-1.1	-1.5	2.3
Cambios netos en las reservas *	1.8	-2.0	-2.1	2.2	-0.8
Pago de intereses	12.2	10.2	12.2	10.4	8.7
Servicio de la deuda	16.3	13.6	13.8	12.4	12.4
Porcentaje del servicio de la deuda	65.4	60.3	55.4	51.1	ND
Tasa de cambio efectiva real (1980=100) **	115.3	123.7	102.9	98.5	145.2
Tasa anual de crecimiento de los depósitos mexicanos en los EEUU	29.0	11.0	26.0	26.0	ND

* Un número negativo significa incremento

** Un incremento significa una devaluación del peso.

Fuente: Macroasesoría Económica, S. C., "Realidad Económica de México 1992", Grupo Editorial Iberoamérica, México, 1991.

Ello es fácilmente corroborable por la gran caída de la inversión en bienes de capital en esos años (ver cuadro 2.3) que se remarca con el también aparente éxito de la balanza comercial debido principalmente a la restricción de las importaciones cuyo volumen decreció de \$13.5 bills. de dls. en 1982 a \$8.4 bills. en 1983 (según el Banco de México las importaciones de bienes de capital disminuyeron en un 63% en ese año).

Así, el débil incremento de las exportaciones (ver cuadro 2.4) estaba lejos del proyecto loable de disminuir la petrolización de nuestra economía puesto que el oro negro seguía ocupando el 77% del total de las exportaciones mientras las manufacturas alcanzan sólo el 13% y los productos no petroleros el resto. Cabe, no obstante constatar que los esfuerzos por diversificar las exportaciones entre 1983 y 1985 dieron como resultado un crecimiento del 10% para las no petroleras frente a un incremento de menos de 1% para las exportaciones petroleras; pero, dadas las condiciones de lenta recuperación del comercio mundial y de la economía de los EEUU a la que México se fue integrando durante la crisis³⁰, la ardua competencia que nuestros productos soportaron en el exterior, permitieron que solo las industrias filiales de las transnacionales: automotriz, maquinaria y productos químicos aumentaran sus ventas en el exterior y, por ello, los beneficios, descontando las regalías y utilidades, fueron muy exiguos para el desarrollo nacional.

Por lo que podemos apreciar en el apretado análisis, las vicisitudes del sector externo de la economía se destacan más de sus éxitos contables; no obstante, el país gracias a la renegociación de la deuda externa ya disponía de las reservas monetarias (ver cuadro 2.4) mientras que en diciembre de 1982 estas eran casi nulas. En verdad, fue encomiable y hasta reconocida por los banqueros internacionales la diligencia del Secretario del ramo como hábil negociador de la deuda y del pago de los intereses que fueron de aproximadamente 10,000 mills. de dls. en 1983 y que ascendieron a 12,000 mills. en 1984; pero esto no justifica ni quita que el monto fue elevadísimo pues cubrió casi todo el superávit de la balanza comercial de 1983; lo que significó un freno al crecimiento y un deterioro del valor social del trabajo mexicano que se trasladaba hacia el exterior.

Cabe recordar -para el caso- que los ingresos del gobierno federal se componen principalmente de impuestos indirectos tales como el IVA, impuesto sobre la producción y servicios que castigan fuertemente a los sectores de menores ingresos y es con ellos, principalmente, que sumaron en porcentaje el 30% de los ingresos federales, que se nutre la producción nacional en comparación con solo el 24% del impuesto directo a la renta y el 46% de los ingresos no tributarios, esto es, los ligados a las rentas³¹. Ello significó que, indirectamente el servicio de la deuda que en 1984 subió a casi \$14 bills. de dls. estaba también cancelando las posibilidades de ingresos reales para fomentar el desarrollo del mercado interno que es entre todas la más segura fuente de recuperación de la recesión.

Como se ve en el cuadro 2.4 las reservas del país crecieron tanto en 1983 como en 1984 en un promedio de \$2 bills. de dls.; del mismo modo lo hace la balanza de cuenta corriente en \$5.3 bills. de dls. ambos rubros alentados por el préstamo de \$5 bills. de dls. de la banca comercial pero estas cifras alentadoras no pueden mantenerse para 1985 dada la aceleración de las importaciones y por el incremento de los gastos en que el país incurrió por el terrible terremoto que azoló principalmente la ciudad de México en septiembre de ese mismo año. El círculo vicioso de la deuda empezaba de nuevo a minar la reanimación económica en 1984 alcanzada a costa de tantos sacrificios del pueblo mexicano. En realidad, los éxitos que duraron tan poco pero que fueron tan cacareados por los funcionarios del FMI y por los ejecutores internos de ésta estrategia que protegía los intereses del capital financiero internacional y nacional se dieron como producto del deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de mexicanos (ver cuadro 2.3). Según datos periódicos de la Banca los ahorros crecieron constantemente pero con las altas tasas inflacionarias los beneficios del dinero a intereses, producto del sacrificio de los sectores medios, en aras de una seguridad ficticia, fueron devorados por la inflación más alta que los réditos alcanzados y que percibieron; de todos modos, no les quedaba otra alternativa que convertirlos en dólares o gastarlos rápidamente en viajes de diversiones. Los actores obreros y populares, que por definición no ahorran pero si gastan más de lo que se les remunera por la riqueza que aportan al país, en definitiva fueron los que continuaron soportando todo el peso de la inflación y de la recesión de la economía que continuaban su vertiginoso y sostenido

³⁰ Dávila, F.; "Crisis económica y acercamientos mutuos" en "Perspectivas de las relaciones México-Estados Unidos", Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, F.C.P. y S., UNAM, no. 138, México, octubre-diciembre 1989, pp. 82-88.

³¹ "Fuente de Ingresos del Gobierno Federal" en Presupuesto de Ingresos de la Federación para 1984, SPP.

ascenso para comienzos de 1985. De tal modo, que la medicina del ajuste Fondomonetarista tendría que ser suministrada en una dosis mayor para parar la enfermedad; con lo que el gobierno reconocía palmariamente que la dureza de la crisis seguiría asolando a la economía en el transcurso de 1985 sin visos de que las condiciones de deterioro de los sectores sociales mayoritarios fuesen menores que los de los anteriores años.

Más aún, las condiciones internacionales jugaban también en contra de los sacrificios que los trabajadores mexicanos realizaban para superar la crisis, esto es, para disminuir la inflación y pagar la deuda externa cuyos servicios siguen creciendo con el incremento de las tasas de interés de la banca norteamericana. Por donde se veía claramente que el capital financiero hegemónico seguía consolidando su posición mundial y esforzándose por anudar alianzas más estrechas con sus subalternos en los otros países capitalistas y, México, difícilmente podía escapar a esta tendencia.

A todas luces, para mediados de 1984 la política económica encaminada al pago de la deuda externa seguida por el gobierno de México se había dado en vano. Las negociaciones unilaterales para sacar a la economía a flote no habían sido suficientes para neutralizar las altas tasas de interés que seguían encareciendo los créditos y la inflación continuaba presionando sobre los ingresos de la población. Pero la evidencia empírica del fracaso parecía no hacer mella en el credo y el dogmatismo de la burocracia y tecnocracia fieles a la ortodoxia del capital financiero. Fue necesaria la acción política en las constantes presiones de los sectores más golpeados por la misma (los obreros, los sectores medios y populares y los profesionales quienes junto con los campesinos, dentro de la legalidad e institucionalidad vigentes externaron sus protestas) para ir poco a poco desmoronando el Bunker en el que se escudaban. Así fue como el primero de mayo se manifestaron en contra de la misma y para que no quedase duda, manifestaron por escrito su rotundo no a la política equivocada del gobierno un mes y medio después.

Estos acontecimientos sobresalientes en la coyuntura de la crisis que iniciaba una etapa de recaída y el creciente descontento social, inclinaron a la burocracia reacia y tozuda a desatar las amarras que la ligaban al capital financiero, cuya presión política se está haciendo sentir fuertemente en el interior del bloque en el poder. En este espacio de luchas, negociaciones y componendas, ligadas al ejercicio del poder, parecía ser que el efecto de las contradicciones y presiones sociales de los sectores obreros, campesinos y medios populares que atravesaron los aparatos de la burocracia estatal y política y llegaron al centro neurálgico del Estado donde se desmoronaba la hegemonía de la fracción burguesa industrial nacional frente a los embates de las fracciones financieras monopólicas locales aliadas a las internacionales. No obstante, para no endurecer más los enfrentamientos se dio una nueva tregua que se visualizó en un pequeño incremento del gasto público, expresado en una subida de la tasa de inversiones de menos 24.7% en 1983 al 7.9% y 8.5% en 1984 y 1985 respectivamente (ver cuadro 2.3).

Así, con un paulatino crecimiento del déficit fiscal se mantendría el crecimiento económico previsto y se daría alguna tregua a la recesión; una vez más la tecnocracia estatal al toparse con la realidad de la lucha de clases frente al dogma de la política económica como acción autónoma del Estado que la ejercen los técnicos, se rendía frente a las necesidades emanadas de la coyuntura en la que el juego y las negociaciones de los grupos sociales que participan en ellas determinan las líneas de política económica a seguir. El incremento del gasto productivo generaría empleos e incrementaría el salario sin causar presiones inflacionarias. Con ello, las condiciones férreas del ajuste pactadas con el FMI -léase las exigencias del capital financiero monopólico internacional y la de sus seguidores nacionales- se fueron aflojando y en esta batalla, que no era el fin de la guerra, la fracción burguesa industrial hegemónica en descenso (apoyada en las fuerzas sociales mayoritarias, unidas al yugo priista y representadas en el gobierno por las burocracias subordinadas a las altas burocracias y tecnocracias estatales que la expresan y representan en el bloque dominante) siguió reinando por un tiempo más sobre las fracciones comerciales, industriales y financieras monopólicas y sus burocracias e intelectuales orgánicos.

Vendrían en poco tiempo nuevos ajustes luego de la tregua en los que la lógica del capital financiero y de los industriales y comerciantes monopólicos acelerarían los ajustes para un reordenamiento más eficiente y racional de la economía y de la política. Ambos necesarios para una mayor concentración y centralización del poder y de la riqueza en México que prepararía a los más poderosos para competir a mar abierto en los nuevos espacios mundiales que se abrirían. Así, la estrategia recesiva del FMI que había ayudado a los países desarrollados a realizar sus procesos de ajuste tecnológico, pasándoles la factura a los países en desarrollo, era el caso patético de México, se trocaba en una nueva ideología que fundamentaría la necesidad de adecuar las estructuras productivas

obsoletas e ineficientes a los cambios mundiales que se avecinaban. La culpa no la tenía ya el gasto gubernamental sino las políticas proteccionistas, la actividad contraproducente de participación del Estado en la economía y la reglamentación excesiva de la inversión extranjera directa. Se trataba de extirpar en las economías en desarrollo ya saneadas de sus deudas, la raíz del mal, mediante la liberación comercial, la privatización de las empresas estatales; luego se flexibilizarían las leyes para la entrada de las inversiones extranjeras y la Ley del Trabajo. El neoliberalismo aparecía con su nueva cara en los círculos financieros internacionales y estaba dispuesto a hacer cumplir la nueva receta si los países en desarrollo querían tener acceso a la inversión extranjera directa que sería la salvación de sus economías maltrechas.

Estas ideas estaban en la base del Plan Baker que se propuso en la reunión anual del FMI en octubre de 1985 en Seúl y que México adoptaba como programa de liberalización comercial y buscaba así un nuevo apoyo para la salida de la crisis de la deuda. En todo acaso, la tendencia al mayor acercamiento de México a los Estados Unidos se profundizaría. El Programa de Fomento Integral de las Exportaciones (PROFLEX), publicado el 8 de abril de 1985, el Entendimiento sobre Subsidios e Impuestos Compensatorios firmado por los Estados Unidos y México 15 días después³², era ya un indicio de que un entendimiento más formalizado entre ambos países, del cual los anteriores eran un antecedente. Por otro lado, ya empezaba a difundirse en las esferas gubernamentales la decisión de pertenecer al GATT³³ que facilitaría el proceso de restauración económica y la liberación comercial.

No obstante, en el momento referido, era difícil que la hegemonía del sector financiero monopolístico emergente se diera, sin nuevas y largas batallas, la burocracia y tecnocracia que sostenían en la cumbre del poder a la fracción industrial nacional seguían apoyándose en los sectores obreros, campesinos, medios y populares que constituían la carne de cañón que aguantaba la refriega.

Estábamos, entonces, asistiendo -en el interior de la formación social mexicana- al final de una crisis política interna del mismo sistema de dominación y hegemonía sin explosiones violentas en el campo político. La crisis económica interna y la internacional que se entrecruzaban sirvieron de justificativo para emprender en nuevos sacrificios a partir de los cuales se llegaría a una nueva esperanza de salida. En estas circunstancias la búsqueda del consenso era crucial pues la estabilidad política -una vez más- era la clave para cualquier cambio en el marco de la política económica.

Así, a finales de 1985 con el recrudecimiento de los obstáculos para llevar adelante el ajuste ortodoxo del FMI - asumido como propio por los sectores más altos de la burocracia- las contradicciones políticas estaban alcanzando un índice mayor de relevancia aunque sin superar a las económicas; por ello las fracciones financieras integrantes del bloque en el poder, en la cúspide de la economía pero no en la de la hegemonía social, seguirían intentando liquidar toda posibilidad de organización popular nacionalista y revolucionaria porque, con ella, su proyecto de desnacionalización, de represión económica y política - que esconde y fundamenta una explotación capitalista más intensa, para superar la crisis interna y la que conlleva la internacionalización del capital a escala mundial- no podría alcanzar el consenso social que necesitaba para arraigarse en México. Era preciso una nueva promesa, un nuevo mito, una nueva ideología para no violentar las luchas. La modernización como proceso de reformas estructurales para acceder al progreso y a las riquezas que nos presentaba la sociedad opulenta de fines de los años 80 a la cual todos los mexicanos tendrían acceso una vez que el país realizara el sacrificio de la reestructuración que lo habilitara para la competencia mundial, sería el nuevo canto y la nueva esperanza a difundirse.

³² En el PROFLEX se apuntaba que: " con Estados Unidos de Norteamérica, México está abierto a considerar la conveniencia de un trato bilateral amplio, sustentado en el principio de equidad, que reconozca las diferencias en el grado de desarrollo de las dos naciones" mientras en el "Entendimiento sobre Subsidios e Impuestos Compensatorios", ambos gobiernos acordaron iniciar consultas para suscribir un acuerdo sobre comercio e inversiones que se materializaría el 6 de noviembre de 1987. Documento de "México-Estados Unidos. Entendimiento en materia de comercio e inversiones", en Comercio Exterior, México, noviembre de 1987, pp. 964-966.

³³ La decisión de pertenecer al GATT, rechazada por el Presidente López Portillo en 1980, se dió a fines de noviembre de 1985 y culminó con la formal admisión de México en el organismo el 25 de julio de 1986. Ver "México y el GATT: hacia la apertura de la economía" en Banamex, Examen de la situación económica de México, enero de 1986, pp. 21-24.

2.1.5.-LA ETAPA DE LOS NUEVOS DESEQUILIBRIOS, EL REPUNTE DE LA CRISIS ECONÓMICA 1985-1986.

La vulnerable forma de crecer a empujones, posible a costa de un crecimiento desmedido de los precios -exceptuando los de la fuerza de trabajo que se deprimieron más que en los años anteriores-, fue el verdadero fondo y el triunfo del Programa Inmediato de Recuperación Económica¹⁴ (PIRE). Pero el déficit presupuestal superior al programado y el deterioro de la balanza comercial y de cuenta corriente que sostuvieron el pequeño repunte de la economía en 1984 fue impracticable en el trágico 1985, que asoló a México con el terremoto e inició el descenso de las exportaciones de petróleo mexicano que, (según datos del Banco de México, alcanzaron un valor de 14 mil 766 mils. de dls. en 1985 para descender en 1986, 6mil 307 millones) junto con la baja paulatina de los precios de este¹⁵ aceleraron la crítica situación.

A comienzos de 1985 los signos depresivos de la economía ya presentes a fines de 1984 se acentuaron. El PIB que en 1984 ascendió a 3.7% (la mitad del crecimiento histórico del mismo aproximadamente) bajo al 2.8%. Los precios de los productos en ascenso y la acelerada devaluación del peso atizaron el fuego de la inflación que sobrepasó con más de 20 puntos las metas de 50% fijadas por el gobierno y se acercó a la de 1983 que, en cifras oficiales, llegó al 80.8%. La continua baja de los precios del petróleo y las medidas proteccionistas instauradas por los países industrializados, dificultaron la estrategia de crecer incrementando las exportaciones mexicanas. Así, la subvaluación del peso se convirtió más bien en un mecanismo de especulación comercial y financiero que en un incentivo para la captación de divisas. En verdad, éstas comenzaron a escasear y la balanza comercial en sus figuras estadísticas (ver cuadros estadísticos de este capítulo) comenzó a anunciar un continuo deterioro con peligro de poner en entredicho el pago del servicio de la deuda -más del 50% de recursos del Estado que eran en ese entonces de 15,000 millones de dólares se destinaban al pago del servicio de a la deuda-.

El gobierno no tuvo más alternativa que utilizar las reservas acumuladas para atender los requerimientos de los acreedores internacionales que le exigían el pago de los intereses y el servicio de la enorme deuda externa de 101 mil millones de dólares. Al flaquear las reservas, el acceso a las divisas para el pago de las importaciones se vio limitado. Así, el Banco de México obligó prácticamente a los importadores que habían recibido antes dólares preferenciales a comprarlos en el mercado libre: lo que encareció al dólar, aceleró a su vez el proceso inflacionario y empujó a una mayor devaluación del peso. De allí que los capitales financieros interno e internacional, que habían apostado a la recuperación de México, empezaron a perder la confianza y alentaron la salida de los mismos para protegerse de la devaluación inminente; circunstancia que tuvo fuertes impactos sobre las reservas de oro y divisas del Banco de México.

El gobierno, sus burócratas y tecnócratas, que veían empeorar al enfermo a lo largo de los primeros seis meses de 1985 no tuvieron más alternativa que suministrarle más de la medicina ya probada. Se acentuaron las medidas de austeridad con recortes presupuestales, cancelación de servidores públicos, reducción de gastos de administración y de inversión. En el aspecto monetario, joya preciada de las políticas del FMI, se aceleró el deslizamiento del peso de 17 a 21 centavos diarios, se flexibilizó más aún el tipo de cambio para fortalecer al sector exportador y se suprimieron los permisos previos de importación, con el fin de parar la inflación, activar la producción y fomentar la libre empresa; pero, al mismo tiempo, subieron las tasas de interés para detener la fuga de capitales; y se restringió el crédito bancario para atenuar la salida de capitales y fomentar el ahorro. Además, se inició el programa de liberalización y apertura comercial con la eliminación de los controles cuantitativos a un buen número de fracciones arancelarias y con la supresión de los permisos previos para la mayoría de productos intermedios y de capital. Con esta medida se intentaba complementar la estrategia de ajuste estructural y acelerar la gradual apertura comercial y financiera que lanzaría a México a la conquista del mercado mundial, a través de una integración más dinámica al mercado norteamericano, su principal socio comercial pues representa las dos terceras partes de su intercambio comercial global.

¹⁴ Ver "La respuesta de México a la crisis" en Trejo, S.; "Perspectivas de crecimiento y deuda externa", Comercio Exterior, vol. 37, no. 10, México, octubre de 1987, p. 803.

¹⁵ Véase a este respecto Navarrete, J.E.; "Veinticinco años de la OPEP: evolución y perspectivas" y Desprairies, P.; "La baja de los precios del petróleo, largo intermedio hacia un nuevo mercado de energía", Comercio Exterior, vol. 36, no. 3, México, marzo de 1986, pp. 207-220.

Por su parte la venta libre de dólares autorizada para desalentar el mercado negro de divisas y preservar las reservas, tuvo técnicamente un efecto devaluatorio; así el peso alcanzaba un valor de 350 pesos por dólar a mediados de 1985 y el proceso inflacionario aceleró su curso causando a su vez una sobrevaluación rápida del peso³⁶ que fue aprovechada por los sectores de altos recursos para gastos en el extranjero o para la compra de dólares en previsión de futuras devaluaciones³⁷ hecho que contribuyó a una mayor pérdida de las reservas internacionales y a buscar negociaciones de nuevos créditos³⁸ para salir de la crisis. De esta manera, la economía del país entró, una vez más, en el círculo vicioso de la crisis que ya se había vivido en 1982 y de la cual las medidas de ajuste tomadas por más de tres años deberían haberlo llevado a una sana situación de crecimiento.

En esos momentos difíciles para México, fieles a los mandatos del FMI, los hacedores de la política económica del país podrían renegociar -en condiciones excelentes para los acreedores- la deuda y su servicio, todo ello a costa de la asfixia del pueblo y la recesión más profunda de la economía de los mexicanos³⁹.

Todos estos esfuerzos por curar la enfermedad y corregir los equilibrios y la debilidad de la estructura productiva mediante más endeudamiento externo, no hicieron sino acelerar, frente al deterioro de las exportaciones, la insolvencia económica del país. No obstante, el capital financiero internacional y sus aliados internos ante el temor de una inrotoria, se apresuraron a negociar el aplazamiento de los pagos y nuevos préstamos de emergencia para atar más al deudor en desgracia, pues el sismo del 19 de septiembre y la baja internacional de los precios del petróleo en diciembre complicaban extremadamente la situación de la economía mexicana. A fines de 1985 y comienzos de 1986, tan sólo a tres años del programa de ajuste y austeridad inventado por el capital financiero y perfeccionado por los servidores de las fracciones financieras monopólicas internas -sus aliadas-, el país se encontraba en una situación similar a la de agosto de 1982.

Aún más, el horizonte económico era más sombrío, no sólo porque la fórmula mágica a la que se había apostado a costa del deterioro de las condiciones de vida del pueblo de México había fracasado, sino porque los precios del petróleo a fines de enero bajaron a 22 dólares el barril y los expertos auguraban una caída de más del 50% para mediados del año. Esto sucedió en septiembre de 1986, cotizándose el barril de petróleo del istmo a 12.3 y el Maya a 9.5 dólares respectivamente. Las dificultades por las que atravesaban las exportaciones petroleras y la tendencia mundial a la baja de los productos tradicionales de exportación mexicanos apuró al gobierno para acentuar la gradual liberación del comercio mexicano y acelerar su integración más dinámica en la economía mundial. Se aprovechó así la entrada al GATT, el 25 de julio de 1986, para consolidar el programa de apertura comercial que en marzo del mismo año dió a conocer el calendario de desgravación arancelaria escalonado del 50%, tasa en la que había quedado al inicio del año hasta llegar al 30% que se alcanzaría para octubre de 1988; además el gobierno se obligaba a reducir totalmente los permisos previos y a eliminar paulativamente los precios oficiales⁴⁰.

2.1.6.-LA CRISIS DE LA DEUDA Y LA NUEVA ORTODOXIA, 1986-1987

Ni la aceleración de la liberación comercial, ni la profundización de la reestructuración económica, ni la desregulación estatal que significó la liquidación y venta de gran parte de las empresas estatales por considerarlas ineficientes⁴¹ modificaron el difícil panorama económico en el que las fuerzas soterradas de la economía y de la

³⁶ Especialistas en el análisis de la economía del país sostenían que la sobrevaluación del peso era igual o mayor que la de 1982 y que la situación empeoraría si el gobierno no le daba pronta solución.

³⁷ Según reportes de la prensa nacional en los meses de abril a junio de 1985 se compraron en el aeropuerto de la ciudad de México un millón de dólares diarios.

³⁸ El gobierno para impedir una baja mayor de las reservas tuvo que negociar a finales de 1985 un crédito puente de \$1.5 billones de dólares.

³⁹ De la Madrid, M.: "Mensaje a la nación sobre la situación económica", Comercio Exterior, vol. 36, no. 2, México, febrero de 1986, pp. 99-104.

⁴⁰ Cf. Banamex, "La marcha de la economía", en Examen de la situación económica de México, agosto de 1986, p. 346.

⁴¹ Ver, Secretaría de Programación y Presupuesto, "Disminuye el número de entidades parastatales", en Comercio Exterior, vol. 36, México, abril de 1986; texto en que se exponen las consideraciones y la resolución presidencial para la disolución,

sociedad que sufrían los mayores efectos del programa de ajustes empezaron a manifestarse por un cambio de alternativas. Continuar con una política económica recesiva y pagando la deuda parecía, al inicio de 1986, un suicidio. No quedaba duda de que a lo largo de los tres primeros años del "sexenio de la crisis", la estrategia recesiva que los financieros internacionales habían diseñado para cobrar la deuda a los países en desarrollo y que México había cumplido celosamente, como lo reconocieron los acreedores, para recibir nuevas remesas de "dinero fresco", e iniciar una nueva fase de desarrollo, había fracasado. Las consecuencias sociales del ajuste ortodoxo en el país habían sido tan severas y los resultados tan exiguos que el propio gobierno, ante la violencia social que veía avvicinarse, se vio forzado a declararse en moratoria de pagos.

El peligro de que México capitaneara el descontento de los países latinoamericanos sometidos al pago de la deuda, a pesar de las explosiones sociales que estaba provocando era ya un problema que preocupaba a los financieros internacionales, pues una moratoria colectiva hubiese dado al traste, no sólo con su brillante y maquiavélica estrategia, sino con gran parte de la estructura financiera de los países desarrollados y hubiese comprometido el propio proceso de apertura mundial que se estaba preparando. Para esto ya se disponía de un nuevo mito, el de la liberación comercial que traería el progreso de las naciones y remozaría sin más las envejecidas estructuras productivas aún no adaptadas a los nuevos cambios tecnológicos mundiales. Así pues, el antiguo mito, el ceremonial y el ritual al que México se había sometido con paciencia, para salir de la crisis, mediante la crisis a la que condujo en ajuste, gracias a las sugerencias de la burocracia allegada a los centros financieros monopólicos y en detrimento del pueblo, se estaba ya rompiendo en la realidad y el discurso político gubernamental ya lo había captado. Por lo que se confeccionaba para el consumo interno del pueblo de México una nueva ideología, la de la modernización y apertura al mundo con lo que se alcanzaría el desarrollo y el progreso sociales.

Se había llegado así a un punto de inflexión y de no retorno. La crisis había afectado sobremedida al pueblo de México, por lo que el pesado pago de la deuda se haría de acuerdo a las propias circunstancias de México; Perú, Brasil y Argentina ya lo habían hecho en parte y se esperaba el liderazgo mexicano en el frente gubernamental de países latinoamericanos "para colaborar a soluciones conjuntas que aligeren el servicio de la deuda, ya que nadie hará lo que no hagamos por nosotros mismos, ni es posible seguir exigiendo mayores sacrificios a nuestras sociedades"; "puesto que el límite de nuestra responsabilidad con los acreedores está determinado por la responsabilidad con nuestro pueblo" "y esto es lo que deben entender los acreedores", se afirmaba en los foros nacionales e internacionales; pero al mismo tiempo el presidente de México se apresuraba a explicar cual era el compromiso de los centros financieros internacionales, en uno de sus discursos a la nación en el que enfatizaba que: "No enfrentaré el enorme reto externo que ahora nos amaga por la vía de reducir el nivel de vida de los campesinos o abatir los salarios reales de los trabajadores de mi país" "...por lo que es preciso" que la comunidad financiera internacional entre en el contexto de diálogo y la negociación. No queremos confrontación sino concertación realista y honorable... porque nadie está obligado a lo imposible"⁴².

Pero, en el inter, entre el discurso y la realidad a lo largo de ese año, se iniciaron fuertes luchas hacia el interior del bloque en el poder entre las fracciones burguesas, industriales nacionales, cuyo declinar hegemónico en la economía era palpable, y los sectores industriales y financieros monopólicos que aceptaban el reto de afianzar en el "crecimiento hacia afuera" las bases sociales y económicas que fundamentarían su hegemonía social, aún discutida en el marco de la formación social mexicana. También en los espacios propios de lucha entre la burocracia y la tecnocracia, estas contradicciones profundas afloraban y se materializaban en enconadas disputas sobre políticas económicas alternativas, donde la SHyCP, el Banco de México y la SPP con sus funcionarios de cabecera, dos de ellos posibles candidatos a la presidencia, buscaban adoptar las que sin forzar el conflicto entre las fuerzas sociales internas y externas les permitieran sortear, sin peligro de desestabilización del sistema de dominación, la difícil coyuntura de crecer o pagar la deuda o de crecer y pagar renegociando la misma de modo unilateral o en conjunto con los demás países endeudados de América Latina.

liquidación, fusión y transferencia de algunas entidades paraestatales. Con este marco legal el gobierno para septiembre del mismo año había vendido, liquidado o transferido más de 200 empresas del Estado y se planeaba desestabilizar 180 más hasta fines de 1987.

⁴² De la Madrid, M.; Mensaje a la Nación sobre la situación económica, Comercio Exterior, México, febrero de 1986, pp. 99-104.

Lo cierto es que la gran encrucijada de orden socio-político no se resolvería sino 6 meses más tarde, dentro de una correlación de fuerzas desfavorables a los intereses de las naciones latinoamericanas. México y sus dirigentes políticos escogieron -sin mayor participación directa de la sociedad en la disputa, dada la eficiencia de mecanismos autoritarios que aún desgastados funcionaron -con frío pragmatismo, una negociación concertada y apoyada por su vecino poderoso del norte. Las relaciones económicas y políticas de largo plazo, muchas de ellas de confrontación y beligerancia, se habían venido limando y se habían plasmado nuevos lazos al fragor de la crisis de sus respectivas economías. Por ello, la decisión les ofrecía mayores alternativas de no confrontación en el corto y mediano plazo, ambas extremadamente necesarias, para seguir cumpliendo el postulado básico de crecimiento con estabilidad política que había sido el secreto del milagro mexicano, del desarrollo estabilizador, del desarrollo compartido fracasados, de la política de ajuste y era la esperanza no sólo de la salida airosa de la crisis sino de la inserción en la dinámica nueva de la economía mundial.

En términos económicos, las cosas empeoraban en el primer trimestre de 1986 la recesión de las industrias se aceleró, la escalada de precios y la baja de salarios se disputaban la primacía y la inflación arremataba. En abril el gobierno anunció un recorte presupuestario de 500 mil millones de pesos, una baja de los precios del petróleo para recuperar las ventas y una inversión extranjera de 2 mil millones de dólares. No había duda que la economía del país estaba pasando por sus peores momentos; la quiebra de la pequeña y mediana industria se incrementaba y las industrias paraestatales, principales proveedoras de las mismas, estaban para mayo de 1986 en franco proceso de desintegración. México en esos momentos, estaba en virtual moratoria de pagos de los intereses de su deuda externa, pues, no tenía dinero para hacerlo. A mediados del año, el cuadro, apenas esbozado anteriormente se volvió más turbio; el ritmo de devaluación del peso alcanzó una tasa del 63% y la inflación, de acuerdo a estimaciones, ascendió hasta un 86% y la recesión de la industria, alcanzaba tasas de decrecimiento promedio de un 15% y, en algunas ramas, como la de construcción de maquinaria textil y equipos de transporte alcanzó un decrecimiento de 18.5% y 20% y 24% respectivamente.

El gobierno, agobiado por estos problemas y por la creciente dolarización y descapitalización del país, buscaba la negociación y el compromiso en el interior del bloque de poder para enfrentar a los duros acreedores sin fisuras internas. Pero, para mayo la tensión social se caldeó fuertemente; los trabajadores del campo y de la ciudad que experimentaron bajas en sus ingresos de más del 30% respecto de 1985 apenas recibirían un incremento promedio del 25% en el mes de junio. Lo que hacía que los niveles de sus sueldos y salarios descendieran una vez más hasta la de los años de 1960. El descontento y la frustración crecían en previsión de mayores tensiones sociales y enfrentamientos, el gobierno se vio obligado a desplegar en el desfile del primero de mayo un aparato de seguridad preventiva impresionante. Este evento del ritual de cada año -en el que los sectores trabajadores expresan sus demandas a su gobierno- permitió palpar el nivel creciente de la frustración económica y social de los trabajadores del país y el férreo autoritarismo contenido del gobierno. No se trató de avivar la presión de la caldera social sino de moderar las presiones internas e internacionales crecientes, fomentando la euforia nacional con motivo del mundial de fútbol que iniciaba en esas fechas.

En el plano internacional las relaciones entre México y los Estados Unidos se tensaron fuertemente pues algunos senadores y funcionarios norteamericanos acusaron a funcionarios y al gobierno mexicano de estar coludidos en actividades de narcotráfico, por lo que éste último envió una nota de protesta al gobierno de ese país el que respondió con una disculpa protocolaria⁴³.

Finalmente los gobiernos de los países latinoamericanos más afectados por los problemas de la deuda expectaban ante la decisión de México para negociar "la crisis de la deuda" con el emisario de los acreedores internacionales.

Dentro de este contexto socio-económico poco propicio, el gobierno de Miguel de la Madrid se enfrentó a la disyuntiva de continuar con la represión económica sugerida por el FMI, intensificando las medidas de austeridad con grandes ventajas para las fracciones industriales, comerciales y financieras monopolísticas nacionales y extranjeras, pero con grandes riesgos de acelerar los desajustes sociales y perder el ya debilitado consenso o bien de

⁴³ Véase, prensa nacional, meses de mayo y junio de 1986; también, "Recuento nacional", en Comercio Exterior, México, meses de abril a junio de 1986.

declarar, como en agosto de 1982, una "moratoria técnica" y negociar en posición de fuerza y liderazgo junto con los países latinoamericanos mejores condiciones de pago y nuevos créditos.

La decisión fue difícil y -al parecer- de último momento pues a nivel nacional e internacional la prensa filtraba información de los debates en el seno del gobierno y se anunciaba ya la declaratoria unilateral de moratoria de su enorme deuda externa, ante la imposibilidad de encontrar una solución viable en las negociaciones con los acreedores. En la inminencia de la declaratoria formal tanto en Secretario de Hacienda y Crédito Público como el de Relaciones Exteriores de México declaraban que no se descartaba la moratoria porque la deuda era impagable y el propio Secretario General de la CTM, expresando el descontento de las clases trabajadoras, les daba su apoyo firme. En estas circunstancias el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Paul Volker, viajó precipitadamente para México y dirimió el fiel de la balanza. De inmediato, el presidente mexicano declaró la inconveniencia de la moratoria y poco después el Secretario de Hacienda era sustituido. En realidad se tuvo que optar por una solución combinada, tal como lo había anunciado el mensaje presidencial a fines de febrero y como lo recordaba el funcionario de la Reserva Federal de los Estados Unidos en Washington, el 11 de junio, dos días después de su visita relámpago a México: "La solución de los problemas financieros de México reside en la combinación de severos ajustes financieros y ayuda crediticia internacional".

El Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) estaba ya definido; dos días después el nuevo Secretario de Hacienda y el de Programación y Presupuesto lo anunciaban. Se trataba de promover simultáneamente el desarrollo y de preservar la estabilidad política dándole un respiro al pueblo de México del ajuste recesivo con lo que el gobierno recuperaría el consenso perdido y la confianza para lidiar a finales del sexenio con la coyuntura política de la sucesión presidencial en medio de la crisis estructural.

Dieciocho meses de arduas negociaciones y la constante presión social, que amenazaba con romper los diques de contención institucionales del sistema político mexicano, habían sido necesarios para revertir la estrategia de ajuste practicada desde noviembre de 1985. En realidad los acreedores internacionales ya habían decidido la nueva estrategia: se trataba de acelerar la apertura de la economía mexicana al capital internacional, de allí la necesidad de la desregulación estatal, la privatización de la economía; a la que se añadía la liberación comercial como el nuevo emecanismo al programa de ajuste. Pero como ya lo había advertido el Secretario del Tesoro Norteamericano James Baker era preciso "crecer para pagar" y el gasto público tendría que ser menos austero; pero, las medidas de liberalización del comercio más radicales y además, debían ampliarse las facilidades para que el capital financiero internacional realizara extraordinarias ganancias en el país. De allí la insistencia en la flexibilización de las regulaciones estatales para la entrada de inversión extranjera directa.

En verdad el nuevo acuerdo con el FMI, expresado en el PAC con líneas de política económica al parecer innovadoras respecto del PIRE, difería en la forma pero, en el fondo, se trataba de una misma estrategia diseñada en el interior de ese mismo organismo para impedir la profundización de una situación ya dada de hecho, la imposibilidad material que experimentaban los países deudores -México en el caso- de pagar la deuda mediante la acentuación del programa recesivo, sin la posibilidad de recibir "créditos frescos". Se intentaba continuar los ajustes de las estructuras productivas obsoletas e ineficientes -léase liberalización comercial, reconversión, liquidación o venta de las empresas paraestatales y fortalecimiento de las finanzas públicas: aumento de impuestos, subida de precios y tarifas en los bienes básicos producidos por el Estado y un mayor impulso al comercio y a la penetración de la inversión extranjera- en el marco de un relativo desarrollo inducido por el financiamiento internacional. Así, México supliría las divisas que no recibía por la caída de los precios del petróleo mediante un endeudamiento externo adicional de 12 mil millones de dls..

El reto era a futuro pues se trataba de impulsar la elevación de las exportaciones no petroleras con apoyo de la inversión extranjera. En términos técnicos se establecía, con anuencia del citado organismo internacional: un mecanismo de financiamiento compensatorio o anticíclico, siempre que el petróleo mexicano cayese por debajo de 9 dólares por barril y se reduciría el financiamiento en caso de que el precio de exportación del mismo aumentase por encima de 14 dólares; un fondo de contingencia externo adicional en el caso de que la recesión del país continuase en los primeros meses de 1987, a pesar del apoyo que diera el gobierno a la inversión nacional e internacional directas; una nueva forma de medición del déficit del sector público, tanto de su monto absoluto que,

como proporción del PIB que consiste en la incorporación del concepto del déficit operacional⁴⁴, con el que se desvincularía el efecto de la inflación sobre el servicio de la deuda interna y finalmente, un compromiso por parte del Banco Mundial de prestar 1,900 millones de dólares para financiar el cambio estructural de la economía mexicana, fundamentalmente el que tiene que ver con el proceso de apertura comercial.

Dentro del nuevo marco de compromisos, el gobierno continuó realizando severos ajustes periódicos: alzas de precios, drásticos ajustes del presupuesto, nuevas medidas fiscales y cambiarias que profundizaron la recesión, alentaron la inflación y desmejoraron más aún las condiciones de vida de la mayoría del pueblo mexicano; de tal modo que la economía mexicana a fines de 1986 experimentó una inflación más alta que en 1982, 105% según datos oficiales y 120% según estimaciones de la CTM. El PIB fue de menos 3.5% de acuerdo con las informaciones oficiales y de menos 5.5% según otras estimaciones. En ambos casos, se rebasó el período negativo de 1982 y en el segundo la fuerte recesión de 1983. Así el gasto público al incrementarse para cebar el crecimiento necesario con el que se sacaría a la economía de la recesión y la apertura comercial, por paradigmático que parezca, no tuvieron resultados favorables en el corto plazo: el déficit fiscal derivado de la caída de los precios del petróleo y la enorme subvaluación del peso inducida por las devaluaciones necesarias para fomentar las exportaciones y desalentar las importaciones, había hecho de México un país barato para los extranjeros y extremadamente caro para sus habitantes.

Entretanto creció aún más el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Estas medidas en términos de consumo global, disminuyeron en 4.5% en 1986 respecto de 1985 y los salarios reales se deterioraron en más del 40% respecto de 1985. En lo que respecta a su participación en el PIB en 1982 esta era de 35.8% y a fines de 1986 se reducía al 27% o sea, un decremento brutal del 24.6% en 5 años de ajustes; en contrapartida los empresarios que en 1982 participaban con el 48.7% lo hacían para fines de 1986 en un 57% esto es, habían incrementado su participación en un 17%.

En estas circunstancias la apertura comercial en lugar de abaratar los precios internos provocó su alza pues estos tendieron a alcanzar el nivel de los internacionales más altos. Así, con una balanza comercial favorable en un ambiente de precios crecientes la inflación aparecía como el principal problema. Efectivamente, para principios de 1987 se intentó corregir esta anomalía manteniendo el ritmo de deslizamiento del peso por debajo de la inflación con lo que el tipo de cambio volvió a revaluarse. No obstante, la inflación siguió creciendo, alcanzando en el primer semestre de 1987 la cifra récord de más de 160%.

La recesión económica apenas había cedido, reflejándose en una subida del 1.7% del PIB; de tal modo que, la esperanza del gobierno de crecer y pagar la deuda se esfumaban, pues el gran esfuerzo desplegado socialmente justo alcanzaba para pagar la deuda, como se planteó en el diseño del FMI. Las cosas empeoraron en el segundo semestre de 1987, la inflación continuó y se aceleró hasta alcanzar tasas del 200%. La especulación financiera desatada apoyó la concentración de capitales por parte de las grandes empresas que cotizaban en la bolsa, pues las tasas que se pagaban a los inversores (muchos de ellos pequeños inversores que para paliar la tremenda inflación cambiaron sus ahorros del banco a la bolsa) hasta el 500% mientras los bancos lo hacían al 150%. En octubre con el desplome de bolsa de valores de Nueva York, que conmovió el resto de los mercados de las economías avanzadas, sobrevino el crack bursátil mexicano. Este permitió a los especuladores financieros retirar grandes utilidades que volaron a mercados menos agitados que el nacional; mientras ciertos núcleos de los sectores medios que apostaron a la bolsa caían en la desesperación y la miseria.

Por su parte, la economía entraba en una nueva fase de recesión y de inflación galopante. La derrama de dólares que el Banco de México efectúa para parar la fuga de capitales, para apaciguar la creciente demanda de divisas para reducir los pasivos por parte de las empresas y para cubrirse de las expectativas de devaluación así, como los pagos a los acreedores disminuyeron las reservas del Banco de México; dándose así fuertes presiones en

⁴⁴ "Este déficit se define como el financiero menos el componente inflacionario de los intereses de la deuda pública interna. En efecto, al incluir en el déficit total ese contenido se obtiene una estimación errónea de la demanda real de crédito por parte del gobierno y se distorsiona el grado del equilibrio fiscal" Banamex, "Acuerdo con el FMI" en Examen de la situación económica de México, agosto de 1986, p. 344.

la balanza de pagos que hicieron insoportable para la economía del país mantener al paridad cambiaria. En esta situación el organismo bancario anuncia su retiro del mercado y sobreviene la devaluación de un 35% en noviembre de 1987. El panorama económico ya álgido sufrió un nuevo deterioro, se subieron las tasas de interés en afán de contener la fuga de capitales del país, lo que atizó la inflación que, con las presiones de compras masivas, que se aceleran antes de las tradicionales fiestas de diciembre y con los gastos de fin de año, se calculaba que llegaría al 450% a finales e enero de 1988 pero ésta sobrepasó esa previsión en casi 15%⁴⁵.

En este escenario cercano a la hiperinflación la tensión social era creciente y la paz social se veía fuertemente amenazada a pesar de los esfuerzos del gobierno, por conjurarla. Una vez más, como sucedió a finales de 1982, el consenso social ya deteriorado por los fuertes ajustes amenazaba un mayor debilitamiento y para diciembre los trabajadores para presionar por ajustes salariales, anunciaban una huelga general; lo que pondría la situación sociopolítica al rojo vivo.

Por su parte, los créditos internacionales ofrecidos se habían retrasado pues los acreedores internacionales no estaban dispuestos a proporcionárselos a México si no aseguraba la continuidad de la política económica emprendida; esto era si no se daba un nuevo y más drástico ajuste que asegurase la continuidad e irreversibilidad de las transformaciones estructurales ya emprendidas. Ello complicaba el panorama social y político de finales del sexenio pues había que negociar con los Estados Unidos, el principal apoyo de México en las negociaciones con los acreedores, una sucesión presidencial acorde con estas nuevas intenciones.

El anuncio de Carlos Salinas de Gortari como el nuevo sucesor presidencial solucionaba el impasse internacional pero creaba graves problemas en el interior del gobierno, los que se expresaron en la escisión del PRI. La vieja y combativa izquierda nacionalista del mismo, en desacuerdo con el nuevo modelo de economía que se impulsaba, rompía los estrechos marcos del control político y respaldaba la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas el gran reformador nacionalista de los años de 1930.

Ello, en el plano de las luchas por el poder y hegemonía sociales era un indicio de que se estaba jugando el paso decisivo de relevo de la hegemonía declinante de la burguesía nacionalista -obstinada en el desarrollo de un capitalismo nacional menos dependiente de los grandes poderes financieros mundiales, mediante el fortalecimiento de un mercado interno- por la nueva hegemonía social de la burguesía industrial comercial y financiera monopólicas que impulsaban nuevos cambios dolorosos pero necesarios para cumplir con la nueva esperanza, la modernización acelerada de la economía del país para insertarse en la dinámica del mercado mundial a partir de un acercamiento más estrecho a la economía norteamericana.

La nueva ideología modernizadora bautizada también como "reconversión industrial" iba ya abriéndose campo en el contexto socio-cultural mexicano, justificada por la necesidad de mayores montos de inversión, bajo el impulso de los capitales internacionales, para aumentar las exportaciones de México al mercado más grande del mundo, con lo que se lograría un nuevo despegue y crecimiento que generaría progreso y bienestar para los sectores sociales mayoritarios del país. Entre tanto, era preciso pagar el precio de un nuevo ajuste económico y de una nueva fase de apertura que recaería, una vez más, sobre la grande mayoría silenciosa que volvería a embelesarse con el nuevo canto de las sirenas, orquestado desde las cimas del poder.

2.2 POLITICA LABORAL Y SINDICALISMO, 1982-1988, EN EL SEXENIO DE MIGUEL DE LA MADRID.

Pragmática y coyuntural, la política del gobierno de Miguel de la Madrid respecto al sindicalismo fue a veces dura (nunca o casi nunca hasta extremos represivos), ocasionalmente permisivo y, casi siempre, resultó de una mezcla de tensiones sociales junto con negociaciones en donde se acentuaba la ventaja estatal. El Presidente

⁴⁵ Cf. Banamex. "Coyuntura y retos" en Examen de la situación económica de México, no. 757, México, diciembre de 1988, pp. 535-547.

mexicano, ciertamente, no permitió que la patria se le deshiciera entre las manos como, dramáticamente, esbozaba una de las opciones del país cuando tomó posesión, el primer día de diciembre de 1982. La patria no se deshizo, pero continuó la despaiciada erosión de las estructuras fundamentales del sistema político mexicano. Más inercias que renovaciones, más negociaciones de ocasión que proyectos de mediano o largo alcance, definieron la actitud gubernamental hacia los trabajadores organizados y sus dirigentes.

En una de sus tesis de campaña, De la Madrid admitía que "la clase trabajadora es producto de la Revolución, se ha estructurado y organizado a partir del esquema del artículo 123 y de la legislación del trabajo" por lo cual, apuntaba, "no es de extrañar, pues, que tenga conciencia política y entienda la lucha sindicalista no sólo como negociación de condiciones de trabajo entre patronos y obreros sino como defensa permanente de los más altos intereses del país. . ." Esa era una de las pocas precisiones que, hasta los comienzos del gobierno, podían hallarse acerca de la política laboral delamadridista. A partir de ella, fue de extrañar la constante actitud de hostilidad, por parte de ese gobierno, a las pocas expresiones sindicales que procuraban ir algo más allá de la inmediata defensa laboral. La conciencia política, cuando pareció haberla en algunos segmentos del sindicalismo, a los responsables de la política laboral delamadridista les resultó desagradable y por ello, en varias ocasiones, digna de persecución.

En esta actitud influyeron mucho los afanes comodines, más sujetos a una larga tradición de conveniencias mutuas que al desamodorramiento que hubiera sido necesario para encarar la crisis económica con algo de agresividad, que salvo pocos momentos de excepción, definieron a las cúpulas del movimiento obrero. Ante la disyuntiva de conformarse con viejos estilos de negociación o emprender una no necesariamente segura búsqueda de nuevas posiciones, las dirigencias del movimiento obrero optaron por una precavida agresividad retórica sin decisión movilizadora. Sólo en una ocasión, cuando el gobierno apenas llegaba a su primer semestre, una fracción de las cúpulas obreras, encabezada por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se animó a desafiar la política económica gubernamental con la convocatoria a una huelga nacional. Aunque a última hora los líderes se desdijeron, centenares de sindicatos colocaron sus banderas rojinegras en la segunda semana de junio de 1983. Nunca antes habían ocurrido tantas huelgas simultáneas en el país. El gobierno se rehusó a dejarse presionar y no concedió el incremento salarial que pedían los sindicatos. Fidel Velázquez y los suyos habían jugado, mal y desorganizadamente, su carta más fuerte. A partir de entonces, el sindicalismo se mantendría en una actitud de general resignación y sólo se distinguiría por algunos conflictos sectoriales aunque, en varias ocasiones, largos y difíciles.

Los dirigentes nacionales del movimiento obrero prefirieron mantener una situación de estancamiento, con tal de no promover la renovación interna de sus prácticas, que quizá hubiera implicado la depuración o sustitución de sus propios liderazgos. Siguiendo la tradición de casi todos sus predecesores, cuando tomó posesión De la Madrid habló de la democratización de la sociedad y dijo que se empeñaría en airear la vida de los sindicatos⁴⁶. No existen evidencias de que así haya ocurrido. Por supuesto, el proyecto de gobierno al que pudo haber aspirado De la Madrid estuvo restringido por la contundente crisis económica que definió todo su sexenio. Los principales esfuerzos gubernamentales y junto con ellos la política de regateos, concesiones y presiones mutuas entre la sociedad y el poder político, tuvieron que estar definidas por el terrible marco restrictivo que impusieron las dificultades productivas y financieras. El país no se le deshizo al gobierno ... pero no existieron condiciones (y acaso, tampoco voluntad) para rectificar a la nación.

2.2.1.- BUSQUEDA DE UN "CAMBIO CUALITATIVO" EN LAS RELACIONES OBRERO-PATRONALES

La lección de junio de 1983, penosa e ineficazmente asimilada por los dirigentes obreros, en cambio fue reconocida advertencia para el gobierno federal. La política laboral cuya ejecución estuvo a cargo del secretario del Trabajo, Arsenio Farrell, junto con la atención a los asuntos rutinarios tuvo a su cargo dos vertientes que afectaban, ambas, la cohesión y las capacidades de representación nacional del movimiento obrero. Por un lado, en distintos

⁴⁶ Entre sus compromisos el día que tomó posesión, 1º de diciembre de 1982, De la Madrid ofrecía: "No nos limitaremos al perfeccionamiento electoral, fomentaremos la democracia en todos los ámbitos de la vida social; en las comunidades, barrios, sindicatos, ligas y asociaciones políticas

momentos del sexenio, pero sobre todo entre 1983 y 1984, el gobierno federal promovió el debilitamiento de la CTM mediante la incorporación de nuevos destacamentos sindicales a varias de las centrales rivales. La Confederación regional de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos (CROM) se beneficiaron de esa política. En varias ocasiones los cetemistas deploraron que el gobierno federal estuviera auspiciando, interviniendo así en asuntos intergremiales, los traslados de grupos de una central a otra.

La otra línea de enfrentamiento no necesariamente abierta pero sí agresiva contra los sindicatos, fue la promoción de negociaciones en cada empresa, en lugar de tratos nacionales como habitualmente se ha acostumbrado en las ramas de actividad donde existen grandes organizaciones gremiales. En su primer informe de gobierno, en septiembre de 1983, el presidente De la Madrid describía así esa tendencia promovida por su gobierno: "En el marco de un cambio cualitativo fundamental en las relaciones obrero-patronales, se evitaron las medidas generales indiscriminadas para solucionar demandas de aumentos salariales. Con ello se reconoció la situación particular de cada empresa, habiendo otorgado cada una de ellas lo que les era posible." Se atendía, de esa manera, a una vieja pretensión de la iniciativa privada, para la cual son más manejables los conflictos localizados en pocas empresas, en lugar de que, por coincidencia en sus reivindicaciones o por solidaridad, los sindicatos miembros de una central o las secciones de un sindicato nacional presenten exigencias conjuntas.

Sin embargo, más que las presiones para diluir su capacidad de negociación conjunta, los sindicatos enfrentaron, muy pronto, mayores amagos. La crisis económica, al empeorar, no acicateó el espíritu contestatario de las organizaciones obreras -como, en una visión simplista, podía haberse esperado- sino, al contrario, las tornó menos agresivas. Ya no era, como apenas cinco años antes, un proyecto de reorientación económica para el conjunto del país lo que el sindicalismo pretendía sino, apenas, mejores salarios. E incluso, en ocasiones que se volvieron frecuentes, a las demandas por aumento salarial y revisión de prestaciones se fue sobreponiendo otra, mucho más elemental: preservar el empleo.

El discurso sindical a partir de 1983 resulta cada vez más defensivo; ya no se habla de modificar los cauces antipopulares de la economía sino, nada más, de conservar las fuentes de trabajo, cosa que no en todos los casos se logra. Además, junto con sus propias fricciones internas el movimiento obrero padecía un creciente aislamiento respecto a otras organizaciones de la sociedad y del mundo político. En agosto de 1983 Fidel Velázquez deploró que al Partido Revolucionario Institucional (PRI) le faltara "calor", pues "nunca nos apoya en alguna huelga o demanda salarial de características generales". "Si quisiéramos rebasar la actual circunstancia económica, tendríamos que luchar frontalmente y podríamos crear una situación social fuerte y grave para la situación económica de México", decía en esa ocasión, a la vez amenazador y colaborador, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México.

El mensaje de Velázquez, que en esos términos resultaba muy representativo de lo que opinaban las cúpulas sindicales, era directo: podríamos exigir mayores salarios y con ello trastocar aún más la dificultada economía, pero no queremos. Quizá, por otro lado, tampoco podían. La crisis económica determinaba autolimitaciones en el sindicalismo pero también, toda clase de rezagos en los niveles de subsistencia de los asalariados. Así, los acontecimientos sindicales pasaron a ser casi marginales respecto a lo que ocurría en el conjunto del movimiento obrero.

Uno de los pocos movimientos que se organizó fue el de los trabajadores de la industria nuclear, que se encontraron en la inédita situación de no poder levantar la huelga que habían estallado, como muchos otros sindicatos, a mediados de 1983 y que tuvieron que permanecer año y medio en una situación legal y políticamente indefinida. También el movimiento de los trabajadores de Refrescos Pascual fue de larga duración, aunque a la postre con resultados favorables. Después de varias huelgas e incluso de agresiones por parte del dueño de la empresa (quien fue señalado como responsable del asesinato de dos trabajadores en 1982) el 18 de agosto de 1984 se constituyó una Sociedad Cooperativa que, en un prolongado y accidentado juicio, logró quedarse con dos plantas de esta empresa, con apoyo financiero del gobierno.

La de los trabajadores de Refrescos Pascual fue una experiencia inédita, en donde luego de una intensa movilización por demandas salariales y por el reconocimiento de un sindicato democrático, ese grupo obrero

decidió pelear por la administración de su fuente de trabajo. La simpatía social que suscitó ese caso, junto con el hecho de que la cooperativa no afectaba significativamente a las grandes empresas de la industria refresquera, contribuyeron para el éxito del empeño de los trabajadores de Pascual. Pero era, sólo, una excepción en medio de un panorama definido por las restricciones en todo.

2.2.2.- RESPONSABILIDAD SINDICAL RECONOCIDA, PERO CON ANIQUILACION DE UN SINDICATO NACIONALISTA.

El discurso gubernamental también estuvo inevitable, machaconamente orientado por la crisis. En su segundo informe de gobierno, en septiembre de 1984, De la Madrid recalcó que "aún en la crisis, el país no se ha paralizado" e insistió, " ... la crisis no nos ha vencido". El Presidente consideraba entonces que "factor fundamental de la preservación de la planta productiva y el empleo ha sido la moderación salarial. Sin el realismo y la madurez del movimiento obrero organizado no sería posible la reordenación económica". Y en su discurso, ofrecía este homenaje al sindicalismo: "Reconozco su apoyo y sentido de responsabilidad. Los resultados de su actitud están a la vista: hemos conservado las fuentes de trabajo e iniciamos el camino de la recuperación." Pero el empleo no crecía tanto como la demanda, intensificada por los trabajadores jóvenes que apenas buscaban incorporarse a la producción y a la recuperación económica, la cual no se lograría en el transcurso del sexenio.

Además, desde el poder político se definía, no siempre con claridad ni fortuna, a cuáles sectores sindicales habría de considerarse como maduros, responsables o realistas. El de los trabajadores nucleares, uno de los destacamentos que, sin falsos encomios, legítimamente pudo considerarse entre los de mayor afán de responsabilidad nacional, sería disgregado pocas semanas después de aquella declaración presidencial. En los últimos días de 1984, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa presidencial de Ley Nuclear que establecía la desaparición de la empresa Uranio Mexicano; más que por conveniencia técnica, financiera o científica, así se decidía para que, junto con dicha razón social, dejara de existir la organización gremial con la que había tenido relaciones laborales, el Sindicato Único de Trabajadores de la industria Nuclear (SUTIN). Con un discurso nacionalista, heredado de la Tendencia Democrática del sindicalismo electricista en los años setenta, el SUTIN había pugnado por una reorientación del desarrollo nuclear que se oponía a los intereses de empresas transnacionales. Simultáneamente, desplegó un ambicioso proyecto de relaciones que le permitía, estando en el Congreso del Trabajo, ser uno de los organismos más entramados con el sindicalismo no institucional. La desaparición del SUTIN puede considerarse una de las medidas más duras del presidente Miguel de la Madrid en contra de un agrupamiento obrero. No valieron razones técnicas ni argumentos políticos para impedir la liquidación de ese sindicato respecto al cual el Presidente mostraba una notable animosidad personal.

Esos eran contrapuntos en una relación no precisamente suave. La identificación entre el movimiento obrero y el Estado tendría que conservarse, por motivos de conveniencia recíproca, aun cuando era claro que existían episodios y núcleos de tirantez entre ambos. El 24 de mayo de 1985, varias docenas de trabajadores de la mina Real del Monte, en Pachuca, emprendieron una protesta igual de inusitada que vistosa: se despojaron de sus raídos uniformes y quedaron sólo con cascos, cinturones y botas, para quejarse por la falta de equipo de seguridad. Las fotografías de los mineros desnudos dieron la vuelta al mundo y les ayudaron a que su movimiento no padeciera represalias, al menos de inmediato.

También por esas fechas fue desplegada una llamativa -aunque finalmente infortunada- movilización de trabajadores despedidos de oficinas públicas. La caída en los ingresos del gobierno federal propiciaba esa medida, que varios millares de burócratas quisieron enfrentar con la formación del Frente Intersecretarial en Defensa del Empleo (FIDE), en donde participaban empleados de por lo menos media docena de secretarías de Estado. Al menos 27 mil trabajadores fueron despedidos en esos meses y otros 23 mil, aproximadamente, fueron reubicados en sitios distintos de donde originalmente laboraban. Los terremotos de ese año contribuyeron a desarticular la protesta de los burócratas aun cuando un par de años después se mantenían, con fuerza, núcleos disidentes en algunas secretarías. Singularmente, en la de Agricultura y Recursos Hidráulicos pudieron conservarse como corriente sindical, y crecer, agrupamientos de trabajadores que después de ganar la dirección de varias secciones sindicales mantuvieron prácticas de protesta que tuvieron gran eficacia publicitaria, como cuando se quitaban la camisa (en señal de queja porque no les compraban uniformes de trabajo) en las conmemoraciones

del primero de mayo frente a Palacio Nacional, o cuando algunos de ellos sostuvieron, a veces con grave riesgo para su salud, dos huelgas de hambre, en 1987 y 1988.

2.2.3.- ALIANZA HISTORICA, INVARIABLE EN EL DISCURSO, MELLADA POR LA CRISIS

Para mediados del sexenio, aunque numéricamente poco significativos, parecía claro que los brotes de descontento incluso entre los tradicionalmente fieles trabajadores del sector público, marcarían un creciente distanciamiento entre el gobierno y núcleos de sus empleados. Pero esta situación no sería reconocida en el tercer informe de gobierno, que fue presentado en un ambiente de reclamaciones de aumentos salariales por parte de las dirigencias obreras. El primero de septiembre de 1985, el Presidente consideraba que "la alianza histórica entre la clase trabajadora y el gobierno de la República ha permanecido invariable", y explicó: "se acredita diariamente en el respeto a los derechos de los asalariados y en la plenitud de nuestro régimen de derecho". Salarios y empleo, se insistía, no habían caído tanto como otros indicadores económicos. Es decir, se les reiteraba a los dirigentes obreros y a sus representados: las cosas van mal, pero podrían estar aún peor.

Y efectivamente, podrían haberlo estado. Ese no era consuelo para los pocos brotes de sindicalismo insurgente que todavía se mantenían, como tampoco lo era para los dirigentes obreros, lo mismo a escala regional que nacional, que veían con preocupación el deterioro de sus tradicionales (y para entonces crecientemente ineficaces) capacidades para formar consenso entre los trabajadores. Fundamentalmente por sus inflexibilidades internas, el sindicalismo careció de una actitud pública de mayor significación.

Cuando los terremotos, la sociedad mexicana fue recorrida por un notable ánimo solidario del que estuvieron marginadas organizaciones de muchos géneros, incluso los partidos, pero que por el sindicalismo, no pasó ni por asomo. Los sindicatos, inhábiles para movilizarse por reivindicaciones propias, tampoco lo hicieron en la oleada cívica de aquella ocasión.

Entonces nació el más sólido de los escasos sindicatos independientes que surgieron en el sexenio: el de las costureras. Después de padecer infames condiciones laborales, varios centenares de trabajadoras de la confección de ropa, alentadas por la emoción social que siguió a los terremotos, crearon el Sindicato 19 de Septiembre. Las autoridades laborales inicialmente facilitaron el registro del nuevo sindicato que, sin embargo, tardaría casi tres años en regularizar su situación jurídica. Quizá en parte ello se debió a la actitud contestataria de esas trabajadoras, estrechamente identificadas con sindicatos no institucionales y constantemente reacias a que su nueva organización estuviera adherida a alguna central del Congreso del Trabajo.

Otros derrumbes, por supuesto menos dolorosos y significativos que los de septiembre de 1985, comenzarían a ocurrir en las otrora buenas relaciones entre Estado y sindicalismo. No fue un desplome abrupto. Se trató de un distanciamiento paulatino, que por cotidiano era difícilmente perceptible. Tampoco fue un alejamiento que pueda calificarse como definitivo. Pian pianito, los dirigentes obreros nacionales insistieron en manifestar alarma por el rumbo económico, los cambios políticos⁴⁷ y hasta por las erosiones en el propio sindicalismo. No nos referimos a cambios repentinos, ni necesariamente definitivos, sino a la creación de nuevas condiciones cuyas consecuencias empezarían a ser notables hasta el gobierno siguiente. Pero hacia fines de 1986, ya casi en el segundo tercio del sexenio delamadridista, práctica y discurso laborales, por parte del gobierno, eran más retóricas que propositivos.

2.2.4.- PRESERVACION, AUNQUE CON CIERRES Y QUIEBRAS, DE FUENTES DE EMPLEO

Ese primero de septiembre, el cuarto informe incluyó el siguiente párrafo: "En relación con el empleo productivo, a mi gobierno le ha tocado enfrentar dos aspectos negativos, por un lado las fuertes presiones que sobre

⁴⁷ La CTM llegó a oponerse con gran vehemencia a la reforma política del lopezportillismo y, más tarde, a medidas del siguiente gobierno, como la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. "No le demos más espacios a la oposición", reiteraban los líderes nacionales de esa confederación.

la tasa de ocupación ejerce la crisis y, por el otro, el fenómeno demográfico que no siempre recordamos." Y se explicaba, luego, que "en las relaciones obrero-patronales, se ha corroborado que la conciliación es la vía más práctica y efectiva para resolver los conflictos, reiterando las partes de esa manera su madurez y confianza en las instituciones responsables de la justicia laboral".

Madurez y confianza, no eran resultado del bienestar -como, históricamente salvo pequeñas fases, había ocurrido en el desarrollo del sindicalismo-. Se trataba de actitudes originadas por una suerte de desangelada resignación que recorría a las organizaciones gremiales. Tanto así, que ni siquiera gremios otrora muy celosos de su integridad, y por ello de la defensa de las fuentes de trabajo, pudieron impedir el cierre de instituciones como en junio de 1986, dos meses antes del Informe, la Fundidora de Monterrey. La decisión gubernamental de clausurar esa fuente laboral, con gran tradición tanto en el gremio de los metalúrgicos como en la capital regiomontana, fue muy impugnada incluso por representantes obreros, miembros del PRI, en la Cámara de Diputados. Ni así se evitó el cierre.

Tampoco se evitaron testimonios de reproches obreros aislados, pero vistosos. A comienzos de 1987 el Congreso del Trabajo exigió un aumento salarial de urgencia, sobre todo en las empresas paraestatales en donde no había habido incremento desde varios meses atrás. La dirección de esa central-cúpula, que en ese momento estaba encabezada por el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, se convirtió en activa promotora de un emplazamiento a huelga que amenazaba con asumir rasgos nacionales, hasta que el Presidente de la República pidió una prórroga para examinar diversas posibilidades de aumento salarial. Sin embargo el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no consintió en demorar el estallido de su huelga, que comenzó el 27 de febrero y se prolongó por seis días.

2.2.5.- AUMENTOS DE URGENCIA Y DOS HUELGAS CONTRA LA POLITICA ECONOMICA

La huelga del SME fue posiblemente la más importante del sexenio por tratarse de un sindicato industrial, con notable influencia en una actividad estratégica y por tener la adhesión, al menos declarativa, del liderazgo obrero nacional. Junto con ella, el SME tuvo una notoria solidaridad de grupos de izquierda y estudiantiles (ese movimiento coincidía con el auge del Consejo Estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM). Además, los sindicalistas del SME dijeron, de manera abierta, que su huelga era contra la política económica del gobierno y, específicamente, contra los funcionarios que tenían la responsabilidad de elaborarla y ponerla en práctica. La huelga estuvo limitada por la aplicación de la requisa -el discutido recurso legal que le permite al gobierno intervenir empresas consideradas como de interés público, cuando la continuidad de su operación está en riesgo-.

Los electricistas del SME comprobaron que era factible hacer huelgas en servicios públicos, aunque padecieran las restricciones de la requisa. Esa posibilidad sería explorada también por los telefonistas que, a pesar de no haber sostenido la convocatoria que su propio secretario general había compartido, para estallar huelgas a fines de febrero, dos meses después, el 8 de abril, desplegaron sus banderas rojinegras. La huelga del Sindicato de Telefonistas (SUTRM), afectada por la requisa, duró ocho días e -igual que, antes, el SME- obtuvo un aumento salarial de urgencia.

En el penúltimo informe, en 1987, De la Madrid daba cuenta de tres aumentos del salario mínimo en un solo año aunque no recordaba que, ni así, las remuneraciones crecían al ritmo de la inflación. "Por otra parte -acotaba-, en los procesos de negociación colectiva los sindicatos han obtenido para sus agremiados prestaciones económicas complementarias del salario, lo cual ha contribuido a defender el ingreso de los trabajadores."

La estrategia sugerida desde comienzos del sexenio, para favorecer los contratos locales en detrimento de las negociaciones generales, se había impuesto a pesar de las quejas de los sindicatos nacionales de industria. De tal manera, las agrupaciones con presencia regional o nacional tendían a debilitarse además de que las condiciones laborales llegaban a ser distintas entre sí, escindiendo a los trabajadores incluso en la posibilidad de levantar demandas comunes en una misma rama de actividad. Pese a ello, el Presidente consideraba que "la activa participación del Congreso del Trabajo y de las organizaciones que lo integran, ha permitido que el gobierno ejerza con mayor amplitud la responsabilidad de fortalecer los derechos de los trabajadores".

De la Madrid no olvidaba que, por esos años, el organismo-cúpula del movimiento obrero seguía padeciendo un notable estancamiento del que no podían sacarlo ni siquiera algunos de los pocos sectores activos como telefonistas y electricistas que seguían formando parte de él. Varios de esos sindicatos llegaron a constituir un frente, a partir de su común adscripción en empresas del sector público. Sin embargo uno de los principales, el de Técnicos y Trabajadores de la empresa Aeroméxico, se quedó sin fuente laboral. Ese sindicato, que reunía a trabajadores de tierra, estalló una huelga en abril de 1988 en protesta por la venta de varios aviones que, a su juicio, eran rentables y que significaban posibilidades de empleo para sus agremiados. A pesar de la rapidez con que, en otras suspensiones laborales en servicios públicos, el gobierno había dispuesto la requisa, en esta ocasión no ocurrió así. Es más, el sindicato, a última hora, quiso desdecirse del emplazamiento a huelga, pero las autoridades del Trabajo no lo consintieron. Y es que la suspensión de actividades iba a ser tomada como pretexto para precipitar la quiebra de Aeronaves de México, cuya adscripción al sector paraestatal el gobierno consideraba onerosa. Quebrada la empresa y levantado, forzosamente, el estado de huelga, la gran mayoría de los trabajadores de Aeroméxico - incluso pilotos y sobrecargos- fueron liquidados para dar paso a la creación de una nueva línea aérea.

2.2.6.- PRUDENCIA Y CRISIS, PROLOGO DEL 4 DE JULIO Y DE LA PROTESTA MAGISTERIAL

Después de seis años de restricciones salariales y dificultades para la acción gremial, el saldo que la época Delamadridista podía ofrecer era desventajoso para los trabajadores. "Hemos reconocido dijo entonces el Presidente como grave y preocupante la caída de los salarios y como lacerantes el desempleo y la inflación, pero hemos entendido que la única salida válida para las mayorías está asociada a una política económica realista." No se podía informar de recuperación salarial pero sí, en opinión del gobernante saliente, de ausencia de conflictos sociales significativos: "Hemos obtenido importantes logros en un clima de paz social, de libertad, de estabilidad y de conciliación. Optamos por la prudencia, nunca aceptamos fórmulas riesgosas o aventureras que repercutirían en mayores costos políticos y sociales." En el último año, se había puesto en práctica el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), que logró establecer diques a la inflación, que sin embargo para septiembre era ya, en un año, de 105% y que, como no insistía en medidas para recuperación del bienestar, encontró la oposición, a veces abierta, del sindicalismo; "... el Pacto enfrenta el escepticismo inicial de diversos grupos sociales", reconoció De la Madrid en su último mensaje ante el Congreso.

Pocos días antes de concluir su mandato, De la Madrid admitía que en los seis años recientes, el salario real había "bajado en alrededor de 40%", aun cuando insistía en que un mayor aumento en las remuneraciones hubiera significado más despidos y cierre de fuentes de empleo. Por esas fechas, la CTM consideraba que los salarios reales habían descendido 52.3% en el sexenio. Todo indica que las cifras del Presidente se acercan más a la realidad que los cálculos cetemistas, sobre todo si se considera el descenso del salario mínimo en comparación con el avance del índice de precios al consumidor. Sin embargo, una disminución del orden de 40% bastó para ser histórica en la situación de los trabajadores mexicanos que, no en balde, empezaron a mostrar algunos cambios históricos en sus actitudes públicas.

Poco a poco, por ejemplo, los trabajadores de la enseñanza se animaron a expresar su descontento. Lenta, dificultosamente, padeciendo lo mismo animosidades administrativas que auténticas represiones físicas (suman docenas los trabajadores de ese gremio que resultaron muertos, heridos y secuestrados), los maestros ganaron experiencia hasta que llegarían a protagonizar el movimiento sindical más importante de la década. En Oaxaca y en Chiapas, desde que comenzó el sexenio delamadridista, era evidente que la mayoría, en las secciones 22 y 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), era para grupos locales que disientían de la política de la dirección nacional de ese organismo. Como su queja era pública y activa desde el grupo Vanguardia Revolucionaria, que tenía la hegemonía en el sindicato, se les acosó constantemente. Una y otra vez, en esos estados los maestros de afán democrático pedían, junto con sus reivindicaciones económicas, que la dirección nacional, como indicaban los estatutos del SNTE, avalara la representatividad de los comités seccionales que habían designado. Una y otra vez, a lo largo de todo el sexenio, las autoridades federales prometieron que regularizarían la actividad gremial en dichos estados pero, reiteradamente, se imponía el rechazo de Vanguardia.

Al mismo tiempo en otras entidades, particularmente en el Distrito Federal, se desarrollaba una, primero poco vistosa y a la postre muy amplia, protesta magisterial, sobre todo ante los abusos de los dirigentes locales y contra los bajos salarios en ese gremio. También allí se postergó la solución a las peticiones de los profesores. Esa displicencia gubernamental respecto a los maestros tendría costos poco después, en los primeros meses del siguiente gobierno. Es imposible entender a la movilización magisterial sin recordar las muchas promesas incumplidas que los maestros padecieron en seis años de gobierno delamadridista.

Allí y en otros gremios habría otra manera de reclamaciones en las elecciones federales de julio de 1988, cuando muchos factores se conjugaron para que el PRI estuviera en aprietos como quizá nunca antes en su historia. Entre otros motivos, parece no haber sido menor la respuesta que, de tal manera, algunos núcleos obreros pudieron ofrecer a la crisis. Como el voto, pese a suspicacias y trampas, en lo fundamental es secreto, no puede saberse, bien a bien, cómo votaron los sindicatos en las últimas elecciones del sexenio. Sin embargo, fue notable la simpatía por la candidatura cardenista en algunas de las principales zonas obreras⁴⁸.

El de Miguel de la Madrid fue un sexenio de inicial, muy inicial, transición para el sindicalismo. No existieron cambios espectaculares, en parte porque en ningún otro orden, prácticamente, los hubo en aquellos seis pausados, administrados años. Pero también porque sólo al cabo de una larga fase de crisis económica, que fue previa a su propio desplazamiento político, las cúpulas del sindicalismo nacional comenzarían a manifestar algo de beligerancia ante políticas en cuya elaboración no participan y las que, por añadidura, en poco les benefician. Junto con ellas y acaso con más dinamismo, algunos muy localizados grupos de trabajadores desplegaron inconformidades que a veces, incluso, sabían que iban a quedar únicamente en la reclamación testimonial pero que de todos modos descaban mostrar.

El gobierno delamadridista buscó mantener sin asperezas notables la relación con el sindicalismo, pero no le era posible porque la administración de la crisis lo llevaba a desplegar una política económica poco grata para los asalariados. Tampoco podía romper amplia ni abiertamente con las cúpulas sindicales, pues en ellas encontraba una reserva de consenso que podría serle necesaria. Más que aliados, en los líderes obreros el gobierno de Miguel de la Madrid quiso ver subordinados. Los dirigentes nacionales del sindicalismo acabaron por resignarse y al momento del cambio de gobierno apostaron a la designación de un candidato que les garantizara una relación menos tensa, aunque no tuvieron fortuna en sus apuestas políticas. Así, la estrategia laboral del delamadridismo puede verse como intermedia entre los viejos tiempos del clientelismo a toda costa (cuando había recursos para sostenerlo) y los intentos de renovación que, a costa de la modernidad política, sacrifican antiguos rezagos corporativos.

La ausencia de opciones sindicales auténticamente alternativas al liderazgo obrero tradicional, facilitó esa suerte de tensa inmovilidad que definió -con excepciones como las antes mencionadas a la política laboral del sexenio 1982-1988. No estaba presente la dinámica insurgencia obrera de la primera mitad de los años setenta, ni la búsqueda propositiva que las cúpulas (sobre todo cetemistas) se animaron a emprender a fines de aquella década. Fue, en el plano sindical, un sexenio pobre en proposiciones (no había programa obrero a la altura de las exigencias de la nueva crisis) y también en recomposiciones en la estructura de las organizaciones gremiales. Programa y restructuración organizativa, quedaron pendientes. Renovación o sustitución del liderazgo obrero nacional, así como despliegue de nuevos dirigentes intermedios también estuvieron pospuestos. Casi nada cambió, excepto la capacidad adquisitiva de los salarios. Muchas cosas quedaron para después. Es imposible evitar la tentación de calificarlo como un sexenio que, para el mundo obrero, fue simple y dificultadamente gris.

⁴⁸ En una muestra al azar de siete regiones obreras (Tijuana, Monclova, Ecatepec, Tlalnepanilla, Cuernavaca, Lázaro Cárdenas y Coahuila) encontramos que, en promedio, Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), obtuvo 51.4% de los votos; Carlos Salinas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 30.3%, y Manuel J. Clouthier, del Partido Acción Nacional (PAN), 18.3%. Este ejercicio, siempre a partir de los datos electorales oficiales, fue realizado para una colaboración en el libro *La sucesión presidencial-II*, coordinado por Abraham Nuncio.

2.3.- LA POLÍTICA Y EL SINDICALISMO EN UNA DÉCADA DE TRANSFORMACIONES

La revolución tecnológica de enorme alcance que actualmente se presenta en el mundo, lo mismo reduce las distancias y los tiempos en los procesos productivos, e impone nuevos imperativos de competencia y calidad, que obliga a realizar uno de los requerimientos fundamentales para el país: renovar su estructura económica. Se analizarán una serie de nudos o trabas que el sistema político experimentó durante la administración de Miguel de la Madrid para formular la nueva estrategia de desarrollo económico. Las limitaciones de esa estrategia estuvieron referidas, primordialmente, al problema de los actores sociales y de las alianzas políticas que el Estado mexicano necesitó para instrumentar el nuevo proyecto.

El caso mexicano presenta múltiples y profundas transformaciones, las cuales permiten afirmar que en los años recientes lo que ha cambiado radicalmente ha sido la sociedad⁴⁹. A partir de 1960 el país consolidó su perfil urbano. Por lo mismo, nuevos actores sociales como las "clases medias", cada día más heterogéneas y más demandantes, cobraron importancia⁵⁰, además de la presencia de un movimiento urbano popular que adquiría una dimensión nacional significativa. Con la aparición o fortalecimiento de estos nuevos actores la memoria política del conflicto también se actualizaba: el Estado instrumentó su proyecto político desatendiendo, en el mediano plazo, a los actores tradicionales.

El Estado con la política de apertura democrática que asimilaba el conflicto de 1968 inició un paulatino desmantelamiento de su vieja sustentación corporativa. La modernización política, ciudadana, se iniciaba. Así, la principal transformación política que se presentó durante la década de los años setenta fue la de los actores sociales y la de los escenarios políticos.

Se destacan algunos ejemplos: la cabida de diversos agrupamientos políticos con posibilidades de representación como fueron los partidos o la entrada en escena de los movimientos urbanos populares con una ascendente importancia orgánica⁵¹. Al mismo tiempo las clases sociales experimentaron cambios: los obreros lograron nuevas alianzas y recomposiciones, recuérdese la creación de un nuevo espacio de representación, el Congreso del Trabajo en 1966⁵². Los empresarios también habían transitado de una relación y negociación directa y por sectores con el gobierno, a una organización corporativa, de presión, de intereses comunes: el Consejo Coordinador Empresarial. Por otra parte, en el ámbito rural se agudizaron conflictos que desembocaron en el surgimiento de importantes organizaciones campesinas e indígenas.

La década de los setenta significó el reacomodo de las distintas fuerzas sociales. Esto se debió a una yuxtaposición del inicio de una crisis económica con otra política; esto es, de legitimidad, planteando la necesidad de que el Estado reconociera las diversas mutaciones y manifestaciones políticas de los actores sociales, a la vez pretendiendo renovar un pacto político basado en una nueva correlación de fuerzas. El reacomodo encontró su mejor expresión en el caso del movimiento obrero, que tuvo como variación los mecanismos de representación y mediación con el Estado. Las burocracias sindicales cambiaron, o se vieron obligadas a modificar su relación con este último⁵³. Después de la experiencia del sindicalismo independiente y en particular de la Tendencia Democrática del SUTERM, el movimiento obrero intentó formular un programa nacional que permitiera redefinir esta relación. La presentación de programas fue constante: la Declaración de Guadalajara, abril de 1975; el "Plan Nacional de emergencia", promulgado por la XC Asamblea Nacional de la CTM en mayo de 1978; otro, el de la CTM "La situación actual de la economía nacional y los trabajadores" del mismo año; el del Sindicato Mexicano

⁴⁹ Samuel León e Ignacio Marván. "Los movimientos sociales en México, 1968-1984", Los movimientos populares en América Latina. México, Siglo XXI, 1989.

⁵⁰ Soledad Lozada, Clases medias y política en México. México, El Colegio de México, 1988.

⁵¹ Juan Manuel Ramírez S., El movimiento urbano popular en México. México, Siglo XXI, 1986.

⁵² María Xelhuantzi, "El Congreso del Trabajo. Los primeros diez años: formación y desarrollo en una época de insurgencia obrera", Alejandra Moreno y Samuel León, 75 años de sindicalismo mexicano, México INEHRM, 1985.

⁵³ Cf. Samuel León y María Xelhuantzi, "Los obreros, las burocracias sindicales y la política del gobierno", Pablo González Casanova, Samuel León e Ignacio Marván (comps), El obrero mexicano, vol. V, México, Siglo XXI, 1985.

de Electricistas "Del SME a las organizaciones obreras y al pueblo de México"; o la del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana de julio de 1978.

Los trabajadores pretendieron definir estrategias sindicales y políticas que trajeran como resultado una mayor cohesión de las agrupaciones integrantes del Congreso del Trabajo, que si bien se había creado en 1966, para 1978, con la celebración de su primera Asamblea Nacional Ordinaria, lograba fusionar a la gran mayoría de la clase obrera organizada del país.

En términos generales, las demandas prioritarias durante la administración de López Portillo se centraron en empleo, salarios y promoción de la empresa social estatal. Esto constituía un campo de demandas en la negociación, en la política laboral y perfilaba, a la vez, exigencias a nivel nacional por parte de los trabajadores.

El peso de la CTM había sido significativo en ese proceso, pero ello no restó importancia a la presencia de otras corrientes sindicales dentro del Congreso del Trabajo. Los trabajadores lograban una recomposición y demandaban un nuevo corporativismo que redundaría en el "fortalecimiento del pacto político" con el Estado. Los interlocutores, base de sustentación del Estado, iban a depender de la voluntad estatal de elegirlos como principales actores y no de los nuevos sujetos sociales o de los propios partidos políticos.

La crisis del Estado interventor que se produjo mundialmente, para el caso mexicano constituye, a partir de 1980, una profunda alteración del sistema de alianzas y pactos políticos que le han dado sustentación al Estado durante varias décadas. La crisis de México presenta una dualidad: por un lado las necesidades de innovación tecnológica y, por el otro, las necesidades de legitimación del sistema político.

La tradición basada en el requerimiento de gestión e intervención política y económica del Estado para institucionalizar, regular y encauzar el conflicto fue posible vía una política social que cumpliera los propósitos redistributivos por medio de la "justicia social". En el campo de la política laboral y del crecimiento de las instituciones de seguridad social, durante la década de los sesenta y primeros años de la siguiente, la negociación en todos los ámbitos y sus interlocutores se caracterizó por el tripartismo, donde gobierno, cúpulas empresariales y sindicales fungieron como los actores fundamentales. En el tripartismo justamente descansaron buena parte de los soportes de la legitimidad.

La nueva sociedad de masas, heterogénea, urbana, altamente concentrada y con una fuerte presión demográfica sin precedentes en el empleo⁵⁴, educación y servicios, en los años setenta parecía dar fin al viejo pacto corporativo, lo que se traduciría en un constante detrimento de la representación obrera.

Se inició la construcción de un proyecto político con una lógica liberal que tendería a "enterrar" al viejo aparato corporativo. De la apertura política a la aprobación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales en 1977, la emisión del nuevo Código Federal Electoral, las modificaciones al artículo 115 en materia de descentralización municipal y el establecimiento de la nueva Asamblea de Representantes en el Distrito Federal, plantearon las bases de un pacto político moderno, de ciudadanos como nuevos interlocutores. Así, quedaron establecidas las bases de un flamante mercado: el electoral, sustento de un proyecto que no buscaría el clientelismo político de las corporaciones sino que intentaría encontrar su legitimidad en la democracia ciudadana.

La reforma política debería ser capaz de articular a los nuevos sujetos sociales. Los partidos políticos de izquierda darían un viraje ideológico donde la clase obrera no sería su referente teórico y práctico sino el nuevo mercado electoral⁵⁵. En algunos documentos sindicales a los que se hace referencia antes, las direcciones sindicales plasmaron demandas de carácter inmediato (salarios, empleo), así como de mayor injerencia en política

⁵⁴ "La población en edad de trabajar aparecerá tocando las puertas de la estructura económica entre 1985 y 1990 en una cantidad cercana a los 8 millones, la mayor demanda de empleo... y que se mantendrá estable hasta el año 2000 trayendo cada año un millón adicional de mexicanos a la fuerza de trabajo." Véase Héctor Aguilar Camín, "El canto del futuro", Nexos, núm. 100, abril de 1986. Cf. Saúl Trejo Reyes, Empleo para todos, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.

⁵⁵ Véase José María Calderón, "La ruptura del colaboracionismo de clases y las perspectivas de la democracia", La crisis del Estado de bienestar, vol. 11, México, Siglo XXI, pp. 85-128.

laboral; en ocasiones en franca oposición al proyecto de reforma política que restringía sus espacios de representación y negociación con el Estado.

En julio de 1978, durante la primera Asamblea Nacional, el Congreso del Trabajo propuso una reforma económica que recuperara los espacios amenazados por la Reforma Política, así como incrementar su representación para mantener la capacidad de movilización con sus representados. Esa reforma, en síntesis, demandaba la rectoría económica del Estado; la sectorización de los campos paraestatal y social y una intervención más decisiva en el terreno productivo⁵⁶. Ese fue el origen de las reformas a los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales por parte de la administración de Miguel de la Madrid, pero agregando el campo del sector privado⁵⁷.

La administración de Miguel de la Madrid se significó por el continuo esfuerzo de refuncionalizar los componentes del sistema político y económico intentando la modernización en el sentido estricto de la palabra. En una clara política de respuestas económicas -en materia de estancamiento, ajuste, endeudamiento externo, "adelgazamiento del Estado", entre otras y, a la vez, modernizando la política mediante el desmantelamiento del viejo Estado corporativo, "populista". Para la administración del presidente De la Madrid la eficacia del viejo aparato y de su sistema de alianzas pudo mantenerse mientras el modelo económico había sido viable, pues su límite había llegado en 1982.

A principios de ese sexenio y en el marco de una política global de reconversión, se consideró necesario primero, restaurar el marco de acción de los agentes fundamentales. Así, en diciembre de 1982, se presentaron las iniciativas de reforma de los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución antes mencionadas. En ellas se retomaba la propuesta del Congreso del Trabajo (1978), en la que se definía al Estado como rector de lo económico, sectorizando a los agentes productivos en lo social, público y privado. Se intentó readecuar los límites de acción de los actores, incluyendo al Estado, con el fin de concertar un nuevo pacto social congruente con un marco normativo estable. Con la rectoría estatal, la industria paraestatal se abocaría a desarrollar ámbitos estratégicos de la economía, en tanto que al sector social le correspondería la producción de básicos necesarios para la población trabajadora en el campo y la ciudad, así como la comercialización de los mismos. Al sector privado se le reservaría el ámbito comercial y la industria en general.

Las reformas produjeron reacciones muy encontradas. La parte empresarial habló de la confirmación del totalitarismo estatal; la izquierda lo consideró como un paso hacia atrás, pues con ello el Estado se autolimitaba en sus posibilidades de expandir el sector paraestatal.

Con una virtual suspensión de pagos, en el mes de diciembre de 1982, se presentó el Programa Inmediato de Recuperación Económica (PIRE), al que seguirían el Plan Nacional de Desarrollo y, para 1986, el Programa de Aliento y Crecimiento. En el inter se firmó la adhesión de México al GATT y se instrumentaron medidas de protección para la planta productiva. El modelo de modernización-reconversión económica propuesto por el sector público, que incluía además el pago de la deuda externa a toda costa, logró minar significativamente los ámbitos de las alianzas con los sectores populares.

Modernización, reconversión, reestructuración de la economía a partir de 1982 han sido la noción recurrente para contrarrestar el efecto de la crisis en México. Iniciada la administración de Miguel de la Madrid se constituyó la paradoja de pretender ahondar en una reforma política a partir de la modificación del viejo pacto corporativo y, a la vez, iniciar la reconversión industrial sin destacar la expedita negociación laboral. Los ejemplos en los conflictos laborales se empezaron a multiplicar en los casos de las industrias automotriz, farmacéutica, electrónica, petroquímica, textil, calzado, electrodomésticos y línea blanca. La exclusión de la organización sindical era evidente en dos campos, primero en la representación, en donde el viejo sindicalismo no embonaba y, segundo, en

⁵⁶ Cf Samuel León y Germán Pérez F. del C., "México en busca de la legitimidad perdida", 17 ángulos de un sexenio, México, Plaza y Valdés, 1987.

⁵⁷ Germán Pérez F. del C., "Clase obrera, sector social y proyecto nacional", Alejandra Moreno y Samuel León (comps.), 75 años de sindicalismo mexicano, México, INEHRM, 1986.

el proyecto de modernización de la economía; no se instalaron como interlocutores, sino al margen de la negociación laboral. Había una suerte de "parálisis obrera".

A la vez, y no obstante la crisis, surgieron una serie de complejos industriales en varias zonas de la República, como las de Guaymas Hermosillo; EXPORTEC en el estado de México; Tlajomulco, Jalisco; Xicoténcatl, Tlaxcala; Morelia; Navojoa y Ciudad Obregón en Sonora; los de Zacatecas y Fresnillo; dos en Aguascalientes y el desarrollo de nuevos corredores industriales en Topolobampo y Los Mochis, en Sinaloa, y el de Mérida-Progreso en Yucatán. Ello no se tradujo en una mínima fortaleza de múltiples organizaciones sindicales ni en su presencia en la negociación laboral. Los sindicatos por ramas no lograron ni pudieron influir en su otrora capacidad de gestión y representación en esas zonas. La apertura del mercado interno se iniciaba en condiciones de profunda desigualdad tecnológica y de competencia de la industria nacional frente a la extranjera.

La modernización requería, entre otras cosas, una mayor participación del sector privado; mayor inversión extranjera; reducción de gasto público; una economía "sana" antiproteccionista, antisubvencionista; desincorporación de empresas estatales no prioritarias mediante su venta, liquidación o fusión, y el fortalecimiento de las finanzas públicas.

La década de los ochenta se empezaría a caracterizar por la presencia de un Estado mermado, contraído, endeudado, deficitario, sin los excedentes de antes. Un Estado que empezaba a caminar en el sentido opuesto a las costumbres de sus trabajadores. Como lo ha señalado Héctor Aguilar Camín, al término de los ochenta la prioridad del Estado empleador es la productividad y no la protección social. La modernización económica golpea en el centro los hábitos de organización del sindicalismo mexicano⁵⁸.

Para 1987 la realidad fue, sin embargo, poco halagüena: déficit del sector público sin posibles reducciones, nulo control de la inflación; pago sostenido de la deuda externa y vertiginosa caída del precio del petróleo, nuestro principal ingreso.

Con la celebración del Pacto de Solidaridad Económica en diciembre de 1987 se marcaba un parteaguas en el sistema de alianzas políticas del sexenio en análisis. El distanciamiento de la administración de Miguel de la Madrid del sindicalismo, desde los inicios de la misma, se modificó asombrosamente. El ajuste a los precios de los básicos de la economía, mantener los salarios y otras medidas concretadas en el Pacto, sólo serían posibles con un acuerdo de concertación política tradicional, corporativa. El sistema se vería obligado a recurrir de nueva cuenta a los viejos actores tradicionales, es decir, al sindicalismo organizado y a los empresarios. De este modo, la eficacia del Pacto se dio sólo a partir del viejo sistema de alianzas con sus bases corporativas, tradicionales.

El segundo momento del parteaguas se presentó el 6 de julio de 1988. La administración había mantenido una constante preocupación por ir más adelante en materia de reforma política: nuevo Código Federal Electoral, Congreso en el Distrito Federal, y las reformas al artículo 115 constitucional. La idea era enterrar al viejo corporativismo y concentrar en la reforma política el fortalecimiento de la política ciudadana y liberal por medio de los partidos políticos, buscando ahí a la nueva representación.

Las limitaciones del proyecto de modernización política se expresaron con claridad en la disminución del consenso tradicional de la vieja maquinaria corporativa, el reforzamiento de la derecha panista y de la coalición multiforme del Frente Democrático Nacional (FDN). En esta perspectiva el Estado aplicaba una política de "autoflagelación" e imprimía en la campaña electoral de 1988 la renuncia a utilizar sus viejos mecanismos de apoyo. A la representación sindical se le visualizó como una traba para ir más adelante en el proyecto económico y, además, en el político.

Sin embargo, el problema de fondo eran los dos efectos que tenían una repercusión en la relación laboral: por un lado, las innovaciones tecnológicas que afectaban los procesos productivos y, por el otro, la presencia de un Estado disminuido en su intervención económica. Esto era lo que necesariamente modificaba el equilibrio político del corporativismo en el país. Así, el antiguo liderazgo sindical perdía su capacidad de negociación con la administración y sus aparatos, y a la vez, era mermada la capacidad de representación de sus bases.

⁵⁸ Héctor Aguilar Camín, *Después del milagro*, México, Cal y Arena, 1988, pp. 65-75.

Un paso aparte fueron los trabajadores telefonistas. A diferencia de una gran cantidad de sindicatos que la modernización económica los tomó por sorpresa, al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana no; por medio del contrato colectivo y de los convenios logró disputarle a la empresa la elaboración de programas y de métodos de modernización tecnológica de la comunicación¹⁰.

Tal vez uno de los mejores ejemplos es el de instalar la Comisión de Modernización, en la que se consideró que "... el cambio tecnológico era una de las principales características de la empresa (Teléfonos de México), sin embargo la velocidad y profundidad con que se estaba dando, afecta a todas las áreas de la misma". Se dijo también que desde sus primeros antecedentes en 1976 y después de las primeras adquisiciones de nueva tecnología hechas en 1980, se habían incrementado la productividad y la ganancia, al mismo tiempo que disminuía la inversión en mano de obra para la prestación de los servicios. La modernización de la empresa también permitiría buscar nuevas concesiones, para prestación de nuevos servicios telemáticos, como la unificación de telecomunicaciones y la informática.

El sindicato afirmaba que esta tendencia se traducía en una disyuntiva: oponerse y resistir este proceso, lo cual suponía el riesgo de que la organización sindical quedara al margen de la nueva tecnología, y que la empresa fuera rebasada por nuevas empresas y concesionarios; por otro lado, los trabajadores podían integrarse a este proceso, como una estrategia de defensa de su propia organización sindical.

El sindicato consideró el problema de la sustitución, reducción y descalificación de la mano de obra en su contrato colectivo de trabajo desde 1986, formulando un nuevo modelo de capacitación que le permitiría al trabajador incorporarse al proceso de modernización. Destacó también la inclusión de la cláusula 193 de ese mismo contrato, donde se comprometía a la empresa a notificar al sindicato cualquier proyecto de modernización, digitalización e instrumentación de nuevos servicios con un año de anticipación al posible inicio de cualquier cambio. De alguna manera los trabajadores lograron sentar las bases para afrontar las políticas de modernización en el sector y darle prioridad al problema de la eficiencia productiva en el marco mismo del contrato colectivo.

Sin embargo el argumento de la empresa paraestatal, Teléfonos de México, fue que ciertas cláusulas del contrato impedían la modernización. Su pretensión era eliminar la bilateralidad, movilidad de personal, anulación de convenios departamentales, escalafones y supresión de la cláusula 193. Pero el problema de la eficiencia del servicio se refiere más a cuestiones de inversión, introducción de nuevas tecnologías y aspectos de capacitación, entre otros, que a identificar impedimentos en un contrato colectivo ante el cual en última instancia el sindicato ha mostrado bastante flexibilidad.

El caso de los telefonistas fue una excepción, sin embargo en el marco de la modernización económica del régimen de Miguel de la Madrid, el contrato colectivo dejó de constituir una garantía en materia de negociación laboral. Los ejemplos fueron abundantes: Mexicana de Aviación, Altos Hornos de México, SICARTSA, Cananea, petroleros, entre otros. El problema que se presentaba no era únicamente la inoperancia de los contratos colectivos, sino el riesgo de una posible exclusión del sindicalismo organizado.

Parecía estar claro, entre empresarios y autoridades, que el país requería una reconversión industrial, el remozamiento o la desaparición del parque industrial anacrónico sembrado en los años cincuenta y sustentado en el proteccionismo. ¿Cómo emprender la modernización de las condiciones de trabajo que esa reconversión exigía, en el seno de una cultura sindical protectora de conductas antiproductivas, el sobrempleo, las complicidades

¹⁰ Cf. Francisco Hernández Juárez, "La sociedad y la economía latinoamericana ante las nuevas tecnologías de la comunicación", La reconversión industrial en América Latina, vol. XIII, México, Fondo de Cultura Económica, 1987. Cabe también señalar la posición de la CTM respecto a la innovación tecnológica: "... es necesario que las organizaciones obreras propongan a los gobiernos estatales y federal, participar activamente en la definición del cambio tecnológico, estableciendo acuerdos de innovación en este campo y reglamentando la incorporación de nuevas tecnologías, en defensa de la planta productiva y del empleo.

clientelistas, el compadrazgo y la amistad política?. Esa línea de pensamiento tuvo su correspondencia en la acción, al excluir a la representación sindical de la negociación, pero sin lograr nuevos consensos.

El debilitamiento de los mecanismos de concertación social y la ineficiencia de las instituciones laborales para proteger a los asalariados frente al deterioro de su nivel de vida, fueron hechos claramente observables en la realidad laboral del país durante la administración de Miguel de la Madrid. Al parecer el sentido del tradicional derecho laboral que pretendía mediatizar e institucionalizar el conflicto entre capital y trabajo con el papel arbitral del Estado apuntó, ahora, a dismantelar a instituciones reguladoras y, aún más, a suprimir contratos colectivos de los grandes sindicatos nacionales de industria. A la vez, la ausencia de un frente sindical de los trabajadores no ha permitido darle salida a un proyecto de claras definiciones por parte de la clase obrera.

El sindicalismo mexicano tiene ante sí el mayor desafío de su historia moderna: la revolución tecnológica pone en peligro sus formas de organización y sus demandas tradicionales, y lo obliga a hacer su propia transformación interna. El futuro perfil de los trabajadores de punta es la desintegración del viejo sindicalismo de masas suplantado por unidades menores de producción altamente calificadas y con pocos trabajadores. Por ello la introducción de nuevas tecnologías es un problema en el que los sindicatos deben participar.

El dismantelamiento de prerrogativas en varios contratos colectivos, que antes se enarbolaban como conquistas laborales, como formas de legitimidad del Estado con sus burocracias sindicales, empezaron a alterarse desde el inicio de la administración de Miguel de la Madrid. Al sindicato petrolero se le impidió su titularidad en contratos de construcción; a los azucareros se les quitó el porcentaje con el que se quedaba sobre el valor de cada kilo producido; los ferrocarrileros se convirtieron en una traba para la modernización; mineros; cinematografistas; también el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, que fue señalado como el principal obstáculo para la eficiencia de la empresa⁴⁰. Detrás de la política de reconversión, al movimiento obrero en su conjunto, y no sólo a la representación, se le acorraló a tal grado que se afectó la vieja tradición tutelar del Estado en materia del derecho del trabajo. El contrato colectivo dejó de ser, durante la administración de Miguel de la Madrid, el medio legal en el cual había descansado durante muchos años la prevención del conflicto y había sido la base de las manifestaciones pacíficas que enriquecieron la conciliación y el arbitraje.

El proyecto de modernización, durante ese sexenio, estuvo caracterizado por la permanente exclusión de los trabajadores organizados en las decisiones de política económica. El régimen se mostró incapaz para sentar las bases de una nueva regulación entre capital y trabajo que permitiera generar un nuevo consenso frente a las profundas transformaciones del escenario laboral.

Eso no fue sólo responsabilidad de la administración sino también de la debilidad de los empresarios y los trabajadores. Para el sindicalismo resultó evidente que la dispersión y la división los ha debilitado en los momentos de la concentración; agreguemos que la traba sustantiva a cualquier proyecto de cambio es la inamovilidad de los viejos liderazgos sindicales, sin embargo, fue precisamente en el momento de concluir la administración que una serie de corrientes sindicales dentro del Congreso del Trabajo se propusieron crear una federación de sindicatos de empresas estatales que permitiera a los obreros afrontar la política de cambio iniciada durante la administración de Miguel de la Madrid.

El proyecto de modernización requiere la concurrencia de sindicatos, empresas y Estado que busquen en una nueva cultura laboral la eficiencia y la productividad. Excluir a la organización obrera de ese proyecto puede tener un alto costo político para el país.

⁴⁰ Cf. Pablo Sánchez Gutiérrez, Los sindicatos nacionales de industria al Interior del Congreso del Trabajo, tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

2.4.- LA POLITICA LABORAL Y LA DISTRIBUCION DEL INGRESO

El proceso de ajuste que siguió a la crisis de balanza de pagos de 1982 produjo un costo social considerable para el pueblo mexicano. A veces se ha dicho que el costo era inevitable dado que las políticas expansivas anteriores eran insostenibles y, en otras palabras, la gente había estado viviendo "por encima de sus medios". Sin embargo, las condiciones externas adversas, tales como el empeoramiento de los términos de intercambio y la falta de financiamiento externo adecuado, hicieron que la recuperación fuese muy lenta a pesar de los grandes esfuerzos que se hicieron para restablecer el equilibrio macroeconómico y recuperar la confianza.

2.4.1.- AJUSTE, NIVELES DE VIDA Y DISTRIBUCION DEL INGRESO

En términos teóricos, durante el proceso de ajuste se pueden distinguir dos tipos de mecanismos: la reducción del gasto interno agregado (o sea, la absorción); y la reasignación del gasto desde bienes comerciables a no comerciables (aquellos que no se pueden comprar o vender en los mercados internacionales). Cuando un país se enfrenta a un choque externo de carácter permanente en sus términos de intercambio o la disponibilidad de crédito externo se restringe, estos dos mecanismos entran en acción para restablecer el equilibrio en el mercado interno y en la balanza de pagos. Estos dos mecanismos empezarán a operar ya sea en forma ordenada, mediante la adopción de medidas explícitas o, si el gobierno no adopta medidas, en forma caótica. En este último caso el equilibrio externo se establece de manera forzosa a través de la aceleración de la inflación⁶¹. En la vida real, lo más probable es que el proceso de ajuste se dé por una combinación de ambas formas.

Entre las medidas explícitas más comunes de un proceso de ajuste están la reducción del déficit fiscal y la devaluación de la moneda. La primera reduce, tanto el consumo de bienes comerciables, como no comerciables, mientras que la devaluación genera un aumento de la producción de bienes comerciables, y reduce su consumo al encarecerlos. Ambos mecanismos afectan los ingresos reales y la distribución del ingreso entre los salarios y las ganancias. Además, si la reducción del déficit fiscal y la devaluación afectan no sólo la demanda agregada y su composición, pero también tienen un efecto contractivo sobre la oferta agregada, su repercusión en los ingresos reales será aún mayor.

Utilizaré una distinción que algunos autores hacen entre el ingreso percibido (antes de impuestos netos), el ingreso disponible (ingreso percibido menos impuestos más transferencias), el ingreso social (valor de los servicios proveídos por el sector público distinto de las transferencias) y el ingreso total (la suma del ingreso disponible y el ingreso social). Una devaluación de la moneda modificará el ingreso percibido y su distribución. De acuerdo con los supuestos más plausibles, una devaluación hará que disminuyan los salarios reales percibidos. Esta caída será más pronunciada cuanto menos sensible sea la oferta interna a los cambios de los precios relativos. Una reducción del déficit fiscal conducirá a una disminución del salario percibido, el salario social y el salario disponible y, por ende, del salario real total. Varios mecanismos causan esta disminución. Primero, una reducción del déficit fiscal se traducirá a corto plazo en una disminución de la demanda agregada y, por ende, de la producción. La demanda de mano de obra será menor y, por lo tanto, los salarios reales percibidos tenderán a bajar. Segundo, la reducción del déficit fiscal se obtiene por una combinación de aumentos de impuestos y eliminación de subsidios, lo que reduce el ingreso disponible. Tercero, la reducción del gasto público se logra mediante una disminución de, entre otros rubros, el gasto social, lo que reduce el salario social y a menudo los salarios percibidos, porque parte de la reducción del gasto social se logra bajando los salarios de los empleados públicos. Además, la reducción de la inversión pública que comúnmente es parte de un programa de austeridad fiscal podría resultar en reducir el ingreso percibido y el ingreso social en el futuro.

Es de esperarse, entonces, que durante un proceso de ajuste caigan los salarios reales percibidos y totales. La caída de los salarios reales será tanto mayor cuando a) la rigidez estructural esté más generalizada: por ejemplo,

⁶¹ En general, en la vida real la situación se encuentra en algún punto intermedio ya que los gobiernos podrían estar incapacitados para producir un ajuste suave aunque lo intentaran incluso con políticas cuidadosamente elaboradas

cuando la maquinaria o las materias primas importadas no puedan ser fácilmente sustituidas por otras de producción nacional; y b) cuando las condiciones externas adversas sean más persistentes porque estas circunstancias implicarán una caída de la producción y la demanda agregada y, por ende, del ingreso recibido total mayor. Además, cuanto más difícil sea bajar la inflación, más pronunciada será la caída de los salarios reales en la transición de un equilibrio con alta inflación a otro con baja inflación. La devaluación, por otro lado, podría conducir a un aumento de las ganancias percibidas, pero las ganancias social y disponible podrían bajar. Sin embargo, este proceso se refiere sólo a las ganancias percibidas dentro del país. Las ganancias percibidas por los nacionales que tienen capital en el exterior (en forma de intereses y dividendos) con una devaluación real de la moneda, tenderán a subir.

El proceso de ajuste implicará también ciertos cambios de los precios relativos dentro del país. Un cambio particularmente importante para México es la evolución de los términos de intercambio entre la agricultura y el resto de la economía. Esto se debe al hecho de que una proporción alta de las familias más pobres (20% más bajo) de México se ocupa en actividades agrícolas y una proporción alta de quienes se dedican a la agricultura se concentra en los deciles de ingreso más bajos, (cuadro 2.5).

Por varias razones, los datos disponibles para México no permiten rastrear el efecto del ajuste en las categorías de ingreso antes definidas. Por ejemplo, no existe información sobre el total de ganancias. Las cuentas nacionales sólo distinguen entre ingreso salarial y no salarial y este último concepto incluye, además de las ganancias, los ingresos mixtos, en particular los salarios imputados a quienes trabajan por su cuenta. En consecuencia, una parte de estos ingresos debería clasificarse como salarios. En segundo lugar, no hay datos por separado del ingreso disponible salarial y no salarial, ni sobre el ingreso personal disponible, a nivel agregado. En tercer lugar, la evolución del ingreso social real se mide por el gasto social nominal deflactado por el deflactor implícito de precios del PIB. Sin embargo, este gasto social "real" podría no ser una medida correcta de la producción en los sectores sociales. Por último, la tendencia de los ingresos reales capta no sólo el efecto de las fuerzas del mercado en las remuneraciones de los factores de la producción, sino también la evolución de los subsidios generalizados al consumo incorporados en el índice de precios del consumidor, o sea, estrictamente, los datos observados no equivalen al ingreso real percibido ya que éste tendría que medirse con un índice de precios que no incorporara los subsidios.

A falta de contar con información adecuada, el análisis de la distribución del costo del ajuste deberá inferirse a partir del comportamiento de otras variables tales como el ingreso salarial y no salarial, los ingresos agrícolas y no agrícolas, y cruzar dicho comportamiento con lo que se conoce sobre las familias pobres en cuanto a fuentes de ingreso y actividad principal.

A pesar de sus limitaciones, la información permite hacer una evaluación preliminar del efecto del ajuste en los niveles de vida. En este capítulo se analiza la tendencia del ingreso salarial real y de los ingresos no salariales; cómo evolucionaron los ingresos; cuál fue la evolución del empleo y el desempleo; cuál fue el efecto de la austeridad fiscal en el gasto social; cómo se vieron afectados los servicios e indicadores sociales por la disminución de recursos; y, por último, cuáles sectores de la población se vieron más afectados. En primer término se presenta una breve descripción de las condiciones de vida en México antes de la crisis de 1982.

2.4.2.- LAS CONDICIONES DE VIDA ANTES DE LA CRISIS

La caída de los niveles de vida a partir de 1982 ocurrió cuando buena parte de la población mexicana se hallaba en condiciones precarias a pesar del notable crecimiento económico y de los grandes esfuerzos gubernamentales por mejorar las condiciones durante el periodo que siguió a la segunda Guerra Mundial. A fines de los años setenta, la incidencia de la pobreza era alta y había mucho que hacer para mejorar los niveles de educación y salud de la población.

CUADRO 2.5

**CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE LOS HOGARES
(INTRADÉCILES Y ENTREDÉCILES, TERCER TRIMESTRE DE 1984)
(Porcentajes, a menos que se especifique otra cosa)**

Decil*	Ingreso medio per cápita **	Intradécil				Interdecil				Tamaño del hogar (número de miembros)	Relación de los preceptores de ingresos al tamaño total del hogar	Relación de los miembros menores de 12 años al total de miembros al hogar
		Rural	Urbano	Agrícola	No agrícola	Rural	Urbano	Agrícola	No agrícola			
I	6 190.1	72.5	27.5	66.6	33.4	20.9	4.2	22.7	4.7	7.0	23.2	45.2
II	10 680.6	58.1	41.9	51.9	48.1	16.7	6.4	17.7	6.8	6.6	26.3	42.2
III	14 295.8	47.6	52.4	44.8	55.2	13.7	8.0	15.3	7.8	6.0	29.7	36.8
IV	18 651.4	35.6	64.4	31.8	68.2	10.2	9.9	10.8	9.7	5.5	34.0	31.3
V	23 573.9	37.7	62.3	29.8	70.2	10.8	9.6	10.2	9.9	5.2	34.1	30.9
VI	29 649.8	30.1	69.9	17.1	82.9	8.7	10.7	5.8	11.7	4.8	37.5	27.3
VII	38 051.9	17.4	82.6	11.7	88.3	5.0	12.7	4.0	12.5	4.6	41.6	24.3
VIII	48 753.1	18.1	81.9	13.4	86.6	5.2	12.6	4.6	12.3	4.1	48.1	21.7
IX	68 621.9	17.0	83.0	14.2	85.8	4.9	12.7	4.7	12.2	3.8	52.7	19.7
X	151 588.0	13.8	86.2	12.4	87.6	4.0	13.2	4.2	12.4	3.1	60.7	12.6
Total	41 005.6	34.8	65.2	29.4	70.6	100.0	100.0	100.0	100.0	5.1	38.8	29.2
Rural	25 451.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	35.7	32.5
Urbano	49 303.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	40.4	27.4

Fuente: Cálculos basados en datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, tercer trimestre de 1984, México, 1989.

— No aplicable.

* El número total de hogares es igual a 14 988 551. Los hogares están ordenados por el ingreso per cápita total.

** Pesos por trimestre de junio de 1984. Se incluyen los ingresos monetarios y en especie. Las cifras en dólares se pueden obtener al dividir los valores en pesos entre el tipo de cambio de junio de 1984, igual a 185.19 pesos por dólar.

*** Proporción del número total de hogares en cada grupo.

De acuerdo con la Encuesta de Ingreso y Gasto de 1977, casi 41% de las familias encuestadas tenían ingresos totales por debajo del salario mínimo prevaleciente (igual a 120 dólares mensuales en 1977)⁶². La mayor parte de las familias pobres eran pequeños agricultores y campesinos sin tierras de las zonas rurales, así como trabajadores en el llamado sector informal en las zonas urbanas, especialmente en el comercio y los servicios personales.

Los indicadores de nutrición y salud también reflejaban la vulnerabilidad de la población pobre. Aunque la disponibilidad de calorías y proteínas per cápita era suficiente para satisfacer las normas nutritivas mínimas si la distribución de alimentos hubiera sido uniforme, el Instituto Nacional de la Nutrición encontró que en 1979 casi 19 millones de personas, 13 millones de las cuales vivían en zonas rurales, padecían desnutrición⁶³. La tasa de mortalidad infantil se estimó en 1981 en 51.3 por millar. Los infantes de bajo peso al nacer constituían 12% del total, una cifra elevada si se la compara con la de países que tenían niveles menores de ingreso per cápita como Colombia y Panamá. Además, entre 1979 y 1983 la tasa de niños con bajo peso al nacer en México era mayor que el promedio de 10.1% para el conjunto de América Latina. Por último, la avitaminosis y otros problemas relacionados con la nutrición constituían la sexta causa más frecuente de la mortalidad infantil⁶⁴. Una proporción importante del país no tenía acceso a servicios básicos. En 1978 se estima que 45% de la población, integrado en gran medida de población rural, no recibía atención médica de ninguna de las instituciones que brindan atención médica gratuita o casi gratuita. La tasa de analfabetismo era igual a 17% a principios de los años ochenta. Esta cifra constituía una mejora sustancial sobre la cifra de alrededor de 26.5% que se registró en 1970. Aún así, a principios de los años ochenta, casi 22 millones de mexicanos eran analfabetos o no habían terminado la instrucción primaria y la escolaridad media era igual a 5.4 años. De acuerdo con el censo de 1980, 50.1% de las familias mexicanas no tenían agua corriente y 32% usaba la cocina como recámara. Se estimaba también que 25% de las familias mexicanas no tenían electricidad.

2.4.3.- EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DESDE 1982

a) Ingreso salarial

Como se esperaba a partir de lo analizado los mecanismos asociados al proceso de ajuste condujeron a una disminución de los salarios reales⁶⁵. La caída de los salarios reales fue entre 40 y 50% en el periodo 1983-1988; los salarios cayeron más rápidamente durante los dos años de mayor contracción económica: 1983 y 1986 (cuadro 2.6). La masa salarial se redujo en una magnitud similar (cuadro 2.6). El comportamiento del ingreso salarial es el resultado combinado de la evolución del salario real y el empleo. Los indicadores disponibles muestran que la caída del ingreso salarial resultó de la contracción de los salarios reales y no de la reducción del empleo. De acuerdo con los datos de las Cuentas Nacionales, el empleo creció, en promedio, a 0.4% anual entre 1983 y 1988 (cuadro 2.7)⁶⁶. Los datos de los salarios reales muestran ciertas pautas interesantes (cuadro 2.6). Por ejemplo, entre 1983 y 1988 la contracción salarial en las maquiladoras fue menor que en el resto de la economía. En el sector industrial formal también se contrajeron los salarios en menor medida que en otros sectores, fuera de las maquiladoras. Sin embargo, el empleo en este sector bajó (cuadro 2.7). También es importante observar que el salario mínimo no siempre es un indicador confiable de la evolución salarial; por ejemplo, en 1989 disminuyó el salario mínimo, mientras que todos los demás salarios aumentaron.

⁶² Coordinación General del Sistema Nacional de Información, Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 1977: primera observación, Secretaría de Programación y Presupuesto, México 1979.

⁶³ Poder Ejecutivo Federal, Plan Global de Desarrollo, 1980-82, México, p. 199. La población total de México ascendió a 66.9 millones de habitantes en 1980 según los datos del INEGI, Estadísticas históricas de México, México, agosto de 1985, p. 33.

⁶⁴ Miguel de la Madrid, Cuarto informe de Gobierno: anexo, México, 1986, p. 316.

⁶⁵ Los salarios nominales no cayeron; por el contrario, subieron. Los salarios reales bajaron a medida que los salarios nominales crecían a un ritmo menor que el nivel general de precios.

⁶⁶ La definición del empleo usada por las Cuentas Nacionales es la de puestos de trabajo; es decir, el número de trabajadores necesario para producir cierto nivel de producción, dados ciertos coeficientes de empleo-producto. En realidad, es una estimación indirecta del empleo total.

CUADRO 2.6

EVOLUCION DE LOS SALARIOS REALES Y DE CONSUMO PRIVADO PER CAPITA, 1981-1990
(Cambio porcentual anual)

Concepto	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Promedio 1983-88	Acumulado 1983-88	Promedio 1983-85	1986-87
Total de ingreso salarial	11.3	-5.4	-24.7	-2.8	2.0	-10.7	-2.0	-8.3	5.9	3.0	-8.2	-40.0	-9.2	-6.4
Ingreso salarial por trabajador	4.8	-5.1	-22.9	-5.0	-0.2	-9.4	-3.0	-9.1	4.6	1.9	-8.6	-41.5	-9.9	-6.2
Sueldos y salarios de las maquiladoras	-0.4	8.5	-20.1	-2.0	-0.6	-2.2	1.7	-4.4	6.3	0.4	-4.9	-26.0	-8.0	-0.2
Sólo obreros	-0.6	4.6	-21.9	-3.5	-2.7	-6.2	-1.2	-5.9	16.6	-3.9	-7.2	-36.0	-9.8	-3.7
Salarios registrados por el IMSS														
Total	n.d.	n.d.	n.d.	-1.8	0.7	-7.5	-9.9	-5.9	6.6	-0.7	n.d.	n.d.	n.d.	-8.7
Con menos de 10 puestos de trabajo	n.d.	n.d.	n.d.	3.4	-0.2	-2.4	-14.3	-9.9	3.8	-0.0	n.d.	n.d.	n.d.	-8.6
Con más de 300 puestos de trabajo	n.d.	n.d.	n.d.	-4.3	0.4	-9.2	-7.6	-4.8	4.8	-1.6	n.d.	n.d.	n.d.	-8.4
Salarios de la encuesta industrial	5.0	0.1	-24.1	-6.8	1.1	-6.9	-6.5	-0.5	8.9	n.d.	-7.7	-38.0	-10.6	-6.7
Salario mínimo	1.0	-0.1	-21.9	-9.0	-1.2	-10.5	-6.3	-12.7	-6.6	-9.1	-10.5	-48.5	-11.1	-8.4
Salarios de los empleados públicos, por trabajador	5.4	-2.6	-28.0	-5.8	0.3	-14.0	0.6	-8.4	7.1	n.d.	-9.8	-46.1	-12.0	-7.0
Consumo privado per cápita	4.9	-4.8	-7.4	1.1	1.5	-4.6	-2.2	0.3	4.5	4.0	-1.9	-11.1	-1.7	-3.4

n.d. no disponible

Para 1980-1984, INEGI, Sistema de cuentas nacionales de México, 1980-1986, t. 1: Resumen general, México, 1988, cuadros 66-69, pp. 118, 120, 123, 126, 129. Para 1985, INEGI Sistema de cuentas nacionales de México, 1985-1988, t.1 Resumen general, México, 1990, cuadro 60, p. 80. Para 1986-1987, INEGI, Sistema de cuentas nacionales de México: 1986-1989, t.1: Resumen general, México, 1991, cuadros 60-63. Para 1988-1991, Macro Asesoría Económica, Macro perspectivas: Diagnóstico y perspectivas de la economía mexicana, julio-septiembre de 1992, cuadro V.1, p. 22. Se calculan las cifras de la población total con base en las tasas de crecimiento en Manuel Ordorica, "Las cifras preliminares del censo", Demos: Carta demográfica sobre México, núm. 3, 1990, pp. 4-6.

CUADRO 2.7
EMPLEO Y DESEMPLEO, 1981-1990
(Cambio porcentual anual, excepto el desempleo; en porcentajes)

Concepto	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990 ^a	Promedio		
											1983-88	1983-85	1986-87
Empleo ^b	6.3	-0.3	-2.3	2.3	2.2	-1.4	1.1	0.9	1.3	1.1	0.4	0.7	-0.2
Agricultura y ganadería	2.8	-3.3	4.2	1.1	2.6	-2.5	1.5	2.5	-2.1	-4.6	1.6	2.6	-0.5
Minería	7.2	5.8	0.4	4.2	4.0	-0.4	5.0	2.4	-1.6	2.8	2.6	2.9	2.3
Manufacturas	4.8	-2.0	-7.1	2.1	3.2	-1.9	1.1	0.1	2.5	0.6	-0.5	-0.7	-0.4
Construcción	16.7	-2.6	-19.2	6.7	3.5	-3.3	0.4	0.3	11.8	13.1	-2.3	-3.8	-1.5
Electricidad	6.2	4.7	1.1	3.3	5.3	2.0	3.0	2.5	2.1	4.2	2.9	3.2	2.5
Comercio	6.4	0.9	-2.7	1.8	0.6	-1.2	1.4	1.5	2.8	3.0	0.2	-0.1	0.1
Transportes	7.5	6.7	-4.5	1.6	2.3	0.6	2.4	-2.4	-0.4	5.0	-0.1	-0.3	1.5
Serv. financieros	9.7	10.4	2.6	6.6	0.9	0.2	1.6	1.7	0.5	1.6	2.3	3.3	0.9
Serv. personales	6.3	1.4	-0.1	2.3	1.8	-0.4	0.2	-0.2	0.6	1.0	0.6	1.3	-0.1
Encuesta industrial mensual ^c	5.5	-2.4	-9.6	-1.0	2.3	-0.4	-3.4	—	2.4	0.0	—	-2.9	-3.7
Desempleo en zonas urbanas abierto ^d	4.2	4.2	6.3	5.7	4.3	4.3	3.9	3.5	3.0	2.8	4.7	5.4	4.1

— No aplicable.

^a Cifras preliminares.

^b Para 1980-1986, INEGI, Sistema de cuentas nacionales de México, 1986-1989. Para 1987-1990, Dirección de Contabilidad Nacional y Estadísticas Económicas INEGI.

^c Compendio de indicadores (1989), cuadro 2.8, pp. 74-77. Hasta 1987, las cifras se refieren a una muestra de 1 157 establecimientos que cubren 57 clases de actividad económica. Las cifras de 1988 y 1989 se refieren a una muestra de 3 218 establecimientos que cubren 129 clases de actividad económica. Por lo tanto, la tasa de 1988 no puede calcularse porque las cifras de 1987 y 1988 no son comparables. Las tasas de 1990 y 1991 son de Macro Asesoría Económica, Macro diagnóstico y perspectivas de la economía, abril-junio de 1992, año 5, p. 26.

^d Para 1981-1988, Macro asesoría Económica, Realidad Económica de México, 1991, México, 1990, cuadro 15, p. 427. Para 1989-1991, GEA Económico, no. 12, 12 de marzo de 1992, p. 5.

En vista de la drástica caída de los salarios reales, cabe hacerse la pregunta si algunas medidas de política económica no habrían sujetado a los salarios a una reducción por encima de lo necesario⁶⁷; es decir, a una caída mayor que la requerida para restablecer el equilibrio en la economía, incluso bajo las condiciones externas prevalecientes. Cabe preguntarse, por ejemplo, si una aplicación más temprana de la política de ingresos como la introducida en el Pacto de Solidaridad Económica no habría disminuido algunas de las pérdidas salariales relacionadas con la estabilización y el ajuste. Los resultados del Pacto parecen apoyar la idea de que los programas de estabilización que combinan la austeridad fiscal con una política de ingresos bien administrada tienen un efecto negativo menor en los salarios, quizá porque reducen la magnitud de las pérdidas provocadas por la aceleración de la inflación. En segundo lugar, cabe preguntarse si haber adoptado medidas para mejorar la relación entre empresarios y gobierno como por ejemplo, adelantar la reprivatización del sistema bancario, no habrían elevado los niveles de inversión y producción e impedido en parte la reducción de los salarios. Por último, otra posible fuente de "sobreajuste" salarial podrían ser las leyes laborales de México, que al encarecer o dificultar los despidos, habrían provocado una contracción del salario real mayor que la que habría prevalecido con prácticas de empleo más flexibles. Sin embargo, es probable que leyes laborales mexicanas hayan hecho que el desempleo permaneciera a niveles relativamente bajos incluso en épocas de gran reducción de la producción (cuadro 2.7).

A primera vista resulta desconcertante que semejante contracción salarial no haya provocado intranquilidad política y social o innumerables huelgas.

Acaso ello se deba a que, si bien los salarios se redujeron drásticamente, las disminuciones no afectaron en la misma medida a los ingresos familiares porque muchos hogares recibieron ingresos de fuentes distintas de los salarios y el ingreso no salarial disminuyó sustancialmente menos. Los datos existentes sobre el consumo real per cápita apoyan esta interpretación. El consumo privado per cápita disminuyó 11.1%, en términos acumulados, entre 1983 y 1988, mientras que el ingreso salarial real bajó 41.5% durante el mismo periodo (cuadro 2.6). Esto parece indicar que las familias mexicanas deben de haber recibido ingresos de fuentes distintas de los salarios, o bien, que estaban echando mano de sus ahorros. La falta de resistencia salarial puede explicarse también por el control del movimiento laboral por parte del gobierno, ejercido desde los años treinta mediante una combinación notable de coerción y cooptación.

b) El ingreso no salarial

En comparación con la caída del ingreso salarial igual a 8.2% anual entre 1983 y 1988, el ingreso no salarial bajó sólo 1.21% anual (cuadro 2.8). Esto hizo que se incrementara marcadamente la participación del ingreso no salarial en el total del ingreso (la suma del ingreso salarial y no salarial): de 60% en 1981 a 71.5% en 1988. Es probable que el comportamiento del ingreso no salarial -por oposición al ingreso salarial- refleje el hecho de que los precios de los bienes y servicios, excluidos los que produce el sector público y los que están sujetos a regímenes de control de precios, e incluidos los servicios prestados por quienes trabajan por cuenta propia, se fijaban más "libremente" que los salarios.

La evolución más favorable de los ingresos no salariales se explica en parte por el incremento de las ganancias en el sector moderno de la economía. Aunque no hay estimaciones en este renglón, se sabe que el margen de ganancia (como proporción del total de ventas) aumentó en la mayoría de los sectores manufactureros en el periodo 1982-1987. Sin embargo, sería un error creer que todo el ingreso no salarial está constituido por ganancias, rentas o intereses que reciben sólo los ricos. La categoría no salarial incluye el ingreso de los campesinos pobres o de los pequeños comerciantes, al igual que el de los empresarios y rentistas modernos; también forma parte del ingreso de los sectores medios, aunque en menor medida. Por ejemplo, el 10% más pobre de las familias mexicanas obtiene la tercera parte de su ingreso de los salarios mientras que los otros dos tercios se distribuyen más o menos en partes iguales entre el ingreso no monetario (por ejemplo, la producción de alimentos para autoconsumo y los costos imputados de la vivienda) y el ingreso no salarial. Dado el comportamiento del consumo per cápita, cuya caída fue

⁶⁷ Un autor por ejemplo, sugiere que pueden seguirse otros caminos, aunque quizá resulten difícil de implantar. Véase Raul Ramos Tercero, "La caída de los salarios reales y las transferencias al exterior: una interpretación inspirada por la experiencia mexicana, 1982-1987", México.

CUADRO 2.8

INGRESO SALARIAL Y NO SALARIAL, 1981-1990
(Cambio porcentual anual excepto las participaciones; en porcentajes)

Sector	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Promedio 1983-88	Acumulado 1983-88	Promedio 1983-85	Promedio 1986-87
Ingreso total^a														
Ingreso salarial	11.3	-5.4	-24.7	-2.8	2.0	-10.7	-2.0	-8.3	5.9	3.0	-8.2	-40.0	-9.2	-6.4
Ingreso no salarial	4.8	2.0	1.7	0.3	-2.0	-7.5	4.6	-3.8	8.0	7.4	-1.2	-6.9	0.0	-1.6
Participación del ingreso no salarial en el total del ingreso (en porcentaje)	60.0	61.8	68.6	69.2	68.4	69.1	70.5	71.5	71.9	72.7	69.5	—	68.7	69.8
Ingreso en el sector agrícola^b														
Ingreso salarial	10.0	-12.7	-13.2	-3.8	3.0	-2.0	-5.6	-12.6	-6.7	-8.6	-5.9	-30.7	-4.9	-3.8
Ingreso no salarial	5.9	-8.9	-2.0	14.1	9.0	-8.0	-2.2	-15.7	8.9	13.4	-1.3	-7.6	6.8	-5.1
Participación del ingreso no salarial en el total del ingreso (en porcentaje)	73.9	74.7	77.0	79.8	80.7	79.8	80.3	79.8	82.3	85.2	79.6	—	79.2	80.0
Ingreso en el sector no agrícola^b														
Ingreso salarial	11.4	-5.0	-25.3	-2.7	2.0	-11.2	-1.7	-8.0	6.8	3.7	-8.3	-40.5	-9.5	-6.6
Ingreso no salarial	4.7	3.3	2.1	-1.1	-3.3	-7.4	5.5	-2.4	7.8	6.7	-1.2	-6.9	-0.8	-1.1
Participación del ingreso no salarial en el total del ingreso (en porcentaje)	58.6	60.6	67.8	68.1	67.0	67.9	69.4	70.7	70.9	71.5	68.5	—	67.6	68.7

— No aplicable.

• Para 1980-1990, INEGI, Sistema de cuentas nacionales de México.

• Para 1980-1990, INEGI, Sistema de cuentas nacionales de México. Las categorías sectoriales usadas aquí, tomadas del INEGI, se definen como sigue. Agrícola: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. No agrícola: minería; manufacturas; construcción; electricidad; gas y agua; comercio, restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y comunicaciones; servicios financieros, de seguros e inmobiliarios; y servicios comunitarios, sociales y personales.

mucho menor que la caída de la masa salarial, es de esperarse que una parte del ingreso no salarial debe haber ido a manos de grupos de ingreso distintos de los ricos.

c) Evolución del empleo y el desempleo

La fuerte contracción del PIB en 1983 estuvo asociada a un aumento de casi 50% en la tasa de desempleo abierto en zonas urbanas (cuadro 2.7). Sin embargo, a pesar del lento crecimiento económico y del aumento continuo de la población económicamente activa en alrededor de un millón de personas al año⁶⁸, la tasa de desempleo de los años ochenta bajó pronto a niveles menores que los prevalecientes durante el auge petrolero (cuadro 2.7).

Este resultado, a primera vista sorprendente, podría explicarse por la flexibilidad de los salarios reales hacia la baja. Por una parte, la caída de los salarios reales permitió que las empresas mantuvieran bajo control sus costos laborales mientras afrontaban una reducción de la demanda sin tener que reducir el empleo; por la otra, permitió que el gobierno redujera sus gastos totales sin tener que recurrir a despidos en gran escala. Además, quienes no permanecían empleados como asalariados en el sector formal buscaron trabajo en el sector informal por un salario menor o como trabajadores familiares sin remuneración. En un país como México donde no se cuenta con un seguro de desempleo, no es sorprendente que la gente acepte trabajar en empleos de menor calidad antes que permanecer sin trabajar ya que estar desempleado es un lujo que la mayoría no se puede dar.

Las tasas del desempleo abierto parecen demasiado bajas cuando se comparan con la tasa del desempleo "implícito" medida por la razón del total de los puestos de trabajo dividido entre la población económicamente activa: el desempleo implícito fue igual a 11.4% en 1980 y a 20.3% en 1985⁶⁹. Esta discrepancia se debe al hecho de que los dos estadísticos miden fenómenos diferentes. Para el desempleo implícito, las Cuentas Nacionales miden los puestos de trabajo que se requieren para cierto nivel de producción con una tecnología dada. Las estadísticas de desempleo urbano se calculan como la diferencia entre la población económicamente activa y los individuos que estuvieron empleados al menos por una hora durante la semana de referencia, incluidos quienes hayan trabajado sin remuneración. Es decir, que la definición del empleo incorporada en las estadísticas del desempleo abierto incluye todos los casos del empleo "precario", mientras que la definición de las Cuentas Nacionales no lo hace. En la práctica, por ejemplo, un puesto de trabajo puede estar ocupado por más de una persona. La diferencia observada en la evolución de los indicadores puede interpretarse como una estimación aproximada de la evolución del "subempleo"⁷⁰.

El cambio ocurrido en la estructura del empleo según categoría ocupacional ilustra un posible deterioro en las condiciones del mercado de trabajo. La proporción de asalariados en la fuerza de trabajo urbana bajó de 83.4% en 1982 a 76.2% en 1985, mientras que el número de trabajadores por cuenta propia aumentó de 12.1 a 15% y el de los trabajadores familiares sin remuneración pasó de 2.1 a 4.6%. Entre 1985 y 1989 la proporción de asalariados continuó disminuyendo aunque a una tasa mucho menor: alrededor de un punto porcentual anual. Entre 1980 y 1988 el empleo en los servicios (donde se concentra el llamado del empleo informal) como una proporción del empleo total aumentó ligeramente, mientras que la proporción de los trabajadores en la agricultura casi no cambió y la del empleo industrial bajó sobre todo en la construcción. Sin embargo, los cambios siempre han sido pequeños; de un punto porcentual o menos, en una dirección o la otra. El aumento de la proporción de trabajadores por cuenta propia y del empleo en los servicios es congruente con la idea de que el empleo informal subió durante el proceso de ajuste y que el ingreso obtenido del empleo informal haya compensado en parte la caída del ingreso salarial⁷¹.

⁶⁸ Compendio de indicadores de empleo y salarios, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

⁶⁹ La tasa de desempleo implícito se calculó como la proporción entre el empleo total y la población económicamente activa (PEA). Las cifras del empleo total se han tomado de Compendio de indicadores de empleo y salarios, Comisión Nacional de Salarios Mínimos, México cuadro 1.1, p. 27.

⁷⁰ Siempre resulta difícil definir el concepto de subempleo. Se refiere al hecho de que las personas están empleadas en actividades que tienen niveles de productividad y de remuneración muy bajos.

⁷¹ Un indicador indirecto de esto es que el consumo privado real per cápita disminuyó sustancialmente menos que los salarios reales (cuadro 2.6).

d) ¿Quiénes absorbieron los costos del ajuste?

Determinar quiénes absorbieron los costos del ajuste tiene particular importancia en un país como México dados los niveles de concentración del ingreso y de pobreza. El cuadro 2.9 muestra que la concentración del ingreso en el 10% superior de la población ha sido elevada en todos los años estudiados. Los datos revelan que entre 1963 y 1977 hubo una redistribución desde el tope hacia los sectores medios y que la disminución de la desigualdad entre 1977 y 1984 fue menor. Sin embargo, este resultado debe tomarse con cautela ya que las encuestas no son comparables en un sentido estricto. Independientemente de las tendencias, la encuesta de 1984 indica que las disparidades eran muy grandes: por ejemplo, el ingreso medio per cápita del decil más alto era 25 veces mayor que el del decil más bajo, (cuadro 2.5).

La incidencia de la pobreza también ha sido elevada en México, aunque ha bajado a lo largo del tiempo. Según un estudio basado en las encuestas de ingreso-gasto, se ha encontrado que la incidencia de la pobreza "extrema" llegó a 69.5% en 1963, 56.7% en 1968, 34% en 1977 y 29.9% en 1984⁷². En otro estudio basado en una línea de pobreza diferente, el autor estima que en 1968 la incidencia de la pobreza extrema en México llegó a 12%. A pesar de la falta de consenso para definir la magnitud de la pobreza los resultados sugieren que la pobreza disminuyó entre 1963 y 1977.

CUADRO 2.9

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN MEXICO, AÑOS SELECCIONADOS, 1963-1989 (Porcentaje del total del ingreso por hogar)

Año	Porcentajes de hogares			Total
	40 más bajo	50 intermedio	10 más alto	
1963	10.2	47.6	42.2	100.0
1968	11.2	48.8	40.0	100.0
1977	10.4	52.8	36.8	100.0
1984	14.3	52.9	32.8	100.0
1989	12.9	49.2	37.9	100.0

Fuentes: Para 1963, 1968 y 1977, Oscar Altimir, "La pobreza en América Latina: Un examen de conceptos y datos". Revista de la CEPAL, núm. 13, 1981, cuadro 8. Para 1984, INEGI, Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, 1984, cuadro 4. Para 1989, INEGI, Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, 1989: Transacciones económicas, México, 1992, cuadro 1.

De acuerdo con estimaciones propias, la proporción de hogares en Pobreza extrema en 1984 estaba entre 11.2 y 14.7%. Los pobres en extremo son, predominantemente, hogares rurales y agrícolas. Aunque la mayoría de los hogares más pobres son rurales, 27.5% de los hogares del decil más bajo es urbano, (cuadro 2.5). Si se los compara con el resto de la población, los hogares en pobreza extrema tienen una proporción mayor de jefes de familia que son trabajadores por cuenta propia y menos asalariados. En términos de las fuentes de ingresos, los

⁷² Enrique Hernández Laos, "Medición de la intensidad de la pobreza y de la pobreza extrema en México". Investigación Económica, vol. 49, núm. 191, 1990, p. 282. Según Hernández Laos, los muy pobres eran las familias o los individuos cuyo ingreso era menor que una canasta de consumo mínimo, que incluye alimentos y otros bienes.

pobres en extremo obtienen casi un tercio de su ingreso de las "ganancias". El ingreso no monetario es más importante para los pobres en extremo, ya que representa otro tercio de su ingreso total y el ingreso derivado de los salarios constituye el tercio restante del ingreso. El ingreso salarial se vuelve cada vez más importante -aunque no en forma monótonica- entre los deciles 2 y 7, a partir de donde su participación comienza a bajar ligeramente.

Las características de la población por nivel de ingresos proveen cierta información útil para imaginar cómo pueden haberse distribuido los costos del ajuste. Primero, en virtud de que la mayoría de los pobres en extremo trabaja en la agricultura y obtiene casi dos tercios de su ingreso de fuentes no salariales, (cuadro 2.5) su suerte durante el ajuste posiblemente dependió de la evolución de la producción y los precios agrícolas y, en menor medida, de los salarios agrícolas. Segundo, en virtud de que los salarios constituyen la fuente principal del ingreso de los grupos de ingresos medios, la suerte de estos grupos dependió en gran medida de los cambios ocurridos en los salarios reales.

En virtud de que el ingreso salarial disminuyó mucho más que el ingreso no salarial durante los años ochenta, parecería que los grupos de ingresos medios hubiesen sido más golpeados por el ajuste que los más pobres o los más ricos. Esto se confirma comparando la distribución del ingreso entre 1984 y 1989, que aparece en el cuadro 2.9. Mientras que 40% inferior pierde 1.4 puntos porcentuales del ingreso total, 50% del medio pierde 3.7 puntos porcentuales. Sin embargo, en virtud de que el salario agrícola y el ingreso no salarial se deterioraron sustancialmente a partir de 1986, es posible que los pobres rurales hayan padecido una fuerte caída en su nivel de vida en términos absolutos entre 1986 y 1989.

Aunque los grupos medios perdieron relativamente más ingreso que los más pobres, se debe recordar que para estos últimos incluso una disminución mínima del ingreso puede tener efectos devastadores en el bienestar presente y futuro. Así mismo, se debe recordar que los grupos medios distan mucho de ser familias de clase media según los estándares de los países avanzados. En la parte inferior de los grupos medios se encuentran hogares pobres que viven en zonas urbanas, donde los precios de los bienes son mayores que en las zonas rurales. Un resultado que debe subrayarse de la comparación 1984-1989 es el brusco incremento de la desigualdad observado en este periodo: la participación de 10% superior de los hogares aumentó en 5.1 puntos porcentuales (cuadro 2.9).

CAPITULO TERCERO

EL MODELO SALINISTA Y LA ORTODOXIA NEOLIBERAL

3.1 LOS AJUSTES HETERODOXOS Y EL SALINISMO

Cuando el desarrollo estabilizador agonizaba la coyuntura internacional para México en la década de 1970 le fue muy favorable pues los sectores financieros, los bancos comerciales y de préstamo que tenían inactivos sus excedentes, aprovecharon de la necesidad que tenían nuestros países por iniciar nuevas etapas de industrialización para expandir mundialmente el negocio financiero. Ofrecieron créditos a bajas tasas: "dinero fresco" para que el país pudiese aprovechar las nuevas oportunidades comerciales y financieras que ofrecía la acelerada mundialización de la economía mercantil y la nueva reorganización y división del trabajo que ya se estaba visualizando en el horizonte internacional. En efecto se promovieron rápidamente las empresas industriales monopólicas, la mayoría de ellas transnacionales a costa de un mayor endeudamiento del país. Hecho que lo llevó a la crisis económica que, con cierto retraso, coincidió con la depresión internacional de las economías desarrolladas. Con el afán de superar los desajustes internos acumulados y los del momento se procedió al ajuste acelerado a partir de políticas estabilizadoras, todas ellas diseñadas dentro de la ortodoxia económica comandadas por el Fondo Monetario Internacional.

México en vista de volver a ser un buen sujeto de crédito internacional se sometió a las exigencias de los acreedores y entró en la estrategia de poner "la casa en orden" de acuerdo con los intereses de los financieros internacionales que, a pesar de ciertas contradicciones menores, coincidieron con los de los nacionales: pagar la deuda a toda costa o pagar y crecer. No obstante, a pesar del enorme esfuerzo social desplegado en el ajuste, la economía del país, aunque tuvo momentos escasos de reactivación, volvió a caer en una nueva fase depresiva

Era preciso un ajuste heterodoxo, una concertación política, un Pacto social, parecido a los que los grupos sociales más dinámicos e importantes en la economía habían venido realizando en las etapas cruciales del desarrollo del capitalismo en México. Todo ello, con el fin de mantener la estabilidad política que garantizara a largo plazo el crecimiento y desarrollo del país. Una política económica cualquiera que esta sea se da en el marco de las luchas por llevar adelante un proyecto socio-económico, bajo el liderazgo de un núcleo social hegemónico. Se trata pues, de una estrategia global para la acumulación y distribución de las riquezas materiales y "espirituales" en la que las políticas económicas aparecen como importantes juegos tácticos que, al concertar explícitamente intereses divergentes en un interés común, tienen mayor eficacia y contundencia para el logro del objetivo inmediato (de corto, mediano o largo plazo como se dice en la jerga económica) o del objetivo final, llamado también el estratégico; que no es más que la realización concreta de una forma particular de producción y de vida previamente proyectada por el grupo dirigente y aceptada o impuesta a los grupos sociales subalternos, a partir del uso habilidoso, inteligente y "racional" de las circunstancias internas -la economía nacional- y las externas -la economía mundial- y sus respectivos entornos socio-político y culturales.

Así, cuando hablemos de los "ajustes heterodoxos" o de las "políticas económicas heterodoxas", en las estrategias de ajuste, no nos referiremos a los pactos, las negociaciones y los compromisos sino a los instrumentos económicos idóneos a emplearse, una vez que la decisión de los grupos sociales se ha concertado. En este caso la política prima sobre el instrumento económico y le da a éste su eficacia. Se trata, entonces, de un concepto ajeno a los de la "ciencia económica" ortodoxa, disciplina científica calcada a la usanza de las "ciencias naturales" o a los de las "ciencias exactas", en el que la política económica, llamada por nosotros ortodoxa, aparece como una técnica eficaz en sí misma manejada por expertos nacionales o internacionales.

Así, la ortodoxia económica conservadora, apoyada en el cientismo empírico cree o -mejor dicho- simula creer que los automatismos económicos -la mano invisible- por sí solos producen crecimiento económico y por ende desarrollo social. Asumen, una vez más, una nueva ideología, una nueva justificación, imposible de ser probada con los propios criterios económicos que postulan y que, por tanto, apologiza las bondades de la competencia -la

vieja teoría del comercio internacional sin barreras proteccionistas que perturben su eficacia- pero entra en contradicción con sus propios postulados cuando diseña una política económica de recesión, de inestabilidad inflacionaria que concentra y centraliza las riquezas fomentando el monopolio que es su contrapartida.

En verdad el equívoco y la contradicción del neoliberalismo decadente sólo es aparente pues se trata -en realidad- de la terca lucha entre los grupos industriales, comerciales y financieros monopólicos internacionales y sus aliados internos por llevar adelante la consecución de sus intereses particulares. Estos objetivos, en determinados momentos, entrarían en contradicción con los que se despliegan en el interior de la economía mexicana; más concretamente entre los de los sectores comerciales, industriales y financieros impulsores del proyecto de modernización (fundamentado en la producción industrial directamente encaminada a la fabricación de bienes intermedios y de capital para la exportación: la que permitiría al país entrar a competir en el mercado mundial concretamente en el norteamericano) y los de los sectores que desearían continuar consolidando el mercado interno de bienes de consumo e intermedios, con protección selectiva y apoyo del gobierno, hasta poder competir con los productores extranjeros o asociarse a ellos.

Es pues, en el ámbito de las estrategias y tácticas globales para pasar a una nueva forma de acumulación y de distribución, definida como la nueva fase del capitalismo industrial mexicano o como la nueva etapa de modernización impulsada por el neoliberalismo, que las políticas económicas concretas entran en contradicción con la anterior fórmula de modernización que los sectores comerciales, industriales y financieros tradicionales, no monopólicos sostuvieron para defender sus intereses de corto plazo o que no lograron transformar de modo gradual en intereses generales de largo plazo.

3.1.1.-LOS AJUSTES SALINISTAS Y EL MODELO NEOLIBERAL.

A fines de 1987, el nuevo modelo de acumulación y su difícil desenvolvimiento, estaba aparejado cada vez más estrechamente a la disputa hegemónica del capital financiero mundial en la que los empresarios de los Estados Unidos estaban metidos de lleno. México, con el 75% de su economía y finanzas orbitando alrededor de los mismos aparecía como un soporte potencial para el resurgimiento industrial de ese país. De ello surgía la necesidad imperiosa de mayores acercamientos para una integración económica más formalizada a partir de reglas claras e instituciones para obtener los mutuos beneficios aparejados a la nueva estrategia. Esto, a largo plazo lo unciría al carro del gran coloso del norte. No obstante, la salida inmediata de la crisis económica y financiera pasaría por una serie de contradicciones internas que apenas estaban aflorando en la superficie social, ante las cuales, el Pacto de Solidaridad Económica que se preparaba -como en otros momentos de la vida económica moderna de México- serviría para apuntalar la economía y renovar el viejo sistema de gobierno que ya sentía la necesidad de abrirse hacia una mayor participación social; destrabando los controles autoritarios que lo anquilosaban en sus afanes de renovación.

Pero la administración que dejaría el poder a fines de 1988 y particularmente la nueva -ya anunciada aunque no sancionada por la sociedad en pleno- debería afrontar con mucho tino una reforma política que, sin que se le fueran las riendas del poder, le permitiera continuar rigiendo los destinos del país, en una nueva etapa en donde la democracia política debería presentarse como una condición necesaria, para mantener la paz social e impulsar la nueva esperanza del desarrollo, como antaño sucedió con los 20 años del milagro mexicano.

A) EL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA (PASE): diciembre de 1987 a diciembre de 1988.

El Pacto de Solidaridad Económica aparece técnicamente como la aplicación de un plan de choque que constituye una variante de los planes antiinflacionarios de Brasil y Argentina; pero, desde la perspectiva de este análisis, se trató de la reanudación de la estrategia de política económica heterodoxa que el gobierno de México había venido implementando desde la Revolución de 1910; la cual destruyó los obstáculos político-administrativos para la expansión del capitalismo y aceleró la primera modernización del país hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Después de ésta y hasta mediados de 1955 se emprende una segunda modernización la que se da con relativo éxito hasta finales de los años 60 fecha en la que este impulso se agota. Se intenta relanzarla sin mayor éxito pues, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para abrir gradualmente el país a los mercados mundiales, las

rémoras políticas y los obstáculos económicos internos y externos terminaron con los nuevos esfuerzos modernizadores y sumieron al país en la crisis.

Este evento decisivo marca el tránsito acelerado de la economía a partir de los años de 1980 hacia una tercera fase de modernización, en el marco de una nueva hegemonía social que se construye. Se trata, entonces de un Nuevo Pacto, de una nueva alianza en la que los obreros, los campesinos, los empresarios y el gobierno se comprometían a realizar grandes esfuerzos y sacrificios conjuntos para insertarse dinámicamente en la economía mundial, bajo el liderazgo de los sectores industriales, comerciales y financieros monopólicos mexicanos que verían cumplirse sus intereses de largoplazo: consolidar su dominio político a través de su fortalecimiento económico, bajo el manto cobertor de la ideología renovada de la modernización.

Así es como el "Pacto de Solidaridad Económica" del 15 de diciembre de 1987, se inicia con un fuerte castigo para los sectores obreros, campesinos, populares y medios. La modernización acelerada debía hacerse, lo afirmaba el presidente en el preámbulo del Pacto, con medidas correctivas "fuertes, amargas y dolorosas que exigen sacrificios y esfuerzos de todos"; no se ofrecía una "cura mágica" sino que se pedía a la sociedad "más esfuerzo y más sacrificio" y el sector obrero y empresarial estaban dispuestos a ello; en consecuencia, se firmaba el Pacto cuyo texto se dio a conocer el 16 de diciembre en los diarios del país. De este modo el gobierno saliente jugaba su última carta económica-política, comprometiendo a los sectores de la producción y a todo el país a moderar sus propios intereses en aras del interés nacional¹.

Se iniciaba de inmediato el programa correctivo heterodoxo con un programa antiinflacionario drástico que, paradójicamente aceleraba la etapa inflacionaria de la economía mexicana; pues se dio un incremento del precio de los bienes y servicios del gobierno, además de alzas en la gasolina, electricidad y en los artículos básicos en un promedio del 80 al 85% y en otros, de casi un 100%. En cambio a los salarios mínimos sólo se concedió un aumento del 15% inmediato, y del 20% a partir del mes de enero; 35% de incremento global, que quedaría virtualmente congelado, de acuerdo con el pacto, hasta marzo; siempre que los empresarios no subiesen los precios de los productos en ese mismo lapso.

En realidad, la estrategia de choque se había anticipado con una medida de estabilización ortodoxa de stop: la fuerte devaluación del tipo de cambio libre en noviembre de 1987 (ver Cuadro Nro. 3-1) y con el inicio del Pacto se ajustaba del tipo de cambio controlado para cubrir el diferencia existente con el libre y se lo mantendría fijo hasta junio de 1988; pero el ajuste drástico a la alza de tarifas del sector público y de los precios de los productos mexicanos para que éstos fueran emparejándose con los internacionales -a excepción del de los salarios que eran contenidos marcaba el movimiento del "go" y, una vez que los precios de los productos alcanzaran su tope, se daría un control estricto de los precios y salarios, un nuevo stop y la inflación- como se dice en los manuales, bajaría. Lo novedoso del plan de estabilización era la concertación de intereses divergentes para detener la inflación y ello, como lo hemos analizado, confirma la heterodoxia tradicional del tratamiento de la economía en los momentos álgidos de la vida del México moderno.

Así, el gobierno de Miguel de la Madrid, luego de haber abandonado parcialmente el Programa Inmediato de Reordenamiento Económico (instrumento de estabilización austero y ortodoxo gradual diseñado por el FMI para detener la inflación por exceso de demanda y en especial para recaudar capitales mexicanos y expatriarles en forma de deuda) por el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) -nueva pieza de la ortodoxia del mismo organismo internacional para acelerar la apertura comercial y financiera en nuestros países, cuyo éxito en términos de ganancias especulativas no había tenido precedentes en México- se vio obligado, ante el peligro real de aumentar la inestabilidad política que podría comprometer el proceso de transmisión hacia la nueva hegemonía social a romper -una vez más- con el dogma de la política económica ortodoxa.

¹ Ver preámbulo en Documento, "Un esfuerzo de Concertación social" y texto del "Pacto de Solidaridad Económica" en De la Madrid, M.; "El Pacto, una respuesta pragmática de la sociedad", ambos en Comercio Exterior, vol. 37, México, diciembre de 1987, pp. 1078-1082; también en BANAMEX, "Pacto de Solidaridad Económica" en Examen de la situación económica de México, México, enero de 1988. Vol. LXIV, Nro. 746, pp. 12-19.

CUADRO 3.1

MÉXICO, INFLACIÓN Y MOVIMIENTOS
DEL TIPO DE CAMBIO REAL 86-90

INDICE	DE	PRECIOS		TIPOS		DE CAMBIO		
		USA	MEXICO	Inflación anual	NOMINAL	Libre	REAL	Libre
Trimestre					Controlado	Libre	Controlado	Libre
86-1	118.8	1521.9	66.7	422.9	463.7	122.3	134.1	
2	117.4	1773.4	77.0	522.1	554.3	128.0	135.9	
3	117.1	2121.3	91.5	664.2	686.8	135.8	140.4	
4	118.3	2562.9	103.1	836.2	846.7	142.9	144.7	
87-1	119.0	3186.9	109.4	1015.9	1019.2	140.5	140.9	
2	120.3	3977.4	124.3	1229.1	1232.3	137.7	188.1	
3	121.0	4968.3	134.2	1450.6	1454.3	130.9	131.2	
4	121.5	6365.6	148.4	1775.9	1917.3	125.5	135.5	
88-1	121.4	8841.8	177.4	2240.5	2265.8	113.9	115.2	
2	128.8	9855.3	147.8	2257.0	2297.5	104.2	106.0	
3	124.1	10301.7	107.3	2257.0	2297.5	100.7	102.5	
4	125.3	10618.4	66.8	2257.0	2297.5	98.6	100.4	
89-1	127.5	11217.8	26.9	2308.6	2343.1	97.2	98.6	
2	130.0	11671.7	18.4	2407.7	2434.0	99.3	100.4	
3	129.8	12051.6	17.0	2502.4	2525.5	99.8	100.7	
4	131.3	12602.6	18.7	2593.9	2630.9	100.1	101.5	
90-1	134.1	13853.2	23.5	2681.6	2762.9	96.1	99.1	
2	134.3	14607.2	25.2	2789.3	2818.7	95.0	96.0	
3	136.3	15422.4	28.0	2851.3	2881.8	93.3	94.0	
4	139.8	16332.7	29.6	2918.7	2923.4	92.5	92.0	

*Base 1978. Cálculo del tipo de cambio real con el índice de precios al consumidor en México y el índice de mayoreo en los Estados Unidos.

Fuente: Macrossesoría Económica, S. C., "Realidad Económica Mexicana 1992", Compendio Estadístico, sector financiero, información estadística mensual; Grupo Editorial Iberoamérica, México, 1991.

Los instrumentos tradicionales de pura eficacia económica en manos de la tecnocracia ya no podían operar de manera eficiente sin el respaldo de los sectores económicos en litigio. La inflación ya no era justificable como instrumento para promover el crecimiento general del país a corto plazo. Los impactos económicos desfavorables de la misma en los salarios de los trabajadores y en las utilidades de las pequeñas y medianas empresas ya habían desbordado los niveles de tolerancia y se estaban convirtiendo en peligrosos detonadores de la inestabilidad política; la cual resultaría catastrófica para la conservación del monopolio del poder a un año de las elecciones presidenciales; amén de los resquebrajamiento internos del PRI, ya que no había acuerdo para escoger al nuevo ungido.

Se había roto de nuevo, con el largo proceso de ajuste, el compromiso tácito al que habían llegado los grupos sociales en la distribución de la riqueza social y podría surgir el desgobierno. Los trabajadores frente a la carrera de los precios, impulsada por los empresarios, exigían la indexación pero la misma -impuesta por las instituciones económicas- terminaba acelerando la inflación. A su vez, las expectativas de mayores incrementos inflacionarios a futuro incidían desfavorablemente en la inflación presente y ésta a su vez atizaba la futura; lo que agudizaba el conflicto distributivo con efectos igualmente inflacionarios. El país vivía la etapa de inflación llamada inercial en la que las medidas económica adoptadas directamente por el dogmatismo ortodoxo, aunque habían logrado controlar los mecanismos estructurales de la inflación, resultaron muy poco eficaces para atenuar los mecanismos propagadores de la misma y sus secuelas. Era preciso emplear las medidas de política económica heterodoxa basadas en la concertación política directa junto con los instrumentos técnico-económicos idóneos a emplearse, una vez que la decisión de los grupos sociales se hubiese concertado sobre una base de objetivos comunes. Sólo de ese modo las múltiples y variadas expectativas personales y de grupo, fundadas en intereses divergentes y contrapuestos, podrían conducir a la "colaboración de clases", en aras del saneamiento económico, ya tradicional en la historia práctica de la política económica mexicana.

El terreno se hallaba preparado, pues se habían dado ya, a lo largo de 5 años fuertes ajustes para atenuar la combatividad de los sindicatos. La aguda represión económica y sus efectos señalados en cifras (ver Cuadro 2.3 del anterior capítulo) así como la aceptación por parte de la dirigencia obrera de la política de conservación -a todo precio del empleo- bajo la amenaza del cierre o venta de empresas por incosteabilidad, habían reforzado el control que el gobierno ejercía sobre los sindicatos a partir de las cúpulas dirigentes manejadas por el partido de gobierno. Sólo era necesario que éste tomara la decisión para regular y restringir, en lo posible y en el tiempo de una manera más orgánica e institucionalizada, el conflicto político-económico aparejado a la lucha por mejores condiciones de vida entre los grupos sociales. La base real para la cooperación: entre los trabajadores y los capitalistas -pues estos marcan la pauta del movimiento económico- ya estaba dada, y ambos estaban dispuestos a que se pusieran reglas más claras y ciertas para calcular sus ganancias y sus salarios en el tiempo, sin que fueran afectados por la inflación de sus expectativas y, sobre este parámetro, se negociarían -fuera del pacto- los ajustes del resto de los asalariados de la administración privada y de la burocracia.

El alineamiento de la inflación -salarios y precios controlados- sobre la base de ajustes periódicos concertados, por su lado, era una experiencia más que la sociedad estaba dispuesta a aceptar en vista de tener una mayor certidumbre para planear sus estrategias y tomar sus decisiones sobre el futuro próximo de su quehacer económico; todo ello para que la inflación la afectara negativamente en la menor medida. En concreto, los trabajadores ya habían experimentado en carne propia y en cabeza ajena, dadas las experiencias de Argentina, Brasil y Bolivia², que los mecanismos de indexación aceptados al negociar sus contratos colectivos, cada cierto tiempo, no les garantizaban el resarcimiento de las pérdidas del valor adquisitivo de su salario, a lo largo del mismo, pues, realizado el ajuste, sin el control de los precios, de nueva cuenta, las variaciones de los mismos atenuaban o anulaban el efecto benéfico del incremento alcanzado. Por su lado, los empresarios, ante la incertidumbre de contar con las ganancias esperadas, dada la imprevisibilidad de las medidas de ajuste, trataban de incrementar sus utilidades presentes mediante una subida de los precios que avivaba el fuego inflacionario. Se cruzaba así en el proceso una inflación de costos (pues una futura devaluación incidiría directamente en sus costos directos

² Cf. Fanelli, J.M. y renkel, R.: "Deuda externa, ajuste y políticas de estabilización en Argentina. Notas sobre el Plan Austral" también Bacha, E.: "El Plan Cruzado y sus desafíos", "Ortodoxia o heterodoxia; La estabilización de la economía boliviana"; Heymann, D.: "Alta inflación y estabilización de choque en Argentina" y Franco, G.: "El Plan cruzado ejecución y perspectivas", en Alberto, J.L. e Ibarra, D. (Comp.), Estudios Económicos, El Colegio de México, México, 1987, pp. 39-247.

compuestos en su mayor parte por maquinarias, materia prima y bienes intermedios y en menor medida salarios que se encarecían) con una inercial que se reforzaban mutuamente.

Por su lado los expertos de la burocracia gubernamental estudiaban las diferentes experiencias de planes de choque que se habían dado en América Latina y en otras latitudes; por ejemplo, en Israel³, para analizar sus éxitos y fracasos y aplicar algo similar en las circunstancias de México, por lo que se hablaba del "Plan Azteca" como un recurso último para ajustar la economía del país⁴.

En estas circunstancias, los campesinos, los trabajadores y los empresarios aceptaron, no sin reticencia, la heterodoxia económica y la sociedad mexicana en pleno terminaría aceptando la concertación política previa como medida práctica y eficaz para negociar objetivos comunes de política económica. Así el gobierno, enfatizaba que: "Hemos logrado, en este diálogo, en este Pacto, formular un programa que se adecua a las características de la economía y de la sociedad mexicana. Inútilmente se buscará comparar este Pacto y este programa con planes que se han impuesto en otros países; no es un plan de choque en cuanto que no hay una congelación total de los precios de la economía mexicana; es, además, un programa concertado, insisto porque debo ser muy franco: se que el Pacto a nadie deja contento, pero sí, el Pacto representa lo que en términos pragmáticos podemos hacer con un esfuerzo adicional que se pide a la sociedad"⁵.

Se daba así paso a la concertación política explícita para profundizar las medidas económicas ya ensayadas de modo gradual en los anteriores programas; de tal modo que en el PASE, se intentaba una ingeniosa e inteligente combinación del PIRE y del PAC. Así reivindicando al PIRE: 1) se aprovecharía la normal recesión que tradicionalmente sobreviene en México en los dos primeros meses del año para profundizarla restringiendo al máximo el circulante y el gasto público del 22.5% al 20.5%; 2) se ampliaría y ejecutaría con mayor rapidez el programa de desincorporación de las empresas públicas (mecanismos estructurales de la inflación); 3) se efectuaría un congelamiento de los precios de los productos básicos y de los salarios, (mecanismos propagadores de la inflación) después de un incremento sin precedente de los primeros. Todo ello, con la intención de detener la inflación (que en 1987 de acuerdo a los datos del Banco de México fue del 160%, la más alta desde 1925 fecha en la que, en México, se tiene estadística de este fenómeno); 4) se ajustaría y fijaría el tipo de cambio para borrar los referentes de la inflación futura y encarecer las importaciones. Del fracasado PAC que se relanzaría -como consecuencia del reforzamiento de las anteriores medidas correctivas enumeradas- a mediados del segundo semestre de 1988 el impulso al crecimiento. Con ello, se esperaba un crecimiento real de la economía, que se estimaba para fines de 1988 en un 2% del PIB pero que fue sólo de 1.3% del PIB. Ello se conseguiría: 1) con un incremento de las tasas de interés para fomentar la inversión directa; 2) con un impulso adicional a la liberación comercial, mediante la aceleración del proceso de sustitución de permisos previos por aranceles que también bajarían del 40% al 20% para que así, la competencia externa ejerciera una acción de disciplina saludable sobre los precios internos y se bajase la inflación; 3) además, con la reducción arancelaria que se efectuaría y con el ajuste cambiario las exportaciones, en especial a los Estados Unidos, con el que se había ya firmado un "Entendimiento en materia de comercio e inversiones", tenderían a subir y las divisas a incrementarse⁶.

Esta política de drástico ataque a la inflación estructural y a la inercial por la vía del control estricto de precios y salarios concertados en la primera etapa de diciembre a febrero permitió una baja de la misma de un 15.8 % en enero al 8.3% en febrero. Para fines de febrero hasta fines de marzo (segunda etapa del PASE) se reforzó el control de precios de los bienes y servicios públicos y privados, y salarios, se bajaron gradualmente las tasas de interés, se aceleró la desregulación estatal y la apertura comercial. Del 27 de marzo al 27 de mayo se ratifican

³ Cf. "Sección Internacional", "Israel, políticas de reajuste económico" en Comercio Exterior, vol. 38, no. 11, México, noviembre de 1988, pp. 1020-1026

⁴ Cf. Dávila, F.; "De la crisis a la crisis. La política económica mexicana", en Nueva Sociedad, no. 91, Venezuela, septiembre-octubre de 1988, pp. 36-37, ante el rotundo fracaso de la estrategia gradualista seguida desde 1983 comienzos de 1987, había pronosticado un plan de choque para finales de 1987 o para los comienzos de 1988

⁵ De la Madrid, M.; "El pacto, una respuesta pragmática de la sociedad", Comercio Exterior, op. cit., p. 1079; el subrayado es nuestro (F.D.).

⁶ Cf. Ver Documento, "México-Estados Unidos. Entendimiento en materia de comercio e inversiones" en Comercio Exterior, op. cit., noviembre de 1987, pp. 964-966;

nuevamente los objetivos del pacto (tercera etapa) y a fines de mayo hasta finales de agosto se reforzaron los mismos (cuarta etapa); de tal modo que en abril la inflación bajó al 3% y en los tres meses siguientes fluctuó entre un 2% y en agosto llegó 0.9%.

Con ello, el gobierno controló el precio de nuevos productos al mismo tiempo que permitió la importación de maquinarias y equipo de transporte para el campo y fue liberando el crédito para alentar la producción, en particular la agropecuaria, que se había deprimido más que los otros sectores por la fuerza del ajuste. De esta manera se pudo corregir la carestía y desabasto que ya estaban alentando presiones sociales adicionales a las ya existentes en la esfera política. Así, se contuvo en parte, el deterioro de la confianza en el gobierno por parte de los campesinos y de los sectores populares, dada la inminencia de la contienda electoral por la presidencia del país y se atenuó también el resentimiento social por la represión económica propia del ajuste estabilizador que también había tocado a los sindicatos más poderosos del país: los acereros, petroleros, electricistas y telefonistas. Estos, sentían que sus espacios de negociación económica (caso de Pemex y la subcontratación por parte del sindicato) y política se habían achicado, dada la aplicación estricta del Código de trabajo y el rechazo jurídico de las huelgas masivas; así como por las consecuencias negativas de las desregulaciones, reestructuraciones (el caso de Aeroméxico) y ventas a la empresa privada de las paraestatales, entre ellas la mina de Cananea.

El férreo control estatal frente a los grupos sociales enrolados en el PRI, se había hecho sentir una vez más y la CTM y el Congreso del Trabajo, a pesar de las protestas, plegaron a las exigencias del gobierno en aras del "interés de la nación" y para evitar "que el país se desbordara"⁷. Por otro lado, la constancia del gobierno en mantener las restricciones presupuestarias para no sucumbir a la tentación de aliviar las riendas del ajuste durante mayo, junio y julio, álgidos meses de turbulencia política rindieron dividendos en el campo económico que restañarían poco a poco los costos políticos de la pérdida del consenso social. En efecto, el sistema político mexicano cosechó en las elecciones: la derrota del candidato oficial, "por lo menos en opinión de una gran mayoría de mexicanos"⁸. En términos oficiales, después de una evasiva excusa de que "el sistema se había caído" que aguzó el ingenio de los mexicanos descontentos con los resultados, el candidato del gobierno: Carlos Salinas de Gortari obtuvo casi el 50% mientras que el representante del Frente Nacional Democrático, Cuauhtémoc Cárdenas llegó al 37%.

En efecto, para mediados de agosto el gobierno ya anunciaba la quinta etapa del Pacto que tendría vigencia -según las intenciones concertación daba: mantener invariables los salarios y los precios de los bienes, y servicios públicos así como el del gobierno- hasta el final de su mandato en diciembre de 1988. La certidumbre del anuncio de la revisión de los precios de garantía en la primera quincena de septiembre, la desgravación del 6% del impuesto al valor agregado (IVA) al que habían quedado sometidos los alimentos procesados y los medicamentos en las anteriores etapas, así como la desgravación del 30% del impuesto sobre la renta (ISR) a los ingresos a la población del país que percibía ingresos equivalentes hasta cuatro veces el salario mínimo general del Distrito Federal y la promesa de reducir los precios de las mercancías en general en un promedio del 3%⁹ tendieron a crear en la población la esperanza de que el duro sacrificio que el gobierno había exigido estaba dando sus primeros frutos.

La dedicatoria explícita de algunas medidas a grupos sociales específicos y otras que beneficiaban a todos, buscaba tanto ampliar el consenso perdido en las elecciones como incrementar, sin soltar las amarras salariales, el poder adquisitivo de la población en general. Así, se preparaba el terreno para las nuevas alzas controladas de los productos agrícolas; pero, al mismo tiempo se generaba la ilusión -la expectativa- de una baja real de los precios mediante una baja nominal de los mismos; pero también lo anterior servía como una medida política atinada para llegar a la transición presidencial conservando la paz social amenazada por las reivindicaciones de los partidos perdedores en la oscura contienda electoral.

⁷ Cf. De la Madrid, M.; "Un esfuerzo de concertación social", Cit., p. 1078

⁸ Castañeda, J.; en "Un México 1994: un horizonte nebuloso" en Zona Abierta, Suplemento de Economía, Política y Sociedad de El Financiero, México, 2 de abril de 1993, pp. 1-11 afirma que: "El leitmotif (subrayado en el propio texto) del periodo presidencial de Salinas ha sido ganar en el cargo las elecciones que perdió en las urnas, por lo menos en opinión de una gran mayoría de mexicanos".

⁹ Ver, De la Madrid, M.; "Pacto de Solidaridad Económica, concertación para septiembre, octubre y noviembre", en Comercio Exterior, vol. 38, México, agosto de 1988, pp. 746-747.

Una vez más, con las medidas de concertación combinadas con el anclaje del tipo de cambio hasta diciembre, con ajustes fiscales drásticos, con una política monetaria y crediticia restrictiva, con una mayor y acelerada desregulación estatal y una mayor apertura comercial, se trataba de mantener firme el piso inflacionario entre cero y uno; con lo que la inflación estructural y sobre todo la inercial serían corregidas. Con la fijación del tipo de cambio, la memoria social para verificar los precios anteriores y adecuar las expectativas a las futuras devaluaciones se fue perdiendo y la inercia inflacionaria se fue apaciguando.

El fuerte amarre de los precios de los bienes y servicios públicos ayudó a que ni los obreros, ni los empresarios exigieran alzas salariales o incrementos de precios. Por su lado, la cotización del dólar tendió a la baja y la sobrevaluación de la moneda descendió; todo ello, con repercusiones saludables en las exportaciones que incrementaron las divisas, las que forzaron a la baja la propia cotización del dólar en el mercado libre y los efectos estabilizadores directos sobre la inflación inercial y estructural fueron notorios, ya que de una inflación del 177.4% en el primer trimestre de 1988 se llegó en el cuarto trimestre a una del 66.8%, o sea, un éxito extraordinario de la estrategia de choque, como se puede ver en el cuadro 3.1. En realidad, el anclaje del tipo de cambio y de los precios, combinado con la política monetaria restrictiva del Banco de México y la disciplina fiscal del gobierno completaron el cuadro de desaceleración global de la inflación.

De este modo la estabilidad social creaba el clima favorable para continuar con las reformas estructurales y éstas la retroalimentarían. Pero como la caída internacional de los precios del petróleo en septiembre y la baja del volumen de crudo, dados los estragos del huracán Gilberto en la zona petrolera, generaron fuertes presiones en la balanza comercial y en el conjunto de la economía, surgieron nuevos brotes inflacionarios que era preciso controlarlos. El reforzamiento de las anteriores medidas era necesario y una nueva prórroga del Pacto se fraguaba. Así surgió la sexta etapa del PASE que se acordó nuevamente con las organizaciones obreras, campesinas y empresariales firmantes del mismo el 16 de octubre¹⁰. Se aprovechaba así la oportunidad para realizar un nuevo ajuste en las finanzas públicas consistente en una merma del gasto por casi 600 millones de pesos con los que se absorbía en un 65% el déficit que causara la merma petrolera. Se anuncia también una nueva aceleración de la desincorporación de 50 empresas paraestatales cuya venta significaría 700 mil millones de pesos y la gestión de ayuda externa por 3 mil 500 millones de dólares -previa consulta con el presidente electo- hasta poder negociar un descenso de los intereses de la deuda que pesaban sobre las posibilidades del crecimiento a mediano plazo de la economía y constituían un elemento que continuamente estaba afectando en los mecanismos económicos que contribuían a la generación de la inflación estructural.

El adelanto de la renovación del Pacto de Solidaridad Económica cumplía así una función estabilizadora de las expectativas inflacionarias que se presentaron en los meses finales del año pues, fijó los lineamientos futuros del desenvolvimiento de la economía y generó certidumbre y confianza en la acción del gobierno, tanto y más que a finales del año se efectuaría el cambio a una nueva administración que -como ya se había pactado internacionalmente- continuaría y reforzaría la dinámica tendiente a incorporar al país a la economía mundial. El mayor acercamiento a la economía norteamericana, se prepararía mediante la continuación del ajuste estructural para la aceleración de la modernización económica a través de la prolongación de la heterodoxia económica, esto es mediante la concertación, de un nuevo Pacto que fue acordado para inicios del año de 1989¹¹. Los éxitos de la política heterodoxa inaugurada a fines de 1987 fueron tales, en términos de estabilidad y de ventajas para la acumulación y la concentración de capitales que, a pesar de la recesión y los desequilibrios sociales que ha venido provocando, continuará, al menos, durante los primeros meses del nuevo sexenio que se inaugurará el 1º de diciembre de 1994; con lo que la era de los nuevos pactos iniciada en diciembre de 1987 cumplirá ya su séptimo año.

¹⁰ Ver, De la Madrid, M.: Medidas de política Económica, acuerdo que da prórroga al Pacto de Solidaridad Económica durante el mes de diciembre, en *ibid.*, vol. 38, México, octubre de 1988, pp. 879-880.

¹¹ Ver, Salinas de Gortari, C.: Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico" en *ibid.*, México, diciembre de 1988, pp. 1145-1146.

B) EL PACTO PARA LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO (PECE) O LA CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA HETERODOXA, 1989-1994.

Este nuevo acuerdo entre las organizaciones obreras campesinas y empresariales y el gobierno (que se firmó el 12 de diciembre y entró en vigencia su primera concertación desde el mes de enero de 1989, hasta julio del mismo) es realmente la continuación del pacto anterior pues viene a reforzar la política de estabilización, cuyos resultados en términos de bajar la inflación habían sido muy alentadores. Sin embargo, éste se daba dentro de un nuevo contexto de significación esperanzadora que el nuevo presidente se encargaría de evocar en su discurso de toma de posesión¹². Después de la crisis y del sacrificio económicos que el pueblo de México había soportado con la dura etapa de ajuste que le tocó encarar al anterior gobierno "con responsabilidad y claridad estratégica", había un Estado más eficaz, una economía más sana, libertades intactas y una más vigorosa vida política y se avanzaba hacia el cambio, hacia la modernización de México pues ésta era "indispensable para poder atender las demandas de los 85 millones de hoy, a los que se sumaran diez millones más en los próximos seis años". Para realizar este nuevo ofrecimiento se necesitaría "modernizar la política, la economía, la sociedad". Por lo que "la modernización de México" era "inevitable" y el camino para los cambios a realizarse sería "la modernización nacionalista, democrática y popular".

Con esto se invitaba de nuevo el primero de diciembre de 1988, al pueblo de México a reanudar el pacto primigenio con tres promesas del gobierno en turno que reanudarían y complementarían los anhelos de la revolución mexicana, a saber: la ampliación de la vida democrática del país, la recuperación económica y, la estabilidad y el mejoramiento productivo del bienestar popular. De este modo, tal como era ya tradicional en el campo de la política económica del gobierno mexicano, el apoyo nacional estaba supeditado al compromiso de la recuperación económica para mejorar el nivel de vida en un ambiente democrático que aseguraría la paz social. Surgían, una vez más, los dos puntales y bases del "milagroso desarrollo de otros tiempos" y del futuro con el que se alentaba la esperanza del pueblo mexicano: la paz social necesaria para reanudar el crecimiento y para garantizarlo. El Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico sería de nuevo el instrumento para terminar el programa de estabilización y así emprender el crecimiento. Los lineamientos de política económica que se darían a conocer 15 días después fijarían los objetivos inmediatos y las líneas de acción para alcanzarlos en el primer año del nuevo gobierno¹³.

Así, entonces, el nuevo pacto reforzaría los ajustes anteriores para consolidar el saneamiento de las finanzas públicas, controlaría los precios y salarios para el abatimiento de la inflación e instrumentaría un programa económico de transición para fortalecer la capacidad negociadora del país y poder así concertar con los acreedores internacionales mejores condiciones para pagar la deuda; ello garantizaría la estabilidad futura del país. Se soltaría también paulatinamente el anclaje del tipo de cambio a partir de enero de 1989, para recuperar el nivel de subvaluación del peso e impulsar las exportaciones que se habían rezagado; otro tanto se haría con los precios para flexibilizar el ajuste (ver cuadro 3.2). Para cumplir con estas metas se anunciaba una devaluación diaria de un peso que duraría un lapso de siete meses y se aumentarían los precios y tarifas de bienes y servicios del sector público para evitar los subsidios de "dudosa justificación social y económica" y se mantendrían fijos los de la gasolina, la electricidad y el gas doméstico. Continuaría acelerándose la política de apertura comercial mediante la baja arancelaria, la desregulación estatal. Por su lado se recomendaba a los empresarios absorber el aumento salarial del 8% al salario mínimo, el ajuste del tipo de cambio y los aumentos de precios y tarifas del sector público; prometiéndoles la revisión de los más rezagados. La Secretaría de Comercio examinaría las demandas de aumento de precios y luego las sometería a la consideración de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto. Además, el propio gobierno ratificaba a los sindicatos de trabajadores el derecho de realizar las revisiones del contrato colectivo de trabajo para fijar los incrementos salariales (que no rebasarían el tope del 10% acordado a los salarios mínimos) y a los campesinos se les ofrecía la revisión de los precios de garantía, estímulos para que incrementen su productividad y comercialicen sus productos así como el mantener el precio invariable de los fertilizantes, del diesel y de la energía eléctrica que se utilizarían para el bombeo del agua de riego¹⁴.

¹² Idem., "Discurso de toma de posesión" pp. 1137-1144

¹³ Ver, Presidencia de la República, "La política económica para 1989" en Comercio Exterior, México, enero de 1989.

¹⁴ Cf. "Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico". Pp. 1145-1146.

CUADRO 3.2

**MÉXICO, INFLACIÓN, MOVIMIENTOS DEL TIPO DE CAMBIO REAL
Y BALANZA COMERCIAL POR TRIMESTRE, 86-90**

Trimestre	Inflación	Tipos de cambio		Real		Balanza Comercial (millones de dls.)		
		Nominal Controlado	Libre	Controlado	Libre	Exp.	Imp.	Saldo
86-1	66.7	422.9	463.7	122.3	134.1	4.009	2.969	1.040
2	77.0	522.1	554.3	128.0	135.9	3.769	3.063	706
3	91.5	664.2	686.8	135.8	140.4	3.667	2.693	974
4	103.1	836.2	846.7	142.9	144.7	4.587	2.410	2.177
87-1	109.4	1015.9	1019.2	140.5	140.9	4.828	2.513	2.315
2	124.3	1229.1	1232.3	137.7	188.1	5.360	2.917	2.443
3	134.2	1450.6	1454.3	130.9	131.2	5.211	3.307	1.904
4	148.4	1775.9	1917.3	125.5	135.5	5.260	3.486	1.774
88-1	177.4	2240.5	2265.8	113.9	115.2	5.274	3.727	1.547
2	147.8	2257.0	2297.5	104.2	106.0	5.439	4.585	854
3	107.3	2257.0	2297.5	100.7	102.5	4.981	5.164	-183
4	66.8	2257.0	2297.5	98.6	100.4	4.963	5.419	-456
89-1	26.9	2308.6	2343.1	97.2	98.6	5.404	5.167	237
2	18.4	2407.7	2434.0	99.3	100.4	6.046	5.985	61
3	17.0	2502.4	2525.5	99.8	100.7	5.536	5.829	-293
4	18.7	2593.9	2630.9	100.1	101.5	5.779	6.430	-651
90-1	23.5	2681.6	2762.9	96.1	99.1	6.157	5.942	215
2	25.2	2789.3	2818.7	95.0	96.0	5.369	6.657	-1288
3	28.0	2851.3	2181.8	93.3	94.0	7.085	8.106	-1021
4	29.6	2918.7	2923.4	92.5	92.0	8.162	9.094	-932

* Base 1978.
Fuente: ver cuadro anterior

C) LA EVOLUCIÓN DEL PECE

Visto el PECE dentro del proceso de estabilización heterodoxo que estoy examinando y de acuerdo a la insistencia en la flexibilización del control de cambios y de los precios, este aparecía como el instrumento idóneo para transitar hacia la tercera etapa del plan de choque inaugural que se dio desde diciembre de 1987 a febrero de 1988. Así, del fuerte ajuste recesivo característico de la primera etapa: alineación de los precios y fijación del tipo de cambio (PASE); se pasó a la segunda (mes de marzo hasta fines de octubre de 1988) de baja acelerada de la inflación y desde 1989 con el PECE se continuaba el proceso de estabilización que aún perdura.

La inflación con el reforzamiento de las medidas de saneamiento de las finanzas públicas realizadas en el marco del nuevo pacto continuó bajando a un ritmo acelerado y del 51.7% en 1988 llegó al 19.7% a finales de 1989. Como resultado de la disciplina financiera, el déficit público bajó también del 11.3% en 1988 al 6.3% en 1989, o sea, casi un 45%. Una vez neutralizados los efectos inflacionarios del incremento de los precios con el que empezó el programa en los primeros meses, creció el clima de estabilidad y las altas tasas de intereses ofrecidas permitieron un significativo retorno de capitales y una dinamización de la actividad productiva que se manifestó en un crecimiento económico del 3.3% ligeramente superior a la tasa de natalidad y casi un 50% mayor al del año anterior que fue sólo del 1.7%.

Por su parte, la actividad exportadora se mantuvo constante convirtiéndose en la más importante fuente de generación de divisas; no obstante, las tasas de interés, necesarias para atraer capitales foráneos, resultaron ser demasiado altas y onerosas para las finanzas gubernamentales; lo que provocó para mediados del año una etapa de incertidumbre sobre los beneficios del pacto que se incrementó, cuando el gobierno decidió junto con los sectores firmantes renovarlo por segunda vez. El ritmo creciente de las importaciones, favorecido por la dinámica económica y reforzado por la subvaluación del tipo de cambio, provocó un continuo deterioro de la balanza de pagos y las presiones sobre el tipo de cambio volvieron a crear desconfianza sobre las medidas estabilizadoras, razón por la que el gobierno aceleró las negociaciones con el FMI para garantizar un mediano crecimiento gracias a una reducción de la transferencia de recursos por pago de la deuda y de sus intereses¹⁵. Por fortuna la firma del acuerdo para la negociación de éstos, anunciada el 23 de julio de 1989 en su Mensaje a la Nación¹⁶, permitiría la liberación futura de recursos para destinarlos al fomento de la actividad productiva; lo que, fue desvaneciendo poco a poco las dudas que se tenía sobre lo acertado de las medidas de política económica.

De este modo, la estabilización siguió su marcha alentada por la "Definición de los términos y condiciones de la renegociación de la deuda"¹⁷ y por el anuncio oficial de una "nueva era de cooperación y amistad entre México y los Estados Unidos" hecho por el presidente mexicano ante el Congreso de Estados Unidos a comienzos de octubre de 1989¹⁸.

En estas circunstancias la nueva administración que feneció el 1º de diciembre de 1994 evocaba en su Primer Informe de Gobierno las bondades de los ajustes realizados para lograr "la modernización nacionalista y popular", continuación de la "revolución social que nos dio origen" y señalaba, una vez más, las tres promesas que implicaban acuerdos nacionales: "para la ampliación de la vida democrática, para la recuperación económica con estabilidad de precios y para el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población". Se renovó el PECE por tercera vez, sin mayores variaciones en sus objetivos el 13 de diciembre de 1989 y duraría hasta el 27 de mayo de 1990¹⁹.

¹⁵ Cf. Aspe, P. y Mancera, M.; "Convenio del Gobierno de México con el Fondo Monetario Internacional", en Comercio Exterior, vol. 39, México, abril de 1989, pp. 355-359.

¹⁶ Cf. Salinas de Gortari, C., "solución al problema de la deuda" y "Comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", en Comercio Exterior, vol. 39, México, julio de 1989, pp. 762-763.

¹⁷ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comercio Exterior, vol. 39, México, septiembre de 1989, pp. 762-763

¹⁸ Salinas de Gortari, C.; "México-Estados Unidos: una nueva era de cooperación y amistad" en Comercio Exterior, México, octubre de 1989, pp. 907-911.

¹⁹ Cf. "Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. Convenio por el que se extiende hasta el 31 de julio de 1990 el término de la concertación vigente" vol 39, no. 12, México, diciembre de 1989, p. 1088.

3.2.-LA POLITICA DE CRECIMIENTO SIN INFLACION Y LA POLITICA LABORAL

En los inicios de 1990 se vivieron los tiempos más complicados del año pues la actualización de los precios del sector público, provoca una ligera aceleración de la inflación (de 3.4% en diciembre de 1989 al 4.8% en enero de 1990); no obstante, con el crecimiento de la actividad económica, facilitada por las expectativas de la culminación de la renegociación de la deuda²⁰, la tendencia estabilizadora continuó; a su vez, la balanza fiscal tuvo un saldo positivo en las cuentas operacionales y el tipo de cambio experimentó una relativa estabilidad; lo que amplió el horizonte para un crecimiento más dinámico a mediano plazo de la economía mexicana. La confianza perdida fue recuperándose, cuanto y más que el gobierno pudo bajar las tasas de interés que había mantenido altas para contrarrestar la fuga de capitales y fomentar el ahorro interno, ante la carencia de crédito externo para corregir los déficits fiscales.

Ello dio al gobierno un mayor nivel de maniobra para acelerar el crecimiento económico y convencer interna y externamente a los que dudaban del éxito del ajuste. Se aprovechó de la coyuntura para impulsar la estrategia de integración de México a la economía norteamericana mediante la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y luego con el Canadá. Lo que reforzaría la nueva era de amistad y la modernización emprendidas.

El aumento de los precios del petróleo, a consecuencia de los acontecimientos del Golfo Pérsico, los alicientes al comercio exterior de bienes y servicios, la presentación del Programa de Ciencia y Tecnología, la Normalización de los acuerdos con la banca comercial para la renegociación de la deuda externa del país, la firma del paquete financiero que representara un alivio de un poco más de 4 mil millones de dólares en promedio anual de 1990 a 1994, la presentación del Programa de intercambio de la deuda pública por capital y el anuncio de la desnacionalización de la Banca, que se dieron a lo largo de los 6 primeros meses de 1990, aumentaron la confianza de la iniciativa privada nacional e internacional en la estabilidad del país y se inició un nuevo retorno de capitales.

Se vivía ya la cuarta etapa de renovación del programa que arrancó el 28 de mayo con un deslizamiento diario del peso de 80 centavos, con incrementos a los precios de los energéticos del 6% al 12% y de otros según la evaluación de los rezagos que se presentarían. También se concertó, en esta fase que se prolongó hasta el 11 de noviembre de 1990, un acuerdo para la elevación de la productividad. El retorno de los capitales y la aceleración del crecimiento provocaron un repunte de la inflación que alcanzó una tasa anual de casi el 30% para fines del año; lo que era una señal inequívoca de que un leve aflojamiento de los candados gubernamentales: bajas de las tasas de interés, liberalización de precios de los artículos básicos, ajustes de servicios públicos y el aumento del costo ponderado de las importaciones para disminuir el déficit comercial, mostraba que las causas estructurales de la inflación aún persistían; entre ellas el déficit financiero del gobierno que a finales de 1990 alcanzó una cifra de 23.2 billones de pesos; lo que conyuvó al reurgimiento de la inflación inercial que el gobierno tuvo que reprimir fuertemente hasta con la clausura de los negocios que elevaron considerablemente los precios; pero, no pudo hacer casi nada frente al alza de la vivienda, de la educación, de la salud y del esparcimiento, servicios que para bajar sus costos dependen de una más amplia infraestructura de desarrollo del país que deberá darse a mediano plazo²¹.

La quinta etapa del PECE iniciada el 12 de noviembre de 1990 que duraría hasta el 10 de noviembre de 1991, estuvo orientada a disminuir la inflación hasta una tasa fluctuante entre el 15 y 18%. Para ello se bajó el

²⁰ Cfr. Banamex, "Acuerdo sobre la deuda externa" en Examen de la situación Económica de México, febrero de 1990, pp. 73-79; también Salinas de Gortari, C.: "El acuerdo de renegociación" y Aspe, P.: "Se sientan las bases para consolidar la recuperación" en Comercio Exterior, México, febrero de 1990, pp. 114-118, para un tratamiento más detallado de la renegociación de la deuda mexicana ver Devlin, R. Y Lusting, N.: "El plan Brady un año después" y Carsten, T. Y Gándara, G.: "El plan Brady y la negociación de la deuda mexicana", en *Ibid.*, abril de 1990, pp. 295-308.

²¹ La inflación del 29% alcanzada a fines de 1990 se debió en un 76.5% a la influencia de la inflación interna o de servicios a través del ajuste de precios y tarifas de servicios públicos y privados y sólo en un 23.5% a la inflación importada que afectó vía costos a los bienes comerciables internamente y con el extranjero, que dependen tanto de los movimientos de la paridad del peso 37% como de la inflación de las economías externas (63%). Cf. Banamex, "Inflación" en Examen de la situación económica de México, marzo de 1991, pp. 105-110.

deslizamiento del tipo de cambio a 40 centavos diarios pero al mismo tiempo se incrementaron los precios de los energéticos del 10% al 30 %, se aumentaron los salarios mínimos que se habían rezagado en un 18% y se elevaron también los subsidios a la tortilla y a la leche para poder controlar las expectativas contenidas de inflación que ejercían presiones en el resto de la economía. Además, se propuso una reducción de los impuestos y se exhortaba, al mismo tiempo, a los empresarios a absorber los incrementos de los energéticos y de los salarios mínimos, mientras el gobierno se comprometía a revisar los precios de garantía del maíz y del frijol para indexarlos al deslizamiento de la inflación.

Los incrementos realizados en los precios levantaron ligeramente el nivel de la inflación en los primeros meses de 1991 pero para mediados de año ésta fue controlada. Por su parte, los esfuerzos para bajar la inflación fueron combinados con inversiones en infraestructura por parte del gobierno para consolidar el paulatino crecimiento de la planta productiva luego de casi diez años de austeridad en las finanzas públicas. Al final del año el crecimiento de la economía alcanzó un ritmo del 3.6% del PIB menos acelerado con respecto al del año anterior que fue del 4.5% pero con una inflación del 18.8%; esto es, un 40% menor que la de 1990. En lo que respecta a la balanza comercial su déficit sufrió nuevos aumentos como resultado de un incremento de más del 40% en las importaciones y de sólo un 20% de las exportaciones no petroleras. No obstante, este déficit fue compensado por el retorno de capitales, la inversión extranjera directa y por una gran reserva internacional superior a los 15 mil millones de dólares que el gobierno tuvo a su disposición en previsión de cualquier ajuste eventual.

Los resultados favorables alcanzados en 1991 dieron lugar a la sexta fase del pacto que iniciaría el 10 de noviembre de 1991 y terminaría el 20 de octubre de 1992. En esta nueva etapa, el deslizamiento diario del peso fue de 20 centavos y desapareció el control de cambios para fomentar las exportaciones y el desarrollo de la industria maquiladora; se dio un incremento de los energéticos del 15% al 55% y de los salarios mínimos de un 12%, no aplicable a los salarios contractuales que se fijarían dentro de la más amplia libertad de las partes; además de una reducción del Impuesto al Valor Agregado del 15% y 20% al 10%, de los energéticos del 15% al 55%; al mismo tiempo, se solicitaba al sector empresarial que absorbiera los incrementos salariales y de los energéticos. Con esta nueva concertación se quería alcanzar la baja de la inflación a un sólo dígito y proseguir con la recuperación del crecimiento, alentada con los recursos obtenidos por la desincorporación bancaria y de las empresas estatales que contribuyeron a amortizar buena parte de la deuda pública interna. Su saldo que en 1990 representaba el 23.4% del PIB en el primer trimestre de 1992 descendió al 13.6%²².

En lo tocante al primer objetivo de bajar la inflación se llegó para finales de 1992 al 11.9% y en cuanto al segundo, sólo se tuvo un crecimiento del 2.9%, dado el reforzamiento de las medidas restrictivas. Estas se aplicaron con mayor fuerza desde el segundo semestre para controlar las desviaciones en las metas fijadas por los lineamientos de política económica que tuvieron que ver con el entorno internacional desfavorable al incremento de exportaciones a los Estados Unidos. Ello, junto con los obstáculos que enfrentó la unidad europea, la caída de la bolsa de valores japonesa, y el anuncio de la venta de títulos de Teléfonos de México, alentaron la especulación financiera. Se sumaron a lo anterior el clima de expectativas desfavorables a la integración económica con los Estados Unidos, dada la evolución del debate político previo a las elecciones presidenciales en ese país.

El estricto control de las finanzas públicas, la esterilización de los capitales extranjeros a través de la colocación de valores gubernamentales entre los inversionistas; el límite impuesto a las transacciones en moneda que realizan los bancos²³, el nuevo coeficiente de liquidez impuesto a los mismos, así como la nueva modalidad de hacer transacciones con las coberturas cambiarias que el gobierno utilizó como medidas para sanear, el negocio financiero, entre julio y septiembre, sumados con el déficit creciente de la balanza comercial (11 mil 500 millones de dólares sin considerar los ingresos netos de las empresas maquiladoras y 840 millones con ellos) reforzaron la desaceleración del crecimiento y generaron expectativas devaluatorias. Ello obligó al gobierno a romper la

²² Cf. Banamex, "La marcha de la economía: información sintética", en Examen de la situación económica de México, agosto de 1992, p. 369.

²³ Como resultado de la liberación cambiaria se incrementó la liquidez en el mercado así como el volumen de operaciones y el número de participantes en la compra y venta de divisas; hecho que podría en cualquier momento crear una crisis de liquidez, por lo que el Banco de México en el mes de abril impuso un límite de 10% a la captación de dólares por parte de las instituciones bancarias.

vigencia de la sexta etapa del PECE que se había fijado hasta el 31 de enero de 1993 y adelantar la firma de la séptima fase del mismo al 20 de octubre de 1992, para devolver la confianza y seguridad en el manejo de la economía y aquietar las erráticas fluctuaciones del mercado.

En términos de siglas la nueva fase siguió siendo el PECE aunque se le llamó, Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo para enfatizar el nuevo entorno nacional e internacional en la nueva etapa de ajuste y concertación. La política heterodoxa a la que se había vuelto desde 1987 había dado resultados alentadores. Era preciso dar un paso más en la nueva estrategia de modernización, manteniendo el control de los sectores más dinámicos de la economía en especial de los trabajadores, mediante el ofrecimiento de mayor estabilidad para avanzar en los cambios estructurales a partir de la integración a la economía norteamericana para lo cual, ya se habían firmado apresuradamente los lineamientos jurídicos del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá con el presidente saliente de los Estados Unidos. Así, el país, tendría nuevas oportunidades para desarrollar su comercio, para generar nuevos empleo, acceder a nuevas tecnologías y ser más competitivo en los mercados mundiales²⁴.

Las tesis y lineamientos del pacto, una vez más, recalcan la necesidad de abatir la inflación hasta llegar a un dígito en 1993 meta próxima a la que tienen nuestros socios comerciales más cercanos; lo que se lograría mediante la concertación entre los sectores, redoblando los esfuerzos para profundizar los logros ya alcanzados en la modernización y cambio estructural. Los obreros para ello requieren organizaciones sindicales más sólidas que puedan propiciar activamente los nuevos cambios, decía el documento del Pacto. Los empresarios deben invertir de modo más eficiente en tecnología y bienes de capital así como en el impulso al empleo y a la capacitación para una mejor administración. Los campesinos por medio de sus organizaciones aprovecharán las nuevas reformas constitucionales para capitalizar el campo y aumentar la productividad. El gobierno y sus instancias estatales y municipales apoyarán a los sectores productivos mejorando las instituciones, su funcionamiento y la administración de las mismas, de tal modo que se pueda incorporar a la economía formal a los que se encuentran al margen de la misma.

Para cumplir con los lineamientos anteriores la política económica que se instrumentó en 1993 fue de nuevos ajustes para continuar la disciplina fiscal, así como se dio un reforzamiento de las políticas presupuestales monetarias y cambiarias para consolidar lo más pronto posible la estabilidad económica y de precios, y preparar al país para la competencia en el interior del TLC, ya por firmarse. Se profundizaron aún más los esfuerzos para fomentar el ahorro público, disminuir la deuda y continuar con la desincorporación de empresas públicas y de la banca. Todo ello con el objeto de aumentar el gasto social, especialmente en el medio rural y obrero; sin descuidar la seguridad social de todos los trabajadores para los que se instaura el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) con el que se contribuirá -según el gobierno- a mejorar sus condiciones de vida cuando alcancen su edad de retiro pero, en el corto plazo, éste apoyará la expansión del sistema financiero para que así éste pueda impulsar proyectos de larga maduración; tales como la de construir viviendas o conjuntos habitacionales dignos de los trabajadores.

Finalmente, se llega a los acuerdos del Pacto que se resumen en: 1) reforzamiento de la disciplina fiscal para lograr un dígito de inflación en 1993; 2) ajustes graduales y uniformes de los energéticos: electricidad doméstica y pasajes de transporte de comercial de baja tensión y gasolina no mayores del 10% en 12 meses; sin que ello repercuta en el precio de los pasajes de los transportes de carga y de carretera que podrán luego ajustarse a la baja; 3) ajuste diario del tipo de cambio de 40 centavos equivalentes a partir de 1993 a 4 diezmilésimos del nuevo peso en el precio máximo de venta a partir del 20 de octubre; 4) Aumento a los salarios mínimos de un 7% a partir del primero de enero de 1993 y de los contractuales, según se logre negociarlos; sin que ello incida en la meta concertada de llegar a la inflación de un dígito para 1993; 5) el sector empresarial privado se compromete a absorber los incrementos de los salarios mínimos y de los energéticos y a seguir manteniendo el abasto de los mismos; 6) en el sector agropecuario se llevará a cabo un programa de apoyos que signifique mayores ingresos para los productores pecuarios, sin afectar los precios finales por costos de intermediación; 7) Se llevará a cabo un programa de Solidaridad obrera con especial atención a la vivienda, así como se promoverán las condiciones de un entorno socioeconómico favorable al incremento de la productividad y la competitividad.

²⁴ Ver, Salinas de Gortari: "Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo. Concertación vigente hasta el 31 de diciembre de 1993", en Comercio Exterior, vol. 42, México, noviembre de 1992, pp. 1004 y ss.

De tal modo que, el anuncio en noviembre de duplicar el margen del 10% de captación bancaria en moneda extranjera para impulsar las exportaciones y apoyar la venta interna de bienes de capital se hacía, en el contexto del pacto, para apaciguar a los sectores financieros que ante el cambio de la unidad monetaria que se daría a partir del primero de enero de 1993 no alentasen expectativas inflacionarias mediante movimientos en el tipo de cambio mayores que los ya determinados por el gobierno. De todas maneras, se dieron en los tres primeros meses del nuevo año movimientos de inestabilidad cambiaria que en los siguientes meses estuvieron dominados por la oferta de dólares que favoreció la acción estabilizadora de la economía.

Así es como, sobre las bases anteriores se fijaron para 1993 las acciones de política económica restrictiva, que fueron similares a las de 1992 pero aún más drásticas, en especial las monetarias, para abatir el nivel y ritmo de la inflación, dado el interés del gobierno de llegar a la meta inflacionaria de un dígito; lo que se consiguió en los primeros días de junio de ese año al alcanzar ésta 9.9%. En esta forma, el crecimiento real del PIB en relación al de 1992 que fue del 2.9%, descendió al 2.4% en el primer semestre de 1993. Para el fin del año la desaceleración provocada fue del 2.2% y la tasa inflacionaria fue del 9.5% o sea, 2.5% mayor que la que el gobierno se fijó como meta en los Criterios generales de política económica para 1993²⁵.

La escasez de créditos, el curso altamente inestable del Tratado de Libre Comercio y el reforzamiento de las medidas restrictivas junto con el inicio de la etapa preelectoral contribuyeron a restringir aún más las inversiones y a generar tensiones adicionales que afectaron el desarrollo de la economía. Una vez más el gobierno se vio en la obligación de adelantar la octava fase del pacto al 3 de octubre de 1993 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1994²⁶.

Luego de enfatizar en el abatimiento de la inflación, en la estricta observancia de la disciplina financiera que han propiciado la estabilidad cambiaria y la baja gradual de la tasa de interés; lo cual -se dijo- ha generado recursos en montos sin precedentes en la historia del país para el gasto social. Se continuará con las medidas de apertura comercial, con el proceso de desregulación para profundizar los cambios estructurales y llegar a una rápida recuperación. Por lo que el gobierno integrará un programa de política económica que cierre la brecha entre la inflación interna y externa para posibilitar un mayor crecimiento y una mayor generación de empleos.

En estricto sentido el pacto servía una vez más, tanto para crear un ambiente de estabilidad y despejar las incertidumbres económicas y políticas que el posible aplazamiento de la firma del TLC, planteaba así como para crear un entorno favorable para la conducción de la economía en un año fundamentalmente político. Globalmente, el acuerdo marcaba un alto en el camino del ajuste oneroso para los empresarios y en especial para los trabajadores, en vista de cosechar un fuerte apoyo electoral que no podría garantizarse con una profundización de la recesión que el país experimentaba. El estado de las finanzas públicas permitiría al gobierno, sin sacrificar sus metas de ajuste monetario y antiinflación, relajar un poco las presiones tributarias, disminuir los costos de las tarifas de los bienes y servicios públicos para abaratar costos así como dispensar a los sectores más castigados por las políticas de ajuste de los impuestos fiscales y a los trabajadores ofrecerles incrementos salariales acordes con la inflación esperada del 5%, más los bonos de productividad.

En realidad, una vez más la concertación parecía funcionar aunque las metas de un crecimiento de un 4% para lograr cubrir con las 800 mil nuevas plazas requeridas anualmente para apaciguar en algo el desempleo creciente no parecían técnicamente compaginarse con la baja inflación que se esperaba.

Así, aunque a comienzos de 1994 se ratificó formalmente el TLC, luego de las duras negociaciones relativas a las enmiendas en el campo laboral y ambiental, el nebuloso panorama de fines de 1993 se transformó en uno de algidas tormentas que desde el levantamiento de Chiapas, el primero de enero de 1994, pasando por la ola de

²⁵ Ver, Presidencia de la República, "Criterios generales de política económica para 1993", en Comercio Exterior, México, diciembre de 1992, p. 1190

²⁶ Ver, Salinas de Gortari, C.: "Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo. Concertación vigente hasta el 31 de diciembre de 1994", en *Ibid.*, vol. 43, México, octubre de 1993, pp. 117-920; también, "Paridad sin cambio: más salario con productividad", en *El Financiero*, 4 de octubre de 1993, p. 30.

inestabilidad bursátil a la que dio lugar la subida de las tasas de corto plazo de los bonos por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos en febrero, hasta el asesinato del candidato del PRI el 23 de marzo del mismo año pusieron a la economía al borde del colapso. El respaldo de los Estados Unidos al gobierno mexicano y la promesa de éste de continuar con la política económica de mayor apertura al capital financiero internacional y, en el campo político, de permitir la entrada de observadores extranjeros para ratificar las reformas hechas en el proceso eleccionario, a partir de las cuales el candidato del gobierno volvió a ganar de modo apabullante, parecieron despejar la marejada política que se avecinaba; pero, la economía no parecía retornar a su cauce normal.

En efecto los eventos anteriores al cruzarse con el fin del sexenio, el compás de espera de la ratificación por parte de la oposición del candidato triunfante y la necesidad de llevar adelante modificaciones sustanciales en el programa de ajuste económico para lograr la transición pacífica por la que la sociedad optó el 21 de agosto, hicieron necesario, ratificar nuevamente el Pacto Social inaugurado en 1987. De tal modo que el 24 de septiembre se emprendía en la novena fase del mismo denominada Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento, conocido por las siglas PABEC. El solo nombre de la concertación nos muestra claramente que se trata, con la misma, de articular la política económica del gobierno saliente con el que se posesionara del poder el 11 de diciembre. La idea de bienestar para la familia manejada como promesa de campaña se troca en la de un bienestar generalizado para la población dentro de una etapa de crecimiento con estabilidad.

Se pretendía en el escrito acelerar el desarrollo al doble de la tasa de crecimiento de la población que es de el 1.9% y lograr una inflación del 4%, para alcanzar un nivel de mayor competitividad, principalmente con nuestros socios comerciales de América del Norte.

En efecto, si algo de certidumbre trajo el Nuevo Pacto por el espacio de tres días, el 28 de septiembre, cuando ya se anunciaba de nuevo, tras el buen suceso político del triunfo electoral, el éxito rotundo de la política económica implementada, el nuevo asesinato del Secretario General del CEN del PRI -al parecer por motivos políticos de ajustes internos de fuerzas dentro del partido del gobierno- volvió a generar inestabilidad política y gran incertidumbre económica. El tremendo efecto sobre la deprimida economía del país aún perduraba en vísperas del cambio presidencial del primero de diciembre de 1994, a pesar del aire de triunfalismo expresado en los magníficos resultados del sexenio, presentados por el presidente saliente en su último informe.

3.3.-LA EVOLUCION LABORAL Y LA POLITICA ECONOMICA

Los fuertes ajustes heterodoxos a los cuales fue sometida la economía mexicana arrojó un saldo muy negativo en materia laboral y esto contradice el punto de vista social, de que el éxito de un modelo de desarrollo económico de un país debe medirse en términos de su capacidad para mejorar el nivel de vida de la población. Un buen indicador de tal capacidad sería el número de puestos de trabajo que se generan y la remuneración que proporciona, ya que la fuente principal o única de ingresos de la mayoría de las familias es el trabajo.

El modelo neoliberal aplicado como política de choque en la economía mexicana generó logros negativos en comparación con las políticas populistas aplicadas antes del presidente Miguel de la Madrid, para comparar se muestran los logros del período neoliberal y del período "populista" (ver cuadro 3.3).

CUADRO 3.3

EVOLUCION DEL EMPLEO Y DE LA PRODUCTIVIDAD. 1970-1983

Año	Empleo ^a	Productividad ^b
1970	12 955	180.7
1982	21 483	224.9
1993	23 485	240.3
1970-1982 ^c	4.3%	1.8%
1982-1993 ^c	0.8%	0.6%
Aumento anual promedio		
(en millares)		
1970-1982	711	
1982-1993	182	

^a En millares de personas.

^b En millares de pesos con su valor del año 1980.

^c Tasa promedio anual de crecimiento.

Fuente: José C. Valenzuela. "El modelo neoliberal, contenido y alternativas", en Investigación económica, núm. 211, enero-marzo de 1995.

En el periodo neoliberal, la tasa promedio anual de crecimiento del empleo se eleva a 0.8%. Esta tasa es muy reducida tomando en cuenta la tasa de crecimiento de la fuerza laboral, que se estima en 3% según los datos del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Durante el periodo "populista", el empleo crece cinco veces más rápido que durante el "reino" neoliberal, con una tasa promedio anual de crecimiento del empleo de 4.3%.

Si se toma como base las cifras en valor absoluto, la comparación es todavía más impresionante: durante el periodo 1970-1982, el empleo ha aumentado en promedio 711 000 personas cada año, mientras que durante la fase neoliberal, solamente se generaron 182 000 nuevos puestos de trabajo. Si se recuerda que para mantener una tasa constante de desempleo hace falta crear un millón cien mil nuevos puestos de trabajo cada año, nos podemos dar cuenta de la gravedad de la situación.

Ya que las cifras oficiales sobre el desempleo son totalmente fantasiosas (2.1% de la población en edad de trabajar en diciembre de 1990), tenemos que considerar de otra manera el problema, y referimos a un enfoque indirecto. Por ejemplo podemos comparar la evolución de la población activa (ver cuadro 3.4)

CUADRO 3.4

POBLACION ACTIVA Y POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR 1980-1990

Variable	1980	1990	Tasa anual
a) Población en edad de trabajar (millares)	35 366.3	46 234.0	2.7%
Índice	100.0	130.7	
b) Población activa (millares)	21 941.7	23 403.4	0.7%
Índice	100.0	106.7	
c) a-b (millares)	14 424.6	22 830.6	5.5%
Índice	100.0	170.1	
d) b/a	0.620	0.506	
e) a-b/a	0.38	0.494	

Fuente: José C. Valenzuela, a partir de datos del INEGI de los censos de población.

Como se puede observar, existen diferencias muy marcadas entre el crecimiento de la población ocupada y el de la población en edad de trabajar. El número de personas desempleadas aumentó aproximadamente en diez millones, en diez años. En 1980, la tasa de desempleo era de cerca de 38%; casi alcanza el 50% en 1990. Como capacidad de los neoliberales mexicanos para fabricar desempleados, no se podía esperar mejor resultado.

En lo que se refiere a la productividad, los resultados de los neoliberales no dan para mayor optimismo. En efecto, en el periodo "populista", el aumento de la productividad se estableció en 1.8% por año y por persona. Esta cifra no es muy elevada, pero rebasa por mucho el 0.6% anual registrado durante los años del neoliberalismo (ver cuadro 3.3). José Valenzuela observa justamente que, basándose en estas cifras, haría falta esperar 116 años para que se duplique la productividad. Como era de esperarse, este ritmo tan mediocre de aumento de la productividad se asocia con logros mediocres en materia de formación de capital. A este respecto, David Ibarra²⁷ recalca que la formación de capital en la industria no aumenta más que en 1.9% anual entre 1982-1992, mientras que las existencias de capitales han bajado en 1.5% a causa de cierres de plantas y equipos obsoletos. Recordemos que el periodo "populista" (1972-1981) registró para estas variables tasas del 9 y del 6%.

²⁷ David Ibarra, "Algunas experiencias devaluatorias", en Comercio Exterior, México, marzo de 1995, p. 278.

CONCLUSIONES

UNA EVALUACION DE LA APLICACION DEL MODELO NEOLIBERAL EN LOS SEXENIOS DE MIGUEL DE LA MADRID Y CARLOS SALINAS DE GORTARI.

En este trabajo se analizaron los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari quienes aplicaron en México el modelo neoliberal y la incidencia de éste en la política laboral. Los resultados de este modelo en materia de bienestar social fueron desastrosos, veamos los resultados:

A) RESULTADOS A NIVEL DE LA PRODUCCIÓN.

Se considerara la evolución del PIB global y, así mismo, la del PIB manufacturero y del PIB agrícola. Es decir, de los sectores productivos más decisivos. Para mejor dimensionar los resultados que se obtienen en el periodo neoliberal se agregan los correspondientes a un periodo anterior de igual longitud y en el cual imperó lo que los actuales responsables de la política económica han calificado como "concepción populista". Los datos se muestran en el cuadro 1.

Según se puede observar, los resultados -tanto a nivel global como en los dos sectores básicos- son mínimos. De hecho, nos hablan de una situación que es de semiestancamiento. Como además en el periodo 1982-1994 la población creció algo por encima del 2.0% anual, ello también nos advierte sobre un descenso nada venial en el PIB total por habitante, una caída aún mayor en el PIB agrícola per cápita y un estancamiento en el PIB industrial por habitante.

CUADRO 1

EVOLUCION DEL PRODUCTO: GLOBAL, MANUFACTURERO Y AGRICOLA, 1970-1994 (Precios constantes de 1980)

Año	PIB total	PIB manufacturero	PIB agrícola
1970	100	100.0	100.0
1982	206.4	189.9	145.8
1982	100.0	100.0	100.0
1994	119.2 ^a	126.9 ^b	109.7 ^c
1970-1982 ^d	6.2%	5.5%	3.2%
1982-1994 ^d	1.5%	2.0%	0.8%

^a Para 1994, se supone un crecimiento del 2.0%.

^b Para 1994, primeros nueve meses.

^c 1993.

^d Tasa media anual de crecimiento.

Fuentes: INEGI y SHCP.

¹ Se les llama gobiernos populistas, a aquellos en los cuales, los presidentes de la República fomentaron políticas paternalistas a todos los sectores económicos.

La comparación con el periodo anterior (sexenios de Echeverría y López Portillo) resulta elocuente. La superioridad del modelo de política económica de ese periodo es apabullante y guarda gran distancia con las opiniones de la derecha gobernante.

Otro aspecto de interés se refiere a la evolución de la composición del producto. Para el caso, se distinguen ramas productivas y ramas improductivas. Como aproximación, se clasifican a los sectores primario y secundario en calidad de sección productiva. Y al terciario, como sección improductiva. El resultado se muestra en el cuadro 2.

CUADRO 2
DISTRIBUCION DEL PRODUCTO, SECTOR PRODUCTIVO
E IMPRODUCTIVO, 1982-1993

Año	PIB ^a	PIB ^b	PIB total
1982	100.0	100.0	100.0
1993	112.1	120.0	116.8
1982-1993 ^c	1.0%	1.7%	1.4%
Diferencia ^d	235.7%	577.3	813.0
Composición ^e	29.0%	71.0%	100.0

^a = sectores primario y secundario (productivos).

^b = sector terciario (improductivo).

^c = tasa media anual de crecimiento.

^d = PIB de 1993 menos PIB de 1982. En miles de millones de pesos de 1980.

^e = porcentajes del incremento del PIB entre 1982 y 1993.

Fuente: INEGI.

Como se puede observar, entre 1982 y 1993, el PIB apropiado por los sectores improductivos crece más rápido (1.7% anual). Pero lo más llamativo es que en la relación con el incremento del PIB en el periodo, nada menos que un 71% fue a concentrarse en las ramas productivas y, consecutivamente, menos de la tercera parte se quedó en manos de los sectores productivos. Nos encontramos aquí, con un indicio no menor, del sesgo parasitario del modelo neoliberal. Solo acabe agregar lo que viene a ser la resultante de esas tendencias: si en 1980 la sección productiva se apropiaba de un 41.0% del PIB global, en 1993 lo hizo de sólo un 38.6%.

B) EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO

El producto que genera el sistema se puede igualar al resultado de multiplicar la ocupación por la productividad. Es decir, son las variaciones en la ocupación y en la productividad los factores que determinan el crecimiento del producto. En el cuadro 3 que sigue, se resume la información básica al respecto.

Según se observa, el crecimiento de la ocupación resulta dramáticamente pequeño. Ese 0.8% anual contrasta con el crecimiento de la fuerza de trabajo en el periodo, el cual se ha estimado en alrededor de un 3%², algo que nos está indicando que la desocupación tiene que haber crecido exponencialmente en el periodo neoliberal.

² De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, SPP, México, 1989.

CUADRO 3
EVOLUCION DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD, 1970-1993

Año	Ocupación ^a	Productividad ^b
1970	12 995	180.7
1982	21 483	224.9
1993	23 485	240.3
1970-1982 ^c	4.3%	1.8%
1982-1993 ^c	0.8%	0.6%
Incremento promedio anual (miles) :		
1970-1982	711	
1982-1993	182	

^a = miles de personas.

^b = miles de pesos de 1980.

^c = tasa media anual de crecimiento.

Fuente : INEGI

En el periodo del "populismo", la ocupación se expande más de cinco veces más rápido, creciendo al 4.3% anual. En términos absolutos, la comparación resulta quizá aún más elocuente: en el periodo 1970-1982 la ocupación se elevaba, en promedio, en 711 mil personas por año. Luego en la fase neoliberal, sólo en 182 mil personas por año. Si se piensa que para mantener inalterada la tasa de desocupación se necesitan crear casi un millón cien mil nuevas ocupaciones por año, se puede advertir la extrema gravedad de la situación. Y si para fines de 1982 el entonces presidente De la Madrid reconoció una tasa de desocupación abierta del 8%³, la evolución subsiguiente tendría que haber provocado, hacia 1994, una tasa de desempleo de un 30% o más. Algo que el subempleo y la estampida de la fuerza de trabajo mexicana hacia Estados Unidos ha disimulado en alguna medida.

Como las cifras oficiales sobre desempleo son completamente inútiles, la magnitud del problema debe ser evaluada con aproximaciones indirectas. Por ejemplo, podemos comparar la evolución de la ocupación con la que mantiene la "población en edad de trabajar" (= PET) o "población potencialmente activa"⁴. La información se presenta en el cuadro 4.

Según se observa, entre el crecimiento de la ocupación y el de la población en edad de trabajar surgen diferencias abismales. Por lo mismo, la masa de la población que por su edad puede trabajar pero no lo hace, se eleva en casi diez millones de personas, algo muy difícil de concebir en el mundo contemporáneo. Esta parte de la población, que equivalla a un 38% de la PET en 1980, llegó a ser prácticamente la mitad de la PET según el censo de 1990 (ver fila E del cuadro 4). Es decir, la masa de ocupados tendría una magnitud prácticamente similar a la del ejército de reserva.

³ Ver entrevista en diario Excelsior, 8 de julio de 1984.

⁴ Se trata de la población que tiene entre 14 y 65 años.

CUADRO 4

POBLACION OCUPADA Y EN EDAD DE TRABAJAR, 1980-1990

Variables	1980	1990	Tasa anual
a) Población en edad de trabajar (miles)	35 366.3	46 234.0	
Indice	100.0	130.7	2.7%
b) Población ocupada (miles)	21 941.7	23 403.4	
Indice	100.0	106.7	0.7%
c) a-b (miles)	13 424.6	22 830.6	
Indice	100.0	170.1	5.5%
d) b/a	0.620	0.506	
e) (a-b) / a	0.38	0.494	

Fuente: Censos de población de los años respectivos.

La composición de la ocupación también siembra inquietudes. Entre 1980 y 1991 la ocupación productiva (sectores primario y secundario) se elevó en un 9.7%, creciendo a una tasa anual del 0.8%; entretanto la ocupación improductiva (sector terciario) subió un 18.4%, creciendo al 1.5% anual. Del crecimiento absoluto que tuvo la ocupación en ese periodo sólo una tercera parte fue absorbida por la sección productiva y las dos terceras partes restantes pasaron a ser explicadas por las ramas improductivas⁵. O sea, aparte de crecer poquísimo, la ocupación adicional resulta parasitaria en su gran mayoría.

En cuanto a la productividad, las cifras no son menos alarmantes. Si ya en el periodo 1970-1982 sus cadencias eran muy mediocres (1.8% anual), en los años subsiguientes la expansión resulta de miseria. Con un 0.6% de crecimiento anual, la productividad debería esperar nada menos que ¡116 años! para duplicarse. Algo que, por cierto para nada armoniza con los proclamados afanes de modernización del aparato productivo.

La evolución de la productividad por sectores, entre 1981 y 1991 es la siguiente (tasa media anual de crecimiento):

Primario = 0.51%
 Secundario = 1.35%
 Terciario = 0.18%
 Total = 0.50%

Como se ve, en un panorama globalmente sombrío, el comportamiento de los sectores primario y terciario es aún peor. Surgen aquí por lo menos dos problemas que conviene mencionar: i) como en el primario (en la agricultura) se produce buena parte de los bienes salariales, el nivel prácticamente estancado de la productividad nos indica que el mecanismo de la plusvalía relativa se ve seriamente obstaculizado. Por lo mismo, todo afán de elevar la tasa de plusvalía debería de modo fatal asentarse en la reducción absoluta de los salarios reales. Algo que, por cierto, sí ha tenido lugar en el periodo; ii) el sector primario, diríamos que por definición, debe operar expulsando mano de obra. Y como el secundario no parece ser capaz de absorberla en términos significativos, el sector termina por funcionar como un receptáculo donde va a parar la mano de obra excedente. Pero aquí, los niveles de

⁵ Los datos se han calculado a partir de la información oficial. INEGI.

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

productividad casi no se mueven. Es decir, se van generando las condiciones para una acentuación de la heterogeneidad estructural.

Para examinar este último punto, dividimos la productividad del sector secundario por la productividad del sector primario. Considerando promedios trianuales, obtenemos:

$$\begin{aligned} 1981-1983 &= 3.07 \\ 1989-1991 &= 3.26 \end{aligned}$$

Es decir, el diferencial de productividades tiende acentuarse en el periodo.

C) ACUMULACION

Cabe esperar que los muy bajos ritmos de crecimiento de la productividad y del producto vayan asociados a un comportamiento anémico de la acumulación. Y efectivamente así se han dado las cosas. En el periodo previo el punto más alto se alcanzó en 1981 con 1 286.4 mil millones de pesos de 1980. Entretanto, en 1993, ese valor llegó a 1 170.5 mil millones. Es decir, un descenso de 9%. De modo análogo, tenemos que el coeficiente de inversión promedio⁶ para el periodo 1983-1993 llegó a 18.2%. Entretanto, en el periodo 1975-1982 fue igual a 23.2%. La información básica se presenta en el cuadro 5.

Las cadencias de la FBKF (formación bruta de capital fijo) en el periodo neoliberal, según se observa, son impresionantemente bajas. Y si las comparamos con lo sucedido en los sexenios anteriores, los del "populismo", resultan aún más pavorosas. Respecto al periodo 1982-1993, la FBKF crece ocho veces más rápido en el periodo anterior, 1970-1982. En realidad en este punto, se revela con singular fuerza todo el parasitismo del modelo y su inveterada impotencia para desarrollar las fuerzas productivas. Y adviértase que el desplome de la acumulación tiene lugar en un contexto que también se caracteriza por un drástico aumento de la tasa de explotación y del excedente generado.

CUADRO 5

EVOLUCION DE LA FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO, 1970-1993

Año	Índice	(pesos constantes de 1980)
1970	100.0	
1981	258.7	
1982	215.3	100.0
1993	235.3	109.3
1970-1982 ^a	6.6%	
1982-1993 ^a	0.8%	

^a Tasa media anual de crecimiento
Fuente: INEGI.

⁶ Definido como el cociente entre la formación bruta de capital fijo y el producto interno bruto. A precios constantes de 1980

A lo largo del periodo la composición de FBKF en privada y pública ha experimentado un fuerte cambio. En 1981, por ejemplo, la inversión pública explicaba un 45.4% del total. En 1993, sólo un 19.8%. La razón de ello es conocida: en el periodo neoliberal tiene lugar la reducción del gasto público (respecto del PIB) y esa reducción se ha apoyado fundamentalmente en el gasto de inversión. Entre 1981 y 1993, por ejemplo, la inversión pública se redujo en un 60.4%.

Si hacemos 1981=100, para 1993 tendríamos los siguientes índices de variación para la inversión privada y para la pública

	Índice 1993
FBKF pública	39.6
FBKF privada	133.6
FBKF total	91.0

Conviene agregar. A lo largo de todo el periodo la FBKF privada muestra un comportamiento en la forma de letra u en sus niveles. Esto, aunque para nada alcanza a invertir el signo de la tendencia para el plazo más largo (la tasa media anual de variación de la FBKF privada en el periodo 1981-1993 fue del 2.4 % anual), debe ser subrayado. Aunque pensar en un descenso permanente es absurdo, esa recuperación forma parte del movimiento cíclico usual de la variable. De hecho, los déficits acumulados son tan elevados que se podría esperar una expansión no despreciable en los próximos años. A la larga, la expansión de la inversión en capital fijo no debería ser especialmente elevada.

D) SALARIOS Y DISTRIBUCION DEL INGRESO

La gran mayoría de las visiones críticas respecto al patrón neoliberal se suelen concentrar de manera casi exclusiva en estos aspectos. Metodológicamente, en esas aproximaciones campea un error de base: primero se disocian las variables de producción y de distribución y luego se independiza (o "autonomiza") a esta última. Al final de cuentas, y en términos más bien implícitos, se sostiene que en el modelo el espacio de la producción funciona bien y que las "correcciones" se deben efectuar en el espacio de la distribución. Es decir, al modelo le falta "equidad". Y como punto de partida se ha borrado (en el papel) la relación de dependencia que guarda la distribución respecto de la producción, se pasan a tejer toda clase de fantasías sobre el apago de la denominada "deuda social", "la equidad", "la solidaridad" y demás temas conexos. Inclusive, se implementan programas de acción sobre el problema, los cuales nunca van más allá de servir como taparrabos del problema estructural subyacente. Como sea, la situación en esta esfera suele ser conocida y ello nos permite ser muy breves al respecto.

CUADRO 6

SALARIOS Y DISTRIBUCION

Año	Salario real ^a	Año	Distribución ^b
1982	100.0	1976	40.3%
1988	57.0	1982	37.2%
1993	43.0	1993	23.3%

^a Salario Mínimo legal a precios constantes. Índice.

^b Sueldos y salarios sobre el PIB.

Fuente: INEGI y estimación para 1993.

Los datos son lo suficientemente elocuentes como para abundar en comentarios. Sólo cabe mencionar que una parte de los asalariados (algunos segmentos de empleados y de obreros industriales de grandes empresas con vocación exportadora) han sido capaces de suavizar el impacto de la mayor regresividad distributiva. En la industria manufacturera, por ejemplo, si hacemos 1980=100, el índice del sueldo pagado a los empleados era prácticamente el mismo en 1993. Entretanto, el salario obrero había descendido a 70⁷. O sea, el salario mínimo legal cae más que el salario obrero de la manufactura y éste, más que el sueldo de los empleados en el mismo sector. La moraleja es clara: se torna más heterogénea la situación de los niveles de vida al interior del universo asalariado.

E) LA INFLACION

La inflación, que suele ser la resultante de la pugna distributiva, según se aprecia en el modelo de política antiinflacionaria del neoliberalismo y considerando el conjunto del periodo 1983-1993, no es tan espectacular como se le suele presentar. Y respecto al sexenio "populista" de Luis Echeverría, se queda muy por debajo. No obstante, en el tramo neoliberal se pueden distinguir dos fases. La primera, de muy alta inflación, cubre el primer sexenio y en ella tiene lugar el grueso del impacto redistributivo que tipifica al modelo. En la segunda fase, la tasa de plusvalía se tiende a estabilizar y la inflación se debilita. En el año de 1993 es de 9.8%.

CUADRO 7

EVOLUCION DE LA INFLACION, 1970-1993

Periodo	Promedio anual (por cientos)
1971-1976 (Echeverría)	12.9
1977-1982 (López Portillo)	29.6
1983-1988 (De la Madrid)	92.9
1989-1993 (Salinas)	18.9
1971-1982	21.2
1983-1993	46.6

Fuente: Banco de México.

F) ¿EXITOS MACROECONOMICOS?

Una de las opiniones más extendidas sobre el modelo de política del neoliberalismo en México sostiene que se han logrado grandes éxitos en el nivel macroeconómico, los cuales aún no se han reflejado o concretizado en el plano microeconómico.

Hasta hace algún tiempo, dos eran los criterios que se privilegiaban para evaluar el comportamiento de la economía: y) lograr altas tasas de crecimiento; ii) mejorar la distribución del ingreso. Como esto pudiera considerarse hoy como demasiado "progresista", nos podemos apoyar en el más moderado Paul Samuelson, el que se autocalifica como un hombre de centro-derecha. En su conocido manual podemos leer: "los resultados macroeconómicos de las economías de mercado se juzgan mediante cuatro conjuntos de objetivos:

- 1.-Un elevado y creciente nivel de producción real.

⁷ Según datos del INEGI, Encuesta Industrial Mensual.

- 2.-Un elevado empleo y un bajo desempleo, que proporcionan buenos puestos de trabajo y elevados salarios a los que desean trabajar.
- 3.-Un nivel de precios estable o suavemente ascendente, pero con precios y salarios determinados por los mercados libres.
- 4.-Unas relaciones económicas exteriores caracterizadas por un tipo de cambio estable y unas exportaciones que equilibran aproximadamente las importaciones.⁸

Tendríamos, entonces, cuatro objetivos fundamentales: crecimiento, empleo y salarios elevados, estabilidad en el nivel de precios y sector externo equilibrado. Si aplicamos estos criterios a la evolución económica del periodo 1983-1994 que antes se ha venido examinando, se tendría que concluir en una apreciación como la que se resume en el cuadro 8.

CUADRO 8
RESULTADOS MACROECONOMICOS DEL MODELO NEOLIBERAL

Objetivos	Resultados
1. Crecimiento	Negativos
2. Empleo y salarios	Negativos
3. Inflación	Positivos
4. Sector externo	Negativos

En resumen, los que se vienen proclamando y publicitando como "éxitos macroeconómicos" del modelo neoliberal parecen no tener ningún asidero objetivo. Más bien, se concluye que estamos en presencia de un gran fracaso económico.

G) ¿A QUIENES BENEFICIA EL MODELO NEOLIBERAL?

Como se ha demostrado, el modelo neoliberal parece combinar el peor de los mundos posibles: altísimas tasas de explotación asociadas a bajísimos niveles de acumulación. Por lo mismo, no se debería esperar que ese patrón económico sea capaz de consolidarse para un periodo largo. No obstante, hay poderosas fuerzas que lo apoyan y que para nada facilitan su posible sustitución.

¿Cuáles son esas fuerzas sociales?

En calidad de fracción clasista hegemónica, debemos situar al gran capital dinero de préstamo. Es decir, al usualmente conocido como capital bancario o financiero. En segundo lugar tenemos al gran capital monopolístico industrial con capacidad de acceso a los mercados externos y que, por lo mismo, se puede beneficiar con los procesos de apertura.

En muchos casos, por no decir que siempre, esta fracción opera integrada a la primera en términos de grandes grupos financieros o grupos supra-corporativos. Esto no es una novedad: constituye una de las regularidades en el curso de desarrollo capitalista. Lo que sí cabría subrayar es que, en el caso mexicano y para este periodo, al interior de esos grandes grupos, los intereses dominantes parecen ladearse hacia la dimensión financiera-especulativa del negocio capitalista.

⁸ Paul Samuelson y William Nordhaus, Economía, p. 101. McGraw Hill, México, 1987 (12ava. edición)

En tercer lugar, tenemos al gran capital monopólico extranjero, muy en especial el que proviene de Estados Unidos. También aquí, se advierte una fuerte imbricación de este capital con los grupos nativos. Y conviene subrayarlo: al gran capital estadounidense el modelo neoliberal mexicano le resulta extraordinariamente favorable. Le abre mercados en el país para la colocación de sus productos y a los grandes bancos de Estados Unidos les proporciona una esfera de inversión extraordinariamente rentable. Asimismo, le concede un poder diferencial en su lucha competitiva con los capitales extranjeros que provienen de otras grandes potencias imperiales, tales como Japón, Alemania y otras.

Tales serían las fracciones clasistas que integrarían el bloque de poder en las condiciones del patrón neoliberal. Y como se puede observar se trata de fuerzas muy poderosas.

¿Qué grupos sociales resultan más castigados?

Para abreviar se pueden señalar a las dos clases sociales más importantes y que se ven especialmente dañadas por la operación del modelo.

Primero, tenemos al proletariado industrial. Éste se ve afectado por la desocupación y la destrucción industrial, lo que a veces provoca una disminución absoluta de los contingentes de trabajadores industriales. Asimismo, se tiene el brutal descenso del salario real y de las condiciones generales del trabajo obrero.

Segundo, la burguesía industrial. Ésta se ve perjudicada por los altos intereses, por la competencia extranjera asociada a la apertura externa y la consiguiente des-sustitución de importaciones que afecta a la mayoría de las ramas industriales, por la creciente penetración del capital extranjero y por la severa restricción de los mercados internos que se deriva de la reducción salarial, del menor gasto público y del desplome de la inversión productiva.

BIBLIOGRAFIA

- ALAIN IZE Y GABRIEL VERA**
EL COMPORTAMIENTO ECONOMICO DE LA ECONOMIA MEXICANA ENTRE 1961-1981. ESPECIFICACIONES, ALTERNATIVAS Y PRUEBAS DE HIPOTESIS.
EL COLEGIO DE MEXICO, MEXICO, 1984.
- ALVARO BAILLET**
LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO (1983-1988).
EL COLEGIO DE MEXICO, MEXICO, 1988.
- BELA BALASSA**
LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO.
REVISTA DE COMERCIO EXTERIOR, VOL. 33, MARZO DE 1983.
- CARLOS BAZARECH**
LA ECONOMIA MEXICANA: CUATRO ENSAYOS.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICA (CIDE), MEXICO, 1989.
- CARLOS BAZARESCH, NISSO BUCAY Y NORA LUSTING.**
MEXICO: AUJE, CRISIS Y AJUSTE.
TOMOS 1 Y 2, LECTURAS DEL TRIMESTRE ECONOMICO, FONDO DE CULTURA ECONOMICA, MEXICO, 1992.
- CARLOS USABIAGA IBAÑEZ**
UNA APROXIMACION METODOLOGICA AL PENSAMIENTO ECONOMICO.
EDITORIAL PIRAMIDE, MEXICO, 1994.
- CENTRO DE ANALISIS E INVESTIGACION ECONOMICA (CAIE)**
INFORME MENSUAL SOBRE LA ECONOMIA MEXICANA.
VOL. 7, MAYO DE 1989.
- HAL R. VARIAN**
MICROECONOMIA INTERMEDIA.
ANTONI BOSCH, 1994.
- HERMAN ASCHENTRUPP**
LA CRISIS DE ENDEUDAMIENTO Y LAS NEGOCIACIONES EN AMERICA LATINA. CARTA DE POLITICA EXTERIOR MEXICANA.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICA, AÑO IV, NUM. 3, JULIO-SEPTIEMBRE DE 1984.
- JOEL BERGSMAN**
"LA DISTRIBUCION DEL INGRESO Y LA POBREZA EN MEXICO" EN LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN MEXICO.
ENSAYOS, VOL. 1, BANCO DE MEXICO, MEXICO, 1982.

- JOSE CORDOBA** *DIEZ LECCIONES DE LA REFORMA ECONOMICA MEXICANA.*
REVISTA NEXOS, VOL. 14, FEBRERO DE 1991.
- JOSEPH E. STIGLITZ** *LA ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO.*
ANTONI BOSCH, 1992.
- NORA LUSTING** *MEXICO, HACIA LA RECONSTRUCCION DE UNA ECONOMIA.*
FONDO DE CULTURA ECONOMICA (ECONOMIA LATINOAMERICANA), MEXICO, 1992.
- OSVALDO SUNKEL** *EL DESARROLLO DESDE DENTRO. UN ENFOQUE NEOESTRUCTURALISTA PARA LA AMERICA LATINA.*
LECTURAS DEL TRIMESTRE ECONOMICO, MEXICO, 1992.
- PEDRO ASPE ARMELLA** *ESTABILIZACION MACROECONOMICA Y CAMBIO ESTRUCTURAL. LA EXPERIENCIA DE MEXICO (1982-1988).*
FONDO DE CULTURA ECONOMICA, MEXICO, 1992.
- RENE VILLAREAL** *DEUDA EXTERNA Y POLITICA DE AJUSTE: EL CASO DE MEXICO, 1982-1986.*
LECTURAS DEL TRIMESTRE ECONOMICO, VOL. 61, FONDO DE CULTURA ECONOMICA, MEXICO, 1988.
- RUDIGER DORNBUSCH Y SEBASTIAN EDWARDS** *LA MACROECONOMIA DEL POPULISMO EN LA AMERICA LATINA.*
MC GRAW HILL, MEXICO, 1992.
- RUDIGER DORNBUSCH, STANLEY FISHER** *MACROECONOMIA.*
SEXTA EDICION, MC GRAW HILL, 1994.
- TERRY BARDACKE Y VLADIMIRO BRAILOVSKY** *LA POLITICA ECONOMICA ENTRE 1976 Y 1982 Y EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL.*
REVISTA INVESTIGACION ECONOMICA, VOL. 42, OCTUBRE-DICIEMBRE DE 1983.
- VLADIMIRO BRAILOVSKY, ROLANDO CLARKE Y NATAN WARMAN.** *LA POLITICA ECONOMICA DEL DESPERDICIO.*
FACULTAD DE ECONOMIA, UNAM., MEXICO, 1989.